



*FACULTAD DE DERECHO*

---

---

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO Y FILOSOFÍA JURÍDICA

DOCTORADO: DERECHOS FUNDAMENTALES

*ÁREA: DERECHO ECLESIAÍSTICO DEL ESTADO*

*TESIS DOCTORAL:*

*LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO:*

*“XVII AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY DE ASOCIACIONES  
RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO”*

*PRESENTA:*

*D. RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ*

*DIRIGIDA POR EL PROFESOR:*

*DR. D. ISIDORO MARTÍN SÁNCHEZ*

MADRID, JUNIO 2009

***LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO:***  
***“XVII AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY DE ASOCIACIONES***  
***RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO”***

## *DEDICATORIA*

*A mis padres:*

*Por todo lo que me han dado en la vida.*

## *A G R A D E C I M I E N T O S*

*Al pueblo de México por conducto del Gobierno Federal; a la Universidad Autónoma de Zacatecas; a la Facultad de Derecho y al Doctorado en Derechos Fundamentales de la Universidad Autónoma de Madrid, por el soporte institucional brindado para realizar mis estudios doctorales y por la confianza de que fui objeto de su parte; a mis profesores, quienes compartieron conmigo sus conocimientos y participaron en mi desarrollo profesional; al personal administrativo, por las facilidades otorgadas; a todas las personas e instituciones que colaboraron desinteresadamente para hacer posible la elaboración de este trabajo y aquéllas que amablemente me ayudaron y proporcionaron las entrevistas, datos y documentos que me eran necesarios.*

*A mi familia, por su comprensión e incondicional apoyo, porque supieron entender mi anhelo.*

*Y en especial, a mi director de tesis, Dr. D. Isidoro Martín Sánchez, quien me brindó su paciencia, sugerencias, contribuciones e incondicional apoyo de forma responsable y oportuna para la elaboración de este trabajo de investigación.*

*A todos, gracias.*

## ÍNDICE

	<i>Págs.</i>
INTRODUCCIÓN	I
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	VI
II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	XIV
III. HIPÓTESIS	XV
IV. MÉTODO EMPLEADO O ENFOQUE METODOLÓGICO	XVI

## CAPÍTULO I

### ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES	02
1.2 ÉPOCA VIRREINAL	06
1.3 LA RELIGIÓN EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA	09
1.4 CONSTITUCIÓN DE 1824	12
1.5 CONSTITUCIÓN DE 1836, “CENTRALISTA”	13
1.6 CONSTITUCIÓN DE 1842, “BASES ORGÁNICAS”	14
1.7 CONSTITUCIÓN DE 1857	15
1.8 LAS LEYES DE REFORMA	17
1.9 IMPERIO DE MAXIMILIANO	19
1.10 EL PORFIRIATO	22
1.11 CONSTITUCIÓN DE 1917	24
1.12 INTOLERANCIA RELIGIOSA POST-REVOLUCIONARIA	30
a) <i>Álvaro Obregón</i>	30
b) <i>Plutarco Elías Calles</i>	31

## CAPÍTULO II

### EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO Y SU PROYECCIÓN INTERNACIONAL

2.1 CUESTIONES PREVIAS	37
2.2 CONCEPTO DE RELIGIÓN	39
2.3 CONCEPTO DE LIBERTAD RELIGIOSA	41
2.4 ESTADO E IGLESIA EN MÉXICO	43

2.5	LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO	46
2.6	TUTELA Y PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO	48
2.7	LÍMITES A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO	49
2.8	LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN MÉXICO	52
	a) <i>Católica</i>	53
	b) <i>Protestante</i>	54
	c) <i>Población Pentecostal</i>	56
	d) <i>Población Evangélica</i>	58
	e) <i>Población Adventista del Séptimo Día</i>	59
	f) <i>Mormones</i>	60
	g) <i>Testigos de Jehová</i>	61
	h) <i>Población Judaica</i>	62
	i) <i>Budistas</i>	63
	j) <i>Islámicos</i>	65
	k) <i>Sin religión</i>	66
	l) <i>Otras religiones</i>	67
2.9	SECTAS RELIGIOSAS	71
2.10	CONCEPTO INTERNACIONAL DE LIBERTAD RELIGIOSA	74
2.11	LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	75

### **CAPÍTULO III**

#### **LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1992 EN MATERIA RELIGIOSA Y LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO EN MÉXICO**

3.1	CONSIDERACIONES GENERALES	81
3.2	DERECHO ECLESIAÍSTICO MEXICANO	83
	a) <i>Génesis</i>	84
	b) <i>Concepto</i>	85
	c) <i>Su objeto</i>	87
3.3	EL IMPACTO DEL DERECHO ECLESIAÍSTICO ESPAÑOL EN EL DESARROLLO DEL DERECHO ECLESIAÍSTICO MEXICANO.	88
3.4	LA LEY ORGÁNICA 7/1980 DE LIBERTAD RELIGIOSA ESPAÑOLA Y SU INFLUENCIA EN LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO	90
3.5	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA	94
3.6	INICIATIVA DE REFORMAS Y SU PROCESO LEGISLATIVO	95
3.7	PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA REFORMA	98
	a) <i>Separación del Estado y las iglesias</i>	98
	b) <i>El principio de libertad religiosa</i>	101

c) <i>Laicidad del Estado</i>	102
3.8 ANÁLISIS DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA RELIGIOSA	104
a) <i>Artículo 3</i>	104
b) <i>Artículo 5</i>	107
c) <i>Artículo 24</i>	109
d) <i>Artículo 27</i>	111
e) <i>Artículo 130</i>	114
3.9 LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO	121
a) <i>Antecedentes de la Ley</i>	121
b) <i>La Ley</i>	123
c) <i>Principios de la Ley</i>	125
3.10 REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSA Y CULTO PÚBLICO	127
3.11 LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA RELIGIOSA EN MÉXICO	130

## CAPÍTULO IV

### RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO EN MÉXICO

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES	134
a) <i>Naturaleza de las asociaciones religiosas</i>	135
b) <i>Constitución de las asociaciones religiosas</i>	137
c) <i>Funcionamiento de las asociaciones religiosas</i>	139
d) <i>Sus miembros</i>	141
4.2 EL CULTO PÚBLICO	143
4.3 CONCEPTO DE ASOCIACIÓN RELIGIOSA	146
4.4 RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS	148
4.5 RECONOCIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS: LA CALIFICACIÓN REGISTRAL	150
4.6 LAS IGLESIAS Y AGRUPACIONES RELIGIOSAS NO REGISTRADAS	154
4.7 ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	156
4.8 INFRACCIONES Y SANCIONES A LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS	158
a) <i>Infracciones</i>	158
b) <i>Órgano sancionador</i>	162
c) <i>Sanciones</i>	163
4.9 RECURSOS DE REVISIÓN	164

## CAPÍTULO V

### RÉGIMEN PATRIMONIAL, FISCAL Y FINANCIACIÓN DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS EN MÉXICO

5.1	CONSIDERACIONES GENERALES	168
5.2	PATRIMONIO ECLESIAÍSTICO	170
	<i>a) Antecedentes</i>	170
	<i>b) Concepto</i>	173
5.3	LEY DE NACIONALIZACIÓN DE LOS BIENES ECLESIAÍSTICOS (12 DE JULIO DE 1959)	174
5.4	PATRIMONIO ECLESIAÍSTICO CONFORME AL MARCO JURÍDICO VIGENTE	176
5.5	LAS REFORMAS Y SU IMPACTO EN EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS	179
5.6	EL USO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DESTINADOS AL CULTO PÚBLICO PROPIEDAD DE LA NACIÓN	183
5.7	FORMAS RECAUDATORIAS DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS	189
	<i>a) Leyes de indias</i>	190
	<i>b) Los tributos durante la colonia</i>	191
	<i>c) La independencia</i>	191
	<i>d) La reforma</i>	192
5.8	OBLIGACIONES FISCALES DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS EN LA ACTUALIDAD	193
5.9	FINANCIACIÓN DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS	198
5.10	LIQUIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS	201
5.11	LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS	202

## CAPÍTULO VI

### LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN MÉXICO

6.1	PLANTEAMIENTO	205
6.2	CONCEPTO DE ASISTENCIA RELIGIOSA	206
	• <i>Asistencia espiritual</i>	209
6.3	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN MÉXICO	210
6.4	MODELOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	212
	<i>a) Asistencia religiosa a las fuerzas armadas</i>	213
	<i>b) Centros de readaptación social</i>	216
	<i>c) Centros de salud</i>	217
6.5	ASISTENCIA RELIGIOSA EN LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	218
6.6	ASISTENCIA RELIGIOSA EN ESTANCIAS O ESTACIONES MIGRATORIAS	219
6.7	CONTENIDO DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA	219



6.8	ASISTENCIA RELIGIOSA CATÓLICA	221
6.9	INTOLERANCIA A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO	224

## CAPÍTULO VII

### RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MINISTROS DE CULTO EN MÉXICO

7.1	CONSIDERACIONES GENERALES	232
7.2	CONCEPTO DE MINISTRO DE CULTO	233
7.3	REGISTRO RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER DE MINISTRO DE CULTO	237
7.4	LOS MINISTROS DEL CULTO EN LA LEY	237
7.5	LOS MINISTROS DEL CULTO ANTE EL DERECHO CIVIL	238
	a) <i>Restricción a la capacidad civil</i>	238
	b) <i>Incapacidad para heredar</i>	239
7.6	LOS MINISTROS DEL CULTO Y SUS DERECHOS POLÍTICOS	243
7.7	OTRAS DISPOSICIONES LIMITANTES A LA CAPACIDAD DE LOS MINISTROS DE CULTO	250
	a) <i>Matrimonio Religioso</i>	250
	b) <i>Símbolos Patrios</i>	252
7.8	MINISTROS DEL CULTO ANTE EL DERECHO PENAL	254
7.9	SITUACIÓN LABORAL DE LOS MINISTROS DE CULTO	256
7.10	OBLIGACIONES MILITARES Y CÍVICAS DE LOS MINISTROS DE CULTO	259
7.11	SECRETO RELIGIOSO	263

## CAPÍTULO VIII

### EL DERECHO A LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN MÉXICO

8.1	INTRODUCCIÓN	266
8.2	ANTECEDENTES	267
8.3	FUENTES JURÍDICAS REFERENTES AL DERECHO A LA EDUCACIÓN RELIGIOSA	269
8.4	LIBERTAD DE CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA RELIGIOSA	271
8.5	LIBERTAD DE CÁTEDRA	273
8.6	EL DERECHO DE LOS PADRES A ELEGIR LA FORMACIÓN RELIGIOSA DE SUS HIJOS	275
8.7	LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN LAICA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	278
8.8	LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN LAS ESCUELAS PARTICULARES	283
	REFLEXIONES Y CONCLUSIONES	287
	BIBLIOGRAFÍA	294



## **INTRODUCCIÓN**

El Derecho Eclesiástico Mexicano, propiamente dicho, se sitúa a partir de las reformas constitucionales del año de 1992 publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 28 de enero. Con las reformas a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 en materia de libertad religiosa inicia esta nueva rama del Derecho Público que está constituida por un conjunto de normas jurídicas cuyo objeto es regular las relaciones entre el Estado y las distintas asociaciones religiosas, determinando su naturaleza jurídica, su constitución y funcionamiento, así como los derechos y obligaciones de las partes con el fin de hacer efectiva la libertad de creencias y la separación de las Iglesias con el Estado.

Comparto la opinión de los estudiosos de la materia cuando señalan que antes de las reformas constitucionales no existía en nuestro país un Derecho Eclesiástico del Estado mexicano, pues queda claro que la legislación anterior no contemplaba en el ordenamiento legal la existencia jurídica de las iglesias, circunstancia que atentó, desde luego, a los principios de libertad de creencias y de culto reconocidos por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se debe confundir el derecho interno de las iglesias con el Derecho Eclesiástico del Estado, pues el primero es propio de cada una de ellas y, el segundo producto de todas y cada una de las relaciones que tiene el Estado con las distintas confesiones religiosas. Tampoco debe confundirse con el término *Derecho Canónico*, que durante siglos fue utilizado para referirse al Derecho de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el objetivo o núcleo del Derecho Eclesiástico Mexicano es el Derecho de Libertad Religiosa.

Así las cosas, tenemos entonces que las fuentes formales del Derecho Eclesiástico en México son justamente las reformas constitucionales de 1992, la Ley Reglamentaria denominada *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público* y su reglamento, expedidas el 15 de julio de 1992 y 6 de Noviembre de 2003 respectivamente, así como los distintos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materia de Derechos Humanos y que forman parte del orden jurídico de nuestro país, sin olvidar algunas resoluciones de carácter administrativo dictadas por la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Religiosos, además de las resoluciones y/o sentencias dictadas por el Poder Judicial de la Federación mediante sus tribunales.

Sin embargo, se puede advertir en las reformas constitucionales que no se han superado algunos condicionamientos históricos, pues parten de viejos postulados que no se relacionan con la libertad religiosa sino con la separación de las iglesias y el Estado basada en el principio de laicidad.

Es claro que el Derecho Eclesiástico Mexicano es de reciente manufactura y que su principio rector es el Derecho de Libertad Religiosa, su reconocimiento y tutela. Aún así, es difícil asumir que en realidad existe un respeto incondicional a la libertad religiosa pues se encuentran un sin fin de ejemplos que ilustran la intolerancia y discriminación en ese ámbito, además, no se puede dejar de señalar que existe la proliferación de sectas pseudo-religiosas que violentan los derechos humanos, así como tampoco debemos de pasar por alto la injerencia de distintas asociaciones religiosas y por ende, sus ministros de culto en la intromisión de asuntos políticos del Estado, a pesar de que la norma constitucional lo prohíbe.

Bajo estas premisas, se señala que el objetivo de esta investigación es no sólo conocer el origen y desarrollo de la libertad religiosa y su reglamentación en el

devenir histórico, sino reflejar la situación actual que ésta guarda y tratar de hacer un análisis crítico o reflexivo sobre el contenido de las reformas a la luz de los instrumentos internacionales que contienen el derecho humano de libertad religiosa y que son obligatorias en nuestro sistema jurídico mexicano, ya que dichos documentos han sido reconocidos por nuestro país a través de diversos pactos o tratados y, por lo tanto, son también ley en el territorio mexicano, sin olvidar las exigencias particulares que se desprenden del propio derecho que tiene el ser humano a la libertad de creencia religiosa.

No se puede ni se debe olvidar al momento de hacer las reflexiones sobre las reformas el contexto político en que se llevaron a cabo, pues prescindir de los antecedentes históricos y de las justificaciones o motivos que las generaron, haría difícil comprender el por qué de las reformas y sus alcances al momento de efectuarlas, haciéndose imprescindible, pues, la revisión del contexto histórico de nuestro país en ese momento determinado.

Por todo lo antes argumentado, he organizado la estructura de la investigación de la siguiente manera:

- En el Capítulo I, intitulado *Análisis retrospectivo de la libertad religiosa en México*, se parte de concepciones elementales para entender la institución del Derecho Eclesiástico como son: la religión, las iglesias y la libertad religiosa; el papel de la religión en la guerra de independencia; la historia legislativa-constitucional del orden jurídico mexicano en materia religiosa desde la guerra de independencia hasta la constitución de 1917 y la aparición del Derecho Eclesiástico Mexicano.
- En el Capítulo II, denominado *El Derecho fundamental de Libertad Religiosa y su proyección internacional*, se establece el estudio de la libertad religiosa

como un derecho fundamental del ser humano en México, así como su tutela, promoción y límites; la proyección del derecho de libertad religiosa en el orden internacional, donde se hace hincapié en la importancia de los instrumentos internacionales que suscriben los estados sobre libertad religiosa a través de pactos, convenciones, declaraciones y tratados que forman parte del sistema jurídico de cada país y, por lo tanto, se convierten en documentos vigentes y vinculatorios en el ámbito interno e internacional.

- En el Capítulo III, *Las reformas constitucionales de 1992 en materia religiosa y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, se advierten las necesidades sociales de las reformas, su proceso legislativo y los principios en que se fundan como son el respeto a la libertad de creencias, la separación del Estado con las iglesias, la supremacía y laicidad del Estado, entre otros. También se hace un estudio de los artículos que motivaron la reforma, se aborda la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y se realiza un análisis de ella haciendo unas reflexiones del caso.
- En el Capítulo IV, *Régimen jurídico de las Asociaciones Religiosas y Culto Público en México*, se explica la naturaleza, constitución y funcionamiento de las asociaciones religiosas, las características de sus asociados, sus ministros de culto y representantes, así como su régimen jurídico y su calificación registral, abordando en especial la Iglesia Católica. También se abordan las infracciones y sanciones a que son acreedoras las asociaciones religiosas al infringir la ley.
- En el Capítulo V, intitulado *Régimen patrimonial, fiscal y financiación de las asociaciones religiosas en México*, se estudia el patrimonio eclesiástico de las asociaciones religiosas desde el punto de vista histórico, administrativo, económico, social, político y jurídico, así como la consecuencia inmediata

sobre las personas sujetas al mundo jurídico, con derechos y obligaciones que la ley les confiere para poder interactuar con las demás personas y obtener sus fines, independientemente de lo que en este sentido señale su derecho interno. No se debe olvidar que la ley no les permite constituirse *con fines lucrativos*. Sin embargo, la realidad deja mucho que desear, pues al abordar el tema se verán los bienes que pueden adquirir, el uso de los bienes nacionales, los títulos de adquisición y las relaciones jurídico-patrimoniales. Se abarca también lo referente al régimen fiscal, las obligaciones fiscales de sus ministros de culto, su financiación y problemas no resueltos.

- En el Capítulo VI, referente a la *Asistencia religiosa en México*, trabajaremos un concepto indispensable para entender el tema, como es el de *asistencia religiosa*, así como los distintos modelos de asistencia, como la otorgada por la Iglesia Católica y de otras asociaciones religiosas, la asistencia en los centros públicos e instituciones asistenciales y, para terminar, algunas consideraciones sobre la intolerancia a la libertad religiosa en México.
- En el Capítulo VII, que se denomina *Régimen jurídico de los ministros de culto*, se realizarán algunas consideraciones que permitan saber con precisión quiénes son los ministros de culto, cuáles son sus restricciones civiles, sus derechos políticos, sus deberes cívicos y militares, así como su relación laboral con las asociaciones religiosas y, finalmente, el secreto religioso.
- El último Capítulo, *El derecho a la enseñanza religiosa en México*, se abordará lo referente a la educación religiosa en las escuelas de los sectores público y privado, la libertad en el orden jurídico mexicano para que las personas instalen centros de enseñanza religiosa, el ejercicio de la libertad de cátedra, el derecho de los padres a elegir la formación religiosa de sus hijos,

la obligatoriedad de la asignatura de religión en las escuelas particulares y, finalmente, cuál es el régimen jurídico de los docentes que imparten religión.

Ojalá, pues, que esta investigación invite a la reflexión y análisis sobre la libertad religiosa en nuestro país con estricto apego a la norma jurídica.

## **I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Durante mucho tiempo, lo que ahora se conoce como Derecho Eclesiástico fue entendido como Derecho de la Iglesia Católica, por lo que se identificaba dicha expresión con la de Derecho Canónico. En el siglo XIX en Alemania se produce un cambio en el concepto de Derecho Eclesiástico, dejando de ser el orden normativo de la Iglesia para ser ahora el del Estado, idea que se traslada a Italia donde más tarde se reconoce como una rama del Derecho Estatal. De manera que, el uso más común en los países de tradición eclesiástica se entiende al Derecho Eclesiástico como: “la disciplina que estudia el conjunto de normas del ordenamiento jurídico del Estado que regula materias que éste considera con una finalidad religiosa”.<sup>1</sup>

En el caso de México, considero que existen cuatro momentos importantes que se distinguen en el desarrollo histórico de la relación Iglesia-Estado. El primero de ellos se constituye desde el siglo XVI hasta la guerra de independencia, etapa en la que estuvieron regidas las relaciones por el “Regio Vicariato”; el segundo, del triunfo de la independencia hasta la revolución de 1910; el tercero de 1910 hasta las reformas constitucionales en materia religiosa de 1992; y, finalmente, de las reformas de 1992 a la actualidad.

---

<sup>1</sup> Siprotti, P., *Diritto Eclesiastico Padova*, 1959, Pág. 3, Para una visión General de la Evolución del Derecho Eclesiástico, Cfr. Gózales del Valle, J. M., *Derecho Eclesiástico Español*, 2ª edición, Madrid, Universidad Complutense, 1991.



La revolución de 1910 que dio origen a la Constitución de 1917 heredó la tradición anticlerical de las Leyes de Reforma. Los Constituyentes de Querétaro se manifestaron abierta y radicalmente en contra de la enseñanza religiosa, estableciendo en su artículo 3º que “el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa”.<sup>2</sup> Más tarde, en 1934, se reforma el artículo. Estableciendo que “(...) la educación que imparta el Estado será socialista”, principio que fue eliminado por la reforma del 16 de diciembre de 1946.

El artículo 5º prohibía expresamente la realización de votos religiosos y el establecimiento de órdenes monásticas. El artículo 24 que reconocía el Derecho de Libertad Religiosa, limitaba la celebración del culto dentro de los templos, los que siempre estarían bajo la vigilancia de la autoridad.<sup>3</sup>

El artículo 27 limitaba el derecho de propiedad de las iglesias para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, y los que tuvieran pasaron a ser de la autoridad. Es decir, los templos serían del Estado. De la misma forma, se prohibía a los ministros de culto y a las corporaciones religiosas patrocinar instituciones cuyo objeto fuera el auxilio de los necesitados.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> El texto original señalaba en su parte conducente: "I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios". Más adelante señalaba, en su fracción IV: "Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o a campesinos". Tena Ramírez, F., *Leyes fundamentales...*, cit., pp. 818 y 819.

<sup>3</sup> El original artículo 24 establecía: "Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y podrá practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en sus domicilios particulares, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley [...] Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad". *Idem*, p. 825.

<sup>4</sup> Esto se establecía en su artículo 27, fracciones II y III. En las que se dice: "II. Las asociaciones religiosas denominadas Iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán, en ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieran actualmente, por sí o por interpósita persona, entraran al dominio de la nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la nación, representada por el Gobierno federal, quien determinará los que deben continuar destinados a su objeto. Los obispos, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la nación,

El artículo 130 establecía: el no reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias;<sup>5</sup> la determinación de las legislaturas estatales del número máximo de ministros de culto en su territorio; sólo podían ser ministros de culto los mexicanos por nacimiento;<sup>6</sup> los ministros de culto no podían hacer críticas a las leyes fundamentales del país, ni al gobierno; los lugares nuevos destinados al culto tenían que solicitar permiso de la Secretaría de Gobernación;<sup>7</sup> no se reconocía o se daba validez a los estudios hechos en los establecimientos de los ministros de culto y;<sup>8</sup> quedaba prohibida la formación de agrupaciones políticas cuyo título tuviera palabra o indicación relacionada con alguna confesión religiosa.<sup>9</sup>

Es evidente que ante esta situación, las relaciones entre la Iglesia y el Estado fueran difíciles y, en consecuencia, la autoridad eclesiástica protestara enérgicamente. Lo que desembocó en la guerra civil conocida en la historia de México como “guerra cristera”, impulsada por el presidente Plutarco Elías Calles.<sup>10</sup>

---

para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público serán propiedad de la nación". Por su parte, la fracción III establecía: "Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto inmediata o directamente destinados a él". Idem, p. 828.

<sup>5</sup> En su párrafo 5 se señalaba: "La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas Iglesias". Idem, p. 875.

<sup>6</sup> En sus párrafos 7 y 8 se establecía: "Las legislaturas de los Estados únicamente tendrán facultad de determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos. Para ejercer en los Estados Unidos Mexicanos el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento". Ibidem.

<sup>7</sup> "Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del gobierno; no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos". La fracción siguiente señalaba: "Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación, oyendo previamente al gobierno del Estado". Idem, pp. 875 y 876.

<sup>8</sup> "Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se determinará cualquier otro trámite que tenga por fin dar validez a los cursos oficiales, a estudios hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. La autoridad que infrinja esta disposición será plenamente responsable y la dispensa o trámite referido será nulo y traerá consigo la nulidad del título profesional para cuya obtención haya sido parte la infracción de este precepto". Idem, p. 876.

<sup>9</sup> "Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas". Ibidem.

<sup>10</sup> Cfr. Meyer, J., *La cristiada I, II, III*, México, Siglo XXI Editores, 1973. *El conflicto entre la Iglesia y el Estado 1926-1929*, Los cristeros, *El coraje cristero: testimonios*, UAM, Vigésima Edición 2006.

La historia de las relaciones entre el poder público y las iglesias y, por lo tanto, la libertad religiosa, tiene un momento sin precedentes en México justo a partir de 1992, justamente cuando se dan las reformas constitucionales al hecho religioso, reformas que se generan ante la urgencia y la necesidad de una nueva legislación acorde a las exigencias de una realidad que rebasaba el cuerpo normativo sobre la libertad religiosa. Dichas reformas son también producto de los requerimientos internacionales de una sociedad que promueve el respeto y la observancia de los derechos humanos, por lo tanto, el Estado mexicano no podía quedarse rezagado en el avance de los estados democráticos. Así, en 1992 se realizan una serie de reformas constitucionales con el objetivo fundamental de hacer compatible la legislación mexicana con el Derecho de Libertad Religiosa en el campo de los derechos humanos. El 28 de enero de ese año se publican en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución,<sup>11</sup> las cuales generan contenidos que en otras legislaciones se conocen como el Derecho de Libertad Religiosa.

El 31 de julio de 1992 se expide la Ley Reglamentaria denominada *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, la cual permite el nacimiento de una nueva disciplina jurídica: el *Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano*, como una rama que brota del Derecho Constitucional.<sup>12</sup>

Expresaré de manera breve el contenido de las reformas a los artículos ya señalados, que tienen que ver con la situación actual de las nuevas relaciones entre las iglesias y el Estado.

El artículo 3º en su nueva redacción conserva los mismos términos, es decir, (...) *la educación (...) se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina*

---

<sup>11</sup> La Cámara de Diputados votó en su mayoría a favor de las reformas constitucionales: 76 por ciento a favor y 4.4 por ciento en contra. En la Cámara de Senadores, de 58 miembros, 55 estuvieron a favor de las modificaciones al artículo 3º., y 57 votaron a favor del resto de los artículos. Así las cosas, el 28 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma dichos artículos.

<sup>12</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico Mexicano*, Editorial Porrúa, México 1997, p. 191

religiosa, sin embargo, se eliminó la prohibición constitucional establecida en la fracción VI para que los ministros de culto y asociaciones religiosas impartan educación, por lo tanto, se reconoce y permite que en las escuelas privadas se imparta doctrina religiosa,<sup>13</sup> pero dejando claro que no deberá impartirse doctrina alguna en la educación pública. Además, se añadió la posibilidad de que los actos de culto religioso, de manera extraordinaria, se celebren fuera de los templos, situación que no se preveía con anterioridad. Mediante la reforma del 5 de marzo de 1993 se suprimieron las facultades del Estado para negar o revocar autorizaciones y retirar discrecionalmente el reconocimiento de validez oficial a los estudios realizados en planteles particulares.

Desde este punto de vista, dicha reforma aún no satisface lo establecido por el *Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966*, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, tampoco la *Convención Americana de Derechos Humanos* (Pacto de San José), firmada el 22 de noviembre de 1969, la *Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones* (resolución 36/1955 de la ONU). Es decir, no está el texto del artículo 3º constitucional a la altura de los documentos internacionales que a la materia se refieren y que, sin duda, se analizarán en el cuerpo de la tesis doctoral. Es claro que limita los derechos tanto de los educandos como de sus tutores, basándose en la imposición del criterio de laicidad en la enseñanza pública.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Señala el artículo 3o. en su fracción VI. "Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III". Sin embargo, donde se observa con más claridad la autorización expresa para que las asociaciones religiosas puedan impartir educación es en el artículo 9, frac. V, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la que señala: "Las asociaciones religiosas tendrán derecho en los términos de esta ley y su reglamento a: V. Participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud, siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose, además de a la presente, a las leyes que regulan esas materias".

<sup>14</sup> El problema se centra en entender el concepto de laicidad, el cual es asumido como criterio de actuación primaria del Estado en su relación con el fenómeno religioso. A la luz de la legislación mexicana, dicho principio es asumido como el criterio rector de dichas relaciones.

El artículo 5º primigenio prohibía la emisión del voto religioso y el establecimiento de órdenes monásticas. Después, con la reforma se suprimieron dichas prohibiciones, como se enuncia en el párrafo V. (...) *el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa (...)*. Así las cosas, evita referirse a la prohibición de los votos religiosos que establecía el texto anterior y deroga también las prohibiciones para el establecimiento de las órdenes monásticas.

La reforma al artículo 24 constitucional ha significado un avance importante en el reconocimiento y protección del Derecho de Libertad Religiosa, pues permite ahora que los actos religiosos de culto público puedan realizarse fuera de los templos. Sin embargo, deberán contar con la autorización del Estado según lo dispone la propia Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.<sup>15</sup> Al igual que el artículo 3º, esta reforma no está acorde a los textos internacionales protectores de los derechos humanos que configuran la libertad religiosa desde otra óptica, como lo veremos en el transcurso del trabajo de investigación.

El artículo 27 sufrió importantes modificaciones en las fracciones II y III, que establecían la incapacidad jurídica de las Asociaciones Religiosas y la consiguiente prohibición para adquirir, poseer o administrar bienes raíces. En el texto reformado se establece con claridad y precisión su capacidad para adquirir, poseer o administrar “exclusivamente” los bienes indispensables para su objeto una vez constituidas legalmente. Se suprime también la prohibición a la incapacidad de las asociaciones religiosas y de los ministros del culto para dirigir y administrar las instituciones de beneficencia a que hacía referencia el texto

---

<sup>15</sup> El artículo 24 en su tercer párrafo establece: "Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria". Y el artículo 22 de la LARyCP establece: "Para realizar actos religiosos de culto público con carácter extraordinario fuera de los templos, los organizadores de los mismos deberán dar aviso previo a las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales o municipales competentes, por lo menos quince días antes de la fecha en que pretendan celebrarlos. El aviso deberá indicar el lugar, fecha, hora del acto, así como el motivo por el que éste se pretenda celebrar".

anterior.<sup>16</sup> Sin embargo, desde mi punto de vista, es una regulación que limita el derecho de propiedad, pues, a decir verdad, sólo basta con hacer un análisis al texto completo de los artículos 16 y 17 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público<sup>17</sup> para observar lo señalado.

El artículo 130 casi fue reformado en su totalidad y, por lo tanto, atenuó las tensas relaciones entre la Iglesia y el Estado. En principio reconoce la personalidad jurídica de las iglesias,<sup>18</sup> la no intervención de las autoridades en la vida interna de las asociaciones religiosas,<sup>19</sup> la autorización a los mexicanos y extranjeros para ejercer el ministerio de cualquier culto,<sup>20</sup> el derecho al voto de los ministros mexicanos en su calidad de ciudadanos y la posibilidad de que quienes hayan sido ministros puedan ser votados,<sup>21</sup> así como la prohibición a las legislaturas locales para que determinen el número de ministros del culto. Sin embargo, dicho artículo prohíbe formar agrupaciones políticas cuyo título tenga una palabra o inclinación que las relacione con alguna confesión religiosa<sup>22</sup> y sostiene que los actos del estado civil de las personas son competencia exclusiva

---

<sup>16</sup> En dicha fracción se lee: "Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o indirectamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria".

<sup>17</sup> El texto completo de dicho artículo 16 establece: "Las asociaciones religiosas constituidas conforme a la presente ley. Podrán tener un patrimonio propio que les permita cumplir con su objetivo. Dicho patrimonio, constituido por todos los bienes que bajo cualquier título adquieran, posean o administren, será exclusivamente el indispensable para cumplir el fin o fines propuestos en su objeto. Las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva. Se excluye de la presente prohibición las publicaciones impresas de carácter religioso. Las asociaciones religiosas en liquidación podrán transmitir sus bienes, por cualquier título, a otras asociaciones religiosas. En el caso de que la liquidación se realice como consecuencia de la imposición de alguna de las sanciones previstas en el artículo 32 de esta ley, los bienes de las asociaciones religiosas que se liquiden pasarán a la asistencia pública. Los bienes nacionales que estuvieren en posesión de las asociaciones regresarán, desde luego, al pleno dominio público de la nación".

<sup>18</sup> El inciso a) del artículo 130 constitucional señala: "Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las materias".

<sup>19</sup> El inciso b) señala: "Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas".

<sup>20</sup> En su inciso c) se señala: "Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley".

<sup>21</sup> El inciso d) establece: "En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de los cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados".

<sup>22</sup> Continúa el artículo 130: "Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa".

de las autoridades administrativas, negándose efectos al matrimonio religioso y,<sup>23</sup> por último, prohíbe difundir o transmitir actos de culto religioso a través de medios de comunicación sin permiso previo.<sup>24</sup>

Con lo aseverado en los párrafos que anteceden es claro que en México las relaciones entre el Estado y la Iglesia han sido concebidas y vividas de manera diversa en una dialéctica de tensión continua. Así ha sucedido en 300 años de virreinato y 200 de vida independiente, etapas de relaciones armónicas, de roces y discordancias, conflictivas y turbulentas.<sup>25</sup> Pero es evidente que las relaciones Iglesia-Estado han pasado de un sistema regalista a un sistema de relativa tolerancia, es decir, de una marcada potestad estatal sobre lo espiritual a un principio o fórmula política que el Estado<sup>26</sup> asume para dar un nuevo trato a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo que no tengo duda en afirmar que la libertad religiosa es un concepto complejo que puede abordarse desde distintas perspectivas.

---

<sup>23</sup> Artículo 3º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

<sup>24</sup> Artículo 21.2, Ibidem.

<sup>25</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Intervención en el Foro Internacional sobre libertad religiosa*, México, octubre 2002.

<sup>26</sup> Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Derecho y Religión. Un breve análisis retrospectivo de las relaciones Iglesia-Estado en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

## **II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

### **Generales**

- a) Conocer/saber el desarrollo de la libertad religiosa en México.
- b) Conocer/saber el desarrollo del Derecho Eclesiástico en México.
- c) Conocer/saber el pasado jurídico del fenómeno religioso en México.
- d) Conocer/saber la legislación de los instrumentos internacionales en lo relativo al Derecho Fundamental de Libertad Religiosa y hacer un comparativo con las leyes internas.
- e) Conocer la diversidad religiosa en México, es decir, las preferencias religiosas.
- f) Conocer la nueva figura jurídica de Asociación Religiosa.

### **Específicos**

- a) Realizar un comparativo jurídico que permita destacar las características más importantes de la libertad religiosa a partir del México independiente hasta la revolución de 1910.
- b) Conocer/saber el marco constitucional de 1917 (constitución vigente), respondiendo a la pregunta de dónde estábamos.
- c) Conocer/saber el marco jurídico mexicano que regula el Derecho de Libertad de Religión en México a partir de 1992.
- d) Conocer/saber el contenido de las reformas constitucionales de 1992 (artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 que tienen que ver con el Derecho de Libertad Religiosa).
- e) Conocer/saber los avances que se han logrado en el Derecho de Libertad Religiosa a partir de las reformas constitucionales de 1992.
- f) Conocer/saber los aciertos y desaciertos de la Ley de Asociaciones



Religiosas y Culto Público a XVII años de vigencia y su impacto social.

- g) Conocer/saber si existe un sistema de financiación a las asociaciones religiosas.
- h) Conocer/saber si aún existe intolerancia religiosa en México.

En resumen, se pretende dar respuesta a grandes interrogantes: ¿dónde estábamos?, ¿dónde estamos? y ¿hacia dónde nos dirigimos en materia de libertad religiosa en México?

### **III. HIPÓTESIS**

Se abordará el estudio a partir de la hipótesis de que eran necesarias e indispensables las reformas constitucionales de 1992, pero que las mismas, según mi punto de vista, no han sido suficientes, circunstancia que registra la imperiosa necesidad de conocer en principio el desarrollo de la libertad religiosa en México, el Derecho Eclesiástico Mexicano y el Derecho Fundamental de Libertad Religiosa desde la perspectiva de los instrumentos internacionales, así como conocer los cambios y movimientos sociales que generaron dichas reformas y, en consecuencia a lo anterior, se hace necesario conocer las leyes reglamentarias y su impacto en la sociedad mexicana.

Derivado del estudio que analiza la libertad religiosa en México se pretende que puedan obtenerse explicaciones y posibles soluciones que tengan coherencia, sustento teórico-jurídico, y que ofrezcan una alternativa diferente en la forma en que puede abordarse el tema de libertad religiosa en México como un derecho fundamental de orden internacional.

#### **IV. MÉTODO EMPLEADO O ENFOQUE METODOLÓGICO**

Hay dos cuestiones previas en toda investigación científica: la delimitación y el sistema. La primera supone una relación entre sujeto y objeto, y a ella nos hemos dedicado, y una vez delimitada la realidad, surge la gran cuestión de la metodología jurídica: la construcción del sistema como unidad ordenadora de la totalidad del tema.

Existen diferentes formas de tratar un tema: cronológicamente, por análisis de estructura y funciones, por inducción, por deducción, por análisis de causas y efectos, por análisis del proceso, por comparación y contraste, por eliminación, por eliminación de la alternativa y por resolución del problema.<sup>27</sup>

En la especie, no se ha seguido estrictamente un método en particular, sino que se ha querido conocer y analizar en general la libertad religiosa en México, conocer una institución como el Derecho Eclesiástico que avanza en el país y, finalmente, los instrumentos jurídicos que se generaron en esta materia, producto de las reformas constitucionales de 1992 (leyes reglamentarias), así como el impacto que han tenido en la sociedad a 17 años de vigencia. Sin duda éstas se convierten en un mecanismo de protección del Derecho de Libertad Religiosa, y

---

<sup>27</sup> 1ª. Cronológicamente: método del historiador, en que los hechos se ordenan desde el pasado al presente o viceversa.

2ª. Por análisis de estructuras y funciones: cuyo método explica cómo funciona cada elemento de alguna estructura y cómo cada detalle encaja en el conjunto.

3ª. Por inducción: se generaliza a base de ejemplos concretos y procediendo de lo específico a lo general.

4ª. Por deducción: como su nombre indica, se deducen de premisas generales aplicaciones concretas, intentándose probar la aplicación de principios generales afectados a principios específicos.

5ª. Por análisis de causas y efectos se atribuyen a causas determinantes, aunque las mismas causas puedan no producir los mismos efectos.

6ª. Por análisis del proceso: método que, con cierta similitud al cronológico, busca analizar el problema según el orden de un proceso lógico que puede o no coincidir con el cronológico.

7ª. Por comparación y contraste: según este método de discusión, dos o más mecanismos, organismos, situaciones o circunstancias se comparan en lo que se parece o difieren.

8ª. Por eliminación: la búsqueda de una solución al problema lleva a la inaceptabilidad de todas las soluciones, excepto una, mediante una cuidada argumentación.

9ª. Por eliminación de la alternativa: método similar al anterior que presenta únicamente dos soluciones al tratamiento de la cuestión y de ellas se elige la mejor.

10ª. Por resolución del problema: que implica la delimitación, acumulación y establecimiento de criterios para la solución de un problema, el análisis de la más lógica y la propuesta formal de la misma.

nos sirven de marco de referencia para la adopción de nuevas normas que mejoren no solamente el sistema de derechos humanos en América Latina y México, sino que nos permitan transformar los regímenes jurídicos de los estados. Así pues, la metodología fue diversa, entrevisté a quien tiene experiencia y cuya actividad está relacionada con la aplicación de las normas religiosas y que tiene la posibilidad de considerar al factor religioso en su justa dimensión.

A lo largo de la investigación se realizaron entrevistas a los legisladores del Congreso de la Unión, a Ministros de Cultos de distintas asociaciones religiosas y expertos relacionados con el tema, que revelaron datos e información que ayudó a entender el objeto de estudio de esta investigación. Estas fuentes sirvieron para conocer en profundidad datos esenciales de la investigación y nos acercaron más a la realidad. También tomé en cuenta a las instituciones y organizaciones involucradas con el tema, lo que ayudó a posicionar de una mejor forma las ideas expuestas.

En cuanto al instrumento de recolección de datos utilicé el fichaje y la entrevista. El objetivo básico fue conseguir toda la información útil disponible que contienen las fuentes existentes y almacenarlas y archivarlas de manera que pueda ser manejable. Se trató de tomar nota de los documentos cuya lectura se considera necesaria.<sup>28</sup> Una vez recogida toda la documentación la clasifiqué con el fin de conocer el material obtenido y así estructurarlo de forma sistematizada en cada capítulo.

---

<sup>28</sup> ANDUIZA, Eva. CRESPO, Ismael. MÉNDEZ Mónica. *Metodología de Ciencia Política*. CIS. p. 80

## **CAPÍTULO I**

---

---

# **ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO**

# **CAPÍTULO I**

## **ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO**

### **1.1 CONSIDERACIONES GENERALES**

El génesis de la Iglesia en la Nueva España fue una carabela castellana al mando del Capitán Valdivia, quien naufragó yendo de Darién<sup>29</sup> a la isla Española a finales del año 1511, 19 de sus tripulantes lograron entrar en el batel salvavidas y 7 de ellos murieron de tristeza y hambre, los restantes hicieron tierra en las costas de Yucatán, donde cayeron en manos de un cacique regional, quien los sacrificó ofreciéndolos a sus ídolos y comiéndolos en fiestas y regocijos. Sólo escaparon Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, éste último diácono reducido<sup>30</sup> y hombre importante en la conquista espiritual y en la historia eclesiástica, pues gracias a su fe salvadora en el naufragio fue el primero en entonar las alabanzas del verdadero Dios y de su Madre Santísima, según el rito de la Santa Iglesia Romana en la Nueva España convirtiéndose en el primer practicante de la religión católica del nuevo mundo. En 1519 lo encontró Hernán Cortés quien lo tuvo como intérprete.<sup>31</sup>

El primer sacerdote que pisó tierra mexicana desembarcando en el Cabo Catoche<sup>32</sup> el 5 de marzo de 1517 fue Alonso González, clérigo secular que acompañaba al Capitán Francisco Hernández de Córdoba en la aventura de

---

<sup>29</sup> Situada en el Mar Caribe en el límite de Colombia y Panamá.

<sup>30</sup> Es aquel diácono devuelto al estado seglar, es decir, que no ejercía sus funciones como diácono. Es estar inhabilitado.

<sup>31</sup> CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomo I, Libro I, “Orígenes de la Iglesia en la Nueva España, 1511-1548”, 7ma. edición, preparada por José Gutiérrez Casillas, Editorial Porrúa, México, 2003, pp. 102-204

<sup>32</sup> Ubicado en Quintana Roo, México. Es el punto más septentrional de la Península de Yucatán. Se encuentra a aproximadamente a 53 Km. al norte de Cancún. Pertenece al territorio continental del municipio de Isla Mujeres.

buscar y descubrir tierras nuevas provenientes de Cuba. El 8 de febrero de 1517 se celebró la primera misa en el continente Americano en la Villa de San Cristóbal en la Habana Cuba, pero fue en México el 6 de mayo de 1518 cuando Jesucristo tomó posesión del territorio que hoy es México celebrándose la primera misa.<sup>33</sup>

Con la expedición de Hernán Cortés viajaron sólo dos eclesiásticos. El primero y más autorizado era fray Bartolomé de Olmedo de la Orden de la Merced, quien trabajó con los zapotecos<sup>34</sup> predicando y enseñándoles los artículos de fe, bautizó a más de 500 indios falleciendo a fines de octubre o principios de noviembre de 1524 en la Ciudad de México. El otro era el sacerdote secular Lic. Juan Díaz, a quien lo mataron a pedradas y cantonazos en Quechulac por quebrar los ídolos de los indios. Fray Juan de Zumárraga señala entre los clérigos conquistadores a Juan Díaz, Francisco Martínez, Luís Méndez Tollado y Diego Velásquez.<sup>35</sup>

Entre 1518 y 1548<sup>36</sup> mediante bulas y cédulas se erigieron obispados y se nombraron obispos en Yucatán a Fray Julián de Garcés, en Tlaxcala a fray Juan de Zumárraga, en Oaxaca a don Juan López de Zárate, en Michoacán a don Vasco de Quiroga, en San Cristóbal de las Casas Chiapas a fray Bartolomé de las Casas y en Guadalajara a don Pedro Gómez Maraber. El 12 de febrero de 1546 Paulo III desmembró la Iglesia Americana de la de Sevilla y erigió en la Ciudad de México el primer arzobispado.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomo I, Libro I, *op. cit.*, p. 106

<sup>34</sup> Es la expresión precolombina del pueblo zapoteco, históricamente ha ocupado el sur de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec (México). En la época precolombina, los zapotecas fueron una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica.

<sup>35</sup> *Ibidem*, pp. 115-117

<sup>36</sup> GUTIÉRREZ CASILLAS, José. *La Organización de la Iglesia en la Nueva España, Historia General de la Iglesia en América Latina*, Tomo V, México, CEHILA, ediciones Paulinas, S.A., México, 1984, p. 55

<sup>37</sup> CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomo I, Libro Preliminar... *op. cit.*, pp. 57-61

De esta manera, después de la toma de Tenochtitlan quedó establecida la jerarquía católica de la Nueva España,<sup>38</sup> constituyéndose la Iglesia en México con cuatro órdenes religiosos: Franciscanos, Dominicos, Agustinos y Jesuitas, las cuales evangelizaron el territorio hasta la alta California y Nuevo México.

Dos hechos importantes y de trascendencia en la historia religiosa de la Nueva España son: la implantación del Santo Oficio de la Inquisición<sup>39</sup> y la expulsión de los Jesuitas (que se identifica claramente con el inicio de la intolerancia religiosa en México). Comentando sobre el primero de los hechos mencionados, fueron los Dominicos los primeros en encargarse del Tribunal (1532). A partir de 1535 los Obispos tuvieron la función de ser delegados de la inquisición y para 1571 Pedro Moya de Contreras, Arzobispo de México, recibió su propio tribunal sin facultades de perseguir a los indios por la indignación social cuando el Obispo Zumárraga castigó la supervivencia de prácticas religiosas precortesianas por los recién bautizados. En 1574 comienzan los *autos de fe* y terminan en 1649. La cantidad de vidas que cobró la inquisición no habrá pasado de 5 o 6 decenas, los demás sentenciados recibieron penas de prisión vitalicia, azotes, castigos simbólicos o difamantes, pero nunca la pena capital.

Las Cortes de Cádiz suprimieron la inquisición el 22 de febrero de 1813 y fue restablecida cuando Fernando VII reaccionó contra el liberalismo gaditano promulgado en España el 21 de julio de 1813. No tuvo gran importancia práctica en la Nueva España, salvo por lo que se refiere a los procesos inquisitoriales

---

<sup>38</sup> GUTIÉRREZ CASILLAS, José. *La Organización de la Iglesia...* op. cit., p. 60

<sup>39</sup> El Tribunal tuvo como propósito combatir las actividades de los llamados “herejes”, de los judaizantes y protestantes que la legislación consideraba como delitos. Su causa y fin era preservar la unidad religiosa. La Corona Real consideraba a la *inquisición* como el medio eficaz para realizar la unidad política y religiosa.

contra Hidalgo y Morelos. Con el regreso de las Cortes de Cádiz en 1820 la inquisición desaparece definitivamente del panorama mexicano.<sup>40</sup>

El segundo hecho de importancia para la historia religiosa de la Nueva España inicia a partir de 1767, cuando el virrey Marques de Croix reunió en el palacio a la Real Audiencia, al arzobispo Don Francisco Antonio Lorenzana y a otras autoridades para leerles el pliego (la famosa *pragmática*), en el que se le comunicaba la real disposición que había recibido de la Corte para la expulsión de los Jesuitas. El Papa Pío VII en 1814 restableció la Compañía y el 10 de septiembre de 1815 Fernando VII permitió el establecimiento de los Jesuitas en México pero lo suprimió en 1820. El 5 de julio de 1856 queda extinguida. En 1873 se le destierra.<sup>41</sup> La Compañía de Jesús se fundó en 1572 con tres expulsiones que le restaron presencia en el país por 102 años. La primera decretada en 1767 por el rey Carlos III, la segunda que va de 1821 a 1853 y la última de 1855 a 1878.

Éste es el génesis de la Iglesia Católica como institución y, por lo tanto, el inicio de la difusión del cristianismo y los primeros eclesiásticos en México.

En este trabajo se realizará una síntesis del comportamiento de la norma jurídica con relación a la Iglesia Católica desde la época virreinal hasta la revolución de 1910.

---

<sup>40</sup> MARGADANT, Guillermo F. *La Iglesia ante el Derecho mexicano, esbozo histórico-jurídico*, 1991, Editorial Porrúa, México, 1991, pp. 151 y 152

<sup>41</sup> GUTIÉRREZ CASILLAS, José. *La Organización de la Iglesia...* *op. cit.*, p. 92



## 1.2 ÉPOCA VIRREINAL

Durante la época virreinal, la Iglesia Católica estuvo regida por el *Regio Patronato* o *Patronazgo de Indias* que era un conjunto de privilegios otorgados a la Corona por el Romano Pontífice. En virtud de él, los reyes de España ejercían, aún en materia eclesiástica, más autoridad que el mismo Pontífice.<sup>42</sup> Basta observar lo que señalaba el *Código de Indias*.<sup>43</sup>

Todos los 24 títulos del Libro 1º,<sup>44</sup> con un conjunto de seiscientos noventa leyes, con innumerables prole de reales cédulas, decretos virginales o de las audiencias e interpretaciones de los gobernantes, tenían completamente atados desde al patriarca de las Indias hasta el más triste sacristán, en forma que, queriendo abusar el monarca o sus subalternos, podían tener a la Iglesia, y de hecho la tuvieron, en muchos casos en una dura y humillante condición.<sup>45</sup>

Para dar una idea del poder estatal dentro de la Iglesia novohispana a fines del virreinato se puede establecer una lista de facultades patronales de la Corona:<sup>46</sup>

<sup>42</sup> CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomo I, Libro preliminar... *op. cit.*, p. 47

<sup>43</sup> "Por cuanto el derecho de Patronazgo Eclesiástico nos pertenece en todo el Estado de Indias (...) ordenamos y mandamos que este derecho, único e insolidum, siempre sea reservado a nos y a nuestra Corona y no pueda salir de ella en todo ni en parte y que ninguna persona secular ni eclesiástica sea osada a entrometerse en cosa tocante al Patronazgo Real, ni a proveer Iglesia ni beneficio, ni oficio eclesiástico, ni a recibirlo, sin nuestra presentación(...)" (Título 6º L. I. F. II. San Lorenzo, 1º de junio, 74)  
"Mandamos que no se erija, instituya, funde ni construya Iglesia Catedral, ni Parroquia, Monasterio, Hospitales, Iglesias motivos ni otro lugar pio ni religioso sin licencia expresa nuestra (...)" (Título VI. L. II. Felipe II. San Lorenzo, 1º de junio, 74)

"Rogamos y encargamos a los Arzobispos y Obispos de nuestras Indias (...) que cumplan los autos y provisiones que nuestras audiencias reales vieren y proveyeren (...)" (Título 10º. – Lib. IX. F. II – San Lorenzo, Sept. 3 de 83).

"Si algunas bulas o breves se llevaren a nuestras India (...) mandamos a los Virreyes, Presidentes y oidores de las reales audiencias que los recojan... del poder de cualquier persona (...) suplicando ante su santidad, nos lo avisen en primera ocasión a nuestro Consejo y si visto en él fueran tales que se deban ejecutar, sean ejecutados: y teniendo inconvenientes que obliguen a suspender su ejecución (...) se suplique al Santo Padre (...) los mande a revocar y entre tanto provea el Consejo que no se ejecute ni se use de ellos". (Título IX. L. II. – Carlos V. Valladolid, 6 septiembre, 38).

<sup>44</sup> *Novísima recopilación de las leyes de Indias*. Lib. I. Título IV

<sup>45</sup> CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomo II, Libro II, "Consolidación y Actividades de las Instituciones Fundadoras, 1548-1572", *op. cit.*, pp. 52 y 53

<sup>46</sup> MARGADANT, Guillermo F. *La Iglesia ante el Derecho...* *op. cit.*, pp. 155-158

1. El derecho de presentar candidatos para todos los beneficios eclesiásticos, la ratificación de los nombramientos realizados por el Vaticano y el derecho de degradar o despedir a los clérigos.
2. El control sobre todas las comunicaciones del Vaticano.
3. La decisión de establecer nuevas diócesis en las Indias.
4. La prohibición a los Obispos para dirigirse a Roma para presentar personalmente al Papa los reportes, bastaba que sus informes se enviaran al Consejo de Indias y no al Papa.
5. El derecho de suprimir órdenes monásticas y de expulsar a sus miembros (caso de los jesuitas, 1767).
6. La prohibición de recursos procesales de carácter canónico.
7. El cobro de impuestos eclesiásticos, sobre todo el diezmo, una cuota de 1/9 con que la Corona se quedaba.
8. La tendencia de usar, a fines del siglo XVIII, el colosal patrimonio eclesiástico para apoyar el crédito estatal, obligando a la Iglesia a vender sus inmuebles y a liquidar sus préstamos hipotecarios para invertir en la deuda estatal.
9. La restricción del fuero eclesiástico, del asilo en sagrado y de la jurisdicción de los Tribunales Eclesiásticos en asuntos extraeclesiásticos.

Durante los 300 años que duró el virreinato, la Iglesia estuvo subordinada-sometida al gobierno civil-Estado en sus distintas etapas de relación Iglesia-Estado.<sup>47</sup> Para José Luís Soberanes Fernández son tres éstas etapas, la del *Regio Patronato* (Siglo XVI), la del *Regio Vicariato* (Siglo XVII), y la del *Regalismo* (Siglo XVIII).<sup>48</sup> Lo que es cierto es que los reyes utilizaron el *Regio Patronato*

---

<sup>47</sup> Quizás las razones por las que la Santa Sede concedió dicho Patronato a los reyes de Castilla sobre la Iglesia de Indias, consistía en que la Iglesia no podía cargar con los enormes costos de la evangelización americana.

<sup>48</sup> SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís. *Presentación del manual Compendio del Regio Patronato Indiano*, edición facsimilar, Editorial Porrúa, México, 1993.

como un medio de control y dominación sobre la Iglesia, aunque el espíritu original el patronato se fue desvirtuando con el transcurso del tiempo.

Si bien es cierto que la historia de la Iglesia Católica en la tierra de *Anáhuac* tuvo sus desatinos y que dañó a la sociedad con el establecimiento de la inquisición, la censura de libros y comunicaciones diversas, la acumulación del patrimonio eclesiástico (a menudo mediante presión de testamentos), la abundancia en que vivía el alto clero y la falta de probidad con que se conducían muchos clérigos regulares del siglo XVIII pudieron crear un cierto –y con razón– anticlericalismo.<sup>49</sup> También lo es que muchos de sus ingresos los utilizaban para caridad, educación de pobres, cuidado de la salud de los marginados, préstamos con interés bajo a los necesitados, siendo un factor importante para el desarrollo económico de la Nueva España, pues es a los clérigos a quienes debemos el desarrollo de la cultura, la arquitectura, pintura, música, literatura e historiografía, y sobre todo a los Jesuitas, quienes promovieron la introducción de la imprenta y la fundación de nuestra máxima casa de estudios nacional, nuestra universidad.<sup>50</sup>

Desde luego, en lo particular comparto lo señalado por el profesor Guillermo F. Margadant<sup>51</sup> en el sentido de que, como en tantos temas históricos, la base documental da material para crítica e idealización, sin embargo, se debe estar consiente de la gran variedad de motivaciones, errores y aciertos que presenta un fenómeno, como lo es el estudio de la Iglesia novohispana.

---

<sup>49</sup> Así lo señala el virrey don Antonio de Mendoza en su instrucción del 20 de junio de 1544 dejando asentadas estas terminantes palabras: “los clérigos que vienen a estas partes son ruines y todos se fundan sobre su interés y si no fuese por lo que S.M. tiene mandado y por el bautizar, por lo demás estarían mejor los indios sin ellos. Esto es en general, porque en particular algunos buenos clérigos hay”. Así el Obispo Hoja-Castro de Puebla escribía 12 años después: “en los clérigos que a estas partes pasa, por la mayor parte se ven grandes flaquezas, que se ven grandes escándalos porque o ha sido frailes (prófugos) o vienen huyendo de sus preladados”.

<sup>50</sup> MARGADANT, Guillermo F. *La Iglesia ante el Derecho...* op. cit. p. 157

<sup>51</sup> *Ibidem*, p. 158

### 1.3 LA RELIGIÓN EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

*“La independencia se justificó y se hizo necesaria para salvar a la religión católica.”*

AGUSTÍN DE ITURBIDE<sup>52</sup>

La independencia de México forma parte de la historia eclesiástica, no sólo porque sus principales caudillos pertenecieron al clero, sino también porque de principio a fin de la guerra intervino en ella la idea religiosa. El carácter religioso jamás abandonó la causa de la independencia. Había nacido al *toque de una campana* y sus ecos la seguían por todas partes. La ciudad de Valladolid<sup>53</sup> fue el origen de la revuelta y el constante foco de ella. El clero de Michoacán, provisto de hombres de letras, puso los cimientos de la gran obra encabezada por el prebendado D. Manuel Abad y Queypo, español peninsular, quien magistralmente exponía las cuatro llagas sociales que España estaba muy lejos de poder curar: desorden económico, opresión de las razas del país, abusos administrativos y abusos del patronato.<sup>54</sup>

Los próceres y el pueblo tuvieron la idea de reafirmar y defender la unidad religiosa de la Nueva España que se veía en peligro por la promulgación de leyes liberales en España y la intervención napoleónica en la península. Esta idea de la defensa de la religión católica fue el soporte que movió a no pocos a sumarse al movimiento libertario. La unidad religiosa fue un elemento sin el cual difícilmente hubiera podido realizarse en las circunstancias existentes la independencia nacional.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> *Emperador Constitucional de México*: de 19 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823

<sup>53</sup> Hoy Morelia, capital del estado de Michoacán, México

<sup>54</sup> CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomo V, Libro I, “La Iglesia y la Independencia Nacional, 1800-1821”, 7ma. edición, José Gutiérrez Casillas, Editorial Porrúa, México, 2003, pp. 48 y 49

<sup>55</sup> RABASA, Emilio. *La Constitución y la dictadura*, México, TIP. D. “Revista de Revistas”, 1912, p. 27

El cura Don Miguel Hidalgo y Costilla<sup>56</sup>, *padre de nuestra Independencia*<sup>57</sup> fue un caudillo político pero también religioso. Fue discípulo de los Jesuitas desterrados como Clavijero<sup>58</sup> y se formó por el influjo de sus maestros, (ilustración cristiana) es decir, corriente del humanismo racionalista, que se preocupó por mostrar que no debía existir un conflicto entre el cristianismo y una visión científica y moderna de la historia, intentando conciliar armónicamente los diversos campos del conocimiento con la religión, sin caer en los excesos críticos y anticristianos de los filósofos ilustrados radicales.<sup>59</sup>

Además de ilustres como Hidalgo, Morelos y Matamoros, de las filas del clero salieron miles de sacerdotes a luchar por la causa. En un libro manuscrito denominado *Tablas de la Nueva España* se puede leer: (...) *se sabe que con Morelos iban pasados por las armas 125 sacerdotes hasta el 22 de diciembre de 1815*. Esta cifra de fusilados por los realistas es corta, si suponemos que fue el 5% de los levantados, pues unos 6 mil de los 8 mil sacerdotes estaban efectivamente por la independencia.<sup>60</sup>

Parte de la filosofía de nuestra independencia la propagaban en España señalando que *la impiedad, la irreligión y el despotismo de las cortes son las causas de la perdición de las Américas, y de que éstas hayan jurada su independencia, pues no pudiendo sufrir el mal Gobierno de su Constitución, y de*

---

<sup>56</sup> En su curato de Dolores proclamó la independencia en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 al grito de: “viva la independencia, viva la religión, muera el mal Gobierno”. Salió con rumbo a San Miguel de Allende al frente de 600 hombres. En la sacristía del pueblo de Atotonilco, tomó el cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe que desde entonces estuvo al frente de los ejércitos libertadores mexicanos. (CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomo V, Libro I, *op. cit.*, pp. 58 y 59).

<sup>57</sup> HERRERÓN PEREDO Carlos. *Hidalgo, razones de la insurgencia y biografía documental*, SEP, Colección 100 de México, 1987, pp. 35 y 36.

<sup>58</sup> CARRILLO FLORES, Antonio. *La Constitución, la Suprema Corte y los Derechos Humanos*, Editorial Porrúa, 1ª edición, México, 1981, p. 222

<sup>59</sup> CLAVIJERO, Elías y CLAVIJERO Trabulsee. *Historiador de la ilustración mexicana, ensayo incluido en el libro Francisco Javier Clavijero en la ilustración mexicana, 1731-1787*, comp. Alfonso Martínez Rosales, Colegio de México, México, 1987, pp. 50 y 51

<sup>60</sup> *Ibidem*. p. 92

*sus impíos y sacrílegos decretos (...) el ordenar la libertad de imprenta y prohibir fundar obras pías, capellanías, hospitales, Iglesias, conventos de monjas y de religiosos ordenándolos cerrar, fueron las causas de la independencia por lo que Agustín de Iturbide, con su ejército publicó el Plan de independencia de las 3 garantías para conservar así en la América la fe y la religión Católica, con las sagradas comunidades que mandaron extinguir las Cortes de Madrid.*<sup>61</sup>

La religión fue un factor determinante en la guerra de independencia, basta leer algunos documentos para advertir su importancia,<sup>62</sup> como se puede observar en todos los documentos en los que se ha hecho referencia, se dispone que la religión católica “sea la única” sin tolerancia de otra. El Estado mexicano naciente tenía con la Iglesia una estrecha relación. El papel trascendental que desempeñó la religión católica y el clero en la guerra de independencia fue fundamento para considerar a la religión como única y, por lo tanto, permitió una vez más el establecimiento de la intolerancia religiosa.

---

<sup>61</sup> *Ibidem*, pp. 106 y 107

<sup>62</sup> **Elementos Constitucionales:** (1811) “la religión católica será la única sin tolerancia de otra”, (Ignacio López Rayón instala en Zitácuaro (Se localiza en la sub-región noroeste del estado de Michoacán, México) la Suprema Junta Nacional Americana encargada de gobernar en ausencia de Fernando VII redactó una Constitución que así denominó.

**Constitución de Cádiz.** (1812) Artículo 12: “la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera(...)” (jurada en la Nueva España el 30 de septiembre del mismo año, 1812)

**Sentimientos de la Nación.** (1813) “que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra (...)”, (El 14 de septiembre de 1813 D. José María Morelos I. Pavón, convocó a un Congreso en Chilpancingo en el que da lectura a 23 puntos que así titularon.)

**Declaración de Independencia de América Septentrional:** (1813) “declara solemnemente (...) que no profesa ni reconoce otra religión más que la católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna (...)” (El 6 de noviembre de 1813 se instala en Chilpancingo el Congreso de Anáhuac, haciendo constar en el Acta Solemne)

**Constitución de Apatzingán:** (1814) “la religión católica, apostólica, romana es la única que se debe profesar en el Estado”.

**Plan de Iguala:** (1821) “No anima otro deseo al ejército que el conservar pura la santa religión que profesamos y hacer la felicidad general (...), la religión católica apostólica, romana sin tolerancia de otra alguna (...)”.

Tratados de Córdoba. El 30 de junio de 1821 don Juan de O'Donojú celebró los Tratados de Córdoba con Iturbide, con lo que se pone fin a la guerra de independencia, remitiéndose en materia religiosa al Plan de Iguala. El 27 de septiembre entra triunfante a la ciudad de México Agustín de Iturbide al frente del *Ejercito Trigarante* que proclama *religión, independencia y unión*. El 28 de septiembre de 1821 se firma el *Acta de Independencia*, con lo que se emancipó de la Corona Española. Con el primer Congreso Constituyente y, como un acto de adhesión a la fe católica y a la Iglesia, todos los diputados electos se reunieron en la catedral metropolitana y juraron de la manera más solemne defender la religión católica y la independencia de México.

#### 1.4 CONSTITUCIÓN DE 1824

El origen de la *Constitución de 1824* fue la disolución del Congreso en octubre de 1822 por Agustín de Iturbide, toda vez que las provincias negaron al Congreso las facultades para constituir la Nación Mexicana. El 21 de mayo de 1823 se crea el decreto donde se acuerda su propia disolución por lo que deberá formarse convocatoria para uno nuevo,<sup>63</sup> apareciendo dos grupos, federalistas y centralistas. Ambos tenían como líderes a clérigos como Miguel Ramos Arizpe y fray Servando Teresa de Mier. Desde el acta constitutiva se establece el monopolio oficial del catolicismo.<sup>64</sup>

La Constitución Federal se aprobó el 3 de octubre de 1824 y se publicó al siguiente día con el nombre de *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos* que estuvo en vigor hasta 1835. En su preámbulo se lee: *en el nombre de Dios todo poderoso, autor y supremo legislador de la sociedad (...)*, y en su

---

<sup>63</sup> TENA RAMÍREZ, Felipe. *Leyes Fundamentales de México, 1808-2005*, vigésima cuarta edición actualizada, Editorial Porrúa, México, 2005, pp. 146-152

<sup>64</sup> MARGADANT, Guillermo F. *La Iglesia ante el Derecho...*, *op. cit.*, p. 164

artículo 3° señala que *la religión de la Nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.*<sup>65</sup>

Con una clara tendencia regalista, la fracción XII del artículo 50 de la Constitución Federal señalaba entre las facultades del Congreso la de *arreglar el ejercicio del Patronato en toda la Federación*, no obstante que ya había sido abolido al declarar México su independencia. El constituyente del 24 estableció en la fracción XXI del artículo 110 como facultad del presidente de la república la de *conceder el pase o detener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves y rescriptos*<sup>66</sup>, lo que significaba que tenía que estar de acuerdo la autoridad civil para que dichos documentos llegaran a sus destinatarios.

## 1.5 CONSTITUCIÓN DE 1836, “CENTRALISTA”

En 1835 se reunió un congreso federal declarándose constituyente presentando un proyecto de “Bases Constitucionales” aprobado el 2 de octubre, convirtiéndose en ley constitutiva con el nombre de *Bases para la nueva Constitución*, conocida también con el nombre de *Constitución de las 7 leyes* porque se dividió en 7 estatutos.<sup>67</sup> En su artículo 1° señala *la Nación mexicana (...) no profesa ni protege otra religión que la católica, apostólica, romana, ni tolera el ejercicio de otra alguna*. La Constitución iba precedida de la invocación a *Dios todo poderoso, trino y uno, (...)*, y establecía el juramento *Por Dios y los Santos evangelios (...)* para el presidente de la república. En el artículo 3° fracción I de la 1ª Ley se señala como una de las obligaciones del mexicano la de

---

<sup>65</sup> *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos*, Preámbulo. (Obsérvese que se reproduce casi literalmente el artículo 12 de la Constitución de Cádiz de 1812).

<sup>66</sup> *Ibidem*, artículo 110 Fr. XXI

<sup>67</sup> TENA RAMÍREZ, Felipe. *Leyes Fundamentales...*, op. cit., pp. 201 y 202



*profesar la religión de su patria (...).* El artículo 30 de la 5ta ley preserva los fueros eclesiásticos y militares señalando que *no habrá más fueros personales que el eclesiástico y el militar.*

Se le conoció también con el nombre de Constitución Centralista porque puso fin al sistema federal.

## **1.6 CONSTITUCIÓN DE 1842, “BASES ORGÁNICAS”**

El 23 de diciembre de 1842 el presidente de la república don Nicolás Bravo designó a 80 notables para integrar la Junta Nacional Legislativa según lo propuesto por el movimiento triunfante que sofocó al acaudillado por Valentín Gómez Farias en 1840, elaborando unas *bases orgánicas* que, siguiendo la tradición, también se establecía la intolerancia religiosa a favor de la Iglesia Católica al declarar que *la Nación profesa y protege la religión católica, apostólica, romana con exclusión de cualquier otra*<sup>68</sup>.

Con el movimiento de la “ciudadela”, el General don Mariano Salas y don Valentín Gómez Farias denunciaban como traición a la independencia los proyectos de monarquía solicitando la reunión de un nuevo congreso constituyente. El triunfo del movimiento puso fin a la constitución de las bases orgánicas.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Artículo 6 de las *Bases Orgánicas de la República Mexicana*.

<sup>69</sup> TENA RAMÍREZ, Felipe. *Leyes Fundamentales... op. cit.*, p. 405

## ➤ Acta de Reformas de 1847

El acta de reformas terminó de discutirse el 17 de mayo y fue jurada el 21 y publicada el 22 de 1847.<sup>70</sup> Inicia *en el nombre de Dios, creador y conservador de las sociedades (...)*. El Congreso Extraordinario Constituyente declaró y decretó que el acta constitutiva y la Constitución Federal sancionada en 31 de enero y 24 de octubre de 1824 formarían la única constitución política de la república. De tal suerte que en materia religiosa se dejaron subsistentes los numerales referentes a la religión católica, manteniéndose ésta como única. Por lo tanto, durante este periodo la nación mexicana no profesaba ni protegía a ninguna otra religión que no fuera la católica.

## 1.7 CONSTITUCIÓN DE 1857

Anterior a la Constitución de 1857 se expidió la Ley Juárez,<sup>71</sup> que suprimió el fuero eclesiástico; más tarde la Ley Lerdo,<sup>72</sup> sobre la desamortización de fincas rústica y urbanas que prohibían a las corporaciones eclesiásticas tener la capacidad jurídica para administrar bienes raíces. Luego apareció la Ley Iglesias,<sup>73</sup> que se refiere a los aranceles parroquiales en relación con los bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros y castiga el abuso de cobrar a los pobres. Estas leyes no tenían otro objetivo más que impedir la influencia del clero en asuntos civiles.

El génesis de la *Constitución de 1857* fue el *Plan de Ayutla* y sus leyes antieclesiásticas. El *Plan de Ayutla* careció de tendencia ideológica, era un

---

<sup>70</sup> *Ibidem*, p. 441

<sup>71</sup> Redactada por Benito Juárez el 23 de noviembre de 1855

<sup>72</sup> Redactada por Miguel Lerdo de Tejada el 25 de julio de 1856

<sup>73</sup> Redactada por José María Iglesias el 11 de abril de 1857

llamamiento a las armas para derrocar la dictadura de Antonio López de Santa Anna.<sup>74</sup>

El 17 de febrero de 1856 se reunió el Congreso Constituyente y el 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constitución por los diputados puestos de rodillas ante un crucifijo y con la mano derecha puesta sobre el Santo Evangelio.<sup>75</sup> Su prólogo inicia con la frase *en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano (...)*<sup>76</sup> y se establece el régimen republicano, representativo y federal con división de poderes. No obstante, se omitió el reconocimiento de la religión católica en el texto constitucional.

La Constitución de 1857 incorporó muchos de los puntos del programa del partido liberal.<sup>77</sup> No obstante que en el prólogo de la Constitución se invocase el nombre de dios, la Iglesia no pudo dudar ni un momento de la impiedad de ésta contra la religión y contra la patria. El episcopado en masa acudió inmediatamente con su oficial protesta y con su prohibición de jurar el nefasto código.<sup>78</sup> Señala la Iglesia que por el sólo hecho de no declarar a la religión católica como única oficialmente reconocida en el país, equivalió tanto como a la apostasía nacional, horrendo crimen e ingratitud para una nación que todo lo había recibido de la religión católica, precisamente porque ésta era para México lo que el alma para el cuerpo: *principio de vida, de fuerza y de alegría; se exigió*

<sup>74</sup> TENA RAMÍREZ, Felipe. *Leyes Fundamentales... op. cit.*, pp. 492-498

<sup>75</sup> CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomo V, Libro III, "Desde la Reformas hasta el Centenario, 1855-1910", *op. cit.*, pp. 310 y 311

<sup>76</sup> *Constitución General de la República Mexicana*, Sancionada con fecha 12 de febrero de 1857 y adicionada el 25 de septiembre de 1873 y 13 de noviembre de 1874.

<sup>77</sup> "La enseñanza es libre (Artículo 3º)", "(...) la ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso (...) (Artículo 5º)", es "inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede (...) coartar la libertad de imprenta (...) (Artículo 7º)", "Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución (Artículo 27)" y "corresponde exclusivamente a los Poderes Federales ejercer, en materia de culto religioso y disciplina externa, la intervención que determinen las leyes (Artículo 123)".

<sup>78</sup> CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomo V, Libro III, *op. cit.*, p. 310

*aquel Congreso de lacayos la supresión de la religión por los que quieren que México sea una Nación cadáver.*<sup>79</sup>

## 1.8 LAS LEYES DE REFORMA

Debido al desconocimiento de Ignacio Comonfort mediante el *Plan de Tacubaya* toma el poder Benito Juárez y reivindica la Constitución de 1857. Así inicia la *guerra de reforma*, teniendo en el país dos presidentes: Félix Zuloaga, aceptado por el clero y el presidente liberal Benito Juárez quien, con asiento en Veracruz, expidió violentas leyes anticlericales conocidas como *leyes de reforma*, entre las cuales sobresalen: *Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos*,<sup>80</sup> *Ley de Matrimonio Civil*,<sup>81</sup> *Ley de Secularización de Cementerios*,<sup>82</sup> *Ley sobre la libertad de cultos*,<sup>83</sup> *Decreto en el que quedan Secularizados los Hospitales y Establecimientos de Beneficencia*<sup>84</sup> y el *Decreto en el que se extingue en toda la República las comunidades de religiosas*.<sup>85</sup>

<sup>79</sup> *Ibidem*, p. 312

<sup>80</sup> Expedida el 13 de julio de 1859. “Artículo 1°. Entran al dominio de la Nación todos los bienes que el clero (...) a estado administrando (...) sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones (...)”

“Artículo 3°. Habrá perfecta independencia entre los negocios el Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El Gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica así como cualquier otra”.

“Artículo 5°. Se suprime en toda la república las órdenes de los religiosos que existen, cualquiera que sea la denominación (...)”.

“Artículo 23. Todos los que (...) se opongan (...) esta Ley (...), según que el Gobierno califique la gravedad de su culpa serán expulsados fuera de la república o consignados a la autoridad judicial”. En 1859 los colegios clericales, curales hospitales, edificios anexos a los templos y las capellanías entraron a la nacionalización y en 1862 los capitales dejados en testamento para objetos piadosos. (De la Peña Luís J. *La legislación mexicana en relación con la Iglesia*, Madrid, Rialp, 1965, pp. 42 y 43)

<sup>81</sup> Se expide el 23 de julio de 1859. “Artículo 1°. El matrimonio es un contrato civil que se contrae (...) ante la autoridad civil. Para su validez bastará que los contrayentes (...), se presenten ante aquella y expresen libremente la voluntad que tienen de unirse en matrimonio”.

<sup>82</sup> Se promulgó el 31 de julio de 1859. Establece el calendario liberal donde se suprimía la mayoría de las fiestas religiosas y se prohibía la asistencia oficial a los funcionarios de la Iglesia.

<sup>83</sup> Se expide el 4 de diciembre de 1860. “Artículo 1°. Las leyes protegen el ejercicio del culto católico (...) como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. Ningún acto solemne religioso podrá verificarse fuera de los templos sin permiso escrito concedido en cada caso por la autoridad política (...)”.

<sup>84</sup> Se expide el 2 de febrero de 1861. “Artículo 1°. Quedan secularizados todos los hospitales y establecimientos de beneficencia que hasta esta fecha han administrado las autoridades o corporaciones

El 30 de agosto de 1859 el Episcopado Mexicano protestó contra las *leyes de reforma* publicadas por Juárez en Veracruz, haciendo una relación de los conflictos entre la Iglesia y el Estado en los últimos 40 años, que sostenían que *nunca habían hecho oposición al Estado sino solamente en clase de defensa canónica y cuando ha sido provocada por leyes y medidas que atacan a su institución, su doctrina y sus derechos; siempre se ha defendido exclusivamente con sus armas que son las espirituales; y por último, que aún esto, lo han hecho con prudencia y caridad heroica.*<sup>86</sup>

El 18 de junio de 1872 murió Juárez y fue sustituido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada. Bajo este gobierno se aplicaron con todo rigor las disposiciones legales de espíritu anticlerical, hasta el grado de expulsar a los Jesuitas y a otros sacerdotes extranjeros. En cuanto a la expulsión de los Jesuitas, Riva Palacio consigna que *en esta misma época, la Suprema Corte de Justicia, por sus dos sentencias de 18 de agosto de 1883, confirmó el destierro decretado por el Ejecutivo, contra algunos jesuitas que vivían en comunidad revocando el amparo del juez de distrito*<sup>87</sup>.

Lerdo de Tejada, en su lucha contra Porfirio Díaz, observa su derrota y sale rumbo a Estados Unidos, y al poco tiempo hace lo mismo el presidente de la

---

eclesiásticas”. “Artículo 2°. El Gobierno de la unión se encarga del cuidado, dirección y mantenimiento de dichos establecimientos (...).”

<sup>85</sup> 26 de febrero de 1863. “Artículo 1°. Quedan extinguidas en toda la república las comunidades de Señoras religiosas. Artículo 3°. De estos edificios, y de todo lo que en ellos se encontrare perteneciente a las comunidades de señoras religiosas, se recibirán las oficinas de hacienda (...).” Sin embargo, este decreto excluye de extinción a las Hermanas de la Caridad, pues el artículo 7 del mismo señala: “Lo prevenido en este decreto no comprende a las Hermanas de la Caridad”. No obstante lo señalado, el 18 de mayo de 1873 la policía expulsó a las comunidades religiosas dejándolas en la calle extinguiéndolas. (CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomo V, Libro III, *op. cit.*, p. 392). Benito Juárez nunca quiso firmar el decreto de supresión de las Hermanas de la Caridad y fue firmado por Lerdo.

<sup>86</sup> QUIRARTE, Martín. *El problema religioso en México*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1967, p. 227

<sup>87</sup> RIVA PALACIO, Vicente. *Historia de la administración de Don Sebastián Lerdo de Tejada*, Editorial Facsimilar de la de 1875; biblioteca mexicana de la fundación Miguel Alemán, A.C., México, 1992, p. 454

Corte, José María Iglesias, quien se proclamó presidente una vez que triunfó la revolución de Tuxtepec.

Cuando Pío IX escuchó la lectura de dicha reforma exclamó *¡la peor del mundo, la peor del mundo!*<sup>88</sup>

## 1.9 IMPERIO DE MAXIMILIANO

Al triunfo de la guerra de reforma por los liberales, se avizoraba un panorama distinto para el país. Sin embargo, los conservadores acudieron al emperador francés Napoleón III para solicitarle la intervención militar en México con el propósito de instaurar un sistema monárquico con un príncipe europeo y católico.<sup>89</sup> Así las cosas, Napoleón convenció a Maximiliano para que aceptara la Corona de México, trasladándose el 28 de mayo 1864 con Carlota de Bélgica.<sup>90</sup> El 12 de junio entró a la capital recibido por las altas clases sociales y el ejército francés.

Cunado Maximiliano de Habsburgo<sup>91</sup> aceptó la corona de México el 10 de abril de 1864, manifestó a la comisión que se la ofrecía lo siguiente: *acepto el poder constituyente con que ha querido investirme la Nación, cuyo órgano sois vosotros, pero sólo lo conservaré el tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales. Así como los anuncié en mi discurso del 03 de octubre, me apresuraré a colocar la monarquía bajo la autoridad de leyes constitucionales, tan luego como la pacificación del*

---

<sup>88</sup> CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomo V, Libro III, *op. cit.*, p. 392

<sup>89</sup> SCHLARMAN, J.H. *México tierra de volcanes*, p. 369

<sup>90</sup> Nació en el castillo de Laeken, próximo a Bruselas. Contrajo matrimonio con Maximiliano el 27 de julio de 1857.

<sup>91</sup> Fernando Maximiliano de Habsburgo Archiduque de Austria, hermano del Emperador de Austria, casado con la Archiduquesa Carlota Amalia hija del Rey de Bélgica.

*país se haya conseguido completamente.*<sup>92</sup> Fue emperador de México a partir de 1864, cuando fue proclamado, y hasta 1867.

Gobernó con el apoyo de los conservadores y para sostenerse en el poder contaba con aproximadamente 63 mil hombres, de los cuales 28 mil eran franceses, 6 mil austriacos, 1 300 belgas, 20 mil mexicanos y 8 mil guardias rurales. En ese entonces Juárez<sup>93</sup> se refugió en Paso del Norte.<sup>94</sup>

Con el nuevo emperador, el Papa Pío IX envía al nuncio apostólico Pedro Francisco Meglia, quien llega a México para *quitar las dificultades y los estorbos que la anarquía y la irreligión habían sembrado en México.*<sup>95</sup> Su misión era dar marcha atrás al movimiento reformista entregando una carta al archiduque enviada por el Papa Pío IX. En ella exigía que la religión católica fuese la única que se admitiera en México, que se restablecieran las órdenes religiosas, que el patrimonio de la Iglesia y los poderes que le eran anexos estuvieran protegidos y defendidos, que la enseñanza pública como privada fuera dirigida y vigilada por la autoridad eclesiástica, en fin, que se rompieran las cadenas que había tenido hasta entonces la Iglesia bajo la dependencia y despotismo del gobierno civil.

No obstante lo anterior, Maximiliano, de pensamiento liberal y de influencia napoleónica, hizo suyas las leyes de reforma y la Constitución de 1857. Medidas que usó para atraer a los liberales y distanciarse de la Iglesia Católica, En enero de 1865 publicó un decreto que exigía el permiso imperial para que las bulas papales pudieran ser publicadas. Promulgó el decreto que establecía la libertad de cultos y la revisión de las ventas de los bienes eclesiásticos, la Ley de

---

<sup>92</sup> TENA RAMÍREZ, Felipe. *Leyes Fundamentales...* op. cit., p. 668

<sup>93</sup> Es reconocido como presidente por los jefes republicanos y por algunos gobiernos de los estados. El 8 de noviembre de 1865 expide un decreto en donde prorrogaba el período de sus funciones, toda vez que era imposible hacer elecciones por la invasión francesa.

<sup>94</sup> (Hoy Ciudad Juárez, Chihuahua México; frontera con EE.UU. agosto de 1866).

<sup>95</sup> GUTIÉRREZ CASILLAS, José. *Historia de la Iglesias...*, op. cit., p. 322

Cementerios y la Ley de Registro Civil, y para dar cumplimiento al compromiso de colocar a la monarquía bajo leyes constitucionales expidió el 10 de abril de 1865 el *Estatuto Provisional del imperio Mexicano*,<sup>96</sup> que constaba de 18 títulos con 80 artículos donde se preveía la forma de gobierno.

Dicho estatuto careció de vigencia práctica y validez jurídica, pues se expidió cuando el imperio empezaba a declinar, luego se firmó un decreto el 03 de octubre de 1865 mediante el cual se declaraba bandidos y criminales a todos los republicanos que quedaban en el país<sup>97</sup> por no tener ya causa que defender.

Al término de la guerra de sucesión en los Estados Unidos y el triunfo del norte sobre el sur, el embajador de ese país desalentó a Napoleón para seguir apoyando a Maximiliano, dado que solicitó el retiro de tropas francesas de México. Había en Francia peores problemas para Bonaparte por lo que ordenó la retirada del ejército francés así como de toda dependencia económica. Enemistado con el clero y el partido conservador, repudiado por los liberales y cada vez más distanciado del ejército expedicionario, terminaba solo y combatido.

El 15 de julio de 1867 Juárez hizo su entrada a la ciudad de México como presidente de la república. La Constitución de 1857 y las leyes de reforma volvían triunfantes. Juárez ordenó un consejo de guerra con el cual fusiló a Maximiliano, Miramón y Mejía el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, Querétaro. Así terminaron el imperio de Maximiliano y los conservadores, con la restauración la república.

---

<sup>96</sup> TENA, RAMÍREZ, Felipe. *Leyes Fundamentales...* pp. 670-680

<sup>97</sup> El General Bazaine del ejército imperial le hizo creer a Maximiliano que el país estaba enteramente pacificado, y que el gobierno republicano había desaparecido por haber cruzado Benito Juárez la frontera hacia Estados Unidos.



## 1.10 EL PORFIRIATO

El General Porfirio Díaz<sup>98</sup> a principios de 1876 inicia la revuelta militar en contra del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias. Proclama el *Plan de Tuxtepec* que insistía en la restauración de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, producto de la revolución de Tuxtepec<sup>99</sup>, con lo que tomó el poder y estuvo al frente de la república por dos períodos, de 1876 a 1880 y 1884 a 1911. Se conoció su ejercicio de gobierno como “la dictadura de Porfirio Díaz”.

Durante la época del porfiriato decrecieron las tensiones entre el Estado y la Iglesia. Se generó un cierto *modus vivendi*, aunque estuvieron vigentes las *Leyes de Reforma* no se aplicaron en su totalidad ni con exceso de rigor. Con la Iglesia su manejo fue en verdad magistral: se llamó *política de conciliación*. Díaz quería poner fin a la discordia religiosa y se abstuvo de aplicar las *Leyes de Reforma* porque se sostenían los odios de partido.<sup>100</sup>

Las relaciones de la Iglesia con el porfiriato fueron mediante acuerdos. Así se observó cuando en 1887 Díaz daba su bendición al nombramiento de Eulogio Gillow como primer Arzobispo de Oaxaca. Existió un intercambio de regalos en el que Díaz le otorgó un anillo pastoral con una gran esmeralda rodeada de brillantes, a su vez, Gillow le regaló a Porfirio una joya suntuosa que representaba las glorias militares de Napoleón I.

Al final de la época porfiriana era claro que la Iglesia mexicana había recobrado fuerza espiritual y política, ya no económica; multiplicó sus peregrinaciones, escuelas, hospitales, diócesis, arquidiócesis, periódicos

<sup>98</sup> Su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mory en: Díaz, Porfirio. *Memorias y documentos de su archivo personal*, Tomo I, Editorial Elede S.A., México., D.F., 1947, p. 28.

<sup>99</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico Mexicano*, Editorial Porrúa, México, 1997, p. 56

<sup>100</sup> KRAUZE, Enrique. *Siglo de Caudillos, Biografía política de México, 1810, 1910*, Tusquetss editores, México, 1994, pp. 307 y 308

combativos, hubo coronaciones, se creó la orden de las Hermanas Guadalupanas y volvieron los Jesuitas. Los Obispos secundaban la obra pacificadora de Díaz y en el Quinto Concilio Provincial Mexicano de 1896 ordenaron a los fieles algo inusitado e indispensable en la época de Juárez y del feroz come curas, Lerdo: *obedecer a las autoridades civiles*. El país parecía conciliar por fin sabiamente dos caras: ni tan liberal, ni tan conservador.<sup>101</sup>

También se registró un incremento de diferentes movimientos protestantes que desde el Gobierno Juárez se habían instalado en el territorio nacional, con lo cual se cumplía el anhelo de los liberales mexicanos: abrir las fronteras de México a otros credos religiosos distintos del católico e instaurar la tolerancia de cultos en el país.<sup>102</sup> Porfirio Díaz no tenía ningún escrúpulo de asistir tanto a una misa en algún convento como en participar en una ceremonia protestante.<sup>103</sup>

Quizá, en el fondo, la razón principal para no hacer cumplir las disposiciones antieclesiásticas fue la imperiosa necesidad de paz social.<sup>104</sup> El gobierno de Díaz tuvo el propósito de reconciliación nacional, y aunque el conservadurismo estuvo totalmente derrotado, el presidente Díaz tuvo una actitud de tolerancia respecto de la Iglesia.

---

<sup>101</sup> *Idem.*

<sup>102</sup> VILLEGAS MORENO, G. "Estado e Iglesia en los tiempos revolucionarios" en: *Relaciones Iglesia-Estado durante el segundo Imperio*, Galeana, UNAM, México, 1991, p. 184

<sup>103</sup> CHÁVEZ, E. *La Iglesia de México entre Dictaduras, Revoluciones y Persecuciones*, Editorial Porrúa, México, 1998, p. 35

<sup>104</sup> GONZÁLEZ, M.R. *Relaciones entre el Estado y la Iglesia en México*, en: Quórum, No. 1, 1992, p. 126

## 1.11 CONSTITUCIÓN DE 1917

México nació literalmente de la guerra de independencia de 1810. La consolidación definitiva fue la revolución de 1910, que duró 10 años. No abarca sólo la lucha armada sino la Constitución de 1917. En México *antes y después* se medía a partir de la revolución, pues se convirtió en el parteaguas de la nueva era.<sup>105</sup>

Camilo Arriaga fundó el 5 de febrero de 1901 el *Partido Liberal Mexicano*, el cual adoptó la lucha por la libertad de prensa y contra el clero. Criticaba la política de tolerancia para el clero al no aplicar las *Leyes de Reforma*.<sup>106</sup> Lanzó su manifiesto en 1906 en el que se proponía la multiplicación de las escuelas primarias y la clausura de las que pertenecían al clero<sup>107</sup> y la obligación para los templos de llevar contabilidad y pagar contribuciones, considerándolos como negocios mercantiles,<sup>108</sup> así como la nacionalización de los bienes raíces.<sup>109</sup>

En 1906 surgió la violencia en el país. Estalló la huelga de los mineros en Cananea, Sonora, el asalto a la aduana de Nogales y los conatos de levantamientos en Jiménez, Coahuila; Acayucan, Veracruz; Chinameca, Morelos y, más tarde, la huelga minera de Río Blanco, Sonora, la cual fue reprimida violentamente.

En 1909 Francisco I. Madero creó el Centro Antirreleccionista. En 1910 expidió el *Plan de San Luís Potosí* en el que incitaba al pueblo a la insurrección. La convicción de Madero era respetar los derechos de la Iglesia y la libertad de

---

<sup>105</sup> KRAUZE, Enrique. *Biografía del Poder, Caudillos de la Revolución Mexicana (1910-1940)*, Fábula TUSQUETS editores, 6ta. reimpresión, 2006, México, p. 15

<sup>106</sup> TENA RAMÍREZ, Felipe. *Leyes Fundamentales...*, op. cit., p. 722

<sup>107</sup> *Manifiesto a la Nación del Partido Liberal*, Principio 10

<sup>108</sup> *Ibidem.*, Principio 17

<sup>109</sup> *Ibidem.*, Principio 18

conciencia mediante la abolición de las leyes antirreligiosas. Consideró su aplicación atentatoria para las libertades públicas y el goce de sus libertades como algo absoluto.<sup>110</sup>

El Partido Nacional Católico sostuvo la candidatura de Francisco I. Madero, quien triunfó en el proceso electoral junto a Pino Suárez. El Partido Nacional Católico logró el triunfo de 4 senadores, 29 diputados y 4 gobernadores, así como varios diputados locales.<sup>111</sup>

Como resultado del cuartelazo, Madero y Pino Suárez renunciaron el 19 de Febrero de 1913. Victoriano Huerta asumió la presidencia y dispuso que el órgano del Partido Católico Nacional fuera clausurado. A los diputados del partido se les habían arrebatado sus credenciales y los gobernadores habían sido depuestos de su cargo.<sup>112</sup>

Venustiano Carranza desconoció a Huerta mediante un decreto del 19 de Febrero de 1913.<sup>113</sup> La revolución carrancista tomó una postura antirreligiosa. Se cometieron robos, despojos, saqueos, incendios, muertes violentas, destierro de prelados y eclesiásticos y cierre de conventos e iglesias. En 1915 Obregón dispuso la ocupación de varios templos y la aprensión de los sacerdotes del Arzobispado de México para exigirles medio millón de pesos. El gobernador Gral. Antonio I. Villareal de Nuevo León, posteriormente expulsó a los sacerdotes extranjeros y a los Jesuitas quemando confesionarios e imágenes religiosas en la plaza de Monterrey y expidió un decreto el 23 de julio de 1914 en el que estableció: *IV.- se prohíbe los confesionarios y la confesión. V.- se prohíbe la entrada al público a la sacristía. VI.- las campanas de los templos se usaran*

---

<sup>110</sup> TENA RAMÍREZ, Felipe. *Leyes Fundamentales*,... op. cit., p. 726

<sup>111</sup> ALVEAR ACEVEDO, Carlos. *Historia de México*, México, JUS, 1967, p. 322

<sup>112</sup> CORREA, Eduardo J. op. cit., p. 179

<sup>113</sup> TENA RAMÍREZ, Felipe. *Leyes Fundamentales*..., op. cit., pp. 60-61

*únicamente para celebrar las fiestas patrias y los triunfos de las armas constitucionalistas.*<sup>114</sup> Manuel M. Dieguez en Jalisco ordenó detener a todos los sacerdotes y tomar posesión de todas las iglesias y ahí mismo los caballos se adornaban con vestiduras sagradas.<sup>115</sup>

No obstante lo anterior se instaló el Congreso Constituyente de Querétaro. Los temas más debatidos fueron la educación, la religión y el estado. Emilio M. Múgica, líder antirreligioso, hizo la propuesta del artículo 3° que establecía:

*La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales; Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.*<sup>116</sup> El artículo fue aprobado por 99 votos contra 58.

El artículo 5° tuvo modificaciones en su texto, sin embargo, en lo relativo a la libertad religiosa, pasó en términos idénticos a los de la Constitución de 1857, es decir, el Estado siguió prohibiendo pacto o convenio que tuviera por objeto el menoscabo, pérdida o sacrificio de la libertad como el caso del voto religioso. Tampoco reconoció órdenes monásticas, ni pudo permitir su establecimiento,

---

<sup>114</sup> CORREA, Eduardo J. *op. cit.*, p. 210

<sup>115</sup> ALFONSO TARAZENA, Alfonso. *La verdadera revolución mexicana, Segunda etapa, 1913-1914*, México, JUS, 1960, pp. 314-315

<sup>116</sup> Texto Original del artículo 3° de la Constitución de 1917 publicada en el Diario Oficial Órgano del Gobierno Provisional de la Republica Mexicana, Tomo V, 4ª Época, México, 5 de febrero de 1917, Número 30. “La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.”.

cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse.<sup>117</sup> El dictamen fue aprobado por unanimidad de 163 votos.

En la sesión de 27 de enero de 1917, se presentó el dictamen del artículo 24, estableciendo que: *Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar los actos del culto respectivo en los templos o en su domicilio particular. Es decir, no deberán realizarse actos de culto público fuera de los templos.*<sup>118</sup> Fue aprobado como lo presentó la Comisión por 93 votos contra 63.

En el artículo 27, el congreso se concretó a realizar breves proposiciones y aclaraciones de la posición ante el clero, estableciendo que *las Asociaciones Religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los templos destinados al culto público son de la propiedad de la Nación; los Obispos, casas curales, seminarios, asilos o colegios, conventos, conventos o cualquier otro edificio que hubiera sido construido o destinado a propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán de pleno derecho al dominio directo de la Nación, (Fracción II). Las instituciones de beneficencia pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la difusión de la enseñanza, no podrán adquirir, tener y administrar capitales sobre bienes raíces. En ningún caso podrán estar bajo la dirección, administración o cargo de corporaciones religiosas o de sus*

---

<sup>117</sup> Texto Original del artículo 5°, párrafo III, constitucional. “El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse”.

<sup>118</sup> Texto Original del artículo 24, constitucional. *Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad.*

*asimilados*, (Fracción III).<sup>119</sup> El artículo fue aprobado en todas sus partes por unanimidad de 150 Diputados presentes.<sup>120</sup>

Se confirmaron las disposiciones de la Constitución de 1857, las cuales atentaron contra las confesiones religiosas al privarlas de poder de adquirir, poseer y administrar bienes destinados al culto público religioso o a las necesidades de sus ministros. De igual forma, atentaron al incapacitar a las Iglesias o ministros para dirigir instituciones de beneficencia pública, científica o de enseñanza.

El mismo día que se discutió el artículo 24 se presentó el dictamen sobre el artículo 130 que estableció, entre otras cosas, las facultades a la federación para intervenir en materia de culto religioso; la negación de la personalidad a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias; así mismo, consideró profesionistas y por lo tanto sujetos a las leyes de profesiones a los sacerdotes; facultó las legislaturas de los estados para determinar el número de ministros de los cultos; prohibió actos de culto a los extranjeros; prohibió a los sacerdotes criticar leyes y autoridades negándoles el derecho de voto activo y pasivo y asociarse con fines políticos; se exigió permiso de gobernación para abrir locales al culto; prohibió el otorgamiento de validez a los estudios en los seminarios y publicaciones con tendencias religiosas sobre actos de autoridades; prohibió a las agrupaciones políticas utilizar nombres o palabras que se relacionen con alguna profesión religiosa; prohibió heredar a los sacerdotes de personas que no sean sus parientes dentro del cuarto grado, disponiendo que los procesos por infracción a las anteriores bases nunca serán vistos en jurado. El artículo fue aprobado por unanimidad de votos.

---

<sup>119</sup> Texto Original del artículo 27 constitucional. Fracción II y III.

<sup>120</sup> DE LA MADRID HURTADO, Miguel. "El Congreso constituyente de 1916-1917", en *Derechos del pueblo mexicano*, México, Cámara de Diputados, 1967, p. 614

Así las cosas y sólo en relación a los artículos objeto de nuestra investigación, quedó definitivamente aprobada nuestra *Carta Magna* bajo el nombre de *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* promulgada el 5 de febrero de 1917 y que entró en vigor el 1º de mayo substituyendo a la del 5 de febrero de 1857.

La Constitución de 1917 asumió una actitud no solamente antirreligiosa o anticlerical, sino además violatoria de los más elementales derechos humanos en la materia. Siguiendo lo señalado por José Luís Soberanes<sup>121</sup> se puede preguntar ¿cuál es la explicación de esa actitud del constituyente mexicano de 1917? Hay una doble explicación, dice el jurista: *durante la dictadura de Díaz, volvieron a aparecer los católicos en la escena política del país, ahora ya no como conservadores, sino con una orientación política y social y crean, el Partido Católico Nacional a fines de la dictadura, por lo tanto, fue una reacción de los liberales*. Otra explicación es la creación de pequeños pero numerosos y activos clubes políticos que surgieron en la república, integrados por viejos liberales, protestantes y masones en abierto rechazo a lo católico, surgiendo de aquí revolucionarios y diputados constituyentes que le dan ese peculiar toque a la Constitución de 1917 que estableció el principio de supremacía del Estado sobre las Iglesias.

---

<sup>121</sup> SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís. *El Derecho de Libertad...*, op. cit., p. 36-37



## 1.12 INTOLERANCIA RELIGIOSA POST-REVOLUCIONARIA

Es importante para el objeto de nuestro estudio conocer los eventos que tienen que ver con el fenómeno religioso y que en algunas partes del país perturbaron la vida ordinaria de sus habitantes, porque atentaron contra su forma de ser, con motivo de su intolerancia hacia las distintas formas de creencias. Después del triunfo de la revolución aparecen dos eventos realizados por dos generales *caudillos* como fueron los sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.

- *Álvaro Obregón*<sup>122</sup>

Con Álvaro Obregón las relaciones con la Iglesia fueron de tensa conciliación. Tuvo sus altibajos. Como cuando felicitó al Papa Pío XI en 1922 y en privado insistía en complementar el programa revolucionario, o como cuando expulsó del país al delegado apostólico Filippi, cuando éste acudió al cerro del Cubilete a consagrar a Cristo Rey en 1923, con motivo de haberse celebrado el Congreso Eucarístico Nacional, aplicándole el artículo 33 Constitucional.<sup>123</sup> La Iglesia se hallaba muy lejos de resignarse a los artículos 3 y 130 de la Constitución y algunos Obispos combatían la entrega de tierras o la sindicalización obrera secular.<sup>124</sup>

En 1924 se consignaron a varias personas y fueron cesados los empleados públicos que habían participado en el Congreso Eucarístico. Hubo varios actos de tendencias antieclesiástica, como la bomba que un empleado de Obregón hizo

---

<sup>122</sup> Presidente de la República en el período de 1º de diciembre de 1920 – 30 de noviembre de 1924

<sup>123</sup> “Artículo 33. (...) el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente (...)”.

<sup>124</sup> KRAUZE, Enrique. *Biografía del poder, el vértigo de la victoria, Álvaro Obregón*, Fondo de Cultura Económica, Quinta reimpresión, 1997, México, p. 95

estallar en el altar de la virgen de Guadalupe y las bombas que atentaron contra los Arzobispados de México y Guadalajara.<sup>125</sup>

El 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón fue asesinado en el restaurante de la ciudad de México llamado *la bombilla* por José de León Toral.<sup>126</sup>

• **Plutarco Elías Calles**<sup>127</sup>

Con Plutarco Elías Calles se intentó la aplicación estricta de la ley antirreligiosa. El 21 de febrero de 1925 con auspicio de la CROM<sup>128</sup> se creó la *Iglesia Católica Apostólica Mexicana*.<sup>129</sup> El propósito era crear una Iglesia mexicana al margen de la de Roma. El mayor conflicto entre la Iglesia y el Estado seguía siendo el artículo 3º y 130. La Iglesia no admitió, ni olvidó los actos que en contra suya y de sus símbolos fueron perpetrados durante la revolución. La tensión creció entre la Iglesia y el Estado, a grado tal que una mujer apellidada *Jáuregui* atentó contra la vida del presidente Calles.

En 1926 se dio el rompimiento con motivo de las declaraciones del Arzobispo Mora y del Río, contrarias a los artículos 3º, 5º, 27 y 130 de la Constitución. Calles señalaba: *no estoy dispuesto a tolerarlo*.<sup>130</sup> Ordenó a los gobernadores la inmediata reglamentación del artículo 130, lo que provocó la clausura de

---

<sup>125</sup> ALVEAR ACEVEDO, Carlos. *Historia de México...*, p. 30

<sup>126</sup> Se aduce que tuvieron que ver cuestiones religiosas en el asesinato.

<sup>127</sup> Fue Secretario de Gobernación durante el periodo presidencial de Álvaro Obregón. “El Turco” (Así le llamaban a Álvaro Obregón pues se le atribuía un origen musulmán y que por sus venas corría sangre Siria), tomó posesión el 1º de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. En enero de 1925 funda la Comisión Nacional Bancaria. En el mismo año pero el 1º de septiembre funda el Banco de México y el 1º de febrero de 1926 fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola. El 16 de marzo de 1926 expide la Ley de escuelas centrales agrícolas y bancos agrícolas ejidales.

<sup>128</sup> Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos (Sindicato)

<sup>129</sup> Mexicana, “no Romana”.

<sup>130</sup> KRAUZE, Enrique. *Biografía del poder, /7 Reformar desde el origen, Plutarco Elías Calles*, 3ª. reimpresión, Fondo de Cultura Económica, 1992, México, p. 69

escuelas, expulsión de sacerdotes extranjeros, motines, manifestaciones, choques. Se llegó a extremos patéticos cuando el general Eulogio Ortiz fusiló a un soldado por descubrirle en el cuello un escapulario.<sup>131</sup>

El presidente Calles acusó al clero de tener una actitud antipatriótica y lo relacionó con la política amenazadora de Washington. Perdiendo toda la moderación actuó con extremo rigor, vio en la resistencia a la ley *sólo viejas beatas y curas sediciosos*.<sup>132</sup> El Vaticano aconsejó moderación. Los Obispos en carta pastoral dirigida a Calles solicitaron las reformas del artículo 3° y 130. Como respuesta Calles señala: *Quiero que entienda Usted (Obispo Mora y del Río) de una vez por todas, que la agitación que provoca no será capaz de variar el firme propósito del Gobierno Federal (...) no hay otro camino (...) que someterse a (...) la ley*.<sup>133</sup> El 2 de julio Calles reformó el Código Penal<sup>134</sup> incluyendo en él delitos relativos a la enseñanza confesional y cultos, volvía obligatoria la inscripción oficial de los sacerdotes para que pudieran ejercer su ministerio.<sup>135</sup>

Contra las medidas extremas del gobierno, los católicos crearon la *Liga Nacional de Defensa Religiosa* y como respuesta inmediata organizaron un *boicot* económico en varios estados. Los Obispos emitieron una pastoral colectiva que anunciaba la suspensión del culto a partir de la entrada en vigor de

<sup>131</sup> *Ibidem*, pp. 52 - 69

<sup>132</sup> Informe del diplomático francés Lagarde a su Gobierno, en: Krauze, Enrique. *Bibliografía del poder...* *op. cit.*, p. 69

<sup>133</sup> *Ibidem*, p. 70

<sup>134</sup> El Código Penal de 2 de julio de 1926, en el artículo 1° establecía: "Para ejercer dentro del territorio de la República Mexicana el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento.

El infractor de esta prevención será castigado administrativamente con multa hasta de quinientos pesos, o en su defecto con arresto que nunca excederá de quince días. Además, el Ejecutivo Federal, si así lo juzga conveniente, podrá expulsar desde luego al sacerdote o ministro extranjero infractor", usando para ello la facultad que le concede el artículo 33 constitucional.

En el artículo 2°: "Para los efectos penales se reputa que una persona ejerce el ministerio de un culto, cuando ejecuta actos religiosos o ministra sacramentos propios del culto a que pertenece, o públicamente pronuncia prédicas doctrinales, o en la misma forma hacer labor de proselitismo religioso".

<sup>135</sup> KRAUZE, Enrique. Biografía del poder, *Reformar desde el origen... Plutarco E. Calles*, *op. cit.*, p. 70

la *Ley Calles*. El embajador norteamericano Sheffield informó a su Secretario de Estado, Kellog, lo siguiente:

*El Presidente se ha vuelto tan violento sobre la cuestión religiosa, que ha perdido el dominio de sí mismo. Cuando se ha tratado el asunto en su presencia, su rostro se ha encendido y ha golpeado la mesa para expresar su odio y hostilidad profunda a la práctica religiosa.*

El conflicto iba en escalada. Calles declaraba: *la hora se aproxima en el cual se va a librar la batalla definitiva; vamos a saber si la revolución ha vencido a la reacción o si el triunfo de la revolución ha sido efímero*. Calles creía en una lucha entre la idea religiosa y la idea laica, entre la reacción y el progreso. El 31 de julio era el último día de cultos, los fieles se *arremolinaron* en las iglesias en toda la república. Después de las pláticas entre el Estado y la Iglesia sin lograr acuerdos, sólo quedó la aplicación de la ley. Calles señaló que la ley no reconocía ninguna jerarquía y él no podía tolerar nada y que sólo quedaban dos caminos: ajustarse a la ley o lanzarse a una lucha armada.<sup>136</sup>

El 18 de enero de 1927 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución,<sup>137</sup> determinando entre otras cosas la competencia federal para regular las disciplinas de las iglesias; que

---

<sup>136</sup> *Ibidem*, pp. 70-76

<sup>137</sup> El 18 de enero de 1927 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del artículo 130, entre sus disposiciones destacaban: “Artículo 1. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa”; “Artículo 2. El matrimonio como un contrato civil”; “Artículo 5. No reconocimiento de personalidad jurídica a las Iglesias”; “Artículo 6. Las asociaciones religiosas denominadas Iglesias, no tiene capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos”; “Artículo 7. Los Ministros de Culto serán considerados como personas que ejercen una profesión”; “Artículo 8. Condición para ejercer en México el ministerio de cualquier culto: ser mexicano por nacimiento”; “Artículo 9. Permiso de Gobernación para abrir un local destinado al culto”; “Artículo 14. En el interior de los templos podrán recaudarse donativos en objetos muebles. De los donativos muebles que no sean dinero, se dará aviso a la Secretaría de Gobernación en el Distrito Federal o a los Gobernadores de los Estados”; “Artículo 17. Prohibición de las agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relaciones con algún credo religioso”; “Artículo 18. Incapacidad para que los ministros de culto puedan heredar”.

las iglesias no tenían personalidad jurídica y que los ministros de culto se clasificaban como profesionales; las legislaturas de los estados determinaban el número máximo de ministros de culto; y que para ser ministro se requería ser mexicano por nacimiento; no se podía abrir lugares al culto sin permiso del gobierno federal; los ministros de culto quedaron incapacitados para recibir herencias y donaciones, etcétera. El 22 de febrero de 1926 la Secretaría de Educación Pública reglamentó el artículo 3º.<sup>138</sup>

La Iglesia había agotado las instancias pero faltaba la reacción popular. Un sector de campesinos en el occidente de México se levantó en armas, la *causa*, como ellos mismos decían, era clara: luchaban por la apertura de cultos, luchaban por defender la religión. Así nacieron *los cristeros* y su guerra. La guerra se prolongó tres años. Practicaban una guerra de guerrillas. En junio de 1929 tuvieron un arreglo con Roma, había cerca de 50 mil cristeros en armas, otros 25 mil habían muerto en combate. La guerra costaría a México un total de 70 mil vidas y una caída fulminante de la producción agrícola (38% entre 1926 y 1930) y la emigración de 200 mil personas. Fue una guerra sangrienta, el mayor sacrificio humano colectivo en toda la historia de México.<sup>139</sup>

En marzo de 1927 Calles empezó a ceder, liberó a varios militares y toleró el culto en casas particulares. Para 1929 los cultos permanecían cerrados. Era la disputa centenaria entre el poder espiritual y el secular. Señala Jean Meyer, *la Iglesia y el Estado exigen el monopolio del carisma (...) la guerra tenía que ser total porque ambos pretenden el domino universal*. Calles abordó el problema religioso porque tenía el convencimiento de que la religión católica era la fuente

---

<sup>138</sup> Señalando entre otras cosas, que las escuelas no podrían tener un calificativo que indique naturaleza religiosa, que las escuelas particulares no deben tener sala, oratorio o capilla destinadas a servicios de culto, ni decoraciones, pinturas, estampas, esculturas y objetos de intensión o naturaleza religiosa, ni tener comunicación con templos, oratorios, capillas destinadas a cultos religiosos

<sup>139</sup> KRAUZE, Enrique. *Biografía del poder, /7 Reformar desde el origen, Plutarco Elías Calles...*, op. cit., p. 77

principal de atraso en el pueblo mexicano, conocía documentos que involucraba a sacerdotes del seminario conciliar en *cuitas* amorosas. Para Calles, como para muchos revolucionarios, estas actitudes eran la prueba definitiva del envilecimiento histórico del pueblo y por estos motivos quiso extirpar la fe católica de México.<sup>140</sup>

La Cristiada no fue una guerra civil religiosa entre medio México secular y medio México católico. Fue un gigantesco error histórico, infligido por el fanatismo racional de un Presidente (...) sobre las dos mitades de un pueblo al cual los propios frailes del siglo XVI consideraban *religiosísimo*.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> MEYER, Jean. “Historia de la revolución mexicana, Historia y sociedad con Calles”, 1924-1928, el Colegio de México, *La Cristiada*, Volumen 11, México, 1973, 3 Tomos, Siglo XXI editores, 1973-1974. p. 272

<sup>141</sup> Periódico Reforma, KRAUZE, Enrique. *Problemas y no Problemas*, 31 de diciembre de 1995. Citado por GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico Mexicano...*, *op. cit.*, p. 85

## **CAPÍTULO II**

---

---

### **EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO Y SU PROYECCIÓN INTERNACIONAL**

## **CAPÍTULO II**

### **EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO Y SU PROYECCIÓN INTERNACIONAL**

#### **2.1 CUESTIONES PREVIAS**

Hablar de libertad religiosa es hablar de un derecho humano. La convicción religiosa es para el ser humano una cuestión esencial que condiciona su existencia. La libertad religiosa es un derecho indispensable y por lo tanto fundamental.

El derecho a la libertad religiosa se considera como una inmunidad de coacción, de tal manera que a nadie se le impida vivir de acuerdo con su conciencia y a nadie se le obliga a vivir en contra de ella. Efraín Gonzáles Morfín<sup>142</sup> cita a Courtney Murria quien señala que “hay una noción más amplia que la de la libertad religiosa, que es la libertad de profesar convicciones fundamentales”. Sin embargo, en los textos internacionales sobre la libertad religiosa, se utiliza el término derecho de libertad religiosa y no el de convicciones fundamentales.

La libertad religiosa abarca al creyente y al no creyente, al que tiene religión y al que dice no tenerla.<sup>143</sup> Es una realidad evidente que al menos las personas asumen una postura siempre en relación a un ser supremo. Las puede reconducir a cuatro grupos:

1. Aquéllos que creen en la existencia de un ser supremo.

---

<sup>142</sup> GONZÁLEZ MORFIN, Efraín. *Algunas consecuencias prácticas de las reformas a los artículos constitucionales 3, 5, 24, 27 y 130 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en la Iglesia Católica en el nuevo marco jurídico de México*, Ediciones de la C.E.M; México, 1992, p. 304

<sup>143</sup> *Idem*.



2. Aquéllos que afirman la inexistencia de ese ser supremo.
3. Aquéllos que consideran que se trata de un problema irresoluble.
4. Aquéllos que renuncian a plantearse el problema.<sup>144</sup>

Las facultades que comprende el derecho de libertad religiosa supone las garantías jurídicas de un ámbito de inmunidad para practicar el acto de fe y cumplir con todos los deberes que ese acto lleve aparejado para ser completo y coherente. Pueden considerarse los siguientes puntos:<sup>145</sup>

- **Libertad de conciencia:** comprende el derecho a profesar o no la creencia religiosa que libremente se elija; derecho a cambiar o abandonar la confesión. La libertad de conciencia constituye el núcleo esencial de derecho de libertad religiosa.
- **Libertad de culto:** el conjunto de actos y ceremonias con los que el hombre tributa homenaje al ser supremo o a personas o cosas tenidas por sagradas en su religión.
- **Libertad de difusión de los credos, ideas y opiniones religiosas:** es la exteriorización de las ideas y opiniones.
- **Derecho a la formación religiosa de los miembros de la confesión:** es el derecho de tener centros de enseñanza religiosa.
- **Libertad de enseñanza y derecho a la educación religiosa:** es el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa en cualquier centro educativo.

---

<sup>144</sup> IBÁN C., Iván. *Lecciones de Derecho Eclesiástico*, Editorial Tecnos, S.A., 2da. Reimpresión, 2da. edición, Madrid, 1990, citado por GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico...*, *op. cit.*, p. 98

<sup>145</sup> PRIETO SANCHÍS, Luís. “El Derecho Fundamental de Libertad Religiosa”, en: *Lecciones de Derecho Eclesiástico*, 2da. edición, Editorial Tecnos, S.A., 1990, p. 146

- **Derecho de reunión y manifestación.**
- **Derecho de asociación:** toda persona tiene derecho a fundar asociaciones de carácter religioso.
- **Objeción de conciencia:** es el incumplimiento de una obligación legal, de naturaleza personal, cuya realización produciría en el individuo una lesión grave de la propia conciencia o de las creencias profesadas. No es un incumplimiento de la norma legal porque sí, sino que existen razones, causas que tienen que ver con las convicciones.

La jurisprudencia<sup>146</sup> española ha sentado el criterio de que el derecho a la libertad ideológica y religiosa consagrada en el artículo 16 de la constitución vigente implica el derecho de objeción de conciencia. Yo diría que la objeción de conciencia es una lucha de la moral individual contra el derecho, un alto al derecho en nombre de la moral.

## 2.2 CONCEPTO DE RELIGIÓN

No es posible hablar de *religión* ni de *religiones* sin un concepto básico de religión. Por eso conviene empezar por su definición. Resulta muy difícil dar una definición exacta de algo, tanto o más de religión. La religión es una realidad y concepto complejo.<sup>147</sup> La definición variará según se acentúe uno u otro elemento.

---

<sup>146</sup> El Tribunal Supremo ha señalado en sentencia: “(...) puesto que la libertad de conciencia en una concreción de la libertad ideológica que nuestra Constitución reconoce en su artículo 16, puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español”. ÁLVAREZ CORTINA, Andres Corsino. *El Derecho Eclesiástico español en la Jurisprudencia Postconstitucional, 1978-1990*, Editorial Tecnos, S.A, Madrid, 1991, p. 56

<sup>147</sup> GUERRA GÓMEZ, Manuel. *Historia de las religiones*, Sapientia Fidei, Serie de Manuales de Teología, Biblioteca de autores cristianos, 2da. reimpresión, Madrid, 2002. p. 24

Cuatro han sido los étimos señalados para ésta palabra latina.<sup>148</sup>

1. *Religare*, <<religar, atar>>, expresivo de la vinculación del hombre con dios. Es la propuesta por Lactancio, s. III-IV d.C. (*vivinae institutiones* 4, 28);
2. *Religere (re-eligere)*, <<volver a elegir>> a dios de quien el hombre se había separado por el pecado: S. Agustín, s. IV-V d.C. (*Retractaciones* 1,13,9; *Ciudad de Dios* 10, 3, 2);
3. *Relinquere*, en cuanto <<lo religioso, lo sagrado>>, “se deja como alejado, separado de nosotros”, los hombres comunes, de su uso profano (Servio Sulpicio en Macrobio, s. IV d. C., *Saturnalia* 3, 3, 8). Masurio Sabino propone lo mismo, al mismo tiempo que aconseja entrar en los templos, lugares religiosos por excelencia con pureza y conforme al ceremonial, no al modo profano (AVL. Gelivs, *Noctes Atticae* 4,9, s. II d.C.);
4. *Relegere*<sup>149</sup> <<leer con atención, observar escrupulosamente>>: Cicerón, s. II-I a.C. (*De natura deorum* 2, 28, 72).

En sentido estricto<sup>150</sup> es el conjunto de creencias, celebraciones y normas ético-morales por medio de las cuales el ser intelectual reconoce, en clave simbólica, su vinculación con lo divino en la doble vertiente a saber, la subjetiva y la objetiva o exteriorizada mediante diversas formas sociales e individuales.

**Religión**<sup>151</sup> creencia en lo sobrenatural; en un principio y en un final de la vida ajeno al hombre; en una justicia suprema y

<sup>148</sup> *Idem.*

<sup>149</sup> Téngase en cuenta que el prefijo *re-* puede tener valor intensivo (aquí, bueno/rebueno, etc.), también imperativo (definición de San Agustín pedir/repetir tras haber pedido otra vez y que en latín, vocal breve inicial, al pasar a media, suele convertirse en <<*i*>>: *fateor* > *con-fiteor*, *profiteor*; *medius* > *di-midius*, etc.

<sup>150</sup> GUERRA GÓMEZ, Manuel. *Historia de las religiones... op. cit.*, pp. 25-38

<sup>151</sup> SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. *Asociaciones Religiosas... op. cit.*, p. 1

*definitiva, sin error posible. Profesión de una doctrina religiosa. Práctica de su culto. La obligación de conciencia. Fiel cumplimiento de deber. Orden o comunidad religiosa. Desempeño de una profesión o actividad con el más extremado de los celos y la convicción de su trascendencia cual sacerdote de su culto.*

Para la Real Academia Española es el *conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, y de prácticas rituales para darle culto*".<sup>152</sup>

## 2.3 CONCEPTO DE LIBERTAD RELIGIOSA

*¿Qué es la libertad religiosa?* Hasta ahora los estudiosos no han encontrado ninguna definición aceptable, más bien, han preferido describir su contenido que conceptuarlo. En lo que sí están todos de acuerdo es que se debe hacer un esfuerzo por no confundir el derecho de libertad religiosa con otras tres libertades religiosas: **la psicológica**, para escoger un credo; **la moral**, para actuar conforme a la propia conciencia, libre y formada en lo relativo a la fe; y **la espiritual**, para actuar conforme a las íntimas convicciones en la materia.<sup>153</sup>

En tal virtud, el contenido del derecho fundamental de libertad religiosa se trata de:

1. Un derecho humano, por lo tanto es universal, anterior y superior al Estado.
2. Su fundamento es la dignidad de la persona. Por ello, se debe garantizar la inmunidad de cualquier coacción.

---

<sup>152</sup> *Diccionario de la Lengua Española*. Editorial Océano, edición Mexicana, 1990

<sup>153</sup> SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís. *El Derecho de Libertad Religiosa... op. cit.*, p. 45

3. Implica un derecho de asociación y una libertad de expresión con fines religiosos en tanto no afecten derechos de terceros, el orden público, la salud pública y la moral.
4. De que no se permita discriminación por motivos religiosos y se garantice la igualdad de todos.
5. En virtud de tal derecho se debe reconocer la posibilidad de tener, no tener o cambiar de religión, profesarla en público o en privado, celebrar ritos, recibir instrucción religiosa y asistencia espiritual de sus ministros.<sup>154</sup>

Para José Luís Soberanes<sup>155</sup> la libertad religiosa es *que el Estado garantice a todos sus ciudadanos la posibilidad de escoger y adherirse a los principios religiosos que deseen, a llevar a cabo todos los actos externos que dichos principios exigen, asociarse con otros para realizar tales conductas y a obtener las facilidades para todo ello.*

Javier Saldaña Serrano dice que la libertad religiosa en su sentido filosófico, significa un “sistema de ideas” o de convicciones u opiniones que el espíritu humano posee permitiéndole liberarse de todo preconcepto dogmático y de toda traba de carácter confesional.<sup>156</sup> En esta acepción se entremezclan los rasgos esenciales que caracterizan la libertad de pensamiento como la acepción filosófica que se refiere al espíritu humano, atendiendo al ámbito interno del hombre, a su espacio más íntimo. Aquí es donde se encuentra la libertad religiosa y, en general, las libertades públicas.

---

<sup>154</sup> *Ibidem*, pp. 46-47

<sup>155</sup> *Ibidem*, p. 43

<sup>156</sup> SALDAÑA SERRANO, Javier. *Derecho Eclesiástico Mexicano*, Enciclopedia jurídica mexicana, anuario 2005, Editorial Porrúa y UNAM, México 2005, p. 743

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis jurisprudencial<sup>157</sup> LXI dictada por la primera sala en materia constitucional ha señalado que la libertad religiosa tiene una vertiente interna que atiende a la capacidad de los individuos para desarrollarse y de actuar de conformidad con una particular visión del mundo en la que se relaciona el hombre con lo divino; y una vertiente externa que se refiere a que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo desde luego siempre que no constituyan un delito.

## 2.4 ESTADO E IGLESIA EN MÉXICO

No obstante que ya hemos hecho referencia en el capítulo que antecede a las relaciones Iglesia-Estado, señalaremos algunas características importantes a través de los últimos siglos de la historia. En la época colonial las relaciones Iglesia-Estado estuvieron reguladas por las *bulas papales* conocidas también como *bulas alejandrinas*, mediante las cuales el orden papal cedía a la monarquía española la soberanía sobre las tierras descubiertas y por descubrir, garantizado el dominio de los reyes de Castilla sobre sus colonias.

---

<sup>157</sup> LIBERTAD RELIGIOSA Y LIBERTAD DE CULTO. SUS DIFERENCIAS. La libertad religiosa tutelada por el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene una vertiente interna que atiende a la capacidad de los individuos para desarrollarse y actuar de conformidad con una particular visión del mundo en la que quede definida la relación del hombre con lo divino; y una vertiente externa a la que alude particularmente dicho precepto constitucional al establecer que "todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley."(...) Amparo en revisión 1595/2006. Stephen Orla Searfoss. 29 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl Manuel Mejía Garza. Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 25 febrero de 2007, Página: 654, Tesis: 1ª, LXI/2007, Materia Constitucional.

Los alcances del *Patronato Indiano* han sido estudiados recientemente por Alberto de la Hera<sup>158</sup>, quien señala que el *Patronato Indiano* contempla tres tipos de facultades: las patronales, las extrapatronales y las abusivas del Patronato.<sup>159</sup>

El siglo XVIII, con los Borbones, es el siglo regalista. El regalismo se deriva no de una concesión pontificia sino del derecho natural que le correspondía al soberano como tal por voluntad directa de dios.<sup>160</sup> El México independiente, como era de esperarse, comenzó a reclamar la titularidad del *Patronato* como heredero de los derechos de la corona española, cosa que la Santa Sede no estaba dispuesta a admitir.<sup>161</sup> Decir que la Iglesia fue enemiga de la independencia es insostenible. Hubo de todo. Lo cierto es que el clero participó activamente, no sólo en el movimiento de independencia, sino inclusive algunos eclesiásticos cumplieron funciones políticas,<sup>162</sup> tal como lo señala F. Escalante.

Se pueden señalar tres momentos en la actitud del Estado frente a la Iglesia en el siglo pasado:

1º: un regalismo herencia directa de la colonia;

---

<sup>158</sup> DE LA HERA, Alberto. *Iglesia y Corona en la América Española*, Madrid, Editorial Mafret, 1992, pp. 188-193

<sup>159</sup> **Las patronales:** la presentación de candidatos para los oficios eclesiásticos, percepción de diezmos, fijación de límites de las Diócesis, control de las facultades de los superiores religiosos, intervención en los conflictos entre los obispos y las órdenes, así como poderes cuasiepiscopales donde no hubiera jerarquía eclesiásticas.

**Las extrapatronales:** La Corona se atribuyó las actuaciones de los Tribunales civiles en el fuero eclesiástico, extrañamiento de clérigos, intervención de las rentas de vacantes y expolios, y en sedes vacantes los Cabildos eclesiásticos nombraran vicarios a las personas que la autoridad civil señalara, vigilancia de las predicaciones, limitaciones al derecho de asilo, prohibición de regresar a España a los clérigos, limitar las visitas de los Obispos a la Santa Sede y control de las informaciones por parte de los preladados americanos.

**Las abusivas del Patronato:** la prohibición de la lectura de la “bula incoenadomini”, “el pase regio”, “recurso de fuerza” (es decir, la posibilidad de realizar y en su caso rectificar o ratificar las decisiones de las autoridades eclesiásticas, por parte de los tribunales estatales), el control de los concilios provinciales y sínodos diocesanos y el rechazo de un nuncio para las Indias. Todo ello va derivar en el siglo XVII en la figura del “regio vicariato indiano”, antesala del regalismo dieciochesco.

<sup>160</sup> SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís. *El Derecho de Libertad Religiosa... op. cit.*, p. 17-24

<sup>161</sup> *Ibidem*, p. 26

<sup>162</sup> ESCALANTE, F. *Ciudadanos imaginarios*, México, El colegio de México, 1992, p. 155

2º: un deísmo<sup>163</sup> racionalista, y;

3º: la etapa científicista y positivista, que es la última parta del porfiriato.<sup>164</sup>

Sin embargo, por más que se diga, después de la Constitución de 1917, no hubo una actitud antirreligiosa sino hasta que asumió el poder el general Plutarco Elías Calles, quien motivó la guerra cristera de 1926 a 1929, terminando con los *arreglos*<sup>165</sup> entre la Iglesia y el Estado.

Con Manuel Ávila Camacho<sup>166</sup> las relaciones Iglesia-Estado fueron de amplia tolerancia religiosa. Con Luís Echeverría Álvarez<sup>167</sup> las relaciones se hicieron públicas, pues visitó a Pablo VI en el Vaticano. José López Portillo<sup>168</sup> autoriza y recibe en la residencia oficial del gobierno al Papa Juan Pablo II. Ante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid<sup>169</sup> la Iglesia insistió en la modificación de los artículos constitucionales en materia religiosa, alegando la violación de los derechos humanos sin eficacia alguna. No es hasta que Carlos Salinas de Gortari<sup>170</sup> se planteó en su programa de gobierno la modernización de la vida nacional, anunciando el 1º de diciembre de 1988 que se modernizaría la relación del Estado con las Iglesias, planteando la reforma constitucional en materia religiosa, señalando los límites: a) educación pública laica; b) no intervención del clero en asuntos políticos; c) la imposibilidad de acumulación de bienes en manos de Iglesias o agrupaciones religiosas.<sup>171</sup> Dicha propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados por una gran mayoría, salvo los diputados

---

<sup>163</sup> Doctrina que reconoce un Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo.

<sup>164</sup> MEYER, Jean. *Historia de los Cristianos en América Latina, Siglos IX y XX*, México, Vuelta 1989, pp. 14-20

<sup>165</sup> Consistían en que las disposiciones jurídicas antirreligiosas no se derogaban pero tampoco se aplicaban.

<sup>166</sup> Presidente Constitucional de México periodo 1940-1946

<sup>167</sup> Presidente Constitucional de México periodo 1970-1976

<sup>168</sup> Presidente Constitucional de México periodo 1976-1982

<sup>169</sup> Presidente Constitucional de México periodo 1982-1988

<sup>170</sup> Presidente Constitucional de México periodo 1988-1994

<sup>171</sup> MEYER, Jean. *Historia de los Cristianos en América Latina... op. cit.*, pp. 38-40



del Partido Popular Socialista. El 28 de enero de 1992 se publicó la reforma a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución Federal.

## **2.5 LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO**

La libertad religiosa en el ordenamiento jurídico mexicano se encuentra en los artículos que motivaron las reformas constitucionales en 1992, pero sobre todo en el artículo 1º y 24 de la Constitución. Veamos:

Artículo 1º tercer párrafo: *Queda prohibida toda discriminación motivada por (...) la religión, las opiniones, las preferencias, (...) o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.*

La adición de este párrafo fue producto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001 que establece la no discriminación por motivos religiosos, coincidiendo con lo que se encuentra previsto en los tratados internacionales suscritos por México en esta materia.

El artículo 24 se ha reformado y adicionado una sola vez, el 28 de enero de 1992.

*Artículo 24.- Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.*

*El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.*

*Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.*<sup>172</sup>

El artículo fue reformado en su segundo párrafo y se adicionó el último. Ahora las ceremonias del culto religioso podrán celebrarse fuera de los templos, sujetándose a las leyes reglamentarias. Se elimina que los templos deberán estar bajo la vigilancia de la autoridad. Se adiciona que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Este añadido se encontraba en el artículo 130 de la norma constitucional. Este artículo establece el principio de libertad religiosa y señala que *todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias siempre que no sean un delito.*

El principio de libertad religiosa se desarrolla en la *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*<sup>173</sup> concretamente en los artículos 2º,<sup>174</sup> 3º<sup>175</sup> y 25,<sup>176</sup>

---

<sup>172</sup> Texto actual de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 1917 (Vigente)

<sup>173</sup> Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 15 de julio de 1992.

<sup>174</sup> “Artículo 2º.- El Estado Mexicano garantiza en favor del individuo, los siguientes derechos y libertades en materia religiosa:

a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia.

b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa.

c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas.

No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en éste y los demás ordenamientos aplicables.

d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, Iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso.

e) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas; y,

f) Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos”.

donde señalan los derechos y libertades en materia religiosa como: tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar en forma individual o colectiva los actos de culto o ritos de su preferencia, no ser objeto de discriminación por causa de sus creencias religiosas, asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos, la laicidad del Estado y que las autoridades no intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas, ente otros.

Así las cosas, la libertad religiosa en el derecho positivo mexicano se encuentra en las reformas del 92 a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución, así como en la ley reglamentaria denominada *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público* de fecha 15 de julio de 1992 y el reglamento de ésta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2003 en relación con los instrumentos internacionales en la materia. Por supuesto, sin lograrlo aún, como se podrá observar en el transcurso de esta investigación.

## 2.6 TUTELA Y PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO

La tutela y promoción del derecho de libertad religiosa en México, como ya se ha señalado, se encuentra en las reformas constitucionales de 1992 a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la *Carta Magna* y las leyes reglamentarias de dichos artículos, así como en todas y cada una de las declaraciones, convenios y tratados internacionales reconocidos y suscritos por México en el ámbito internacional y

---

<sup>175</sup> “Artículo 3º.- El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna Iglesia ni agrupación religiosa. Los documentos oficiales de identificación no contendrán mención sobre las creencias religiosas del individuo”.

<sup>176</sup> “Artículo 25.- (...) Las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas.

Las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares. En los casos de prácticas diplomáticas, se limitarán al cumplimiento de la misión que tengan encomendada (...)”.

que desde luego forman parte de nuestro orden jurídico interno. Estos documentos son los que tutelan y promocionan la libertad religiosa en el país, amén de las disposiciones administrativas dictadas por la Secretaría de Gobernación por conducto de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, la Dirección General de Asociaciones Religiosas, así como las tesis y jurisprudencias dictadas por los tribunales mexicanos.

## **2.7 LÍMITES A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO**

*“...el carácter limitado de los derechos es hoy una evidencia que no admite contestación alguna”.*

*FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO.<sup>177</sup>*

El tema de los límites a los derechos fundamentales no es de fácil comprensión, toda vez que para entenderlos se requiere conocer el sistema cultural de cada país dado que existe una diversidad de significaciones de los derechos fundamentales determinados por su contexto cultural. Por lo tanto, es difícil hablar de límites de aplicación universal.

Si existen límites al ordenamiento jurídico por su propia naturaleza es lógico que existan límites al derecho, aún a los derechos fundamentales. Así pues, el individuo no puede decidir de modo absoluto sobre su actuación ignorando que su condición social implica obligaciones con los intereses comunes y derechos de los demás.<sup>178</sup> La libertad ilimitada en sí misma no es humana. Es un abuso ético. Por lo tanto, los límites son verdaderamente constitutivos, positivos de la libertad

---

<sup>177</sup> FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. *La Dogmática de los Derechos Humanos*, Ediciones Jurídicas, Lima, 1994, p. 100.

<sup>178</sup> SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Juan José. *Los Límites de los Derechos y el Sistema Normativo*, Derecho Privado y Constitución, Núm. 17. Enero-Diciembre, 2003. pp. 450, 451.

integral de la libertad civil.<sup>179</sup> Esto es así porque los derechos del hombre se ejercen en sociedad, y en la sociedad no sólo el que suscribe tiene derechos, los tienen también los otros individuos y sociedades.

Como todos los derechos, también el Derecho de Libertad Religiosa tiene sus límites. Esto no quiere decir que el derecho se menoscabe o se cercene, sino que señala hasta dónde llega este derecho y dónde termina. Por lo tanto, se impone la necesidad de que todo derecho tenga normas rectoras que señalen los límites de los propios derechos y hacer posible así la vida social.

La Ley Suprema ha adoptado con toda conciencia una limitación de los Derechos Fundamentales, Por lo tanto, rechaza un abuso de los derechos.<sup>180</sup> En el caso de México, la norma constitucional expresa como limitaciones de la libertad religiosa todo aquello que constituya un delito o falta penado por la ley.<sup>181</sup> También limita la celebración de los actos de culto público fuera de los templos,<sup>182</sup> la capacidad para adquirir bienes,<sup>183</sup> la formación de agrupaciones políticas, el proselitismo a favor o en contra de partido o candidato alguno, así como la incapacidad para heredar tanto a las asociaciones religiosas como a sus ministros de culto.<sup>184</sup>

---

<sup>179</sup> VELA, Luis. *Análisis Filosófico en Vaticano II, La Libertad Religiosa*, Madrid, Razón y Fe, 1966, p. 359

<sup>180</sup> ROVIRA VIÑAS, Antonio. *El Abuso de los Derechos Fundamentales*, Península, Madrid, 1983, p.174.

<sup>181</sup> “Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade (...) siempre que no constituyan un delito o falta penados por la Ley”.

<sup>182</sup> *Ibidem.*, “Los actos (...) de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos (...) lo que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”.

<sup>183</sup> “Artículo 27. Fracción II. Las Asociaciones Religiosas (...) tendrán capacidad para adquirir (...) los bienes (...) que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley Reglamentaria”.

<sup>184</sup> “Artículo 130. Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna (...) Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas (...) **Los ministros de cultos (...) serán incapaces para heredar por testamento (...)**”.

Sin embargo, no son los únicos limitantes, lo son también aquellos que resulten de la justificación de la protección de otros derechos. También la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento señalan límites a la libertad religiosa, entre otros, el hecho de no tener acceso a los medios de comunicación.

La Iglesia Católica en la *Declaración Conciliar Dignitatis Humanae del Vaticano II sobre la Libertad Religiosa*, reconoce en sus números 1, 3 y 6 la existencia de estas justificadas limitaciones.<sup>185</sup>

Los textos internacionales señalan también los límites de la libertad religiosa: *Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales*,<sup>186</sup> *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*,<sup>187</sup> *Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José*,<sup>188</sup> *Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o en las Convicciones*<sup>189</sup> la *Carta Árabe de Derechos Humanos*.<sup>190</sup>

---

<sup>185</sup> *Concilio Vaticano II, Constituciones, decretos, declaraciones*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, MXMLXV, pp. 681 a 683 y 687 y 688.

<sup>186</sup> “Artículo 9. 2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no pueden ser objeto de más restricciones que las previstas por la ley (...) para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás”.

<sup>187</sup> “Artículo 18. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”.

<sup>188</sup> “Artículo 12. 1. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 2. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás”. El Artículo 27 no autoriza la suspensión de garantías en materia de libertad de religión.

<sup>189</sup> “Artículo 1. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás”.

<sup>190</sup> “Artículo 27. Los adeptos de cada religión tienen derecho a practicar sus ritos religiosos (...) sin perjuicio de lo dispuesto en la derechos de los demás”.

Algunos de los límites aquí expresados los veremos con oportunidad en el desarrollo de nuestra investigación en los temas correspondientes.

## 2.8 LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN MÉXICO

El pluralismo religioso es una realidad evidente y permanente. Ha habido, hay y habrá no una, sino muchas religiones. Este hecho hunde sus raíces en las limitaciones del hombre para acceder a la cima infinita de lo divino.<sup>191</sup>

“El pluralismo religioso, la multiplicidad de religiones y de nuevos movimientos religiosos (*sectas*) muestra a su modo que lo religioso es connatural al ser humano. El hombre es un ser en relación (...) que busca la verdad (...) y que vive de creencias.”<sup>192</sup>

La historia de las religiones es una ciencia positiva. Por ello no le compete demostrar la verdad ni el grado de error de una religión determinada, sino mostrar el abanico polícromo de las creencias religiosas de las mujeres y de los hombres de las diferentes épocas y regiones.

El pluralismo religioso ha sido puesto en actualidad por distintos factores:<sup>193</sup> ***sociales, culturales, religiosos, sociopolíticos, y el trato personal.*** No puede silenciarse la voz, las enseñanzas y la personalidad de los fundadores de las religiones. Todas las actuales deben su existencia a la personalidad de su fundador: Jesucristo/Cristianismo, Mahoma/Islamismo, Confucio/Confucianismo, Jina/Jinismo, Lao-zi/Taoismo, Buda/Budismo,

---

<sup>191</sup> GUERRA, GÓMEZ, Manuel. *Historia de las religiones... op. cit.*, Prólogo

<sup>192</sup> Juan Pablo II. *Encíclica*. La fe y la Razón, N. 21, 28 y 31 (14-9-1998)

<sup>193</sup> Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). “*La diversidad religiosa en México, XII Censo General de Población y Vivienda*” 2000, p. 49

Zoroastro/Zaraoastrismo. Lo mismo puede decirse de los innumerables nuevos movimientos religiosos o *sectas*.

El pluralismo religioso plantea tres cuestiones básicas, a saber: el diálogo interreligioso, el valor de las religiones en sí mismas y su verdad o su condición verdadera.

### • **CATÓLICA**

La población católica en el país es evidentemente mayoritaria, se encuentra en toda la república. En el centro residen 35 de cada 100 católicos.

En el centro-occidente se ubica 23.4%, en el sur-sureste residen 21% y en el noreste residen 13.5%. La zona con la menor densidad de población es el noroeste del país donde reside el 7.5% de personas con religión católica.<sup>194</sup> La presencia femenina representa el 51.7%. De los 5.6 millones de católicos sin instrucción 3.3 millones son mujeres.

Uno de cada 10 católicos no tiene instrucción, cuatro tienen educación básica incompleta, dos nivel básico, otros dos algún grado aprobado en bachillerato y la persona restante tiene algún grado de educación superior. El promedio de escolaridad es 7.5 años, registrando las mujeres medio año menos que los hombres.

Del 100% de la población católica, el 37.1% son solteros, 31.2% están casados al civil y religiosamente, el 11.3% casados al civil y 10.1% en unión

---

<sup>194</sup> *Ibidem*, p. 27



libre, 4.4% son viudos, 2.6% se encuentran separados, 2.2% casados religiosamente y 1.0 divorciados.<sup>195</sup>

En lo relativo a los ingresos de la población católica económicamente activa se observa que el mayor porcentaje de población (48.4%) recibe más de 1 y menos de 3 salarios mínimos. También destaca que una cuarta parte gana tres o más salarios mínimos.<sup>196</sup>

**Población católica y su porcentaje<sup>197</sup>**

	1895	1900	1910	1921	1930	1940	1950	1960	1970	1990	2000 <sup>198</sup>
<b>Volumen Millones</b>	12.6	13.5	15.0	13.9	16.2	19.0	25.3	33.7	46.4	63.3	74.6
<b>Población Católica</b>	99.1%	99.5%	99.2%	97.1%	97.7%	96.6%	98.5%	96.5%	96.2%	89.7%	88.0%

## • **PROTESTANTE**

Se le denomina protestantismo a una corriente del cristianismo; se agrupan en esta categoría las Iglesias cercanas a la reforma religiosa del siglo XVI, movimiento que provocó la separación entre la Iglesia Católica y las iglesias reformadas. Actualmente, algunas iglesias de esta corriente tienen importante presencia en México.

En el país la presencia de sociedades protestantes está reportada desde el siglo XIX. El Censo del 2000 registró casi 600 mil personas, las principales corresponden a la Iglesia Presbiteriana y a la Bautista.

**La Iglesia Presbiteriana:** es la más numerosa en esta corriente, su presencia en el país data desde hace más de 70 años.

<sup>195</sup> *Ibidem*, pp. 29-32

<sup>196</sup> *Ibidem*, p. 34

<sup>197</sup> *Ibidem*, p. 5

<sup>198</sup> El universo de estudio es la población de 5 y más años.

**La Iglesia Bautista:** estima su feligresía en más de 50 millones de personas en el mundo. En México, hasta el último censo, había registradas ante la Secretaría de Gobernación más de 800 asociaciones religiosas.

**La Iglesia Metodista:** de gran influencia en los Estados Unidos; registró en México en censo de 1895 un total de 7 personas. En la actualidad son casi 30 mil metodistas.

Otra sociedad importante declarada por casi 28 mil personas es la Iglesia del Nazareno.

**La Doctrina Menonita:** es profesada por comunidades autónomas emigrantes que recibieron asilo en la década de los años 20 del siglo anterior. Históricamente los casi 11 mil menonitas se han concentrado en la zona norte del país, particularmente en Chihuahua, Zacatecas y Durango. También destaca su presencia en Campeche.

**Otras denominaciones protestantes históricas** que se incluyen: anabautistas, anglicanos, calvinistas, congregacionalistas, cuáqueros, discípulos de Cristo, ejército de salvación, episcopalianos y luteranos. Alrededor de once mil personas declararon profesar alguna de estas creencias.<sup>199</sup>

En la región sur-sureste reside el 66.9% de los protestantes históricos del país.<sup>200</sup> Entre los protestantes predomina la población joven, 60% tienen menos de 30 años, 20% entre 30 y 44 años y menos de 20% rebasa los 45 años de edad. Predomina la presencia femenina con 53.7 por ciento.

---

<sup>199</sup> Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), *“La diversidad religiosa... op. cit., pp. 16-17*

<sup>200</sup> *Ibidem*, p. 35

El promedio de estudios es de 6.7 años; es inferior al de la población católica (7.5 años). La Iglesia Presbiteriana tiene la mayor presencia indígena, 40% de sus feligreses hablan una lengua autóctona.

De acuerdo con el estado conyugal, el 36.6% son solteros, el 21.3% son casados al civil y religiosamente, el 24.3% están casados civilmente, 9.6% viven en unión libre, 4.0% son viudos, 2.0% se han separado, el 1.1% están casados religiosamente y el 0.8% se ha divorciado<sup>201</sup>.

Sus ingresos son de la siguiente manera: el 20.2% no recibe ingresos, el 23.2% hasta 1 SM, 31.8% más de 1 hasta menos de 3 SM, 10.5% de 3 hasta 5 SM y 10.2 más de 5 SM.<sup>202</sup> Es uno de los porcentajes más altos de población que no percibe ingresos por su trabajo o que recibe hasta un salario mínimo.

### Principales Iglesias

Censo 2000	Total	Presbiteriana	Bautista	Metodista	Del Nazareno	Menonita	Otras
Estados Unidos Mexicanos	599 875	323 758	196 587	29 455	27 994	10 872	11 209

### • POBLACIÓN PENTECOSTAL

Hasta el año 2000 en México existían 1, 442 637 integrantes de la religión Pentecostal. Más de la mitad de la población pentecostal reside en el sur-sureste del país. En el centro de la república reside el 17.9%, en el noreste se ubica el 11.9%, en el centro-occidente el 8.4%.<sup>203</sup>

<sup>201</sup> *Ibidem* pp. 38-40

<sup>202</sup> *Ibidem*, p. 42

<sup>203</sup> *Ibidem*, p. 43

6 de cada 10 personas son menores de 30 años, 2 tienen entre 30 y 44 años, uno entre 45 y 59, y la persona restante es mayor de 60 años. La presencia femenina representa 54.3%.

En lo educativo el 15% de los pentecostales son analfabetos. La población pentecostal tiene un gran rezago educativo. El porcentaje de población sin instrucción o con educación básica incompleta es elevado (69.2%). Tienen cursados seis años en promedio: el 16.2% sin instrucción, el 53.0% con educación básica incompleta, el 15.6% con educación básica completa, el 10.3% con media superior y el 4.2% con superior.

Por cada 10 pentecostales, 2 hablan alguna lengua indígena y de estos últimos 2 de cada 10 son monolingües.

En lo que se refiere al estado conyugal el 34.7% son solteros, el 21.5% están casados al civil y religiosamente, el 24.9% está casado civilmente, el 10.0% vive en unión libre, 4.4% de viudos, el 2.7% se ha separado, el 1.0% está casado religiosamente y el 0.6% se ha divorciado.<sup>204</sup>

En cuanto a los ingresos el porcentaje mayor se presenta entre quienes perciben de uno a tres salarios mínimos, con casi 43%, el 38.9% no recibe ingresos o sólo percibe un salario mínimo mensual, el 16.3% no recibe ingresos, el 22.6% hasta 1 SM, el 42.7% más de 1 hasta menos de 3 SM, el 9.0% de 3 hasta 5 SM y el 5.4% más de 5 SM.<sup>205</sup>

---

<sup>204</sup> *Ibidem*, pp. 45-48

<sup>205</sup> *Ibidem*, p. 50

## • **POBLACIÓN EVANGÉLICA**

El evangelismo es una corriente que agrupa distintas iglesias que comparten líneas doctrinarias pero que se diferencian tanto en su organización como en la forma en que expresan el culto. El 47.9% son hombres y 52.1% mujeres. Tienen casi cuatro millones de personas, de las cuales el 36% explicitó ser pentecostales, el 2% pertenecer a la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo y 62% dio una respuesta genérica (evangélico). Sus niveles socioeconómicos son más elevados que los pentecostales.

Casi 2.4 millones se encuentran en el Estado de México, en el Distrito Federal y Nuevo León. En estas iglesias la población de 5 a 29 años constituye el 61%. En la composición por sexo predomina la población femenina con 54.2 %.<sup>206</sup>

El porcentaje de alfabetismo de la población evangélica es superior al del país: hombres el 95.2%, mujeres el 91.4%. Lo anterior puede deberse al hecho de que estas iglesias le conceden gran importancia a la lectura de la Biblia, por ello han emprendido entre sus adeptos una campaña permanente de alfabetización, otro factor que puede influir es su ubicación urbana.

Se registraron 110 795 profesionistas evangélicos, los cuales representan 9.4% de la población con más de 25 años, porcentaje superior al registrado en el país. Cabe destacar que los profesionistas evangélicos representan el 3% del total de profesionistas del país.

El grado promedio de escolaridad (casi 8 años) es ligeramente mayor que el del conjunto de la población del país. De acuerdo con el sexo los hombres tienen un nivel de instrucción superior al de las mujeres.

---

<sup>206</sup> *Ibidem*, pp. 18-19

Con respecto al estado civil: el 36.4% son solteros, el 26.6% están casados al civil y religiosamente, el 19.6% están casados civilmente, el 7.8% vive en unión libre, el 4.4% son viudos, el 2.9% se ha separado, el 0.8% están casados religiosamente y el 1.3% se ha divorciado.<sup>207</sup>

En la distribución del nivel salarial se registró una situación semejante a la de la población total del país, el 7.0% de los trabajadores con esta religión no recibe ingresos.<sup>208</sup>

### • ***POBLACIÓN ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA***

La población adventista del séptimo día es un total de 488, 945 de los cuales 224, 198 son hombres y 264, 747 mujeres. El 80% reside en el sur-sureste del país; en el centro 8.8%, en el noroeste más de 6 mil son adventistas. La región que alberga el menor volumen de esta iglesia es la entro occidente,<sup>209</sup> y predomina la presencia de las mujeres con 54.1 %.

El porcentaje de alfabetismo de la población adventista es de los más bajos entre las religiones analizadas. En el nivel de instrucción el 17.1% no tienen instrucción, 52.0% tiene básica incompleta, el 13.3% básica completa, el 10.7% media superior y 6.1% superior. Se identificaron 10 927 profesionistas con esta religión, lo que significa que 4.8% de la población es de 25 y más años de edad.

En lo concerniente al estado civil el 35.9% son solteros, el 13.0% están casados al civil y religiosamente, el 35.4% están casados civilmente, el 7.4% vive en unión libre, el 4.3% son viudos, el 2.5% se ha separado, el 0.7% está

---

<sup>207</sup> *Ibidem*, pp. 53-56

<sup>208</sup> *Ibidem*, p. 58

<sup>209</sup> *Ibidem*, p. 59

casado religiosamente y el 0.6% se ha divorciado. Es el porcentaje más alto de casados civilmente. Otra diferencia es que unión libre y divorcio es menor entre los adventistas.

La mitad de ellos no recibe ingresos o sólo alcanza un salario mínimo mensual, el 21.7% no recibe ingresos, el 27.8% hasta 1 SM, el 32.4% más de 1 hasta menos de 3 SM, el 8.0% de 3 hasta 5 SM y el 6.0% más de 5 SM.<sup>210</sup>

- ***MORMONES***

La población mormona es de 205.229, de ellos 94.132 son hombres y 111.097 mujeres. El Estado de México tiene el mayor número de mormones y después el Distrito Federal. El 59.1% es menor de 29 años y el 34.5% tiene entre 30 y 59 años. El 6.4% tiene 60 y más años. Las mujeres representan 54.1 %.

El más alto nivel de alfabetismo se observa entre los mormones; el 98.3% son hombres y 96.6% mujeres. El alto nivel de alfabetización está influenciado tanto por el adoctrinamiento basado en la lectura de una serie de textos como por la importancia que esta iglesia le otorga a la lectura entre niños y jóvenes.

Casi uno de cada dos mormones tiene instrucción media superior o superior. Se registraron 13 967 profesionistas mormones que representan el 13.4% de la población de 25 y más años siendo superior al del país. El grado promedio de escolaridad es 9.5 años, esto significa que supera por dos grados al conjunto de la población nacional.

---

<sup>210</sup> *Ibidem*, p. 66

El estado conyugal registra porcentajes extremos, el 40.0% son solteros, el 25.9% están casados al civil y religiosamente, el 20.3% está casado civilmente, el 4.3% vive en unión libre, 3.7% son viudos, el 3.2% se ha separado, el 0.5% está casado religiosamente y el 1.9% se ha divorciado (tienen el mayor porcentaje de población soltera, separada y divorciada).<sup>211</sup>

La posición económica de los mormones en general es la mejor entre las de todas las religiones revisadas, probablemente influye el alto nivel de escolaridad y la ubicación de esta población en zonas urbanas.<sup>212</sup> El 3.8% de los trabajadores no reciben ingresos.

#### • ***TESTIGOS DE JEHOVÁ***

Los testigos de Jehová en el país son 1, 057.736, de los cuales 448.423 son hombres y 609.313 mujeres. En la región sur-sureste reside más de 32%, resalta Veracruz de Ignacio de la Llave donde más de 100 mil personas declararon esta religión. En el centro del país otro 30% y en el Estado de México cerca de 135 mil personas.<sup>213</sup> Predominan las mujeres pues representan casi 58%.

La importancia que esta iglesia otorga a la lectura de la Biblia y el tipo de predicación, apoyados en publicaciones particulares, se manifiesta en un alto porcentaje de alfabetismo, el cual es mayor que el registrado en el país, tanto para hombres 96.3 % como para mujeres 93.1%.

En lo que se refiere a estado conyugal, el 37.7% son solteros, el 13.6% están casados al civil y religiosamente, el 34.7% está casado civilmente, el 5.0% vive

---

<sup>211</sup> *Ibidem*, pp. 69-72

<sup>212</sup> *Ibidem*, p. 74

<sup>213</sup> *Ibidem*, p. 75



en unión libre, el 4.4% son viudos, el 2.9% están separados, el 0.4% está casado religiosamente y 1.0% está divorciado.<sup>214</sup>

En cuanto a sus ingresos, el 8.4% de los trabajadores no recibe ingresos, el 17.0% hasta 1 SM, 50.3% más de 1 hasta menos de 3 SM, 12.5% de 3 hasta 5 SM y 7.1% más de 5 SM. La mitad de los testigos de Jehová ocupados recibe una percepción monetaria que oscila entre uno y tres salarios mínimos mensuales, la cuarta parte sólo percibe un salario mínimo o no recibe ingresos, mientras que la quinta parte tiene ingresos de 3 o más salarios mínimos.<sup>215</sup>

## • ***POBLACIÓN JUDAICA***

El judaísmo es considerado una de las cinco religiones más difundidas en el ámbito mundial. En México su presencia se registra desde el primer censo de población. Aunque es una minoría el número de personas que la profesan, actualmente existen 45 mil personas que declararon ser judíos, el 40% reside en el Distrito Federal y 31% en el estado de México, mientras que en el centro reside poco más de 10%.<sup>216</sup>

La población judaica registró la población más envejecida, el 46.8% es menor de 30 años, el 39.2% tiene entre 30 y 60 años, y el 14% es mayor de 60 años. Hay un equilibrio entre hombres y mujeres en todos los grupos de edad.

El alfabetismo entre los judaicos es semejante al de los Mormones, Budistas e Islámicos, el 98.4% es hombre y el 96.1% mujeres, entre los hombres y las mujeres hay una diferencia favorable a los primeros. Registran el más alto nivel

---

<sup>214</sup> *Ibidem*, pp. 77-80

<sup>215</sup> *Ibidem*, p. 82

<sup>216</sup> *Ibidem*, p. 83

de instrucción en el país, el 3.2% no tienen instrucción, los adeptos de esta religión han cursado en promedio 11 años de estudio, los hombres reportan 12 y las mujeres 11 grados. Se identificaron 8 345 profesionistas judaicos que representan 29.9% de la población mayor de 25 años, este porcentaje triplica el dato de 8.8% registrado en el país.

En cuanto al estado civil, el 31.3% son solteros, el 43.8% está casado al civil y religiosamente, el 10.3% está casados civilmente, el 3.5% vive en unión libre, el 5.3% son viudos, el 1.6% está separado, el 0.9% está casado religiosamente y el 3.1% se ha divorciado.<sup>217</sup>

El nivel salarial es superior al conjunto de los ocupados del país, los cuales son menos de la décima parte, en tanto que, por ejemplo, entre los católicos, este dato es el doble. Asimismo, quienes reciben más de 5 salarios son el 40% mientras que en los católicos este dato es de 12 por ciento.<sup>218</sup>

## • **BUDISTAS**

De las 5 346 personas que declararon tener esta religión, cerca de 2 000, el 36%, residen en el Distrito Federal y el 16.8% se ubica en otras entidades cercanas, por lo que más de la mitad vive en la región centro. Aunque esta religión se registró en todos los estados, en 20 de ellos el número de fieles es menor de 100.<sup>219</sup> Hay un predominio masculino, pues representa el 53.2%.

---

<sup>217</sup> *Ibidem*, pp. 85-88

<sup>218</sup> *Ibidem*, p. 90

<sup>219</sup> *Ibidem*, p. 91

El analfabetismo entre los budistas es insignificante, de las 4 754 personas de 15 y más años con esta religión solamente 43 no saben leer ni escribir, se trata de 19 hombres y 24 mujeres (99.2% hombre y 98.9% mujeres).

El nivel académico de los budistas es el más alto que se registra en el país, 8 por cada 10 personas de esta religión tienen educación media superior o educación superior. El grado promedio de escolaridad es de 13 años, casi el doble del que registra el país en su conjunto. De los 4 016 budistas mayores de 25 años 1 712 son profesionistas, esto representa el 42.6%, valor cinco veces más alto que el porcentaje de profesionistas en el país.

En cuanto al estado civil el 33.9% son solteros, el 24.3% están casados al civil y religiosamente, el 20.7% está casado civilmente, el 7.7% vive en unión libre, el 3.6% son viudos, el 2.9% están separados, el 1.3% está casado religiosamente y el 4.9% son divorciados. La tercera parte de la población budista es soltera, más de la mitad está unida y más de la décima parte ha disuelto su unión. Registran el mayor porcentaje de población divorciada, con una diferencia más amplia en el caso de la población femenina.<sup>220</sup>

La población budista ocupada según sus ingresos es: por cada 100 ocupados 7 no reciben ingreso o reciben hasta un salario mensual, 37 perciben de 1 a 5 salarios y 45 exceden los 5 salarios, esta distribución es diferente a la del país que registra 21 personas sin ingreso o con un rango menor de un salario, 62 con 1 a 5 salarios y 12 con más de 5 salarios.<sup>221</sup>

---

<sup>220</sup> *Ibidem*, pp. 93-96

<sup>221</sup> *Ibidem*, p. 98

- **ISLÁMICOS**

En México su presencia es una minoría inferior a 1 500 personas. En el Distrito Federal reside la tercera parte de estos creyentes, con un predominio de población masculina, siendo 929 hombres y 492 mujeres.

El porcentaje de población alfabeta es muy alto, el 99.3 % son hombres y 94.4% mujeres; de 1 263 personas de 15 y más años, sólo 29 son analfabetas, de éstas 6 son hombres y 23 mujeres. Tienen un promedio de escolaridad de 13.1 años, lo cual indica que sobrepasan el bachillerato; en el país, como ya se ha señalado, es de 7.5 años.

Hay 474 profesionistas con esta doctrina, lo cual significa que el 46% de los islámicos de 25 y más años de edad tienen esta formación. Este porcentaje de profesionistas es cinco veces mayor al que se registra en el país.

Con respecto al estado civil el 32.4% son solteros, el 27.9% están casados al civil y religiosamente, el 21.6% casados civilmente, 6.8% unión libre, 2.6% viudos, 1.9% separados, el 2.8% está casado religiosamente y el 3.2% se ha divorciado.<sup>222</sup>

El nivel salarial es alto, 3.2% de los trabajadores no reciben ingresos, por cada 100 personas 7 no reciben un pago o éste no sobrepasa un salario mínimo, 14 perciben entre 1 y 3 salarios, 16 personas están en el rango de 3 a 5 salarios y 52 personas, reciben más de 5 salarios mínimos.<sup>223</sup>

---

<sup>222</sup> *Ibidem*, pp. 101-104

<sup>223</sup> *Ibidem*, p. 106

- ***SIN RELIGIÓN***

Existe también un importante volumen de población que no profesa una creencia religiosa y que progresivamente ha incrementado su presencia en las últimas tres décadas (1970-2000). De acuerdo con el análisis de las cifras y según la opinión de algunos especialistas, la categoría “sin religión” puede incluir también a población que oculta su filiación religiosa, cuando ésta es rechazada por la población mayoritaria de su entorno o si hay implícito un conflicto con posibles referentes religiosos.

El crecimiento que ha experimentado la población sin religión a lo largo del siglo obedece a un ritmo mucho más dinámico que el de la población católica, pues en promedio anualmente los que no reconocen religión tuvieron un crecimiento de 5.2%, mientras que el de la población católica fue de 1.7 por ciento.<sup>224</sup>

Cerca de la mitad de la población sin religión reside en el sur-sureste del país. En Chiapas, por ejemplo, hay casi 430 mil personas sin religión, lo que representa el 13% de la población de la entidad, en Veracruz son 364 mil y se representa 6% en otros estados de esta zona, como Campeche y Quintana Roo.<sup>225</sup>

La estructura de quienes declararon no tener una religión corresponde a una población joven, predominan los hombres, los cuales representan casi 59 por ciento. Cabe destacar que del total de la población sin religión 21.1% son hombres de 15 a 29 años.

---

<sup>224</sup> *Ibidem*, pp. 9-10

<sup>225</sup> *Ibidem*, p. 123

El grado promedio de escolaridad es de 7 años, el cual resulta más bajo que el de la población católica. Se identificaron casi 145 000 profesionistas, volumen equivalente a 10% de la población sin religión de 25 y más años.

En México 346 mil personas hablantes de lengua indígena declararon no tener religión, por cada 100 personas sin religión 12 hablan alguna lengua indígena.

En cuanto al estado civil el 38.1% son solteros, el 10.1% están casados al civil y religiosamente, el 24.5% están casados civilmente, el 19.1% vive en unión libre, el 2.7% son viudos, el 3.2% están separados, el 0.8% están casados religiosamente y 1.2% están divorciados.<sup>226</sup>

Con respecto a los ingresos de la población que trabaja y se reconoce sin religión sobresalen tres grupos, el porcentaje más alto corresponde a quienes reciben de uno a tres salarios mínimos, con 45 por cada 100 trabajadores; con valores semejantes se encuentran los extremos, es decir, los que perciben más de tres salarios mínimos y los que sólo reciben hasta un salario o no reciben ingresos por su trabajo.<sup>227</sup>

## • **OTRAS RELIGIONES**

### **“Otras religiones” según principales Iglesias, 2000**

#### **Principales Iglesias**

	<b>Espiritualismo</b>	<b>Nativismo</b>	<b>Otras</b>
Estados Unidos Mexicanos	60 657	1 487	192 282

<sup>226</sup> *Ibidem*, pp. 125-128

<sup>227</sup> *Ibidem*, p. 130

- **Espiritualista**

**El Espiritualismo** es una corriente que se destaca cuantitativamente. La doctrina espiritualista puede describirse como un movimiento religioso de carácter sincrético que se encuentra arraigada en los israelitas regenerados o israelitas espirituales; el grupo más importante es el de los *Trinitarios Marianos*.

Más de 60 mil personas practican el espiritualismo, más de la mitad de esta población reside en el centro del país; Distrito Federal y Estado de México, que concentran a más de 24 500 personas (40%); otro volumen importante se registró en Puebla e Hidalgo.<sup>228</sup> Se trata de una población más vieja que la población nacional. Esta creencia registra uno de los mayores porcentajes de población de 60 y más años. Predomina la población masculina.

El porcentaje de alfabetismo entre los espiritualistas es ligeramente más alto que el del país en su conjunto, 95.2% son hombres y 89.6% mujeres. El promedio de escolaridad es de 8.4 años, lo cual significa que en promedio los practicantes de esta religión tienen cursado el segundo año de secundaria, el 14% es profesionista, porcentaje cinco puntos mayor que el del país; en total se registraron 5 063 personas con este nivel. Poco más de 500 espiritualistas no hablan español.

En cuanto al estado conyugal se refiere, el 37.5% son solteros, el 20.1% están casados al civil y religiosamente, el 17.5% están casados civilmente, el 12.1% viven en unión libre, el 5.7% son viudos, el 3.8% están separados, el 1.1% están casados religiosamente y 1.9% son divorciados.<sup>229</sup>

---

<sup>228</sup> *Ibidem*, p. 115

<sup>229</sup> *Ibidem*, pp. 119-120

El nivel salarial de la población espiritualista que trabaja es muy similar al del total de la población trabajadora del país, el 8.0% de los trabajadores no recibe ingresos, el 11.4% hasta 1 SM, 43.2% más de 1 hasta menos de 3 SM, 14.9% de 3 hasta 5 SM y 16.8% más de 5 SM.<sup>230</sup>

- ***Nativistas***

Los **Nativistas** o **Movimientos de mexicanidad** son un grupo que por primera vez se registra y que está estrechamente ligado con la población indígena de Jalisco y Nayarit, se registran cerca de 1 500 casos, 82% en estas entidades.

Fue registrada como nativista la población que declaró tener algún culto tribal, nativo o de mexicanidad (mezcla entre catolicismo y culto a deidades de la naturaleza); destaca la respuesta de *chamanismo* entre la población indígena.<sup>231</sup> La población que declaró creencia nativa tiene la estructura más joven. Se ubican principalmente en comunidades rurales y tienen alta proporción de población que habla una lengua indígena y es monolingüe.

El nivel de instrucción de los nativistas es muy bajo, el 36.5% no tiene instrucción, el 42.1% tiene básica incompleta, el 7.8% básica completa, el 6.9% media superior y 6.1% superior. En total fueron registrados 29 profesionistas. De los casi 1 500 nativistas cerca de 1 250 declararon hablar lengua indígena.

En cuanto al estado civil el 32.4% son solteros, el 4.7% están casados al civil y religiosamente, el 5.5% se encuentran casados civilmente, el 47.9% vive en unión libre, el 4.8% son viudos, el 2.5% están separados, el 0.7% están casados

---

<sup>230</sup> *Ibidem*, p. 122

<sup>231</sup> *Ibidem*, p. 107



religiosamente y el 1.0% son divorciados. El estado predominante entre los nativistas es la unión libre.

El nivel salarial muestra grandes carencias: 40 de cada 100 ocupados no reciben ingresos por su trabajo. Este comportamiento probablemente se debe a la alta participación de la población hablante de lengua indígena en unidades económicas de autoconsumo o en trabajo comunal, 34 de cada 100 percibe de 1 a 3 salarios, mientras 13.4% recibe más de 3 salarios mínimos.<sup>232</sup>

➤ En el último censo también fueron declaradas creencias y disciplinas que en grandes líneas se pueden sintetizar así:

- **Hinduismo** religión oficial de la India con 700 personas.
- El **Sintoísmo** religión principal del Japón con 200 personas.
- El **Taoísmo** religión tradicional de China que cuenta con 100 registros.
- **Hare Krishna**, 400 personas.
- **Jainismo**, 100 personas.
- **Bahaísmo**, 600 personas.
- **Nueva era**<sup>233</sup> con mil registros.
- **Cienciología** con 300 casos.
- Con menos de 100 registros puede mencionarse la meditación trascendental, **ágora, instituto arica y la teosofía**.
- **Sociedades ocultistas:** consideran varias líneas ligadas a la astronomía, la magia y el satanismo, fueron registrados cerca de 700 casos.
- **Movimientos de contacto angélico o extraterrestre:** con una frecuencia menor de 100 **Raeliano** y la misión **Rahma**.
- La **masonería** fue declarada como creencia religiosa por cerca de 1 500 personas.

---

<sup>232</sup> *Ibidem*, p. 114

<sup>233</sup> Movimientos espirituales de origen esotérico y del potencial humano, se caracterizan por aspirar a un equilibrio físico, mental y espiritual mediante preceptos filosóficos.

## 2.9 SECTAS RELIGIOSAS

Ni el secularismo, el laicismo, la crisis institucional, la increencia, ni el neopaganismo han logrado asfixiar el sentido religioso. Así lo muestra la proliferación de las *sectas*, indicio de la connaturalidad de lo religioso en el hombre.

La palabra *secta* procede de la latina *secta* del verbo *seco*, *secare*, que equivale a cortar. De acuerdo con su étimo *secta* es como la *rama desgajada o cortada de un árbol*.

Las *sectas* son una realidad proteica o muy cambiante, así lo indica la pluralidad de su denominación. Hablar de *sectas* sobretudo en los medios de comunicación suena como sinónimo de *destrutivo*. No se debe contribuir a convertir a una palabra en *tabú*, como ocurrió con *cristiano* en los primeros siglos de la Iglesia, cuando fue sinónimo de *reo de muerte*, sería lamentable que se repitiera la historia. Todo es posible, sobretudo cuando se escucha la petición de una legislación especial antisectas como si fuera *criminal* el hecho de pertenecer a una *secta*, al margen de las posibles acciones delictivas de los adeptos. El Estado puede y debe intervenir sólo cuando hay indicios fundado de ilegalidad en las acciones, no en las creencias, o sea, si puede demostrarse que una *secta* es “destruktiva”, “dañina”, “ilegal”. Por ejemplo, en las misas negras satánicas o en las misas de magia sexual. Después de *secta*, el nombre más generalizado es el de *nuevos movimientos religiosos*, que tiene un inconveniente connatural, pues el tiempo mismo se encarga de “envejecer” al nombre con el riesgo evidente de que quede inutilizable e inapropiado, pues ya no será “nuevo”.<sup>234</sup>

---

<sup>234</sup> GUERRA GÓMEZ, Manuel. *Historia de las Religiones... op. cit.*, pp. 360-361

No se puede hablar de algo sin saber qué es al menos de un modo genérico. Por lo tanto, debe preguntarse *¿qué es una secta?* Manuel Guerra Gómez<sup>235</sup> plantea la definición técnica:

*Una secta es un grupo autónomo, no cristiano, fanáticamente proselitista, exaltador del esfuerzo personal y expectante de un inminente cambio maravilloso, ya colectivo, (de la humanidad) ya individual (o del hombre) en una especie de súper hombre.*

La *secta* es un grupo. Evidentemente una o dos personas no forman una *secta*, se requiere de un grupo. Los adeptos viven sometidos a la dinámica grupal. Cada uno debe actuar según su conciencia aunque sea errónea.<sup>236</sup>

Las *sectas* no son una realidad sociológica, psicológica, médica, etcétera, aunque repercutan en la psicología, la salud o en la sociedad. Las *sectas* son un fenómeno religioso, su causa es básica y principalmente de índole religiosa. El hombre tiene necesidad de lo religioso que le es connatural. Si una sociedad se empeña en echar lo religioso por la puerta, lo religioso se infiltrará generalmente fragmentado por las rendijas del suelo. Las *sectas* pueden ser:<sup>237</sup>

**a) Religiosas:** las que merecen ser llamadas religión en sentido estricto.

**b) Sectas mágicas:** tratan de manipular a su antojo lo divino al servicio de sus deseos naturales: salud, poderío, dinero, placer. (El espiritismo, el ocultismo, el satanismo).

---

<sup>235</sup> *Ibidem*, p. 362

<sup>236</sup> *Idem*.

<sup>237</sup> *Ibidem*, pp. 364-366

c) **Sectas Ideológicas**: las encuadran en la categoría “ideología”. Son personas que han desterrado a dios del centro de sus vidas y en su lugar han entronizado un ídolo, (la masonería, las sociedades teosóficas, etcétera).

El problema estriba en dilucidar cuáles son las *sectas* o nuevos movimientos religiosos dignos de protección jurídica y cuáles no.<sup>238</sup> En primer término, para saber si la *secta* es digna de protección o no, debe de resolverse primero si cumple los extremos señalados por la ley, es decir, no debe ser el arbitrio de la autoridad el que prevalezca para su protección, sino el de la ley. En segundo lugar, no puede resolverse sólo observando su doctrina o estatutos sino sus acciones.

Algunos proponen que el Estado pueda prohibir y disolver las agrupaciones religiosas, ya sea que cuenten o no con personalidad jurídica y registro constitutivo, cuando sean ilícitas, es decir, cuando por sus fines sean contraria al orden público o a las buenas costumbres,<sup>239</sup> opinión que comparto en todos sus términos. En lo que no estoy de acuerdo es que prohíban y disuelvan aquéllas que se oponen al servicio militar obligatorio o las que prohíben la veneración de insignias patrias, pues quizás algunas de estas causas puedan ser motivo de “objeción de conciencia”.

---

<sup>238</sup> El 22 de mayo de 1984 el parlamento europeo emitió una resolución en torno a diversas violaciones de la ley cometidas por nuevas organizaciones que actúan bajo la cobertura de la Libertad Religiosa en: GONZÁLEZ DEL VALLE, José María. *Derecho Eclesiástico Español... op. cit.*, p. 234.

<sup>239</sup> SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. *La nueva legislación sobre libertad religiosa*, Editorial Porrúa, México, 1993, p. 10.

## 2.10 CONCEPTO INTERNACIONAL DE LIBERTAD RELIGIOSA

Los documentos internacionales tutelan el derecho del hombre sin adoptar posturas favorables o contrarias a las religiones en lo general o en lo particular.<sup>240</sup>

Reconocen implícitamente que la vida religiosa tiene dimensiones colectivas dignas de respeto y de tutela.<sup>241</sup>

El concepto internacional de libertad religiosa se desprende de lo que dicen los propios textos, desde la *Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre*,<sup>242</sup> hasta uno de los últimos documentos aprobados en esta materia, como la *Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones*<sup>243</sup> y que, a decir verdad, es el instrumento internacional más importante respecto al Derecho Fundamental de Libertad Religiosa en el mundo.

Al haber en el mundo un sin fin de religiones profundamente disímboles entre sí, resulta difícil elaborar un concepto de libertad religiosa aplicable en todo el mundo. Tampoco se puede dejar de considerar que el derecho de libertad religiosa se va manifestando en cada nación de acuerdo con sus necesidades sociales, con su bagaje histórico y cultural y, en general, con las demás características que le son propias; por ello, el derecho internacional no podrá descender a demasiados detalles en esta materia, pues únicamente se podrá referir a un mínimo indispensable.<sup>244</sup>

<sup>240</sup> LOMBARDÍA, Pedro y FORNÉS, Juan. “La libertad religiosa como derecho humano”, en *Derecho Eclesiástico del Estado Español*, Rafael Navarro-Valls (coord.), ediciones Universidad de Navarra, S.A., 3ª. edición, Pamplona, 1993, pp.67-68

<sup>241</sup> LERNER NATAN. “La declaración de las Naciones Unidas sobre tolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones”, *Jurídica, Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana*, No. 20, 1990-1991, México, p. 177.

<sup>242</sup> Aprobada por la novena conferencia interamericana, celebrada en Bogotá Colombia, entre el 30 de marzo y el 2 de mayo de 1948 (Obsérvese que ésta fue aprobada antes que la propia *Declaración Universal de los Derechos Humanos* que sucedió el 10 de diciembre de 1948, es decir, 7 meses antes).

<sup>243</sup> Expedida el 25 de noviembre de 1981

<sup>244</sup> SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís. *El Derecho de Libertad Religiosa... op. cit.*, p. 54

En el punto siguiente se verá cómo los documentos internacionales recogen el concepto de libertad religiosa, forjado a través de las distintas *declaraciones y pactos*. De manera que se pueda advertir, que algunos de ellos se pueden tomar en cuenta para elaborar un concepto de libertad religiosa acorde o con características que permitan aplicarse en las distintas partes del mundo.

## 2.11 LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

El proceso de internacionalización de los derechos humanos es un proceso ligado al reconocimiento de la subjetividad jurídica del individuo por el derecho internacional. Es necesario partir de la premisa de que cualquier atentado contra los derechos y libertades de la persona no es una *cuestión doméstica* de los estados, sino un problema de relevancia internacional.<sup>245</sup>

La internacionalización es una manifestación cultural –en lo filosófico, en lo político y en lo jurídico–. Las declaraciones, tratados, pactos o convenciones sobre derechos humanos merecen ser valorados como signo de la quiebra del voluntarismo jurídico. Dicha internacionalización da testimonio de que la comunidad internacional organizada ha asumido los derechos humanos como un contenido primordial del bien común internacional. El hombre se convirtió en un sujeto de derecho internacional. La normatividad de los derechos humanos ya no es exclusiva ni reservada de los estados.<sup>246</sup> El positivismo voluntarista ha quedado horadado. Quiérase o no, el positivismo va en retirada.

---

<sup>245</sup> PÉREZ LUÑO, Antonio E. *Los derechos fundamentales, Temas claves de la Constitución española*, 8va. edición, Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), reimpresión 2005, Madrid, p. 41

<sup>246</sup> BIDART CAMPOS, Germán J. *Teoría General de los Derechos Humanos*, UNAM, México, 1989, pp. 429-435

Veamos pues lo que señalan los documentos internacionales en lo referente al derecho humano de libertad religiosa:

- *Carta de las Naciones Unidas (1945)*<sup>247</sup>

**Artículo 1.-** Los propósitos de las Naciones Unidas son:

*(...) estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión (...)*<sup>248</sup>

- *Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Mayo 1948)*<sup>249</sup>

**Artículo III.** *Toda persona tiene el derecho de **profesar libremente una creencia religiosa** y de manifestarla y practicarla en público y en privado.*

- *Declaración Universal de los Derechos Humanos (Diciembre 1948)*<sup>250</sup>

**Artículo 18.** *Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y **de religión**; este derecho incluye la libertad de cambiar de **religión** o de creencia, así como la libertad de manifestar su **religión** o su creencia, individual y colectivamente tanto en público como en privado, por la enseñanza, la practica, el culto y la observancia.*<sup>251</sup>

---

<sup>247</sup> *Carta de las Naciones Unidas*, Adopción 26 de junio de 1945, San Francisco, EUA., entrada en vigor: 24 de octubre de 1945

<sup>248</sup> En términos similares se refieren los artículos 13, 55 y 76 de la *Carta de las Naciones Unidas*.

<sup>249</sup> Adopción: 2 de mayo de 1948, IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá Colombia.

<sup>250</sup> Proclamada por la Asamblea General de la ONU, resolución 227 A (III) Adopción 10 de diciembre de 1948

<sup>251</sup> En términos similares hacen referencia los artículos 2, 16 y 26 del mismo documento.

- *Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales (4 de noviembre de 1950).*<sup>252</sup> Su artículo 9 es similar al artículo 18 de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos* de diciembre de 1948.
- *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (diciembre 1966)*<sup>253</sup>. El **Artículo 18** de este pacto es idéntico al artículo 9 de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*.
- *Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José (Noviembre 1969).*<sup>254</sup> El Artículo 12 de este convenio contiene los mismos preceptos que los dos anteriores.
- *Carta Africana sobre Derechos Humanos de los Pueblos.*<sup>255</sup> El sistema africano de derechos humanos expidió el 27 e julio de 1981 la *Carta Africana sobre Derechos Humanos* de los pueblos conocida también como la *carta de Banjul* en la que se hace conciencia del deber de lograr la total liberación de África y se establecen principios fundamentales que permiten considerar, reafirmar y reconocer la necesidad de la unidad africana. En la primera parte de los derechos y deberes, Capítulo I “de los Derechos Humanos y de los pueblos” se **establece la libertad de conciencia**, de profesión y la libre **práctica de la religión, garantizando desde luego su ejercicio:**

---

<sup>252</sup> Aprobado 4 de noviembre de 1950, Roma, entrada en vigor 3 de septiembre de 1953

<sup>253</sup> 16 de diciembre 1966, Nueva York, EUA, Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 2.200. Entrada en vigor 23 de marzo de 1976

<sup>254</sup> 22 de noviembre de 1969, San José Costa Rica, en vigor 18 de julio de 1978

<sup>255</sup> Este documento fue aprobado el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya. También en su preámbulo desapareció la discriminación fundada en la religión. Tienen relaciones los artículos 2, 10, 11 y 27.



**“Artículo 8. La libertad de conciencia y profesión y la libre práctica de la religión estarán garantizadas. Nadie que respete la ley y el orden puede ser sometido a medidas que restrinjan el ejercicio de esas libertades.**

- ***Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o en las Convicciones (25 de Noviembre 1981).***<sup>256</sup>

Como ya lo hemos señalado, éste es el documento internacional más importante que regula la libertad religiosa, tal y como se puede observar en sus considerandos y los artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 7.

El Artículo 1 también contiene los mismos preceptos que el artículo 9 de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*.

- ***Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (ONU 18 de Diciembre 1992, Resolución 47/135)***

## **Artículo 1**

*1. Los Estados protegerán la existencia (...) religiosa (...) y fomentarán las condiciones para la promoción (...).*

## **Artículo 2**

*1. Las personas pertenecientes a minorías (...) **religiosas** (...) tendrán derecho (...), a profesar y practicar su propia **religión**, y a utilizar su propio idioma, en*

---

<sup>256</sup> Asamblea General, resolución 36/55 Adopción 25 de noviembre de 1981.

*privado y en público, libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo.*<sup>257</sup>

- ***Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará"***<sup>258</sup>.

**Artículo 4.-** *i) El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la Ley.*

- ***Carta Árabe de Derechos Humanos.***<sup>259</sup> **Artículo 26.-** *Toda persona tiene garantizado el derecho a la libertad de creencias, de pensamiento y de opinión.*

- ***Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.***<sup>260</sup>

## **Artículo X. Libertad espiritual y religiosa**

*1. Los pueblos indígenas tendrán Derecho a la libertad de conciencia, de religión y práctica espiritual, y de ejercerlas tanto en público como en privado.*

---

<sup>257</sup> También hacen referencia los considerandos y el Artículo 4 del mismo documento.

<sup>258</sup> Adoptada el 9 de junio de 1994, Belém Do Pará, Brasil.

<sup>259</sup> Aprobación: 15 de septiembre de 1994, adoptada por el Consejo de la Liga Árabe en su resolución 5437 (Sesión 102). Las naciones árabes el 15 de septiembre de 1994 adoptaron la Carta Árabe de Derechos humanos aprobada por el consejo de la liga árabe. Establecen los principios básicos y fundamentales reafirmando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos de las Naciones Unidas en Derechos Políticos y Civiles y Económicos Sociales y Culturales y la Declaración del Cairo en Derechos Humanos en el Islam adoptada el 5 de agosto de 1990 establece en la misma la libertad de creencias, pensamiento y opinión del mundo árabe. También hacen referencia el preámbulo y los artículos 2 y 37.

<sup>260</sup> Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero de 1997, también hacen referencia los artículos 14 y 15 del documento.

### **CAPÍTULO III**

---

## **LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1992 EN MATERIA RELIGIOSA Y LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO EN MÉXICO**

## CAPÍTULO III

### **LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1992 EN MATERIA RELIGIOSA Y LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO EN MÉXICO**

*“Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna”*

**BENITO JUÁREZ**

#### **3.1 CONSIDERACIONES GENERALES**

Hace 91 años que el constituyente de Querétaro plasmó la norma fundamental del pueblo mexicano. Como Norma Suprema de la nación concentra las aspiraciones de sucesivas generaciones por conformar un ambiente propicio para la vida de nuestra sociedad en armonía.<sup>261</sup> La Constitución nunca ha sido letra muerta, no podría ser estática e inmutable. Las numerosas adecuaciones que ha experimentado a lo largo de su existencia dan cuenta de las necesidades que la historia nos ha planteado.<sup>262</sup>

La norma fundamental se ha visto fortalecida mediante reformas y adiciones que garantizan su permanencia y supremacía, cobrando la vigencia y plenitud.<sup>263</sup> Ha tenido más de 500 reformas o adiciones. Sería de suma importancia preguntarnos *¿reformas para qué?* Las reformas o adiciones a cualquier constitución del mundo son necesarias. La sociedad no es estática e inmutable.

---

<sup>261</sup> *La Constitución del pueblo mexicano*, contraportada, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX legislatura, Miguel Ángel Porrúa, Librero-Editor, Tercera Edición 2006, México.

<sup>262</sup> *Ibidem*, Presentación p. 5

<sup>263</sup> *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, Secretaría de Gobernación, decimacuarta edición, Febrero, 2006

Sólo lo que cambia y se modifica es vigente. Las reformas a la Constitución sirven para preservar ésta, porque sólo se reforma lo que se quiere conservar.<sup>264</sup>

En el Derecho Constitucional Mexicano el procedimiento de modificación se da a través del artículo 135. Incluso pueden medirse con claridad los periodos de acomodo institucional o de crisis por el número de reformas constitucionales que se han producido en una época determinada. La Constitución de 1917 es, así, un proyecto nacional vivo a través del cual la sociedad mexicana se expresa y define su perfil.<sup>265</sup>

La Constitución General de la República desde el año de 1917 hasta el mes de junio de 2008 ha realizado las siguientes reformas:<sup>266</sup> 476 a los artículos principales, 9 a los transitorios y 2 a los artículos transitorios de decretos de reforma siendo en total 487 reformas.

Para el caso que nos ocupa, es a partir de las reformas publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 28 de enero de 1992 a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130, cuando se superan algunas simulaciones, pues existía la imperiosa necesidad de actualizar el derecho positivo con la realidad social y estar así acorde a las exigencias de la norma jurídica internacional en materia de derechos humanos y, desde luego, de libertad religiosa. Esas reformas son un parteaguas a los nuevos tiempos de la modernidad en materia religiosa.

El presidente Salinas refiriéndose al proceso de reforma sostuvo “que el espíritu y los principios del constituyente de 1917 siguen vigentes y al mismo tiempo” *hemos distinguido qué debe cambiar y qué debe permanecer, por eso*

---

<sup>264</sup> RUIZ MASSIEU, José Francisco. *Presentación reformas constitucionales y modernidad Nacional*, Editorial Porrúa, 1992, México.

<sup>265</sup> PÉREZNIETO CASTRO, Leonel. (Compilador), “Nota introductoria”, en *Reformas constitucionales y modernidad Nacional*, Editorial Porrúa, CAMBIO XXI-Fundación Mexicana.

<sup>266</sup> [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum\\_art.htm](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm), 26 de Noviembre de 2008, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios y Centro de Documentación, Información y Análisis.

*ratificamos como permanentes nuestros principios: mantener la patria soberana, vivir en libertad, promover más justicia social entre los mexicanos, alentar una vida democrática, son nuestros principios básicos, por eso cambiamos. Estamos realizando una reforma profunda del Estado. Es una reforma que está constituyendo un proyecto de México para el siglo XXI (...).*<sup>267</sup>

Con las reformas, sin duda, se rescata el espíritu liberal *Juarista*. Con ellas se redefinen las relaciones del Estado mexicano con las distintas iglesias.

### 3.2 DERECHO ECLESIAÍSTICO MEXICANO

La primera utilización del término *Derecho Eclesiástico* se encuentra en Roma en torno al año 375 para referir con él la potestad de la Iglesia para perdonar los pecados. Durante siglos el término fue reservado para designar al derecho de la Iglesia, es decir, sería un término intercambiable con el de Derecho Canónico.<sup>268</sup>

Es imposible precisar con exactitud el concepto moderno de *Derecho Eclesiástico*, pero se da en el siglo XIX en Alemania. Incluía el derecho de la Iglesia y el del Estado (concordato<sup>269</sup>) que regula el fenómeno religioso. Las tesis luteranas consideran que la regulación jurídica de las agrupaciones religiosas comprende al Estado.<sup>270</sup> Como ciencia se sitúa cuando las soluciones propuestas por los juristas alemanes son trasladadas a Italia a finales del siglo XIX.<sup>271</sup>

---

<sup>267</sup> “Con las reformas se constituye el proyecto de México para el siglo XXI” en: *Constitución 75 aniversario*. Reformando la revolución. Suplemento de *El Nacional*, 6 de febrero de 1992, pp. 2-3 (Dicho periódico de circulación nacional dejó de publicarse hace años).

<sup>268</sup> IBÁN, C., Iván y PRIETO SANCHÍS, Luís. *Lecciones de Derecho Eclesiástico... op. cit.*, p. 19

<sup>269</sup> Acuerdo suscrito entre los representantes de la Iglesia Católica y los de cualquier Estado o nación para establecer un marco jurídico que regule sus relaciones.

<sup>270</sup> IBÁN, C., Iván y PRIETO SANCHÍS, Luís. *Lecciones de Derecho Eclesiástico... op. cit.*, pp. 19-29

<sup>271</sup> *Ibidem*, p. 20

La expresión *Derecho Eclesiástico del Estado*, señala José María González del Valle,<sup>272</sup> es traducción literal de la expresión alemana *Staatskirchenrecht*. El origen, como rama autónoma, ha de ser situado en el momento en que el estudio de la legislación estatal sobre materia religiosa fue objeto de un tratamiento autónomo, diferenciado del estudio del derecho canónico al que hasta entonces estaba ligado.

En principio lo eran el Estado y la Iglesia encarnados en el concordato. Hoy en día se puede afirmar que la fuente es el derecho positivo de cada estado que establece formas jurídicas de relación con las confesiones religiosas.

#### **a) Génesis**

El nacimiento del Derecho Eclesiástico Mexicano se da justamente con las reformas constitucionales que fueron publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 28 de enero de 1992 a los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 en materia religiosa. Es la rama más reciente que se ha desprendido del derecho público, concretamente del Derecho Constitucional Mexicano. Su fuente primigenia está en la constitución, pero con él tienen que ver otras ramas del derecho como: el Derecho Administrativo, Procesal, Civil, Fiscal, Laboral, sin embargo, su pertenencia substancial y sus principios inspiradores se encuentran en la Ley Suprema.<sup>273</sup>

Existen además otras fuentes formales como la Ley Reglamentaria de los artículos 3º, 5º, 24, 27 fr. II y III y 130 intitulada *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público* y su reglamento, publicada en el *Diario Oficial de la Federación*

---

<sup>272</sup> GONZÁLEZ DEL VALLE, José María. *Derecho Eclesiástico Español*, Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria, Madrid, 1989, p. 51

<sup>273</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico... op. cit.*, p.191

el 15 de julio de 1992 y el 6 de noviembre de 2003, respectivamente. También los son las resoluciones administrativas emanadas de la Dirección General de Asuntos Religiosos, las tesis y jurisprudencias que sean dictadas en la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como todos los instrumentos internacionales que México ha suscrito en materia de derecho humanos y libertad religiosa.

Los estudiosos de esta disciplina señalan que debe partirse de que el derecho eclesiástico es un derecho de libertad, opinión que comparto. Por eso se advierte que antes de las reformas constitucionales de 1992 no existía en México un Derecho Eclesiástico del Estado. Sólo basta dar una mirada a los antiguos textos del ordenamiento jurídico mexicano a los que hemos hecho referencia.

## **b) Concepto**

Han sido varios los que han vertido un concepto o definición de *Derecho Eclesiástico Mexicano*, señalaremos algunos ejemplos:

José Francisco Ruiz Massieu dice *Es el conjunto de normas que rigen la organización de las Iglesias, y las relaciones de éstas con las del Estado y que se aplica a las libertades religiosas.*<sup>274</sup>

Alberto Pacheco señala *Es la regulación y defensa del derecho de libertad religiosa, en su ejercicio individual y en su aspecto social como agrupaciones con fines religiosos.*<sup>275</sup>

---

<sup>274</sup> RUIZ MASSIEU, José Francisco. “Hacia un Nuevo Derecho Eclesiástico Mexicano”, en *Derecho Eclesiástico Mexicano*, Editorial Porrúa, S.A. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, p. 35

<sup>275</sup> PACHECO, Alberto E. *Temas de Derecho Eclesiástico Mexicano*, ediciones Centenario, México, 1993, p. 23



José Luís Soberanes Fernández expone *Es el conjunto de normas jurídicas que tienden a garantizar y reglamentar el Derecho Fundamental de Libertad Religiosa de las personas y de las Asociaciones Religiosas en un país determinado.*<sup>276</sup>

El Derecho Eclesiástico del Estado es una disciplina jurídica que estudia específicamente la libertad religiosa.<sup>277</sup>

Raúl González Schmal apunta *Es la rama del Derecho Constitucional que tiene por objeto la regulación, garantía y promoción del Derecho Humano a la Libertad Religiosa en su dimensión individual y colectiva, privada y pública.*<sup>278</sup>

El núcleo central de esta disciplina lo constituye la actitud del poder político respecto a las organizaciones religiosas y a las manifestaciones individuales de religiosidad.<sup>279</sup>

En consonancia con los conceptos anteriores podemos advertir que el concepto de *Derecho Eclesiástico del Estado* refiere *el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y las Asociaciones Religiosas en materia de Libertad Religiosa y Culto Público.*

Es a partir de las reformas constitucionales del 92 cuando se publican diversos trabajos de juristas que dan su punto de vista en lo referente a lo emergente de esta disciplina. Nuestro Derecho Eclesiástico no ha podido superar determinados condicionamientos históricos y ha partido de viejos postulados en el sentido de consignar que el concepto clave no es la libertad religiosa, sino el

---

<sup>276</sup> SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís. “La Nueva Ley Reglamentaria”, en: *Derecho Eclesiástico Mexicano*, Editorial Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2da. edición, p. 41

<sup>277</sup> SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís. *El Derecho de Libertad Religiosa en México (un ensayo)*, Editorial Porrúa, CNDH, México 2001, p. 9

<sup>278</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico... op. cit.*, p. 192

<sup>279</sup> *Ibidem*, p. 173

de separación de Iglesia y Estado.<sup>280</sup> Por lo tanto, es necesario orientar el nuevo Derecho Eclesiástico hacia la libertad religiosa como núcleo central y principio inspirador de todo Derecho Eclesiástico. No significa que no se asuma tal principio, sino que éste se restringe. O como señala Antonio Molina Meliá en sus comentarios a la *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*: “los grandes y fecundos principios de libertad, igualdad y no discriminación no se aplican con generosidad, sino con cierta desconfianza y tacañería”.<sup>281</sup>

La misma referencia realiza José Luís Soberanes al señalar que “en México, el reconocimiento de una auténtica Libertad Religiosa no fue nada fácil y duró muchos años en obtenerse (...) y cuando se logró, ésta quedó tan acotada que fue una libertad más bien raquítica (...)”.<sup>282</sup>

### **c) Su objeto**

El objeto del Derecho Eclesiástico, como se ha señalado, es el estudio de la libertad religiosa, su regulación, su garantía y promoción en cuanto a derechos humanos, tal como lo establecen los instrumentos internacionales y que, dan sustento jurídico al derecho positivo en México, que en su justa dimensión se encuentra desfasado y no acorde al derecho internacional.

Por lo tanto, su objeto son las actividades religiosas de los ciudadanos para que sean valoradas por el ordenamiento como ejercicio del derecho de libertad religiosa, que sería una de las concreciones de la libertad. El punto de mira no es la religión sino la libertad.<sup>283</sup>

---

<sup>280</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico... op. cit.*, p. 192

<sup>281</sup> MOLINA MELIÁ, Antonio. *Capacidad de obrar de las entidades eclesiales mexicanas*, p. 837, fotocopia, sin señalamiento de casa Editorial, lugar y fecha. Citado por González Schmal, Raúl. *Derecho Eclesiástico... op. cit.*, p. 192

<sup>282</sup> SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís. *El Derecho de Libertad Religiosa... op. cit.* p. 11

<sup>283</sup> *Idem.*

### **3.3 EL IMPACTO DEL DERECHO ECLESIAÍSTICO ESPAÑOL EN EL DESARROLLO DEL DERECHO ECLESIAÍSTICO MEXICANO.**

Debemos recordar que a través de las franquicias papales se le dio a la Corona Española el derecho sobre las tierras y aguas del nuevo continente, esto con la finalidad de dar a conocer la religión cristiana entre los habitantes de dichas tierras.

No hay que olvidar que la conquista del Nuevo Mundo tenía un claro fin espiritual. La tarea de la evangelización estuvo a cargo de las órdenes de franciscanos, dominicos y agustinos y más tarde los jesuitas. La obra de evangelización en la Nueva España no sólo se abocó a la divulgación del cristianismo, sino que la labor de los misioneros influyó en el desarrollo cultural, social, económico, artístico y moral del pueblo. La tarea educativa fue en todos los niveles, escuelas elementales, medias y de enseñanza superior.<sup>284</sup> Su influencia fue determinante en las tierras de Anáhuac.

En el México moderno una vez más la doctrina española es la que impacta en el naciente Derecho Eclesiástico Mexicano, los grandes expertos españoles han sido nuestros maestros. Muchos de los cuales han estado en México. Nuestra legislación ha despertado interés en el medio académico español. Distinguidos eclesiasticistas españoles han sido los precursores del estudio de nuestra legislación:<sup>285</sup> el Dr. Antonio Molina Meliá, de la Universidad de Valencia; Javier Martínez-Torrón, de la Universidad Complutense y Teodoro Ignacio Jiménez Urresti, de la Universidad de Salamanca, entre otros. El Dr. Antonio

---

<sup>284</sup> GUERRERO REYNOSO, Nicéforo. *Religiones, Iglesias y Estado*, en “Una Puerta abierta a la Libertad Religiosa (México a quince años de las reformas constitucionales en materia religiosa, 1992-2007)”, Ma. Concepción Medina González, Coordinadora, Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y asuntos religiosos, Dirección General de Asuntos Religiosos, México, 2007, pp. 71-73

<sup>285</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, *Situación actual del Derecho Eclesiástico del Estado Mexicano*, Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, México, 2002.

Molina Meliá realizó un estudio intitulado “Capacidad de Obrar de las Entidades Eclesiásticas en México”, dirigió la obra colectiva “Las Libertades Religiosas-Derecho Eclesiástico Mexicano” editada por las Universidad Pontificia de México en 1996, impartió en la Universidad Iberoamericana el primer curso formal que se dio en el país de Derecho Eclesiástico del Estado, elaboró un proyecto de Instituto de Investigaciones de Derecho Eclesiástico Mexicano para la Universidad Pontificia de México.<sup>286</sup>

Sin embargo, como ya lo hemos señalado, la historia de nuestra nueva disciplina jurídica se puede concretar en su origen a partir de las reformas de 1992, surgiendo un gran interés de nuestros juristas mexicanos por abordar el conocimiento de la nueva materia y aún investigadores de otras áreas, como los historiadores, sociólogos y teólogos de distintas y diversas denominaciones religiosas que desde luego tomaron referencias del Derecho Eclesiástico Español, elaborando estudios sectoriales o análisis de la nueva legislación constitucional y ordinaria que han ido configurando la nueva disciplina como una rama autónoma de la ciencia del derecho: *el Derecho Eclesiástico Mexicano*.

En el transcurso del tiempo se han efectuado diversos cursos, seminarios y congresos nacionales e internacionales sobre el Derecho Eclesiástico Mexicano con el nombre de “Libertad Religiosa” o “Las Relaciones del Estado y las Iglesias” publicándose en algunos casos las memorias correspondientes. El tema ha sido trabajado también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC) y algunas escuelas y facultades que incluyen en su programa de licenciatura la nueva asignatura como materia optativa, y que ha decir verdad, muchas de ellas no la imparten por falta de interés en los alumnos o porque no existe el profesor que imparta la materia. Un

---

<sup>286</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, *Situación actual de Derecho...* Op. Cit.

caso especial es el de la Universidad Pontificia de México que incluye la asignatura en el programa de licenciatura en Derecho y ha creado un posgrado en la disciplina del Derecho Eclesiástico Mexicano. Por el contrario, en España desde 1990 el Derecho Eclesiástico del Estado es una disciplina de carácter obligatorio, lo que trae como consecuencia un desarrollo impresionante en la materia, tanto en el aspecto legislativo, doctrinario y jurisdiccional.

### **3.4 LA LEY ORGÁNICA 7/1980 DE LIBERTAD RELIGIOSA ESPAÑOLA Y SU INFLUENCIA EN LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO**

Como consecuencia de la influencia del Derecho Eclesiástico Español en el orden jurídico mexicano, no podría ser la excepción entonces, que en el origen de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 1992 no tuviera su influjo a través de la Ley 7/1980 del 5 de julio de 1980, que estableció un régimen de libertad religiosa en España superando el establecido por la Ley 44/1967 de Libertad Religiosa del 28 de junio de 1967 en el marco del estado franquista confesional, ley que tenía diversas limitaciones y un espíritu controlista antes que protector. Señalaremos algunas semejanzas y diferencias de las leyes en vigencia, vemos:

#### **a) Semejanzas**

- Reconocen la personalidad jurídica de las iglesias inscritas en sus respectivos registros.
- Garantizan que ninguna confesión tiene carácter estatal (aconfesionalidad).

- Garantizan a los individuos la no discriminación debido a sus creencias religiosas.
- Garantizan la manifestación libre de las creencias religiosas y abstenerse a declarar sobre la misma.
- Garantizan, asociarse o reunirse públicamente con fines religiosos.
- Garantiza el derecho de las iglesias a ejercer plena autonomía sobre su régimen interno.
- Facilitan la asistencia religiosa en establecimientos públicos.<sup>287</sup>
- Garantizan el derecho a participar, crear y fomentar asociaciones, fundaciones e instituciones de asistencia privada que tenga que ver con el cumplimiento de sus fines.
- Establecen con el Estado acuerdos o convenios de cooperación, coordinación o colaboración.<sup>288</sup>
- Garantizan el derecho de las iglesias a designar y formar sus ministros de culto y divulgar su credo.

## **b) Diferencias**

- En España la ley privilegia los derechos individuales; en México los preceptos de la ley tienen como principal objeto regular el estatuto jurídico de las confesiones religiosas (derechos colectivos).
- En España garantiza a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole y por cualquier medio; en México la educación es laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa, es decir, la enseñanza de la religión en establecimientos educativos del Estado está vedado.

---

<sup>287</sup> En el caso de México la prevé como asistencia espiritual en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 6 de noviembre de 2003

<sup>288</sup> En el caso de México lo prevé el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 6 de noviembre de 2003.

- En España se puede elegir para los menores la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones; en México no, debido a la educación laica.
- En España los derechos reconocidos en la ley son tutelados mediante amparo judicial ante Tribunales Ordinarios y Constitucional; en México corresponde al Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de la ley mediante los procedimientos de conciliación, de arbitraje y de recurso de revisión ante la comisión sancionadora.
- En España la cancelación de los asientos de registro de una confesión religiosa, sólo se podrá llevar a cabo a petición de los representantes de la entidad religiosa o en cumplimiento de sentencia judicial firme; en México la cancelación de registro de la asociación religiosa es competencia de la Secretaría de Gobernación.
- En España se establecen acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias o comunidades religiosas inscritas en el registro; en México, la ley no establece la posibilidad de que las confesiones religiosas celebren pactos o convenios con el Estado (el Reglamento lo prevé).
- En España existe una comisión asesora de libertad religiosa de forma paritaria entre el Estado y las confesiones religiosas encargada de asesorar, estudiar, informar y proponer las cuestiones de interés en la materia y a la aplicación de la ley; en México no existe ningún órgano asesor semejante a la comisión asesora.
- En España el principio de cooperación con las confesiones religiosas es de especial cuidado; en México no recibe mayor atención. Lo mismo sucede con la asistencia religiosa y la objeción de conciencia que no está permitida.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en los títulos IV y V prevén algo que pudiera ser novedoso desde el punto de vista comparativo. En el

título IV denominado “De las Autoridades”, norma la actuación de las autoridades ante el fenómeno religioso, señalando las facultades y deberes en la aplicación de la Ley, que se ejercita por conducto del Poder Ejecutivo, prohibiendo además que los funcionarios asistan con carácter oficial a los eventos religiosos, salvo las prácticas diplomáticas. Faculta a la Secretaría de Gobernación para resolver los conflictos que se susciten entre asociaciones religiosas (cosa no común en otras legislaciones).

En el título V denominado “De las Infracciones y Sanciones y del Recurso de Revisión” (que tampoco es típico) con excepción de las disposiciones que señalan las sanciones a las asociaciones religiosas, existen otras que pudieran ser adoptadas por otras legislaciones, como: las de no asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo o propaganda a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna; no administrar bienes y derechos que no sean indispensables para su objeto; así como no obtener concesiones de la naturaleza que fuesen y que constituyan un enriquecimiento patrimonial de sus líderes; convertir un acto religioso en reunión de carácter político, entre otras.

Como se observará, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público no sólo establece derechos sino también obligaciones a las asociaciones religiosas, iglesias o corporaciones. Establece recursos impugnativos contra los actos o resoluciones dictados por la autoridad en cumplimiento de la ley, que pueden interponer las asociaciones religiosas, sus representantes o ministros de culto que se sientan agraviados.



### **3.5 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA**

El 10 de diciembre de 1991 el diputado Luís Dantón Rodríguez, representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue el encargado de presentar la iniciativa de decreto a las reformas de los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 de nuestra Constitución, aduciendo la transformación y evolución de la sociedad y, por ende, la necesidad del Estado mexicano a modernizarse en sus relaciones con todos los sectores: partidos políticos, sindicatos, grupos empresariales, organizaciones campesinas, comunidades indígenas y, desde luego, las iglesias, tomando en cuenta la soberanía y el bienestar del pueblo de México.

Del análisis de la exposición de motivos se desprende que el punto de partida de dichas reformas es “la modernización del Estado”, tomando como base las históricas relaciones Estado-Iglesia, pasando por la conquista, la colonia, la independencia y la revolución mexicana.

Se reconoce que uno de los temas que han permanecido inalterados desde 1917 es el relativo a la regulación jurídica de las actividades religiosas externas, pues ha permanecido al margen del legislativo. Reconociendo la convocatoria del presidente Carlos Salinas de Gortari para promover una nueva situación jurídica de las distintas iglesias y para buscar una mayor correspondencia entre el comportamiento cotidiano de la población y las disposiciones legales.

El Estado, para modernizarse, ha de reconocer y armonizar a todos los actores sociales, incluyendo a las distintas iglesias. Se debe de contar con reglas claras que recojan los ideales, los anhelos y demandas de nuestro pueblo, sin demerito de las ricas lecciones de nuestra historia. El Estado tiene el deber de garantizar a todas las confesiones la misma libertad sin establecer un sistema de privilegios

con ninguna de ellas. Se debe asegurar que las reformas no restauren privilegios injustificados ni replanteen conflictos y problemas concluidos y resueltos con justicia en la historia y en la conciencia de los mexicanos.

La exposición de motivos reconoce que la existencia de las iglesias es una realidad social, insoslayable en todas las sociedades de nuestro tiempo, indistintamente del signo ideológico de su organización estatal. Se reconoce una sociedad diversa y plural.

### **3.6 INICIATIVA DE REFORMAS Y SU PROCESO LEGISLATIVO**

El argumento del PRI para la presentación de la iniciativa de las reformas a la Constitución en materia religiosa se hace con el propósito de consolidar la libertad de creencias y garantizar su ejercicio. Siguiendo un orden temático se aborda:

- a) La personalidad jurídica de las iglesias.
- b) La propiedad.
- c) La libertad del culto externo.
- d) La educación.
- e) La situación jurídica de los ministros de culto.
- f) Disposiciones en materia civil relativas al tema.

Los principios básicos de la reforma fueron el respeto irrestricto a la libertad de creencias, el Estado soberano, la clara demarcación entre los asuntos civiles y eclesiásticos, la igualdad jurídica de todas las iglesias y agrupaciones religiosas, así como la educación pública laica.<sup>289</sup>

---

<sup>289</sup> Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* a los Artículos 3, 5, 24, 27 y 130.

La iniciativa propone una nueva configuración de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130, al plantear la definición de libertad religiosa es de orden público. *Reconoce objetivamente la realidad que vive el país y busca plasmar normas supremas que la canalicen en la libertad para fortalecer la soberanía y para fortaleza de nuestra soberanía, implica una nueva concepción de la situación de las Asociaciones Religiosas, pero no altera el carácter laico que debe tener el Estado y reafirma la separación que debe existir entre éste y las Iglesias. El pueblo mexicano quiere vivir en la libertad y creer y practicar en ella la religión que en conciencia elija, pero no desea la participación de las religiones y las Iglesias en la política, ni su preponderancia económica, claramente fuera de misión expresa.*<sup>290</sup>

### **Dictamen a Discusión**

El 17 de diciembre de 1991 se sometió a discusión el dictamen relativo al proyecto de reformas a los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 de la Constitución, siendo presidente de la Gran Comisión el diputado Felipe Calderón Hinojosa,<sup>291</sup> ahora presidente de la República.

Durante 25 horas de sesión prácticamente ininterrumpida, 108 diputados del PRI, PRD, PPS, PARM y PFCRN, participaron en lo que recurrentemente se denominó “debate histórico”.<sup>292</sup>

El Partido Popular Socialista, argumentando que no se tenían el mínimo de elementos de juicio necesarios para realizar un debate sobre las reformas,

---

<sup>290</sup> *Iniciativa... op. cit.*

<sup>291</sup> Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 1991/12/17 - Número de Diario 22 de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, México, D.F.

<sup>292</sup> *Ibidem*

propuso una moción suspensiva con por conducto del diputado Heli Herrera Hernández con punto de acuerdo.<sup>293</sup>

### **Discusión en lo General.**

Se realizaron 3 turnos de oradores donde participaron un total de 21 diputados. Finalmente, la iniciativa de reforma se aprobó en lo general por 460 votos en pro y 22 en contra.

### **Discusión en lo particular**

La discusión se realizó alrededor de ciertos artículos en el orden siguiente: 130, 27, 24, 5° y 3°. Para discutir el artículo 130 tomaron la palabra 29 diputados. El artículo 130 se aprobó por 360 votos a favor y 19 en contra. En el momento de la votación en lo particular, ya habían abandonado el salón de sesiones 103 diputados.

En la discusión del artículo 27 intervinieron 9 diputados. Sin ningún cambio al texto propuesto por la comisión, se aprobó la fracción II del artículo 27 por 359 votos a favor y 21 en contra.

Para discutir el artículo 24 tomaron la palabra 8 diputados. La modificación se aprobó por 351 votos en pro y 29 en contra.

---

<sup>293</sup> Punto de Acuerdo: “Único. La honorable Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión resuelve suspender la discusión relativa a la iniciativa de reformas a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto no cuente con el mínimo de elementos de juicio necesarios para realizar un debate pertinente y resolver en su caso lo que proceda”. Sobre la proposición toman la palabra 16 oradores, 8 de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista (PPS), sin embargo, en votación económica la mayoría desechó la propuesta de moción suspensiva.

En la discusión del artículo 5° intervinieron 4 diputados y el dictamen se aprobó en sus términos por 364 votos a favor y 11 en contra.

Participaron en la discusión del artículo 3° 13 diputados. El dictamen de ese artículo y los transitorios se aprobaron por 308 votos en pro y 22 en contra.

Para discutir el artículo 2° transitorio del dictamen tomaron la palabra 2 diputados.

Así concluyó una de las sesiones más largas de nuestra historia parlamentaria, presidida por el diputado Felipe Calderón Hinojosa, hoy presidente de la República por el partido conservador de acción nacional (PAN).

### **3.7 PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA REFORMA**

Los tres grandes principios que sustentan la reforma son la separación de las diferentes Iglesias y el Estado y la libertad de creencias, así como la laicidad del Estado.

#### ***a) Separación del Estado y las Iglesias***

Sin duda, desde el inicio de nuestra independencia se dificultó el proceso de formación del Estado, sobretudo en una buena parte del siglo XIX. La razón fue clara: el gran peso de la Iglesia Católica. La Iglesia se comportaba como si fuera un Estado, compitiendo con el incipiente poder gubernamental. El peso eclesiástico en la vida política y económica obligó al Estado nacional a consolidarse bajo el signo de laicismo, pero no en el combate a la religión. La separación entre el Estado-Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX, principio

básico del esfuerzo liberal, no buscó perseguir creencias o eliminar convicciones, sino asegurar la consolidación del Estado nacional y de las libertades.

Muchas funciones estatales se hallaban concentradas en la corporación eclesiástica a grado tal, que no se consentía la libertad de culto, esto es, no se toleraba la existencia más que de una Iglesia: la Católica. La Iglesia tenía extensas propiedades rústicas y urbanas exentas de impuestos, muchas improductivas; independencia de las facultades del antiguo patronato real respecto al Estado; una jerarquización de la burocracia eclesiástica mediadora en todo el país; una red de tribunales especiales y un complejo régimen de fueros y privilegios que incluía muchas de las transacciones estrictamente temporales; un sistema financiero propio e integrado por el cobro del diezmo y limosnas. Además, la Iglesia ejercía control sobre el único registro de información demográfica y censal a través de los actos que afectan el estado civil de las personas. Este grupo de características hacía de la Iglesia algo más parecido a un Estado que a una asociación religiosa.<sup>294</sup>

El Estado no contaba con una legislación estable y autónoma, carecía de un sistema fiscal y de la información para crearlo. No tenía el manejo de la educación ni la capacidad para hacerse cargo de ella. No tenía mecanismos de mediación para relacionarse con la población, intensificando la inestabilidad. Por lo tanto, no eran compatibles ni podían empalmarse las pretensiones de la Iglesia y la necesidad del Estado. Eran tiempos que exigían toda la dedicación a salvaguardar el país.

Con distintos argumentos y respuestas, el Estado se apropió de su lugar y, así, en la segunda mitad del siglo XIX, la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma y las Reformas Constitucionales de 1873 y 1902

---

<sup>294</sup> *Iniciativa..., op. cit.*

se encargaron de ello. Todas lo anterior buscó rescatar facultades estables que estaban en manos del clero, lo que significó el fin de los tribunales especiales, la desamortización y la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la separación de los asuntos civiles y los eclesiásticos, la libertad de cultos y la secularización de hospitales, panteones e instituciones de beneficencia, la creación y control estatal del registro civil.

El constituyente de 1917 no sólo reafirmó los principios de separación de Estado-Iglesia que habían sido fundamentales en la formación y consolidación del Estado mexicano en el siglo XIX, sino que subordinó a los ministros eclesiásticos y desconoció toda personalidad jurídica de las Iglesias. La Constitución de 1917 culminó con el proceso de secularización y de afirmación del Estado.

Hoy el Estado está firmemente sustentado en la vida de la nación, por eso la separación del Estado y las diferentes iglesias requieren que la esfera de las creencias religiosas no intervenga en el Estado, y que las iglesias y los ministros no intervengan en asuntos públicos del Estado y gobierno. La regulación política de la vida pública corre por cuenta exclusiva del Estado, el cual no señalará nunca preferencia o interés por religión, creencia o iglesia alguna, ni promoverá su negación.<sup>295</sup>

El Estado, para consolidarse, necesitó desplazar todo poder que se ostentara alterno a él.

Hay quienes piensan que el principio de la separación del Estado- Iglesia, o mejor dicho, que la separación del Estado y la Iglesia Católica consiste en admitir dos soberanías, dos autoridades soberanas sobre el mismo pueblo en el

---

<sup>295</sup> *Iniciativa..., op. cit.*

mismo territorio, pero sin aceptar interferencias de ninguna clase, como si el Estado pudiera ignorar a la Iglesia y ésta a aquél en sus respectivas actividades.

Una pretensión tan radical y absoluta de esta naturaleza es imposible que pueda darse en la práctica porque existen ciertas áreas en que el Estado debe admitir la intervención de la Iglesia, así como ciertas áreas en que la Iglesia debe admitir la intervención del Estado sin que en ninguno de estos dos supuestos pueda calificarse de sometimiento o de suplantación de una potestad a la otra.<sup>296</sup>

En suma, la separación entre Iglesia y Estado resultó de un proceso jurídico-político doloroso para el país, cuya culminación fue la Constitución de 1857, seguida de las Leyes de Reforma. Esta situación no estuvo exenta de conflictos armados, golpes de Estado y, para colmo, de males la intervención francesa con Maximiliano a la cabeza. A lo anterior se añadió la dictadura de Porfirio Díaz con una duración de tres décadas, misma que propició un anticlericalismo exacerbado, lo que tuvo su desenlace final con la redacción y promulgación de la Constitución de 1917 cuya nota característica, amén del jacobinismo impreso en su articulado, fue el desconocimiento de personalidad jurídica a las Iglesias.<sup>297</sup>

### ***b) El Principio de la Libertad Religiosa***

El Estado para modernizarse ha de reconocer y armonizar a todos los actores sociales, incluyendo a las iglesias. La gran mayoría de los mexicanos con creencias religiosas decide cultivarlas y profesarlas, no en forma aislada, sino en compañía de aquéllos con quienes comparten sus creencias.

---

<sup>296</sup> SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. “Régimen Jurídico de los Ministros de Culto religioso”, en *Estudios jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G: Estudios Doctrinales, Núm. 160, Secretaría de Gobernación, UNAM, México, 1994, p. 99

<sup>297</sup> PATIÑO REYES, D. Alberto. *Libertad Religiosa y Principio de Cooperación en Hispanoamérica*, Tesis, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, junio de 2007, pp. 148-150



Al Estado corresponde garantizar y proteger el ejercicio de la libertad de creencias de todos los mexicanos. En tal virtud, deberá cuidar que las prácticas religiosas trasciendan los umbrales de hogar, así como que las conductas mediante las cuales se manifiesten no ofendan las creencias de otros ni afecten el orden público. El ejercicio de la libertad de profesar una creencia y su culto externo termina precisamente donde comienza la libertad de creencias y el culto externo de otros que no comparten esa fe. El Estado tiene el deber de garantizar a todas las confesiones la misma libertad sin establecer un sistema de privilegios con ninguna de ellas.

Por respeto a las creencias, que es el ámbito de sus libertades, debe darse transparencia a las reglas claras que demandan la modernización del país. Se deben fijar las bases para una clara y precisa regulación de las Iglesias que los mexicanos decidieron con libertad que existan para canalizar sus creencias religiosas, con el total respeto para quienes tienen otras o no comparten ninguna.<sup>298</sup>

La existencia de las iglesias es una realidad social, el propósito es, entonces, consolidar la libertad de creencias y garantizar su ejercicio confirmando el estado de derecho.

### ***c) Laicidad del Estado***

No hay algún precepto constitucional que señale que el Estado es laico. El artículo 3º fracción I, dice que la educación que imparte el Estado “será laica”, lo cual no quiere decir, que el Estado “será laico”. El Estado actual es un Estado no

---

<sup>298</sup> *Iniciativa..., op. cit.*

confesional. Bajo este aspecto podría decirse que es laico, en el sentido de que no establece religión oficial.<sup>299</sup>

Si bien es cierto que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, dispone en su artículo 3° que: “el Estado mexicano es laico”, también es cierto que ésta afirmación, es ajena al texto constitucional y, por lo tanto, no podría considerarse jurídicamente válida, ya que no puede una Ley, aunque sea Federal, definir una característica general del Estado mexicano en su conjunto, pues esto corresponde a la Constitución en general. A mayor abundamiento, el artículo 40 de la Carta Magna dice que es voluntad de la nación o pueblo constituirse en una República Representativa, Federal y Democrática, pero no dice “laica”.

La afirmación de que el Estado mexicano es laico, sólo cabe entenderla en el sentido de que no es un Estado confesional porque la Constitución no establece religión alguna, sino libertad de creencias.<sup>300</sup>

En conclusión, podemos señalar que la laicidad que se encuentra establecida en la Carta Magna en el artículo 3°, <sup>301</sup> se refiere sólo a la educación que imparta el Estado y no a una característica de la nación mexicana.

---

<sup>299</sup> ADAME GODDARD, Jorge. “El Estado Laico” en: *Una Puerta abierta a la Libertad Religiosa*, (México a quince años de las reformas constitucionales en materia religiosa 1992-2007) MEDINA GONZÁLEZ, Ma. Concepción (Coordinadora) Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Dirección General de Asociaciones Religiosas, México 2007, p. 210

<sup>300</sup> *Ibidem*, p. 211

<sup>301</sup> “Artículo 3°. I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha **educación será laica** y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa (...)”.

### 3.8 ANÁLISIS DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA RELIGIOSA.

Las enmiendas en materia eclesiástica liquidan en este siglo viejos problemas no resueltos que nos heredó el siglo XIX.<sup>302</sup>

Trataremos de realizar un breve análisis de los diversos artículos, tomando en cuenta el texto original, las reformas y las adiciones constitucionales que se han hecho en la materia de libertad religiosa, en concreto: las reformas de 1992 en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari.

- **Artículo 3**

El texto original del artículo 3º señala:

*“Artículo 3o.- La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales (...)*

*Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria (...)*”

El texto original ha sufrido 6 reformas:

La primera reforma establece que la educación que imparta el Estado será socialista. Las escuelas particulares podrán impartirla sólo mediante una autorización.<sup>303</sup>

---

<sup>302</sup> PÉREZNIETO CASTRO, Leonel. (compilador), *Reformas constitucionales y modernidad Nacional*, Editorial Porrúa, S.A. CAMBIO XXI-Fundación mexicana. Presentación, por José Francisco Ruiz Massieu, Presidente de CAMBIO XXI-Fundación mexicana y gobernador constitucional del Estado de Guerrero, p. XI de la Presentación.

La segunda reforma elimina el principio socialista de educación y establece que la educación será democrática, nacional y contribuirá a la mejor conveniencia humana. Se excluye a las corporaciones religiosas para intervenir en los planteles de la educación primaria, secundaria y normal, así como la que se destine a obreros y campesinos.<sup>304</sup>

Mediante la quinta reforma<sup>305</sup> se suprime la negativa a las corporaciones religiosas, a los ministros de cultos y a las asociaciones o sociedades de carácter religioso de intervenir en planteles en los que se imparta educación elemental. Confirma que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados, previa autorización expresa del poder público. Vuelve la laicidad de la educación del Estado.

*Artículo 3º.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación.*

*I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;*

*VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:*

---

<sup>303</sup> Diario Oficial del 13-XII-1934; Abelardo L. Rodríguez, Presidente de México 3-IX-32/30-XI-34

<sup>304</sup> Segunda reforma a la fracción IV, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 30 de diciembre de 1946, Manuel Ávila Camacho, presidente de México.

<sup>305</sup> Publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, 28 de enero 1992, Carlos Salinas de Gortari, I-XII-88/30-XI/94

*a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y*

*b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la Ley (...).*

La reforma constitucional garantiza la libertad de creencias en conformidad con el artículo 24 de la norma fundamental. Sin embargo, en la misma fracción señala que la educación será *laica*, y por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Es decir, sin religión, lo que parece una absurda contradicción que atenta contra al principio fundamental de la libertad religiosa. De tal suerte, que la *fracción VI, inciso a)* del mismo artículo pretende salvar tal situación facultando con los particulares para impartir educación en todos sus tipos y modalidades, lo que debe entenderse entonces es que la educación que imparte el Estado es laica en la medida que éste *no puede, sin perder su naturalidad*, inducir o promover la enseñanza religiosa. Su función, en materia educativa, es garantizar a todos los educandos del país conocimientos y la inculcación del respeto y el fomento de nuestros valores, culturas y tradiciones, sea centro educativo público o privado.<sup>306</sup>

Dicho de otra forma, la educación que garantiza el Estado se da sobre la base de la ciencia y los valores universales, con especial énfasis en los valores, la cultura y las tradiciones nacionales, siempre con el carácter laico; sin embargo, se propone que en la educación impartida por los planteles particulares, en contraste con la educación oficial, no exista la obligación de que la educación sea ajena a cualquier doctrina religiosa. Es decir, que en los planteles educativos se

---

<sup>306</sup> Informe, Cámara de Diputados, Año 1, No. 17, Diciembre 10, 1991, P.1805

pueda ofrecer “adicionalmente educación religiosa”.<sup>307</sup> Se trata, en suma, del reconocimiento de una realidad. Reconoce en los individuos la libertad de creencias y la posibilidad de que en el ejercicio de libertad de enseñanza se les pueda instruir en sus propias creencias.<sup>308</sup>

Es claro entonces que el artículo 3º retoma el principio básico del liberalismo de Juárez sobre la libertad de enseñanza, y que pretende terminar con la discriminación religiosa.

- **Artículo 5**

Texto original:

*Art. 5º. (...) El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse...*

El artículo se ha reformado en 4 ocasiones, siendo la última justamente la de 1992.<sup>309</sup>

---

<sup>307</sup> *Ibidem*, p. 1806

<sup>308</sup> *Iniciativa... op. cit.*, Exposición de motivos del texto de la reforma.

<sup>309</sup> Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* (DOF), Tomo CDLX, No. 19, México, D.F., Martes 28 de enero de 1992, Carlos Salinas de Gortari, I-XII-88/30-XI/94

Artículo vigente:

*Artículo 5°. (...) El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa (...).*

Como podrá observarse, en el texto vigente se elimina la parte que prohibía la profesión de votos religiosos, así como también se suprime la negativa constitucional de permitir el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse.

Es evidente que con respecto a la prohibición del voto religioso se infería un agravio a la libertad de conciencia en una de sus manifestaciones más fundamentales: la consistente en el compromiso vital, irrevocable del creyente, de entregar integralmente su persona al servicio de Dios. Por otro lado, lo relativo a las órdenes monásticas constituía también una violación al derecho a la libertad religiosa en su proyección colectiva; es decir, a las comunidades religiosas como sujetos de derecho.<sup>310</sup> Por lo tanto la prohibición no era justificable, toda vez de que se parte de la hipótesis de que las acciones del creyente se hacen con toda la libertad que en conciencia corresponda y, en consecuencia, no había lugar a establecer tal concepto. En cuanto a las órdenes monásticas, si ha terminado la prohibición constitucional, quiere decir que la misma ley autoriza su existencia.

---

<sup>310</sup> BURGOA, Ignacio. *Las Garantías Individuales*, XIV edición, Editorial Porrúa, México 1985, p. 340

- **Artículo 24**

Texto original:

*Todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en su domicilio particular siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.*

*Todo acto religioso de culto público, deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad.*

Este artículo sólo ha tenido una reforma: la sujeta a estudio.

Texto vigente:

*Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.*

*El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.*

*Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.<sup>311</sup>*

---

<sup>311</sup> Publicada en el DOF el 28 de enero de 1992, Carlos Salinas de Gortari, I-XII-88/30-XI/94



El texto original sólo ha sido reformado y adicionado en sola ocasión. Como se puede observar, se añade un segundo párrafo. Dicho contenido se encontraba en el segundo párrafo del artículo 130 de la Carta Magna, relativo a la prohibición del Congreso de la Unión para dictar leyes, estableciendo o prohibiendo religión alguna.

Se mantuvo la redacción que reduce el acto existencial más trascendente de la persona a una cuestión de sensación grata o agradable, pues señala *todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade (...)*, lo que no deja de ser trivial; se deja la libertad religiosa al agrado o desagrado del feligrés,<sup>312</sup> por lo que era sin duda buena la propuesta del episcopado mexicano que proponía el siguiente texto: *todo hombre es libre para profesar y practicar cualquier religión o creencia de acuerdo con su conciencia.*<sup>313</sup>

En cuanto a los actos del culto público se estableció la excepción de que puedan celebrarse *extraordinariamente fuera de los templos*, circunstancia que permite señalar que hay una *ganancia* en relación con el anterior que no permite dichos actos fuera de los templos o domicilio particular. Por lo tanto, se autoriza la celebración de actos religiosos fuera de los templos. Las restricciones en cuanto al culto público que contiene el artículo 24, pugnan con los diversos instrumentos internacionales<sup>314</sup> a los que hemos hecho referencia, los cuales señalan las únicas limitaciones inherentes al ejercicio del propio derecho.

---

<sup>312</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico... op. cit.*, p. 226

<sup>313</sup> *La presencia en México de Juan Pablo II, op. cit.*, P. XII

<sup>314</sup> Artículo 18 Declaración de la ONU; Artículo 18 Pacto Internacional de los Derechos civiles y políticos; Artículo 2 Convención Americana de los Derechos Humanos “Pacto de San José”.

- **Artículo 27**

**La propiedad.** Las legislaciones de 1857, 1859, 1860, 1873 y 1874 desconocen la propiedad de las asociaciones religiosas en cuanto a los bienes raíces, pero haciendo la excepción de los edificios destinados al fin de la institución. En 1917, el constituyente estableció no sólo la incapacidad legal para que las corporaciones religiosas pudieran adquirir en propiedad o administrar en bienes raíces, sino que además, decidió que los bienes entrarían al dominio de la nación estableciendo la regulación de la propiedad en los artículos 27 y 130.

Texto original:

*Párrafo Séptimo*

*La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:*

*Fracción II.- Las asociaciones religiosas denominadas Iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes (...) los que tuvieren actualmente, entrarán al dominio de la Nación (...) Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la Nación (...) Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán...de pleno derecho, al dominio directo de la Nación. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público, serán propiedad de la Nación.*

*III.- Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la (...) la difusión de la enseñanza (...) no podrán adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces. En ningún caso, las instituciones de esta índole, podrán estar bajo cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque éstos o aquéllos no estuvieren en ejercicio.*

Este artículo se ha reformado en 16 ocasiones, pero sólo la decimosexta reforma<sup>315</sup> tiene que ver con las asociaciones religiosas.

Texto vigente:

*Párrafo Noveno.*

*La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:*

*Fracciones:*

*II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria;*

*III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la difusión de la enseñanza,*

---

<sup>315</sup> Publicada en el DOF el 28 de enero de 1992, Carlos Salinas de Gortari, I-XII-88/30-XI/94

*no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él (...).*

En el comparativo del texto original con el vigente encontraremos una transformación casi absoluta a dichas fracciones.

En la fracción II se estableció de forma explícita el derecho de las asociaciones religiosas para adquirir, poseer o administrar bienes, pero con una salvedad: solamente podrán hacerlo de aquéllos que les sean indispensables para su objeto. De la lectura, se desprende que deben de cumplir requisitos. Por lo tanto, uno de ellos para que puedan adquirir, poseer o administrar bienes, y lo es que obtenga el registro como asociación religiosa, de lo contrario, no podrán ejercer tal derecho.

En lo que corresponde a la fracción III se suprimió la prohibición a las asociaciones religiosas y a los ministros del culto para poder dirigir, administrar, o vigilar instituciones de beneficencia, pública o privada, cuyo objeto sea el auxilio de los necesitados. La investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier objeto lícito.

En consecuencia, se suprime del texto constitucional la *prohibición* a que hemos hecho referencia. También se elimina la disposición que establece la propiedad de la nación sobre los templos destinados al culto, los mismo que obispos, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas o conventos.

En esencia, acorde a la modificación del artículo 130 que otorga personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, las fracciones II y III del artículo 27 les otorga incapacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente los bienes

que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria.

- **Artículo 130**

Texto original:

*Corresponde a los Poderes Federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa (...).*

*El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera.*

*El matrimonio es un contrato civil.*

*La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas Iglesias.*

*Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión (...).*

*Las Legislaturas de los Estados tendrán facultad de determinar, el número máximo de ministros de los cultos.*

*Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento.*

*Los ministros de los cultos (...) no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.*

*Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.*

*(...) Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado.*

*Los procesos por infracción a las anteriores bases, nunca serán vistos en jurado.*

Texto vigente:

*El principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las Iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.*

*a) Las Iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro.*

*b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas.*

*c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto... así como los extranjeros (...).*

*d) (...) los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.*

*e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán (...) oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.*

*Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.*

*Los ministros de cultos (...) así como las asociaciones religiosas, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente.*

Veamos:

Como párrafo introductorio afirma que las normas contenidas en el artículo se encuentran orientadas en el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias.

El artículo 130 se reformó en su totalidad, excepto el párrafo IV, que pasó a ser el párrafo III del inciso C.

El inciso a) establece: *las Iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como Asociaciones Religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro.*

El anterior, en su párrafo IV sentenciaba: *la ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas Iglesias.* Como se ve, el no reconocimiento de personalidad jurídica de las Iglesias era de carácter absoluto. En cambio, hoy existe la posibilidad de que le atribuya personalidad jurídica, a condición de que:

- a) Se solicite al constitución de una asociación religiosa y;
- b) Se obtenga un registro.

La ley reglamentaria determina las condiciones y los requisitos que deberán cumplir los solicitantes.

La *Asociación Religiosa* es una nueva figura jurídica creada por las reformas. Así deben constituirse las confesiones religiosas que pretendan adquirir personalidad jurídica. Ésta la obtienen por un acto unilateral del Estado. El Estado *no reconoce* la personalidad jurídica, sino que *la otorga*.

En otros términos, las asociaciones religiosas son creadas por un acto administrativo y unilateral del poder público.



Miguel Ángel Hernández Romo<sup>316</sup> señala el contraste del texto constitucional: ayer: *la Iglesia no tiene personalidad jurídica*, hoy: *la Iglesia sí tiene personalidad jurídica*. Esto lleva al jurista a preguntarse si el legislador tiene facultad omnímoda, absoluta, para dar o quitar la personalidad jurídica a un ente cuya realidad es indiscutible. La respuesta categórica es, no. “El legislador, —dice el maestro Hernández Romo— no nos otorga graciosamente la libertad de pensar, de opinar, de transitar, ínsita en la naturaleza humana. En todo caso, nos la reconoce y regula para bien común” y, citando a Geny, concluye que esto es así “porque las realidades —los datos— se imponen a la voluntad del legislador”. Expresa que el legislador mexicano, parodiando a Descartes, pretende hacer decir a la Iglesia *Me registro, y luego existo*, a lo que replica el jurista *porque existo, me registro*. Concluye su reflexión es estos términos “como se ve, no se trata de un problema de palabras, sino de un problema óntico, en el que está de por medio el ser o no ser, toda vez que la nada no es susceptible de registro y no es admisible que el legislador con un *fiat* cree a la Iglesia.”<sup>317</sup>

En la nueva normatividad, una Iglesia o agrupación religiosa no tiene la obligación de constituirse como asociación religiosa, esta posibilidad es, naturalmente, facultativa para ellas. Pueden seguir actuando, aunque sin personalidad jurídica.

El artículo 130 reconoce la autonomía de las iglesias o agrupaciones religiosas. Sin embargo, solamente reconoce este derecho a las asociaciones religiosas, es decir, aquellas que se encuentran debidamente registradas; en consecuencia, se excluyen por tanto, aquellas iglesias o agrupaciones religiosas que no se hayan constituido como asociaciones religiosas.

<sup>316</sup> Revista “Jurídica”, “La Personalidad Jurídica de la Iglesia”, *Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana*, 1995-I Num. 25, citado por GONZÁLEZ SCHMAL Raúl en *Derecho Eclesiástico Mexicano... op. cit.*, p.233

<sup>317</sup> GONZÁLEZ, SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico Mexicano... op. cit.*, p. 233

El artículo 130 se refiere a los ministros de culto en los incisos c), d) y e), párrafos I y IV. La Constitución no precisa lo que debe entenderse por dicho término. Sin embargo, la Ley Reglamentaria señala que *se consideran ministros de culto todas aquellas personas mayores de edad a quienes las Asociaciones Religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter*.<sup>318</sup>

La anterior Ley Reglamentaria del artículo 130 del 18 de enero de 1927 sí lo precisaba.<sup>319</sup> La jurisprudencia tendrá que ir precisando el contenido del término.

El II párrafo del artículo 130 vigente establece que *queda estrictamente prohibido toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación, cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa*. Este texto no sufrió cambio alguno. Esta prohibición estuvo motivada por la intención de castigar al partido católico, al que los carrancistas acusaban de haberse aliado con Victoriano Huerta. No es explicable que en el nuevo texto del 130 haya existido tal prohibición.<sup>320</sup>

En el artículo se establece una prohibición que no era necesaria a los ministros de culto cuando expresa *agraviar de cualquier forma a los símbolos patrios*, y que empeora la ley reglamentaria al añadir *o de cualquier modo inducir a su rechazo* (Art. 29 Fr. II). Tal aseveración es discriminatoria e injustificada desde el punto de vista de la técnica legislativa, por cuanto dichos

<sup>318</sup> Artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

<sup>319</sup> “Artículo 8 prescribía: se considera que una persona ejerce el ministerio de un culto cuando ejecuta actos que las reglas de cada credo religioso reservan a determinadas personas, investidas de carácter sacerdotal, ya sea este temporal o permanente”.

<sup>320</sup> “En el artículo 27 I-a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se previene que: “la denominación y el emblema (de los partidos políticos) estarán exentos de alusiones religiosas o raciales”. En prácticamente todos los países del mundo occidental y algunos de África y Asia, existen partidos, agrupaciones y movimientos políticos que ostentan la denominación de “demócrata-cristianos” o “social-cristianos”, varios de ellos actualmente en el poder, que de ninguna manera pueden catalogarse como partidos confesiones, aunque se inspiren en los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Quizás México sea el único país en el que se prohíba a las organizaciones políticas esta denominación o cualquiera otra de similar naturaleza”.

ilícitos se encuentran ya tipificados y sancionados en el Código Penal Federal y en la ley que contempla el escudo, la bandera y el himno nacional.<sup>321</sup>

El nuevo texto del artículo 130 mantiene y extiende las limitaciones a los ministros de culto en su capacidad para heredar. Es decir, los ministros están impedidos para heredar por testamento en términos absolutos. El motivo de esta restricción es una sospecha en el sentido de que el ministro de culto puede presionar y/o inducir al testador a que lo designare heredero.

En resumen, la reforma constitucional reconoce la personalidad jurídica como *Asociaciones Religiosas a las Iglesias* y a las agrupaciones religiosas que obtengan su registro. Se reconoce su autonomía. Mexicanos y extranjeros pueden ejercer el culto. Los primeros tendrán derecho a votar y a ser votados cuando hubiesen dejado su ministerio con anticipación. Se reafirma la prohibición de asociarse con fines políticos ni hacer proselitismo político. Tampoco podrán oponerse a las leyes del país o de sus instituciones ni agraviar los símbolos patrios. Se reafirma la prohibición de formar agrupaciones políticas cuyo título tenga alusiones a confesiones religiosas, así como la de celebrar reuniones política en los templos. El matrimonio religioso no tiene en México ninguna validez jurídica.

---

<sup>321</sup> Al respecto el Código Penal para el DF en materia común y para toda la república en materia Federal, en el artículo 191, prescribe que: “al que ultraje el escudo de la república o el pabellón nacional ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de 6 meses a 4 años de prisión o multa de 50 a 3 mil pesos o ambas sanciones a juicio de juez” y, el artículo 192 del mismo ordenamiento dice: “al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacional, se le aplicará de 3 día a un año de prisión y una multa de 25 mil pesos”. Por su parte, la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional publicada en el DOF el 8 de febrero de 1984, en su artículo 56 establece lo siguiente: “las contravenciones a la presente ley que no constituyan delito conforme a lo previsto a la norma federal,(...) pero que impliquen desacato o falta de respeto a los símbolos patrios, se castigarán según la gravedad y la condición del infractor, con una multa hasta por el equivalente a 250 veces el salario mínimo o con arresto hasta por 36 horas. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a 1000 veces el salario mínimo”.

En esencia, se modificó el tratamiento otorgado a las iglesias y de más agrupaciones religiosas, naciendo el nuevo concepto de *Asociaciones Religiosas y ministros de culto*.<sup>322</sup>

### 3.9 LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO

Una ley reglamentaria, como es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, no puede cercenar ni menoscabar los derechos que confiere la ley que reglamenta, ley que en este caso es la Constitución en sus artículos 24, 27, fracción II, y 130; ni puede tampoco traspasar los límites que le marcan estos tres preceptos fundamentales. Si hiciera lo primero, sería una reglamentación *contra legem*; si hiciera lo segundo, sería una reglamentación *praeter legem*; y en uno u otro caso carecería de fundamento su eficacia obligatoria.<sup>323</sup>

#### a) *Antecedentes de la Ley.*

El nuevo texto del artículo 130, párrafo segundo de la Constitución, prevé la expedición de una Ley Reglamentaria en materia de culto público, de Iglesias y agrupaciones religiosas, la cual será facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Es decir, será de carácter federal y de orden público y deberá desarrollar las disposiciones contenidas en los artículos 130, 24 y 27, fracciones I y II, y otorgar las facultades correspondientes a los tres niveles de autoridades: federales, de los estados y de los municipios, como ejecutoras de la ley.

---

<sup>322</sup> *La Constitución del pueblo mexicano*, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 3ª. edición, 2006, Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. p. 342

<sup>323</sup> SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. “La nueva legislación sobre Libertad Religiosa”, en: *Estudios Jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público... op. cit.*, pp. 29 y ss.

En junio de 1992 las fracciones parlamentarias de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y PARM, presentaron ante la Cámara de Diputados iniciativas de Ley Reglamentarias de las reformas constitucionales en materia religiosa. Fueron turnadas para estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, la cual decidió formar un grupo plural de los partidos políticos a efecto de hacer el estudio y el análisis de las diferentes iniciativas.

El documento de trabajo que sirvió de base para el dictamen y proyecto fue la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional. Por a probación unánime de todos los partidos se decidió que la ley llevara el nombre de *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*; se consideró que dicha denominación se refiere a los objetos principales de regulación de la ley, a saber: la asociación religiosa y el culto público.<sup>324</sup>

El 7 de julio de 1992 se realizó una discusión general en que se reservaron para su discusión, en lo particular, diecinueve de los treinta y seis artículos que comprendía la ley. Fue aprobada por 328 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones.

El 8 de julio se inició el análisis en lo particular, aceptándose aún 14 modificaciones, 7 del PAN,<sup>325</sup> 2 del PRD, 2 del PFCRN, 2 del PARM y 1 del PRI. El único partido que no presentó propuestas fue el PPS, no obstante, formuló amplias consideraciones ante el pleno. Al final fue aprobado el proyecto de *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*. En lo particular, los artículos 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 22 fueron aprobados por cuatrocientos ocho votos en pro y diez en contra. Los artículos 1, 2, 16, 17 y 25 por trescientos cincuenta y tres en

---

<sup>324</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico Mexicano*, ... *op. cit.*, p. 261

<sup>325</sup> Partido Acción Nacional, PAN; Partido de la Revolución Democrática, PRD; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PFCRN; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM; Partido Revolucionario Institucional, PRI; Partido Popular Socialista, PPS.

pro y sesenta y cinco en contra. Por último, los artículos 12, 21, 23, 25, 29 y 32 se aprobaron por cuatrocientos ocho votos a favor y diez en contra.

Posteriormente el Senado de la República turnó a la Comisión de Gobernación, misma que después de realizar un examen acucioso de cada una de las disposiciones y habiendo coincidido con las apreciaciones de la colegisladora, presentó su dictamen, el cual fue aprobado por cuarenta y siete votos a favor y uno en contra.<sup>326</sup>

De esta manera, la LV Legislatura del Congreso de la Unión lograba no sólo una reforma constitucional histórica por su contenido al garantizar las libertades religiosas, sino también una ley reglamentaria que volvía aplicable la norma y regulaba de manera pormenorizada todo lo relacionado con la materia. En síntesis, una ley que representaba todo un acontecimiento jurídico y político no sólo por su alcance sustantivo sino también por el consenso que la sustentaba.<sup>327</sup>

## **b) La Ley**

El 15 de julio de 1992 el *Diario Oficial de la Federación* publicó la *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público* que entró en vigor el día siguiente. Es ley reglamentaria de los artículos constitucionales que se refieren a la libertad religiosa (artículos 3º, 5º y 24) y a las relaciones entre el Estado y las iglesias (artículos 27 y 130) que habían sido previamente reformados, por decreto publicado en el *Diario Oficial* el 28 de enero de 1992.

---

<sup>326</sup> LAMADRID SAUZA, José Luís. *La larga marcha a la modernidad en materia religiosa*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 201.

<sup>327</sup> RUÍZ MASSIEU, José Francisco. *Una Ley para la libertad religiosa*, México, Diana, 1992, p. 39.

La ley consta de 36 artículos ordinarios y siete transitorios. Está dividida en cinco títulos que llevan las siguientes rúbricas:

- I. *Disposiciones generales* (artículos 1° - 5°),
- II. *De las asociaciones religiosas* (artículos 6° - 20),
- III. *De los actos religiosos de culto público* (artículos 21 - 24),
- IV. *De las autoridades* (artículos 25 - 28) y
- V. *De las infracciones y sanciones y del recurso de revisión* (artículos 29-36).<sup>328</sup>

Su materia es principalmente, como lo dice su título, el culto público y las asociaciones religiosas, pero también se refiere, en el título primero, al contenido de la libertad religiosa. Como se puede apreciar, la parte más voluminosa es la relativa a las asociaciones religiosas.<sup>329</sup> Se trata de una ley reglamentaria de preceptos constitucionales, por lo que tiene una jerarquía mayor que otras leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Es además una ley de orden público y de observancia general en todo el país.

Sus disposiciones deberán ser desarrolladas por medio de uno o varios reglamentos que expida el presidente de la República. La ley menciona que deberán desarrollarse las disposiciones relativas a la libertad religiosa (artículo 2°-C), los derechos de las asociaciones religiosas (artículo 9°), los actos de culto público fuera de los templos (artículo 21) y las infracciones a la ley (artículo 29). Pero podrán y deberán desarrollarse otras más, como los requisitos para obtener el registro de asociación religiosa, el contenido del derecho de libertad religiosa, especialmente en lo relativo a practicar la fe religiosa en forma individual o

---

<sup>328</sup> ADAME GODDARD, Jorge. *Estudios sobre Política y Religión*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 120, 1ª edición, México, 2008, pp. 206-207

<sup>329</sup> Se trata de una de las leyes “emanadas de la Constitución”, que de acuerdo con el artículo 133 constitucional, constituye junto con la Constitución y los tratados la “ley suprema” del país. La Suprema Corte de Justicia ha sentado jurisprudencia en el sentido de que estas leyes “emanadas” de la Constitución a las que se refiere el artículo 133, son las leyes reglamentarias de preceptos constitucionales.

colectiva, sobre todo en circunstancias especiales, como en hospitales públicos, cárceles, campamentos o cuarteles militares, y otras más.

### ***c) Principios de la Ley.***

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se funda en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como la libertad de creencias religiosas.<sup>330</sup>

- **Separación entre el Estado y las Iglesias**

El principio *Separación entre Estado y las Iglesias* se encuentra establecido en el artículo 1º de dicha ley, pues señala *La presente ley se funda en el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias (...)*. Éste, parece ser el principio toral e inspirador de la legislación. Antes, se hablaba solo de la Iglesia en singular, en referencia clara a la Iglesia Católica, hoy se utiliza el término Iglesias (a partir de este momento se utilizará como tal). Por otro lado, señala que el principio es “histórico”, lo que quiere decir que existía antes de la expedición de esta nueva ley.<sup>331</sup>

Se sujeta a las Iglesias a las disposiciones que fije la ley. De esta manera, separación no es igualación, sino acotamiento de las actuaciones públicas de las Iglesias con respecto a la esfera de acción estatal. Así las cosas, se considera el principio de separación del Estado y las Iglesias como sustentador y fundante del

---

<sup>330</sup> Artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARyCP)

<sup>331</sup> La exposición de motivos de la iniciativa de reforma señala: “el Estado no niega las etapas históricas previas que lo constituyen y explican; las desentraña. Y retoma de ellas lo esencial (...)”. De igual manera expresa: “el peso eclesiástico en la vida política y económica, obligó al Estado nacional a consolidarse bajo el signo de laicismo (...) La separación de entre el Estado y la Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX, principio básico del esfuerzo liberal, no buscó perseguir creencias o eliminar convicciones, sino asegurar la consolidación del Estado nacional y las libertades. El Estado, para consolidarse, necesitó desplazar todo poder que se ostentara alterno a él (...)”.



Estado mexicano, como consecuencia del triunfo de este último sobre la Iglesia Católica en el siglo XIX. En la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos del 12 de julio de 1859, el artículo 3 establecía *Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos*. En la ley Lerdo del 25 de septiembre de 1873, en su artículo 1° se señala *el Estado y la Iglesia son independientes entre sí*.

- **La libertad de creencias religiosas.**

Este principio se encuentra también en el artículo 1° de la ley que se comenta y que señala:

*La presente ley se funda en (...) la libertad de creencias religiosas (...).*

Como se observa, el legislador utiliza el término *libertad de creencias religiosas* y no el empleado en la doctrina moderna y el derecho internacional que se refiere al *derecho a la Libertad Religiosa*. En el artículo 2 señala *el Estado mexicano garantiza a favor del individuo, los siguientes derechos y libertades en materia religiosa*:

*a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia;*

*b) No profesar creencias religiosas; abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una Asociación Religiosa;*

*c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en éste y los demás ordenamientos aplicables;*

*d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, Iglesia o cualquier agrupación religiosa;*

*e) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativo por la manifestación de ideas religiosas y, asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos.*

El artículo 1, párrafo II expresa: (...) *las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes.*

### **3.10 REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO**

Se hacía necesario entonces tratar de terminar el proyecto de reformas que en materia de libertad religiosa se habían iniciado en 1992. El producto final fue la aparición del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de la que trata este trabajo.<sup>332</sup>

---

<sup>332</sup> VIVEROS, Carolina. “La Asistencia Religiosa en el reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”, en: *El reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, Saldaña, Javier. (coordinador), Secretaría de Gobernación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 82, México, 2005, pp. 171-174

El reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público tiene sus antecedentes en los artículos 9, 27 y 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, pues dichos numerales establecen:

*Artículo 9º.- Las Asociaciones Religiosas tendrán derecho en los términos de esta ley y su Reglamento (...).*

*Artículo 27.- (...) las autoridades municipales y estatales recibirán los avisos... en los términos de esta ley y su Reglamento (...).*

*Artículo 30.- La aplicación de sanciones previstas en esta ley, se sujetará al siguiente procedimiento:*

*I. El órgano sancionador será (...) conforme lo señala el Reglamento (...).*

El reglamento,<sup>333</sup> consta de 50 artículos ordinarios y un transitorio. Se expide el 3 de noviembre de 2003 por el Poder Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quezada. Como se podrá observar, el reglamento fue expedido 11 años después de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Con el fin de dar una idea general para la elaboración del reglamento, señalaremos de manera esquemática el capitulado que lo integra. Consigna 5 Títulos y 10 Capítulos:

**Título I.** Del ámbito de aplicación y disposiciones generales.

**Título II.** De las Asociaciones Religiosas y su régimen patrimonial.

---

<sup>333</sup>Publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, Tomo DCII, No. 4, México D.F., 6 de noviembre de 2003, Presidente Vicente Fox Quezada.

Capítulo I.- De la solicitud de registro constitutivo

Capítulo II.- De la organización interna

Capítulo II.- Del régimen patrimonial

**Título III.** Del culto público.

Capítulo I. De la celebración de los actos de culto público.

Capítulo II. De las transmisiones a través de medios masivos de comunicación no impresos.

**Título IV.** De las autoridades.

Capítulo I. De las atribuciones y responsabilidades de las autoridades.

Capítulo II. Del órgano sancionador.

**Título V.** De los procedimientos de conciliación y de arbitraje y del recurso de revisión.

Capítulo I. De las disposiciones comunes a los procedimientos de conciliación y arbitraje.

Capítulo II. Del procedimiento de conciliación.

Capítulo III. Del procedimiento de arbitraje y del recurso de revisión.

No obstante la tardanza con que se expidió dicho Reglamento, no complementó muchos rubros de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Realmente no lo hizo, pues se considera que se dejaron muchos temas que no se abordaron, que se omitieron voluntariamente o se dejaron inconclusos porque así se quiso, y otros que ni siquiera fueron objeto de reflexión como el caso de las cuestiones fiscales de las asociaciones religiosas y ministros de culto. De la misma forma, tampoco se abordó a plenitud la asistencia religiosa entre otros.

Sin embargo, el nuevo marco jurídico en materia religiosa constituye un gran esfuerzo de consenso para lograr una relación más abierta y democrática con las Iglesias; para construir un espacio plural que, basado en la tolerancia y la transparencia, garantice el pleno desarrollo de las libertades religiosas.

El Estado y la sociedad necesitan cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos. El México de hoy es distinto al de siglo XIX. No debemos temer al cambio. Nuestra existencia como nación es producto de cambios sucesivos (algunos, incluso, dolorosos). Aceptar los cambios y modernizar nuestro marco jurídico es la única manera como el país podrá enfrentar el nuevo milenio. Es necesario ser realistas y reconocer que la nueva normatividad es perfectible, pero que sólo la experiencia y los años nos dirán lo que, en su caso, debe ser modificado.<sup>334</sup>

### **3.11 LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA RELIGIOSA EN MÉXICO.**

La jurisprudencia, decía Ulpiano, es el conocimiento de las cosas humanas y divinas, la ciencia de lo justo y lo injusto. A esta concepción antigua siguió la clásica que la definió como: “el hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y aplicarlas oportunamente a las cosas que ocurren”.

La jurisprudencia hoy día es la interpretación que hacen los tribunales competentes al aplicar la ley a los supuestos de conflicto que se someten a su conocimiento. El valor varía de un país a otro. En el caso de México, es la interpretación de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria que emana

---

<sup>334</sup> GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José Antonio. “Génesis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”, en: *Estudios Jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G: Estudios Doctrinales, Núm. 160, UNAM, Secretaría de Gobernación, 1ª edición, México 1994, pp. 56-57

de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o por salas, o por los Tribunales Colegiados de Circuito.<sup>335</sup>

La Suprema Corte de Justicia de la Nación la define como:

*Una fuente del derecho derivada de la interpretación constitucional y legal que, con fuerza obligatoria crean determinados órganos jurisdiccionales al resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción con el propósito de fijar el correcto sentido y alcance de las normas jurídicas y adecuar su contenido a la dinámica de la vida en sociedad, a fin de mantener la seguridad jurídica en las esferas pública y privada.*<sup>336</sup>

La jurisprudencia implica necesariamente la existencia de un procedimiento judicial sometido al conocimiento del juzgador, buscando la solución justa de los conflictos. Subsana las deficiencias legislativas en la elaboración de la norma.

En lo referente a la actividad jurisprudencial en materia religiosa, esta ha sido escasa. La jurisprudencia que se elaboró entre 1917 y antes de las reformas de 1992 es exigua y la que se realizó por mayoría de razón ha quedado sin efecto a partir de las reformas constitucionales de 28 de enero de 1992. Después de las reformas la Suprema Corte en relación con la problemática del fenómeno religioso ha asentado en algunas tesis criterios jurisprudenciales que tienen que ver con: “el culto público”, “los ministros de culto”, “el interés jurídico para la adquisición de bienes inmuebles”, “la libertad religiosa”, “la representación de las asociaciones religiosas” entre otras, a las que hacemos referencia en esta investigación en los temas respectivos.

---

<sup>335</sup> Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, UNAM, décima edición, México, 1997, pp. 1891-1892

<sup>336</sup> Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia. Su integración, México, 2004, pp. 19 y 20.

Comparto la opinión de aquellos que señalan que en México no existe una tradición de desarrollo del derecho por la vía de la jurisprudencia, por lo cual es difícil que de manera pronta pueda existir una evolución del Derecho Fundamental de Libertad Religiosa por esta vía.

Es válido señalar que a partir de las reformas de 1992 no han existido modificaciones sustantivas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, no obstante que se advierte la necesidad de hacerlo, pues muchos temas han quedado pendientes, tampoco se pueden ignorar como hasta ahora lo señalado por los instrumentos internacionales sobre la materia.

## **CAPÍTULO IV**

---

---

# **RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO EN MÉXICO**



## **CAPÍTULO IV**

### **RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO EN MÉXICO**

#### **4.1. CONSIDERACIONES GENERALES**

Al estudiar el régimen jurídico de las Asociaciones Religiosas es necesario tener en cuenta que son instituciones del derecho mexicano. Son entidades con personalidad para el ordenamiento jurídico del Estado y que existen conforme a las leyes del país. Hay que clarificar este hecho porque puede confundirse con frecuencia el régimen jurídico que reconoce el Estado con el que las instituciones religiosas tienen conforme a su derecho propio o conforme a otros órdenes jurídicos de otros estados.

En un Estado soberano sólo lo rigen las normas jurídicas expedidas por dicho Estado: es una característica elemental de la soberanía sin la cual éste no existe. Por tanto, en México no rigen las normas de otros estados, tampoco canónicas ni de ninguna otra confesión religiosa.

Es indebido por tanto, el pensar que el Estado mexicano al reconocer la personalidad jurídica de una Iglesia o confesión religiosa, reconoce validez a un derecho interno de dicha Iglesia. Por ejemplo, al otorgar personalidad jurídica a la Iglesia Católica en México como Asociación Religiosa, el Estado no está homologando el derecho canónico, el cual sigue sin tener ninguna vigencia en el orden jurídico mexicano.<sup>337</sup>

---

<sup>337</sup> PACHECO ESCOBEDO, Alberto. "Régimen Jurídico de las Asociaciones Religiosas en el Derecho Mexicano", en: *Estudios Jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G, Estudios Doctrinales, Núm. 160, UNAM, SEGOB, 1ª edición, 1994, México. pp. 71-72

Como ya lo señalamos, la *Asociación Religiosa* es una nueva figura jurídica creada por las reformas constitucionales. El régimen jurídico de las entidades religiosas en un estado de derecho democrático aspira al libre ejercicio de la libertad religiosa y demás libertades públicas.<sup>338</sup> La adquisición de personalidad jurídica como consecuencia del registro constitutivo como asociación religiosa inserta a estas entidades religiosas en el ordenamiento del Estado pero conservando su estructura su identidad y su carácter propio.<sup>339</sup>

El artículo 130 constitucional establece que en el país pueden operar Iglesias o agrupaciones religiosas, pero que si quieren tener personalidad jurídica deben constituirse como *Asociaciones Religiosas*. Las Iglesias y agrupaciones religiosas, por consiguiente, no tienen obligación de constituirse como asociaciones religiosas, sino sólo la posibilidad de hacerlo si quieren operar con una personalidad jurídica específica.

#### ***a) Naturaleza de las Asociaciones Religiosas***

Las Asociaciones Religiosas son sociedades que tienen por objeto la *observancia, práctica, propagación o instrucción de una doctrina religiosa o de un cuerpo de creencias religiosas*.<sup>340</sup> Su fin es lo que las distingue de otras asociaciones y lo que justifica, por la incidencia social tan grande que tiene el factor religioso en la población, que tengan un tratamiento diferente del que tienen asociaciones con fines culturales o educativos.

Su naturaleza religiosa es lo esencial de ellas. Por lo que la ley prohíbe que se dediquen a la consecución de fines de lucro o preponderantemente

---

<sup>338</sup> LÓPEZ ALARCÓN, Mariano. "Entidades religiosas", en: *Derecho Eclesiástico del Estado Español*. 3a. edición, Pamplona, Eunsa, 1993, p. 291

<sup>339</sup> *Ibidem*, pp. 291 y 292

<sup>340</sup> Artículo 7º, Fracción I de la *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público* (En lo sucesivo "Ley").

económicos.<sup>341</sup> Está claro que si una asociación religiosa se dedicara a actividades mercantiles, no sería en realidad una asociación religiosa, sino una sociedad mercantil y tendría que estar sujeta a las leyes que rigen este tipo de sociedades. Pero es también claro que la prohibición no excluye que las Asociaciones Religiosas pueden obtener ganancias derivadas de la administración de sus bienes que podrán destinar a la consecución de sus fines religiosos. Lo que la ley prohíbe a las Asociaciones Religiosas no es la realización de actos concretos que puedan generar una ganancia, sino la realización permanente de actividades mercantiles sin finalidades religiosas, es decir, lo que se prohíbe es la desnaturalización por cambio de fin de una asociación religiosa.

Consecuente con esta doctrina la ley<sup>342</sup> considera que es una infracción que las Asociaciones Religiosas se desvíen de sus fines, de modo que *pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza religiosa*. Es una medida prudente que protege al público de ciertas agrupaciones dizque religiosas.

Además de ser asociaciones de naturaleza religiosa son también de naturaleza pública, es decir, asociaciones cuyas finalidades son en beneficio del pueblo, y por consecuencia están regidas por una ley de *orden público*, como lo establece el artículo primero de la Ley y 130 constitucional. Que sean públicas no quiere decir que sean estatales o que sean parte de la administración pública, significa sólo que están orientadas al servicio de una finalidad que es de interés general para el pueblo.

---

<sup>341</sup> Artículo 8º, Fracción II

<sup>342</sup> Artículo 29-VIII

## ***b) Constitución de las Asociaciones Religiosas***

Las se constituyen y, por lo tanto, tendrán personalidad jurídica una vez que obtengan su registro ante la Secretaría de Gobernación.<sup>343</sup> La Secretaría podrá dar o denegar el registro. Contra la negativa de registro puede proceder el recurso de revisión ante la misma Secretaría.<sup>344</sup>

Para obtener el registro, una Iglesia o agrupación religiosa debe cumplir con los siguientes requisitos:<sup>345</sup>

a) Que tenga como finalidad principal la observancia, práctica, propagación o instrucción de una doctrina religiosa.

b) Que demuestre haber realizado actividades religiosas en la república mexicana por un mínimo de cinco años, que cuenta con *notorio arraigo entre la población* y que establezca su domicilio en la república. Este requisito en realidad implica tres: realizar actividades religiosas por cinco años y tener domicilio en el país, son hechos que pueden demostrarse fácilmente. Pero el tener *notorio arraigo entre la población* es algo que debe ser evaluado por la propia Secretaría de Gobernación, para lo cual, podrá servirse de datos como los siguientes: número de fieles mayores de edad, de templos, incidencia de su prédica, etcétera. Pero en todo caso, quedará a su juicio determinar si tiene no sólo arraigo, sino *notorio arraigo*. Se trata, por tanto, de un requisito que deja abierta la posibilidad de que la Secretaría decida caso por caso, con cierta libertad, si da o niega el registro.

---

<sup>343</sup> Artículo 130, inciso a) Constitucional y artículo 6º de la Ley

<sup>344</sup> Artículo 33 de la Ley.

<sup>345</sup> Artículo 7º, *Ibidem*.

c) Que aporte bienes suficientes para cumplir con su objeto. Se entiende que se trata de aportar bienes que le permitan desarrollar actividades tendientes a sus finalidades. Para adquirir cualquier inmueble, tiene que contar con previa autorización de la Secretaría de Gobernación, emitida en la forma de *declaratoria de procedencia*, es decir, una declaración de que es procedente y conforme a la ley.<sup>346</sup> También se necesita autorización cuando se aportan bienes inmuebles para constituir una asociación religiosa.<sup>347</sup> La ley dice que cuando se pretenda aportar bienes inmuebles al patrimonio inicial se deberá presentar junto con la solicitud de registro una declaración de tales bienes, de modo que la Secretaría de Gobernación pueda emitir en el plazo de seis meses posteriores a la fecha de registro una *declaratoria general de procedencia* para la adquisición de los mismos. Esto permite a la Secretaría aprobar el registro y adquisición de bienes.

d) Presentar estatutos que contengan lo siguiente.<sup>348</sup>

1) las bases fundamentales de su doctrina;

2) y el nombre de sus representantes y/o de las entidades y divisiones internas o ámbitos regionales.

Como se observa, el contenido de estatutos es mínimo. Nada dice acerca del contenido que todo estatuto social debe tener: las normas de organización, estructura y funcionamiento de la sociedad.

Conviene hacer notar que la ley exige que los estatutos determinen a los *representantes* de las asociaciones religiosas y no a sus directores. Los

---

<sup>346</sup> Artículos 16 y 17, *Ibidem*.

<sup>347</sup> Artículo 7º Transitorio, *Ibidem*.

<sup>348</sup> Artículo 6º, párrafo II, *Ibidem*.

representantes, en el derecho de sociedades en general, pueden ser los directivos o pueden ser personas que no tienen cargos directivos, o incluso que no son socias de la sociedad que representan, por lo tanto los representantes<sup>349</sup> de las no tienen que ser directores o autoridades, ni siquiera *ministros de culto*, sino sólo cumplir con la condición de ser mexicano y mayor de edad, y que su función sea de representar a las asociaciones ante las autoridades civiles y, especialmente, ante la Secretaría de Gobernación.

### ***c) Funcionamiento de las Asociaciones Religiosas***

La vida de las Asociaciones Religiosas está regida por los principios fundamentales, que se establece en la Constitución y su Ley Reglamentaria.

a) Deberán actuar con apego a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y respetar las instituciones del país.<sup>350</sup> Esto es un principio no sólo para este tipo de asociaciones, sino para cualquier persona física o moral que viva dentro de un Estado de Derecho.

b) Tendrán autonomía plena. Las autoridades civiles no intervendrán en la vida interna de las Asociaciones Religiosas.<sup>351</sup> Lo cual significa que no intervendrán en su funcionamiento, organización, elección de autoridades, administración de bienes, formación y designación de ministros de culto, etcétera. Se regirán internamente por sus propios estatutos.<sup>352</sup>

---

<sup>349</sup> ¿Qué es pues lo que entiende la Ley cuando habla de “representantes”? La Ley señala en su artículo 11 que: “los representantes de las Asociaciones Religiosas deberán ser mexicanos y mayores de edad y acreditarse con dicho carácter ante las autoridades correspondientes”.

<sup>350</sup> Artículo 130 constitucional “(...) las Iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la Ley”; Primer párrafo, Artículo 8 fracción I de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, “Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y respetar las instituciones del país”.

<sup>351</sup> Artículo 130, inciso b) de la *Constitución*

<sup>352</sup> Artículo 6º, párrafo II, *Ibidem*.

**c)** Tendrán derecho a<sup>353</sup> una denominación exclusiva; organizarse libremente en sus estructuras; designar y formar libremente a sus propios ministros; realizar actos de culto público y tener templos; propagar su doctrina; celebrar todo tipo de actos jurídicos para el cumplimiento de su objeto; participar en la constitución, funcionamiento y administración de instituciones de asistencia privada, de instituciones educativas o de instituciones de salud; y usar, en forma exclusiva, los templos que sean propiedad de la nación.

**d)** Se les prohíbe la formación de toda clase de agrupaciones políticas. También celebrar en los templos reuniones de carácter político. Así como la capacidad para heredar por testamento de las personas a quienes hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.<sup>354</sup>

**e)** Deberán de abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos. Se entiende que esta obligación comprende la de perseguir sistemáticamente fines de lucro o preponderantemente económicos y no necesariamente la de abstenerse de realizar cualquier acto del que pueda derivarse una ganancia, la cual deberá ser aplicada a la consecución de los fines propios de la asociación.

**f)** Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país.<sup>355</sup>

---

<sup>353</sup> Artículo 9, *Ibidem*.

<sup>354</sup> Artículo 130, inciso e) párrafo II de la Constitución de 1917 (Vigente).

<sup>355</sup> Artículo 8, fracción III de la Ley

**d) Sus miembros.**

La ley distingue entre tres tipos de personas integrantes de las Asociaciones Religiosas: los asociados, los representantes y los ministros de culto.

**a) Los asociados:** la ley define quiénes *Son asociados los mayores de edad, que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos de la asociación.*<sup>356</sup> Pero esta definición sólo se toma en cuenta, para los efectos del registro de la asociación.

No queda claro qué pretende la ley al determinar que *para los efectos del registro*, toda vez que la Ley no exige para el registro de una asociación religiosa que tenga un determinado número de *asociados*, exige que se tenga *arraigo*. Esto puede significar, como se dijo arriba, que cuente con un importante número de fieles.

**b) Los representantes:** Son aquellas personas que cumplen los requisitos de ser mexicanos, mayores de edad y que están acreditados como tales ante las autoridades correspondientes.<sup>357</sup> La ley señala que en los estatutos que presentan las agrupaciones e Iglesias al momento de solicitar su registro deben determinar quiénes son sus representantes,<sup>358</sup> o sea, que se entiende que deben de estar acreditados como representantes al registro de los estatutos.

Pero esto no impide que con posterioridad al registro de la asociación puedan acreditar otros representantes, por ejemplo, para suplir a los que hubieran dimitido o fallecido.

---

<sup>356</sup> Artículo 11, primer párrafo, *Ibidem*.

<sup>357</sup> Artículo 11, segundo párrafo, *Ibidem*.

<sup>358</sup> Artículo 6º, párrafo II, *Ibidem*



Para la ley son *representantes* no necesariamente los directores o funcionarios de las asociaciones religiosas, sino exclusivamente los acreditados ante las autoridades mexicanas.

**c) Los ministros de culto:** son aquellas personas mayores de edad, no necesariamente mexicanos, a quienes las *Asociaciones Religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter*.<sup>359</sup> Es decir, a quienes consideren como tales. Las Asociaciones Religiosas tienen obligación de notificar a la Secretaría de Gobernación quiénes son sus ministros de culto y, en caso de no hacerlo, se tendrán como ministros de culto, con todas sus limitaciones legales, a las personas que tengan como *principal ocupación* la dirección, representación u organización de la asociación religiosa.

Que la Secretaría de Gobernación quiera saber quiénes son ministros de culto es una exigencia razonable fundada en el cuidado del orden público. Se tiene que asegurar que son personas que efectivamente son ministros de culto y no impostores. La necesidad de conocimiento público de quienes son ministros de culto está también previsto en la Iglesia Católica,<sup>360</sup> que prescribe: los clérigos vistán *un traje eclesiástico* a fin de que puedan distinguirse de los fieles comunes.

Las asociaciones también deberán de informar quiénes dejan de ser ministros de culto<sup>361</sup> dentro de los 30 días siguientes al de la fecha de su dimisión. Según una interpretación literal, esa persona ha dejado de ser ministro de culto para los efectos de la ley y ha quedado libre de las limitaciones que impone la misma.

---

<sup>359</sup> Artículo 12, *Ibidem*

<sup>360</sup> Canon 284, Código de Derecho Canónico

<sup>361</sup> Artículo 14, párrafo final de la Ley

En consideración al estado peculiar de los ministros de culto y a su influjo en la vida social, la Constitución les ha establecido ciertas limitaciones en sus derechos políticos y civiles que veremos en el capítulo correspondiente.

## 4.2. EL CULTO PÚBLICO

La libertad de culto es una de las manifestaciones típicas de la religión, pero esta no se agota en las prácticas de culto. El culto puede definirse como: *el conjunto de actos y ceremonias con los que el hombre tributa homenaje al Ser Supremo o a personas o cosas tenidas por sagradas en una determinada religión y que por lo tanto, la identifican. Por consiguiente, la libertad de culto comprende la práctica individual y colectiva de esos actos y ceremonias prescritas en el ceno de una Iglesia o comunidad religiosa.*<sup>362</sup>

La libertad de culto comprende también el derecho de respetar las festividades propias de la religión o, lo que es lo mismo, a no trabajar en aquellos días o fechas que cada confesión ha decidido consagrar de modo exclusivo a la divinidad.<sup>363</sup> En consecuencia cada individuo, de acuerdo a su propia religión o creencia, debería de tener el derecho de los demás a respetar las propias festividades, aunque para el otro u otros fueran festividades no propias.

La libertad del culto externo. Sin duda, existe una distinción entre libertad religiosa y libertad de culto. La primera pertenece a la conciencia individual mientras que la segunda es la práctica de la libertad religiosa, y en consecuencia ésta debe ser supervisada por la autoridad por incidir en el ámbito del orden público.

---

<sup>362</sup> PRIETO SANCHÍS, “El Derecho Fundamental de Libertad Religiosa”, en: *Lecciones de Derecho Eclesiástico*, 2da. edición, Editorial Tecnos, S.A. 1990, pp. 147-148

<sup>363</sup> *Ibidem*. p. 150

Los actos religiosos del culto público se encuentran regulados por el artículo 24 constitucional y por los artículos 2, 22, 23 y 24 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, además de los artículos 27, 28 y 29 del reglamento respectivo.

Las normas constitucionales señalan *Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.*<sup>364</sup>

En principio, tendríamos que saber que se entiende por *culto público*. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial dictada por la Primera Sala en Materia Constitucional, un acto de culto público es aquél al que concurren o pueden concurrir, o aquél en el que participan o pueden participar personas de todas clases, sin distinción alguna.<sup>365</sup> De igual manera, en la tesis jurisprudencial<sup>366</sup> dictada por la Segunda Sala en Materia Administrativa

---

<sup>364</sup> *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, párrafo III.

<sup>365</sup> CULTO PÚBLICO. Según el diccionario de la Real Academia Española, la voz pública significa: “perteneciente a todo el pueblo. Común del pueblo o ciudad; así pues, un acto de culto público es aquel al que concurren o pueden concurrir o en que participan o pueden participar, personas de todas clases, sin distinción alguna. La doctrina jurídica atribuye al término público, igual connotación federal vigente, el de reglamentar los actos del culto religioso, de acuerdo con los principios consignados en la Ley de 14 de diciembre de 1874 y el decir, a la vista de todos, de dónde se infiere que empleó el calificativo público, con el mismo sentido que le asignan la interpretación gramatical y el uso corriente del lenguaje, forma en que también se empleó la citada voz del artículo 130 constitucional, y como las leyes secundarias no tienen otra misión que desarrollar los principio que sustenta la Constitución, sin contrariarlos, ni desvirtuarlos, es indudable que la expresión intimidad del hogar que contiene el artículo primero de la Ley del Reglamento del artículo 130 constitucional, debe entenderse de modo que sea amoldable a los principios constitucionales que rigen esta materia; así, un acto de culto religioso, celebrado dentro de una casa, aún cuando a él puedan concurrir extraños al dueño de la misma, no tiene el carácter de público, si los asistentes necesitan el consentimiento y la autorización expresa del dueño de la casa, para concurrir al acto. *Tomo XXVII. García José de Jesús A. p. 819. Instancia: Primera Sala fuente: Seminario Judicial de la Federación. 5ª Época*”.

<sup>366</sup> CULTO PÚBLICO (MISAS A DOMICILIO). Según lo establecido por el Artículo 10 de la Ley Reglamentaria del 130 de la Constitución Federal, **se entiende por culto público, la práctica de ceremonias religiosas de cualquier clase que sean, fuera de la intimidad del hogar**. Interpretando esta disposición contrario sensu, puede decirse que los actos de culto celebrados en domicilios particulares, no pueden considerarse como culto público, sino de privado. Por tanto, los presbíteros no están impedidos para decir misas a domicilio. *Amparo administrativo en revisión 8877/40. Duran Antonio. 9 de mayo de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Gabino Fraga. Relator: Octavio Mendoza González.*

se entiende por *culto público*, la práctica de ceremonias religiosas de cualquier clase que sean, fuera de la intimidad del hogar.

No obstante lo señalado, me parece que no se ha podido establecer un concepto exacto de lo que es culto público, pero se ha entendido como la manifestación de ideas religiosas en un lugar donde el público tenga libre acceso, es decir, a la vista de todos.

Del texto constitucional se desprende la existencia de cultos públicos ordinarios y extraordinarios: el *ordinario* es aquél que se celebra dentro de los templos mientras que el *extraordinario*, fuera de dichos recintos. Para celebrar estos últimos, las Asociaciones Religiosas deberán dar aviso por lo menos 15 días antes de la fecha en que se pretenda celebrar el acto, el cual deberá indicar el lugar, la fecha y la hora, así como el motivo por el que éste se pretende celebrar.<sup>367</sup>

Las autoridades podrán proteger la celebración solamente por razones de seguridad, de protección de la salud, de la moral, de la tranquilidad o el orden público, así como por la protección de derechos de terceros.

Las autoridades federales, estatales y municipales no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público ni actividad que tenga motivos o propósitos similares. Excepto a prácticas diplomáticas pero limitándose a la misión encomendada. Desde luego, se exceptúa al servidor público que asista a título personal a los actos religiosos de culto público.<sup>368</sup> En caso de incumplimiento por parte del servidor público, éste será sujeto de las responsabilidades y sanciones previstas en las leyes.<sup>369</sup>

---

<sup>367</sup> Artículo 22 de la Ley y Artículo 27 del Reglamento.

<sup>368</sup> Artículo 25, párrafo III de la Ley y 28 del Reglamento.

<sup>369</sup> Artículo 28, párrafo último del Reglamento.

Según la Dirección de Normatividad<sup>370</sup> de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, en marzo de 2009 se han celebrado 74 actos de culto público extraordinarios, es decir, fuera de los templos.

El aspecto externo de la libertad de religión no es un derecho absoluto pues tiene sus límites al igual que todos los demás derechos y libertades del individuo, límites que, según el artículo 29 de la Declaración Universal, imponen el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Por esta misma razón, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>371</sup> señala el carácter limitado de la libertad religiosa en sus manifestaciones al exterior, al establecer que se sujeta al orden público a la seguridad, la salud y derecho de los demás.

#### **4.3. CONCEPTO DE ASOCIACIÓN RELIGIOSA**

Con las reformas constitucionales en materia religiosa, sin duda, se crea un nuevo concepto: la figura jurídica de *Asociación Religiosa*.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su reglamento no la conceptualizan. Intentaremos formar un concepto básico de Asociación Religiosa. Pudiéramos decir, entonces, que es una estructura específica del

---

<sup>370</sup> Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Dirección General de Asociaciones Religiosas. Subdirección de la Unidad de Informática, Actualizado al 13 de Marzo de 2009

<sup>371</sup> Artículo 18, Párrafo III.

género de las sociedades que deben de adoptar aquellas confesiones religiosas que pretendan adquirir personalidad jurídica.<sup>372</sup>

De tal suerte y en consonancia con la Ley,<sup>373</sup> una Asociación Religiosa es aquella Iglesia o agrupación religiosa que dé cumplimiento a los siguientes requisitos:

- a) Que por un mínimo de 5 años realice preponderantemente actividades religiosas en la República Mexicana,
- b) Que cuente con estatutos que la rijan,
- c) Que cuente con bienes suficientes para cumplir con su objeto,
- d) Que obtenga su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.<sup>374</sup>

La definición de Asociaciones Religiosas es sumamente vaga porque en vez de que nuestras leyes reconozcan que las Iglesias son instituciones «*sui iuris*», es decir, de derecho propio, el gobierno constituye a las Iglesias como Asociaciones Religiosas, y entonces se crea una paradoja rarísima: la Iglesia Católica o la comunidad judía existen porque la Secretaría de Gobernación les da la autorización no por un ejercicio de reconocimiento de su existencia previa al reconocimiento legal.<sup>375</sup>

---

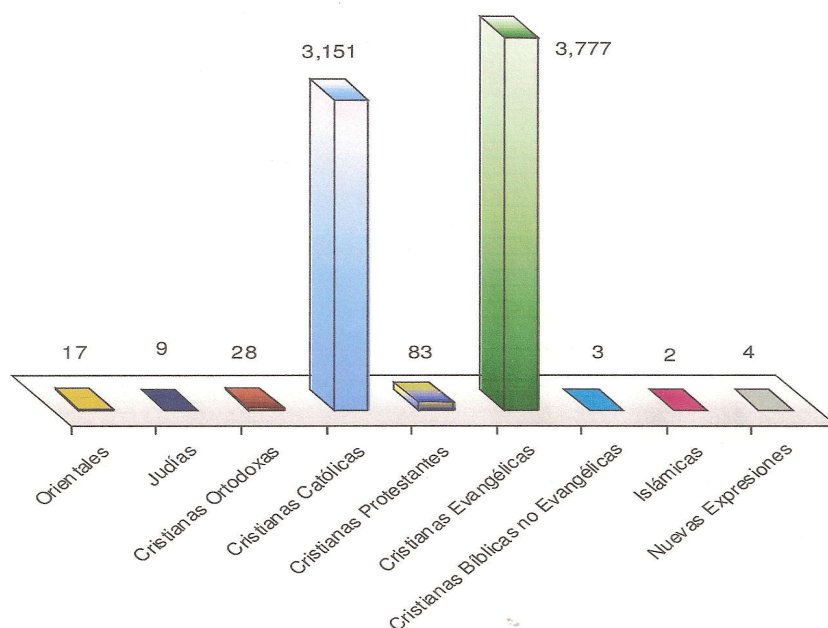
<sup>372</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico Mexicano...*, op. cit., p. 232

<sup>373</sup> Artículo 6 y 7 de la Ley.

<sup>374</sup> Indispensable para que la Ley le reconozca personalidad jurídica.

<sup>375</sup> Entrevista al Dr. Rodrigo Guerra, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, en <http://www.es.catholic.net/empresarioscatolicos/464/1622/articulo.php?id=23417>, 24 de marzo de 2009.

ASOCIACIONES  
RELIGIOSAS  
CONSTITUIDAS EN  
MÉXICO<sup>376</sup>



#### 4.4. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS

El régimen jurídico de los artículos se encuentra establecido en los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución que fueron motivados por las reformas de 1992, y de igual modo las leyes reglamentarias respectivas y sus propios reglamentos.

La Constitución establece que las Iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica una vez que se constituyan como Asociaciones Religiosas y obtengan su registro.<sup>377</sup> No reconoce una personalidad jurídica anterior.

La Ley Reglamentaria<sup>378</sup> añade un elemento interesante: el de las *entidades y divisiones internas* de una Asociación Religiosa pueden también tener

<sup>376</sup> Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Dirección General de Asociaciones Religiosas. Subdirección de la Unidad de Informática, Actualizado al 13 de Marzo de 2009

<sup>377</sup> Artículo 130 inciso a) de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* de 1917.

<sup>378</sup> Artículo 60. primer párrafo de la Ley.

personalidad jurídica. Esto significa que puede haber Asociaciones Religiosas con varias personas jurídicas que corresponden a las *entidades y divisiones internas* designadas por la propia asociación al momento de solicitar su registro.

En el campo de las Asociaciones Religiosas la posibilidad de que una asociación tenga varias personas jurídicas es la que evidentemente conviene a la Iglesia Católica, que internamente se concibe como una pluralidad de personas jurídicas.

La ley no determina con claridad la forma de llegar a constituir una Asociación Religiosa con varias personas jurídicas, sólo dice que las divisiones internas de una asociación podrán tener personalidad jurídica *en los términos de esta Ley*, por lo que es necesario interpretar lo que significa *los términos de esta Ley*. Está claro, tanto en la Constitución como en la ley, que la Asociación Religiosa tiene personalidad a partir del momento en que se registre.

El reconocimiento de personalidad jurídica a las Iglesias es un presupuesto necesario exigido para que sea real y efectiva la libertad religiosa. El hombre, por su misma naturaleza, tiene derecho de asociarse con otros para lograr fines lícitos y honestos y no hay razón para que ese derecho natural no pueda ejercerse en materia religiosa. Cuando el Estado reconoce personalidad a los entes religiosos está reconociendo uno más de los derechos humanos; en este caso, el derecho de todo hombre a reunirse con otros para practicar colectivamente sus creencias religiosas.<sup>379</sup>

---

<sup>379</sup> PACHECO ESCOBEDO, Alberto. "Régimen Jurídico de las Asociaciones Religiosas en el Derechos Mexicano", en: *Estudios Jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones...* op. cit. pp. 86-89



#### **4.5. RECONOCIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS: LA CALIFICACIÓN REGISTRAL**

De acuerdo a la norma fundamental<sup>380</sup> y a la Ley Reglamentaria, las Asociaciones Religiosas no tendrán reconocimiento y, por lo tanto, personalidad jurídica, si no obtienen su registro ante la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.

Las Iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como Asociaciones Religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro,<sup>381</sup> constitutivo ante la Secretaría de Gobernación en los términos de Ley.<sup>382</sup>

Los solicitantes del registro deberán acreditar que la iglesia o la agrupación religiosa:

Se ha ocupado, preponderantemente, de la observancia, práctica, de una doctrina religiosa por un mínimo de 5 años y cuenta con notorio arraigo entre la población, además de haber establecido su domicilio en la república; que aporta bienes suficientes para cumplir con su objeto; que cuenta con estatutos; y que ha cumplido, en su caso, lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 27 de la Constitución.<sup>383</sup>

El registro constitutivo se tramitará ante la Dirección General, la cual resolverá sobre la procedencia del mismo. Este trámite se debe realizar por conducto de sus representantes.<sup>384</sup>

---

<sup>380</sup> *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*

<sup>381</sup> Artículo 130, inciso a), *Ibidem*.

<sup>382</sup> Artículo 6 de la Ley.

<sup>383</sup> Artículo 7, *Ibidem*.

<sup>384</sup> Artículo 7 del Reglamento de la Ley

La solicitud de registro constitutivo deberá contener:<sup>385</sup> propuesta de denominación,<sup>386</sup> su domicilio,<sup>387</sup> la relación de bienes inmuebles que posee o administra y los que pretendan integrar al patrimonio de la asociación, estatutos, pruebas que acrediten el notorio arraigo entre la población,<sup>388</sup> aviso de apertura del templo, relación de representantes y asociados, así como dos ejemplares del escrito con firmas autógrafas donde se solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores la celebración del convenio a que se refiere la Fracción I del Artículo 27 constitucional y de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones.

Una vez integrada la solicitud de registro, la Dirección General mandará publicar un extracto de dicha solicitud en el Diario Oficial de la Federación.<sup>389</sup>

A ese registro se le denomina *constitutivo* en la ley, y quizá obedece al nuevo texto de la fracción II del artículo 27 de la misma, que otorga capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes a aquellas *Asociaciones Religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130*.

El registro no constituye a la entidad eclesiástica. Al Estado no le incumbe determinar cómo o cuándo se fundaron, sólo le interesa que existan. Por lo tanto, las iglesias y agrupaciones religiosas no se constituye por el registro, sino que ya existen. Las Asociaciones Religiosas son entidades de interés público, existentes y actuantes necesariamente antes del registro, y que gozan de personalidad propia; se rigen por sus propios estatutos, que formulan libremente; se registran para dar publicidad a los mismos y para adquirir personalidad en el orden

---

<sup>385</sup> Artículo 8, *Ibidem*.

<sup>386</sup> Que en ningún caso podrá ser igual a la de alguna Asociación Religiosa registrada.

<sup>387</sup> Que deberá estar dentro del territorio nacional.

<sup>388</sup> Testimoniales o documentales expedidas por las autoridades competentes; se entiende por notorio arraigo la practica ininterrumpida de una doctrina, cuerpo de creencias o actividades de carácter religioso por un grupo de personas, en algún inmuebles que bajo cualquier título utilice, posea o administre, en el cual sus miembros se hayan venido reuniendo regularmente para celebrar actos de culto público por un mínimo de 5 años anteriores a la solicitud de registro. Artículo 8 del Reglamento de la *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*.

<sup>389</sup> Artículo 10 del Reglamento de Ley.

jurídico mexicano, y que así se puedan producirse los demás efectos que la Ley señala.

El registro resulta necesario, no por ánimo de control del Estado, sino por protección de derechos de terceros.

Esto no quiere decir que no exista en sí misma, pues la misma ley habla de *asociaciones, agrupaciones religiosas, Iglesias* (artículo 1º) que *tendrán personalidad jurídica* por el registro, pero no que comienzan a existir como tales por dicho acto registral.

Es correcto llamar constitutivo al registro pues para nuestro derecho la personalidad comienza con el registro y, por tanto, la personalidad que adquieren y que antes no tenían, las constituye como personas jurídicas con posibilidad de actuar en el campo jurídico mexicano.

La Secretaría de Gobernación podrá denegar la solicitud de inscripción y por lo tanto el registro a las iglesias y agrupaciones religiosas que no acrediten cumplir las condiciones y requisitos establecidos por el artículo 130 constitucional<sup>390</sup> y artículos 7<sup>391</sup> y 8<sup>392</sup> de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. No hay que olvidar que corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de la Ley.<sup>393</sup> Si la Secretaría de Gobernación tiene la facultad para otorgar el registro constitutivo y

---

<sup>390</sup> Artículo 130. “(...) la Ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas (...)”.

<sup>391</sup> Artículo 7. “Los solicitantes del registro constitutivo (...) deberán acreditar (...) I. Que se han ocupado, preponderantemente, (...) de una doctrina religiosa. II. Realizado actividades religiosas (...) por un mínimo de 5 años y cuentan con notorio arraigo. III. Aportar bienes suficientes para cumplir su objeto. IV. Contar con estatutos.”

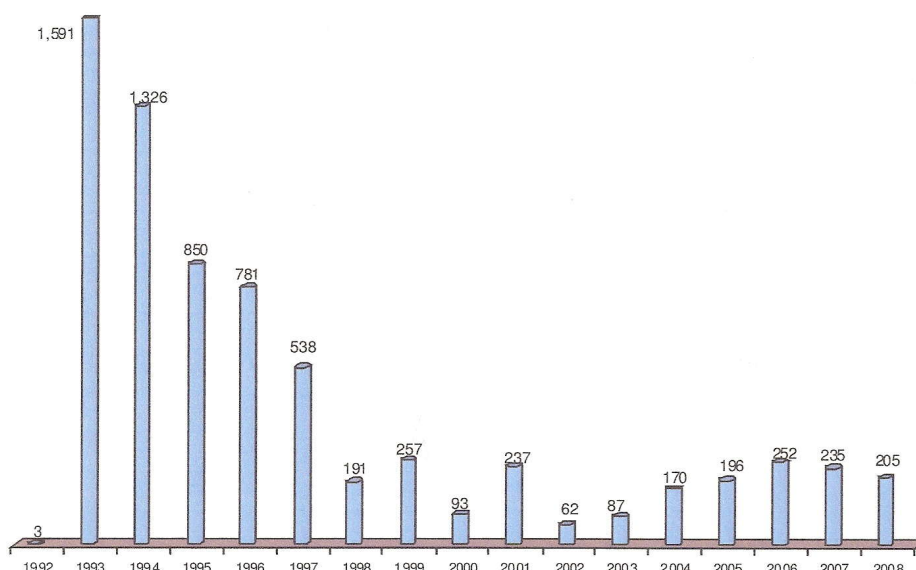
<sup>392</sup> Artículo 8. “Las Asociaciones Religiosas deberán: I Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanen (...). II. Abstenerse de perseguir fines de lucro (...). III. Respetar los cultos y doctrinas ajenos a su religión (...)”

<sup>393</sup> Artículo 25. “Corresponde al poder ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de gobernación la aplicación de esta Ley (...)”.

para la cancelación del registro de la asociación religiosa,<sup>394</sup> por mayoría de razón tiene facultades para denegar la inscripción cuando no se cumplan los extremos de la ley.

A mayor abundamiento, el Reglamento de la ley en el artículo 9 último párrafo<sup>395</sup> señala de forma clara y contundente que la Dirección General podrá resolver la improcedencia de la solicitud de registro, cuando no se subsanen los requisitos establecidos por la ley. Contra los actos o resoluciones dictados por las autoridades en cumplimiento de la norma podrá interponerse el recurso de revisión ante la misma autoridad. La resolución que se dicte podrá revocar, modificar o confirmar el acto recurrido. De estas resoluciones en caso de inconformidad conocerán los tribunales de la federación, pues la controversia se suscita por actos de una autoridad federal sobre la aplicación y cumplimiento de leyes federales.

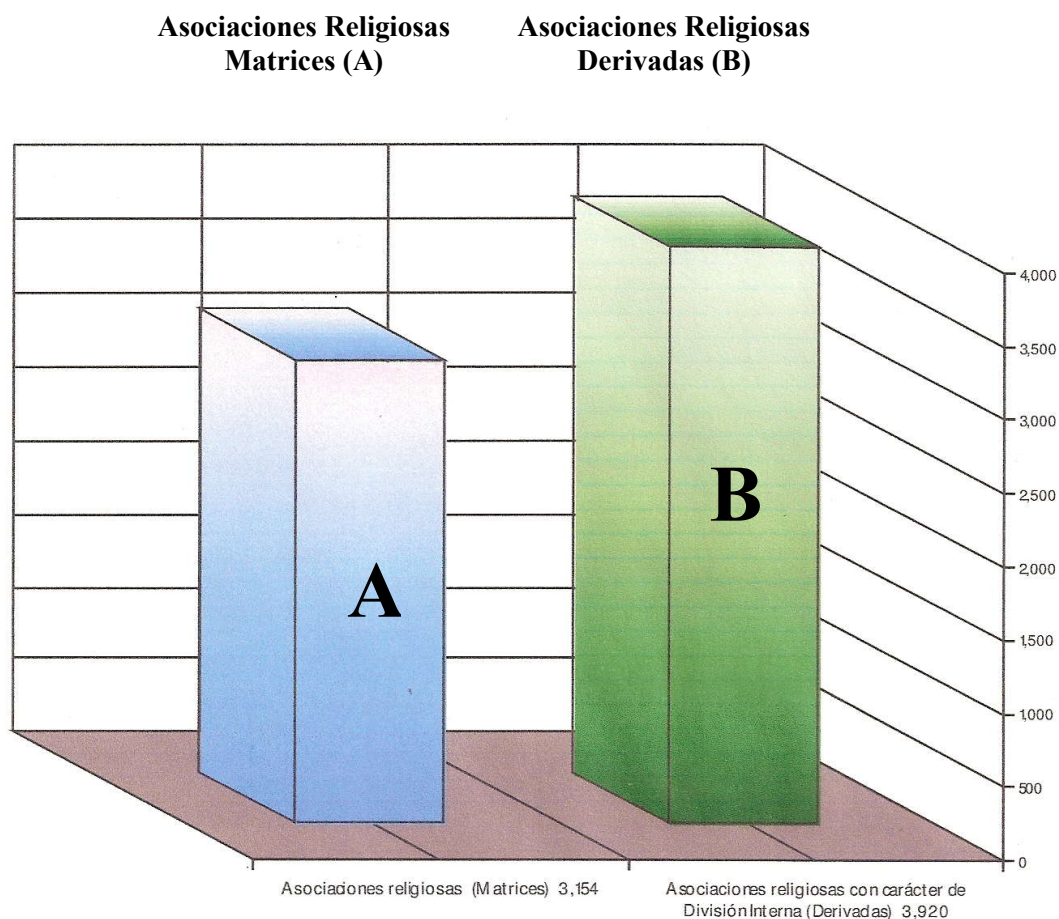
REGISTROS CONSTITUTIVOS ENTREGADOS POR AÑO<sup>396</sup>



<sup>394</sup> Artículo 32. “los infractores de la presente ley se les podrá imponer (...) V. Cancelación del registro de Asociación Religiosa (...).

<sup>395</sup> Artículo 9. “La dirección general analizará y verificará que la solicitud de registro constitutivo cumpla con los requisitos (...). En caso de que no se cumpla con dichos requisitos (...), prevendrá por una sola vez a la parte promovente para que subsane lo conducente (...). De no subsanarse (...) la dirección general podrá resolver la improcedencia de la solicitud de registro constitutivo”.

<sup>396</sup> Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Dirección General de Asociaciones Religiosas. Subdirección de la Unidad de Informática, TOTAL: 7, 074 Actualizado al 13 de Marzo de 2009



#### 4.6. LAS IGLESIAS Y AGRUPACIONES RELIGIOSAS NO REGISTRADAS

La Constitución General de la República<sup>397</sup> y su Ley Reglamentaria en materia de Libertad Religiosa<sup>398</sup> reconocen la existencia de Iglesias y agrupaciones religiosas. Tan es así, que por *no registrarse* no podrían constituyen una Asociación Religiosa con personalidad jurídica propia.

La ley no considera que esos grupos tengan obligación de registrarse, para su existencia puesto que ya existen. Tampoco prevé sanción alguna para el caso de que actúen sin registro. Pero previene que serán jurídicamente responsables las

<sup>397</sup> Artículo 130 primer párrafo “(...) las Iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la Ley”.

<sup>398</sup> Artículo 6, “Las Iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como Asociaciones Religiosas una vez que obtengan su registro (...)”. *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*

personas físicas o morales (es decir, asociaciones o sociedades) por medio de las cuales actúen.<sup>399</sup> Se trata de una situación semejante a la que tenían las Iglesias antes de las reformas constitucionales: existían en la sociedad y actuaban jurídicamente a través de *interpósitas personas*. La situación jurídica de esos grupos les es poco favorable: sólo tienen algunos de los derechos que la ley concede, tales como identificarse con una denominación exclusiva, organizarse libremente conforme sus estatutos y realizar actos de culto público y de difusión de su doctrina. Además, la ley presume que los representantes, directores u organizadores de estos grupos son ministros de culto. En consecuencia, tienen todas las limitaciones propias del no reconocimiento de la personalidad como las de formación del patrimonio.

La ley prevé que dichas agrupaciones o Iglesias pueden actuar de hecho por medio de personas morales, es decir, de asociaciones civiles. Por lo tanto, hace falta un criterio para determinar con claridad cuando una asociación civil es sólo eso, y cuando no es más que una *interpósita persona* de una agrupación religiosa o Iglesia no registrada.

Parece que el criterio decisivo es el de considerar que si sólo se trata de una asociación privada que intenta beneficiar exclusivamente a sus miembros, entonces es una asociación civil; o bien, se trata de una asociación con fines públicos que pretende propagar una doctrina religiosa entre el pueblo utilizando medios de comunicación masiva o practicar actos de culto público, es decir, en templos abiertos al público o en lugares públicos; entonces se trata de una

---

<sup>399</sup> Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: “Artículo 10.- Los actos que en las materias reguladas por esta ley lleven a cabo de manera habitual, personas, iglesias o agrupaciones religiosas sin contar con el registro constitutivo a que se refiere el artículo 6o, serán atribuidos a las personas físicas, o morales en su caso, las que estarán sujetas a las obligaciones establecidas en este ordenamiento. Tales iglesias y agrupaciones no tendrán los derechos a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 9o. de esta ley y las demás disposiciones aplicables. Las relaciones de trabajo entre las asociaciones religiosas y sus trabajadores se sujetarán a lo dispuesto por la legislación laboral aplicable”.

agrupación religiosa o Iglesia no registrada, aún cuando se presente aparentemente como una asociación civil con fines religiosos.

#### 4.7. ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Según la Ley Reglamentaria<sup>400</sup> en materia religiosa le está vedado a las Asociaciones Religiosas y los ministros de culto el poseer o administrar, por sí o por *interpósita persona*, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, así como la adquisición, posesión o administración de cualquiera de los medios de comunicación masiva. Se excluyen de la prohibición las publicaciones impresas de carácter religioso.

También el Reglamento de la Ley<sup>401</sup> regula los actos de culto público a través de los medios masivos de la comunicación y prevé que las Asociaciones Religiosas deben estar debidamente registradas. Su transmisión o difusión se realizará previa autorización de la Dirección General, únicamente de manera extraordinaria y no podrán efectuarse permanentemente. Las autoridades competentes vigilarán que dichos actos de culto religioso de carácter extraordinario no se transmitan o difundan en los tiempos de radio y televisión destinados al Estado.

La solicitud deberá presentarse por escrito ante la Dirección General con quince días naturales de anticipación a la realización de los actos de que se trate, deberá contener las fechas en que éstos se llevarán a cabo y sus respectivos horarios, así como la identificación de los medios que difundirán o transmitirán

---

<sup>400</sup> Artículo 16 Párrafo II de la Ley

<sup>401</sup> Reglamento de la Ley, Capítulo II “Artículo 30. De las transmisiones a través de medios masivos de comunicación no impresos”

los programas respectivos. La autoridad deberá dar respuesta dentro de los diez días naturales siguientes a la presentación de la solicitud respectiva.<sup>402</sup>

En la dirección de normatividad se encuentran registrados hasta marzo de 2009, 1836 transmisiones de actos de contenido religioso en medios masivos no impresos realizados por las Asociaciones Religiosas.<sup>403</sup>

La Secretaría de Gobernación, el Sistema de Radio y Comunicación Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) por conducto de Salvador Beltrán del Río, Director de Asuntos Religioso en el mes de febrero de 2009 explicaron a las Asociaciones Religiosas la propuesta gubernamental de cómo lograr los permisos para transmitir sus credos en los medios de comunicación no impresos, señalando que debería de ser mediante la formación de Asociaciones Civiles.<sup>404</sup>

En la actualidad en el sureste mexicano: Chiapas, Guerrero y Oaxaca así como en otras entidades, ya existen transmisiones radiofónicas de contenido religioso, así lo demuestra la reunión que tuvieron con el Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, en el que solicitaron se detengan los operativos para decomisar los aparatos de transmisión radiofónica.

Se estima que en país existen al menos 90 estaciones de radio administradas por cristianos evangélicos de las cuales 40% se encuentran en el Estado de Chiapas.

---

<sup>402</sup> Artículo 31, *Ibidem*.

<sup>403</sup> Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Dirección General de Asociaciones Religiosas. Subdirección de la Unidad de Informática, Actualizado al 13 de Marzo de 2009

<sup>404</sup> Periódico *La Jornada*. 17 de febrero de 2009



#### 4.8. INFRACCIONES Y SANCIONES DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS

La ley define las conductas que constituyen infracciones y sanciones a la misma, y que corresponden a los sujetos que la violentan, así como el modo de determinarlas.

La determinación de las infracciones no es muy precisa, falta la indicación de la persona en concreto que puede cometer cada una de ellas.<sup>405</sup> Solo habla de *sujetos*, pero dice ¿cuáles? La ley se refiere a varios sujetos: los representantes, los ministros y los asociados, los notarios que intervengan en actos de las Asociaciones Religiosas, los funcionarios públicos que ejerzan las facultades definidas en la ley y los encargados de la administración y cuidado de los templos; también pueden considerarse como *sujetos*, en sentido amplio, las Asociaciones Religiosas registradas. Por eso, se hace necesario interpretar, respecto de cada conducta tipificada como *infracción*, ¿quién es el sujeto que la comete?

##### *a) Infracciones*

Las infracciones previstas son las siguientes:<sup>406</sup>

**a) Asociarse con fines políticos.** Realizar proselitismo o propaganda a favor o en contra de partido político o algún candidato. Estas infracciones se encuentran previstas en la Constitución<sup>407</sup> y se refieren exclusivamente a los ministros de

---

<sup>405</sup> El artículo 29, primer párrafo señala que constituyen infracciones una serie de conductas que cometan los “sujetos” a que la Ley se refiere.

<sup>406</sup> Título Quinto “De las infracciones y sanciones y del recurso de revisión”. Capítulo Primero de las infracciones y sanciones, Artículo 29

<sup>407</sup> Artículo 130 inciso e), “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública,

culto y no a los otros *sujetos* a los que se refiere la ley, tales como los asociados o los representantes de Asociaciones Religiosas.

**b)** Agraviar los símbolos patrios o inducir a su rechazo. La Constitución prohíbe tal conducta exclusivamente a los ministros de culto. Es evidente que esta conducta es una infracción que puede cometer cualquier otra persona; pero cuando la comete alguien que no es ministro de culto se trata de una infracción, no a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sino a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, o de una conducta que constituye un delito tipificado por el Código Penal<sup>408</sup> del Distrito Federal, aplicable en todo la República Mexicana.

**c)** Adquirir, poseer o administrar por sí o por *interpósita persona* bienes y derechos que no sean los indispensables para su objeto. Evidentemente que cuando se trata de bienes inmuebles que hayan sido adquiridos con autorización de la Secretaría de Gobernación no puede configurarse esta infracción. También es una infracción el adquirir concesiones de la naturaleza que fuesen. Se refiere a las concesiones para explotar emisoras de radio, televisión o cualquier tipo de comunicaciones, que son las únicas concesiones que tienen prohibido adquirir estas asociaciones.<sup>409</sup> No sería infracción, por ejemplo el adquirir una concesión para el uso de agua o para prestar servicios de otra naturaleza que no desvíe sus finalidades religiosas.

**d)** Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos. Como esta ley no define lo que es salud, ni integridad física, se tendrá que atender a lo que al respecto prescriben la Ley General de

---

en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

<sup>408</sup> Se trata de delito de ultraje a la bandera o al escudo nacional previsto en los artículos 191 y 192 del Código Penal para el Distrito Federal.

<sup>409</sup> Artículo 16 de la Ley.

Salud y los códigos penales. Cuando esta conducta la realicen los ministros de cultos o las Asociaciones Religiosas será una infracción a la ley, pero si la realizan otros sujetos serán infracciones a las leyes de la materia.

e) Ejercer violencia física o presión moral mediante agresiones o amenazas para el logro de sus objetivos. El ejercer violencia física o moral no es una infracción a esta ley, sino que constituye un delito que puede cometer cualquier persona y por tanto, se encuentra previsto por las leyes penales, que son las que definen lo que debe entenderse por *violencia física* o *amenazas*.

f) Ostentarse como Asociación Religiosa cuando se carece de registro. Es decir, acreditarse con una personalidad jurídica que no se tiene.

g) Destinar los bienes a un fin distinto del previsto en la declaratoria de procedencia correspondiente. El sentido de esta infracción debe aclararse. Se refiere, aunque no lo precisa expresamente, únicamente a bienes inmuebles, pues sólo respecto de ellos se emite previa a su adquisición una declaratoria de procedencia.

h) Desviar los fines de las Asociaciones Religiosas de modo que éstas pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza religiosa. Ésta es una infracción que sólo podrá ser cometida por los dirigentes de dichas asociaciones pero no por sus representantes legales ni dirigentes, tampoco por los ministros de culto cuando actúan a título personal.

i) Convertir un acto religioso en reunión de carácter político. Ésta prohibición también se establece en Constitución.<sup>410</sup> La expresión *acto religioso* que emplea a la ley debe entenderse como acto de *culto público* celebrado en los templos o

---

<sup>410</sup> Artículo 130 Constitucional, inciso e), “(...) no podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político”.

en lugares públicos. El acto de culto público puede transformarse en acto político por impulso del ministro de culto o por impulso de los asistentes a tal acto, ambos pues pueden ser los sujetos que cometan esta infracción.

**j)** Oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas. La Constitución en su artículo 130 - e) establece que esta prohibición compete sólo a los ministros de culto por lo que no afecta a los miembros comunes de las Asociaciones Religiosas.

Por *oponerse* debe entenderse la desobediencia sistemática a las leyes o la impugnación sistemática de las instituciones, sin acudir a los medios legales establecidos. Lo que se castiga no es la oposición institucional, que es parte esencial de la vida democrática, sino la oposición sistemática por vías de hecho.

**k)** Realizar actos o permitir aquéllos que atenten contra la integridad, salvaguarda y preservación de los templos que forman parte del patrimonio cultural del país, así como omitir los actos necesarios para preservarlos. Se trata de una infracción que sólo pueden cometer los encargados del cuidado de estos templos.

Las demás que se establecen en la presente ley y otros ordenamientos aplicables.<sup>411</sup>

Ante la Dirección de Normatividad de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, sólo se encuentran 3 expedientes en trámite.<sup>412</sup> Sobre infracciones a la ley, uno recibido y ninguno resuelto.<sup>413</sup> Existen también

---

<sup>411</sup> Artículo 29 de la Ley

<sup>412</sup> Significa que ninguno de ellos ha sido recibido para realizar el estudio y la resolución pertinente.

<sup>413</sup> Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Dirección General de Asociaciones Religiosas. Subdirección de la Unidad de Informática, Actualizado al 13 de Marzo de 2009

cuatro conflictos en trámite entre Asociaciones Religiosas, uno en trámite entre Asociaciones Religiosas y particulares y seis conflictos internos.

### ***b) Órgano sancionador***

La autoridad encargada de definir si existe o no infracción y de aplicar la sanción es una comisión integrada<sup>414</sup> por funcionarios de la Secretaría de Gobernación.<sup>415</sup>

La ley no define si esta comisión se encargará de vigilar si las Asociaciones Religiosas y los ministros de culto cumplen la ley, o si actuará únicamente por petición de alguna parte interesada. Esto es algo que deberá definir un reglamento, pero en todo caso, se debe mantener el principio constitucional que establece que *las autoridades no intervendrán en la vida interna de las Asociaciones Religiosas*.<sup>416</sup> En consecuencia, de establecerse una vigilancia ésta versará únicamente sobre la *vida externa* de las Asociaciones Religiosas, esto es, de sus relaciones con otras personas o instituciones distintas de ella, y exclusivamente sobre los aspectos de esta vida externa regulados por la ley.

Para imponer una sanción, esta comisión deberá notificar al interesado los hechos que considera violatorios de la ley y darle un plazo de 15 días posteriores a la notificación para que comparezca ante la comisión y alegue lo que a su derecho convenga.

Si el interesado se presenta, lo que haya alegado y probado en su favor deberá ser analizado por la comisión en la resolución que pronuncie. Si, pasado el plazo,

---

<sup>414</sup> Artículo 38 del Reglamento de la Ley: “(...) estará integrada por los titulares de la Dirección General y los de las Unidades de Asuntos Jurídicos y la de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, todos ellos dependientes de la Secretaría. A dicho órgano, le corresponderá la aplicación de las sanciones previstas en la Ley (...)”.

<sup>415</sup> Artículo 30, fracción I de la Ley.

<sup>416</sup> Artículo 130 inciso b) Constitucional.

no se presenta el interesado, la comisión resolverá con los datos y pruebas que ella haya obtenido (artículo 30-II y III).

La comisión sancionadora tiene un arbitrio amplio para determinar la sanción que corresponda ya que la ley no determina específicamente la sanción que corresponde a cada infracción. Pero para ejercer su discrecionalidad, la comisión deberá considerar lo siguiente: a) la naturaleza y gravedad de la falta o infracción, b) la posible alteración de la paz o el orden público resultante de la infracción, c) la situación económica y grado de instrucción del infractor y d) si hay reincidencia (artículo 31).

La discrecionalidad que puede ejercer la comisión en la imposición de las sanciones se equilibra con la posibilidad que tienen las personas sancionadas de impugnar, no sólo la decisión acerca de si hay o no infracción, sino de impugnar también la sanción misma, aunque se reconozca la existencia de la infracción por considerarse excesiva o desproporcionada.

### ***c) Sanciones***

A los infractores de la ley se les puede imponer una o varias sanciones. Dependiendo de la valoración que realice la autoridad competente, pueden ser:<sup>417</sup>

- I.      Apercibimiento;
- II.     Multa de hasta veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- III.    Clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público;

---

<sup>417</sup> Artículo 32 de la Ley

- IV. Suspensión temporal de derechos de la Asociación Religiosa en el territorio nacional o bien en un estado, municipio o localidad; y
- V. Cancelación del registro de Asociación Religiosa.

Para la aplicación de la sanción se tomará en cuenta: la naturaleza y gravedad de la falta o infracción, la posible alteración de la tranquilidad social y el orden público que suscite la infracción, la situación económica y el grado de instrucción del infractor así como la reincidencia, si la hubiere.<sup>418</sup>

Es evidente que las primeras dos sanciones (apercibimiento y multa) pueden imponerse tanto a las asociaciones como a los ministros, representantes, encargados de templos u otras personas físicas. En cambio, las últimas tres sanciones (suspensión de derechos, clausura de un templo y cancelación de registro) sólo pueden imponerse a las Asociaciones Religiosas.

#### **4.9. RECURSOS DE REVISIÓN**

Contra los actos o resoluciones dictados por las autoridades en cumplimiento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se podrá interponer el recurso de revisión con el conocimiento de la Secretaría de Gobernación. El escrito de interposición del recurso deberá ser presentado ante dicha dependencia o ante la autoridad que dictó el acto o resolución que se recurre, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que fue notificado el acto o resolución recurrido. En este último caso, la autoridad deberá remitir a la Secretaría mencionada, en un término no mayor de diez días hábiles, el escrito mediante el cual se interpone el recurso y las constancias que, en su caso, ofrezca como pruebas el recurrente y que obren en poder de dicha autoridad.

---

<sup>418</sup> Artículo 31 *Ibidem*

Sólo podrán interponer el recurso previsto en esta ley las personas que tengan interés jurídico que funde su pretensión.<sup>419</sup> La autoridad examinará el recurso y si advierte que éste fue interpuesto extemporáneamente lo desechará sin remedio.

Si el recurso fuese oscuro o irregular, requerirá recurrente para que dentro de los diez días siguientes a aquél en que se haya notificado el requerimiento aclare su recurso, con el apercibimiento de que en caso de que el recurrente no cumplimente en tiempo la prevención, se tendrá por no interpuesto el recurso. La resolución que se dicte en el recurso podrá revocar, modificar o confirmar la resolución o acto recurrido.<sup>420</sup>

En el acuerdo que admita el recurso se concederá la suspensión de los efectos del acto impugnado siempre que lo solicite el recurrente y lo permita la naturaleza del acto, salvo que con el otorgamiento de la suspensión se siga perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el recurso. Cuando la suspensión pudiera ocasionar daños o perjuicios a terceros se fijará el monto de la garantía que deberá otorgar el recurrente para reparar los daños e indemnizar los perjuicios que se causaren en caso de no obtener resolución favorable en el recurso.<sup>421</sup>

A falta de disposición expresa y en lo que no contravenga a la ley se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.<sup>422</sup> Cuando se generen desavenencias de carácter administrativo al interior de las Asociaciones Religiosas sus representantes, ministros de culto o asociados, podrán solicitar a la Dirección General designe un amigable componedor.<sup>423</sup>

---

<sup>419</sup> Artículo 33 *Ibidem*

<sup>420</sup> Artículo 34, *Ibidem*

<sup>421</sup> Artículo 35, *Ibidem*

<sup>422</sup> Artículo 36, *Ibidem*

<sup>423</sup> Artículo 19, del Reglamento.



La resolución que emita la dirección general será ejecutable por la autoridad judicial competente.<sup>424</sup> El recurso de revisión previsto en los artículos 33 al 36 de la ley se sustanciará conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.<sup>425</sup>

Ante la Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, según la Dirección de Normatividad,<sup>426</sup> se turnaron para su estudio 3 recursos de revisión, mismos que se encuentran en trámite.

---

<sup>424</sup> Artículo 49, *Ibidem*

<sup>425</sup> Artículo 50, *Ibidem*

<sup>426</sup> Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Dirección General de Asociaciones Religiosas. Subdirección de la Unidad de Informática, Actualizado al 13 de Marzo de 2009

## **CAPÍTULO V**

---

# **RÉGIMEN PATRIMONIAL, FISCAL Y FINANCIACIÓN DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS EN MÉXICO**

## **CAPÍTULO V**

### **RÉGIMEN PATRIMONIAL, FISCAL Y FINANCIACIÓN DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS EN MÉXICO**

#### **5.1 CONSIDERACIONES GENERALES**

La finalidad de la Iglesia es espiritual. Ha de afirmar mediante el evangelio que el reino de dios no es de este mundo, pero la sociedad eclesial vive y opera en el mundo. Sería un espiritualismo exagerado pretender que la Iglesia pudiera desarrollar su finalidad específica sin bienes materiales, como si estuviera formada por ángeles y no por hombres.<sup>427</sup>

Por derecho nativo e independientemente de la potestad civil, la Iglesia Católica puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines, tales como sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero y demás ministros o hacer obras de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo con los necesitados.<sup>428</sup> El uso de bienes materiales en la Iglesia encuentra su justificación en los fines propios de la Iglesia.

El código de Derecho Canónico establece el deber de los fieles de ayudar al sostenimiento de la Iglesia. Los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que ésta disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad así como el conveniente sustento de los ministros.<sup>429</sup>

---

<sup>427</sup> Señalado por GALLARDO, Juan María, en el *Curso de Derecho Canónico*, “Bienes temporales y misión de la Iglesia”, El Patrimonio de la Iglesia.

<sup>428</sup> *Código de Derecho Canónico*, Edición bilingüe (reimpresión), Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 2003, Libro V De los Bienes Temporales de la Iglesia, c 1254

<sup>429</sup> *Ibidem*, c. 222

La Iglesia Universal, la Sede Apostólica, así como cualquier otra persona jurídica pública en la Iglesia, son sujetos capaces de adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales. El dominio de los bienes está sujeto a la autoridad suprema del Romano Pontífice. Todos los bienes temporales que pertenecen a ellos, son bienes eclesiásticos y están regulados por el derecho canónico.<sup>430</sup> Los bienes temporales de una persona jurídica privada se rigen por sus propios estatutos.

La Iglesia puede adquirir bienes temporales por todos los modos justos de derecho natural o positivo. La Iglesia tiene el derecho nativo de exigir de los fieles los bienes que necesita para sus propios fines. Para subvenir las necesidades se tiene derecho a imponer un tributo moderado a las personas jurídicas públicas en proporción a sus ingresos. No pueden rechazarse sin justa causa las ofrendas.<sup>431</sup>

Respecto de los bienes temporales, la Iglesia acepta la prescripción como modo de adquirir o de liberarse. Los bienes inmuebles y muebles preciosos, los derechos y acciones tanto personales como reales que pertenecen a la sede apostólica prescriben en un plazo de 100 años. El romano pontífice es el administrador y distribuidor de todos los bienes eclesiásticos. Corresponde al ordinario vigilar diligentemente la administración de todos los bienes pertenecientes a las personas jurídicas públicas. Todos aquellos clérigos o laicos que participan por un título legítimo en la administración de los bienes eclesiásticos deben cumplir sus funciones en nombre de la Iglesia y conforme al derecho.<sup>432</sup>

Abordar el tema en estos términos se explica por la sencilla razón de que desde la época colonial hasta la actualidad prevalece el predominio de la religión católica en México. Esto no quiere decir que cada una de las Iglesias, agrupaciones religiosas o

---

<sup>430</sup> *Ibidem*, c. 1255, 1256 y 1257

<sup>431</sup> *Ibidem*, Título I, De la Adquisición de los Bienes, c. 1259, 1260 y 1263

<sup>432</sup> *Ibidem*, Título II, De la Administración de los Bienes, c. 1263, 1276, 1279, 1280 y 1282

Asociaciones Religiosas regulen su propio régimen patrimonial, fiscal y de financiación.

Al mismo tiempo, también en los ordenamientos estatales se producen remisiones a los ordenamientos confesionales —en particular, al derecho canónico— o, al menos, entra en funcionamiento, inevitablemente, la figura técnica del presupuesto. Y, en concreto, para el Derecho Eclesiástico Patrimonial además de la remisión o reenvío —material y formal—, puede tener singular relieve la última figura jurídica aludida: el presupuesto.<sup>433</sup>

## 5.2 EL PATRIMONIO ECLESIASTICO

### a) Antecedentes

*“En tiempo de las bárbaras legiones, de lo alto de las cruces colgaban a los ladrones... Hoy, en pleno siglo del progreso y de las luces, del pecho de los ladrones cuelgan las cruces”.*

ANÓNIMO

*El patrimonio eclesiástico* —ha escrito Hervada— *nace casi con la misma Iglesia.*<sup>434</sup> Pero puede decirse que hasta el impropiaamente llamado *Edicto de Milán* no comienza a organizarse establemente debido, como es lógico, a las persecuciones.<sup>435</sup>

---

<sup>433</sup> FORNÉS, Juan. “Régimen Jurídico-Patrimonial y Financiación de la Iglesia desde la Perspectiva de la Libertad Religiosa”, en: *La Libertad Religiosa, Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1996, pp. 360-362

<sup>434</sup> HERVADA, J. “La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico”, en *Vetera et Nova*, Pamplona, 1991, t. I, p. 181.

<sup>435</sup> *Ibid.*

Ya en los primeros tiempos aparece la tendencia a formar un patrimonio de la Iglesia. Los Hechos de los Apóstoles presentan con nitidez el testimonio de la existencia de bienes comunitarios llevados *ad pedes Apostolorum* que los propios apóstoles y, más adelante, los diáconos administraban.

En este primer periodo se aprecia que los bienes –procedentes de colectas y donaciones de los fieles– se entienden pertenecientes a la *comunitas christiana* y son administrados por la Iglesia.

En épocas pasadas la Iglesia tuvo establecidos modos propios en su legislación para adquirir bienes, distintos a los fijados por las normas civiles de cada país. Algunos autores han establecido la enumeración y descripción de los mismos, entre ingresos provenientes del derecho privado e ingresos del derecho público.

Las formas canónicas de adquisición de bienes eran las siguientes: *tributos e impuestos*: los diezmos, primicias, oblaciones o limosnas, el catedrático (derechos pagados a los clérigos por sus servicios), subsidio caritativo, pensión benefical, el tributo en bien de la diócesis o del patrono, tributos extraordinarios por servicios especiales, tributos sobre las Iglesias y los beneficios a favor de estas; *Medias anatas*:<sup>436</sup> división o extinción de una persona jurídica; *Tasas*: por concesión de los rescriptos, por la administración de sacramentos, funerarias, porción parroquial, judiciales y procuradores.<sup>437</sup>

Según Lucas Alemán el patrimonio eclesiástico para fines del virreinato, se calculaba en una mitad del valor total de la riqueza inmobiliaria novohispana.<sup>438</sup> A

---

<sup>436</sup> Renta por los frutos obtenidos anualmente de una actividad o empleo.

<sup>437</sup> AZNAR GIL, Federico R. *La Administración de los Bienes Temporales de la Iglesia*, Universidad Pontificia de Salamanca, España. 1984, pp. 81-82

<sup>438</sup> Este dato presentado por un buen católico, hombre conservador, ha sido analizado y criticado desde varios ángulos, pero generalmente se considera que corresponde a la verdad fundamental de que la Iglesia haya sido la gran propietaria del Virreinato.

finis del siglo XVIII, (por ejemplo, de las 3387 casas registradas en la ciudad de México en 1790, más de la mitad, o sea 1935, pertenecieron a la Iglesia).

Durante toda la fase novohispana, desde mercedes de tierras otorgadas a monasterios y otras instituciones eclesiásticas, el patrimonio eclesiástico había venido acumulándose, sobre todo, gracias a beneficios testamentarios, una sana administración (por ejemplo, el caso de los jesuitas) y el principio canónico-administrativo de que la Iglesia siempre adquiere, pero nunca enajena inmuebles. También las exenciones fiscales de *iure* o de *facto* han jugado un papel al respecto aunque las diversas medidas estatales de frenar esta forma de *mano muerta* no resultan muy eficaces.

Este poder económico eclesiástico colocó, desde luego, al Estado en nuevas tentaciones y así, la España borbónica de fines del siglo XVIII inspirada en las medidas de emergencia que el Estado revolucionario francés había tomado, recurrió a la política de *consolidación*, obligando a la Iglesia a liquidar sus crédito hipotecarios *siempre concedidos en términos bastante favorables para los deudores, y en la práctica siempre renovables cuando habían llegado a su vencimiento* y a vender sus inmuebles para invertir el producto líquido en bonos del erario. Esta política iniciada para la Nueva España en 1804 fue suspendida en 1809 antes de que pudiera causar grandes daños patrimoniales a la Iglesia, o bien, perturbaciones en la economía novohispana en general.<sup>439</sup> Las grandes medidas contra el patrimonio eclesiástico vendrían a mediados del próximo siglo.

A lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna la propiedad eclesiástica se desarrolló enormemente gracias a dos factores principalmente: la liberalidad de los fieles y de los príncipes, así como la legislación eclesiástica que ponía trabas a la enajenación de los bienes para garantizar el cumplimiento de sus fines; si bien –como es sabido– la inalienabilidad de los bienes eclesiásticos no significa que sean *res extra*

---

<sup>439</sup> SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. *Asociaciones Religiosas... op. cit.*, p. 55.

*commercium* –como eran en el derecho romano las cosas sagradas–, sino que para su enajenación era preciso la autorización del superior, de modo que si no se obtenía tal licencia, la enajenación era nula.<sup>440</sup>

## **b) Concepto**

*“Nada propio posee la Iglesia, salvo la fe”.*

**SAN AMBROSIO**

Puede decirse que el Derecho Eclesiástico Patrimonial<sup>441</sup> es aquel sector del Derecho Eclesiástico que se ocupa del régimen jurídico –obviamente, desde la perspectiva del derecho estatal, porque el Derecho Eclesiástico es derecho estatal – de los bienes o cosas temporales de las confesiones religiosas, tanto desde un punto de vista estático – el conjunto de bienes o cosas – como dinámico –las relaciones jurídicas patrimoniales, ya sean reales, ya sean personales u obligacionales –.

Si esto es así, se trata de estudiar entonces el régimen jurídico aplicable desde el ordenamiento estatal a los bienes eclesiásticos y a las relaciones jurídicas de índole patrimonial. Y es que, en efecto, desde la perspectiva del derecho estatal ha de tenerse en cuenta que la disponibilidad de medios materiales es una de las condiciones indispensables para que la libertad e igualdad religiosas sean reales y efectivas. De ahí que la organización oficial jurídico-política haya de adoptar las medidas normativas y económicas que faciliten el ejercicio real de estas libertades, respetando la identidad de los bienes eclesiásticos y los fines a los que están destinados.<sup>442</sup>

---

<sup>440</sup> FORNÉS, Juan. *Régimen Jurídico-Patrimonial y Financiación...* op. cit., p. 363-365

<sup>441</sup> LÓPEZ ALARCÓN, M. “Régimen Patrimonial de las Confesiones Religiosas”, en: *Tratado de Derecho Eclesiástico*, Pamplona, 1994, Editorial a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta (Coordinador de la edición J. de Otaduy, pp. 737 y ss.

<sup>442</sup> FORNÉS, Juan. “Régimen Jurídico-Patrimonial y Financiación”... op. cit., p. 360



El patrimonio de las Asociaciones Religiosas<sup>443</sup> está constituido por un conjunto de bienes inmuebles, muebles, donaciones, aportaciones, limosnas y otros ingresos que perciben de personas físicas y morales para el desarrollo de sus actividades, para cumplir su función social en términos de la legislación observable en la materia.

Puede decirse también que es la totalidad de los bienes, recursos y obligaciones que por cualquier título adquieren, administran o poseen las corporaciones religiosas para cumplir su objeto y fines propuestos.

### **5.3 LEY DE NACIONALIZACIÓN DE LOS BIENES ECLESIASTICOS (12 DE JULIO DE 1959)**

*“Tenemos el sagrado derecho de conservar el poder...”*

**PADRE FRANCISCO JAVIER  
MIRANDA Y MORFI**

Al ser expedida la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos constaba de 8 considerandos y 25 artículos. Su expedición se realizó en Veracruz el 12 de julio de 1859 con Juárez como presidente interino de la república y el aval de sus ministros. La ley decreta su exposición de motivo y deja en claro el poderío económico y político del clero, así como su fuerte influencia en la población para provocar la intranquilidad, rebeliones y la guerra en contra del gobierno. Los esfuerzos que se habían hecho para terminar con esto último habían resultado insuficientes e inútiles, por ello, era indispensable poner un freno y dictar medidas determinantes a esa clase de abusos, por lo que se decretó, entre otras cosas, en dicha ley<sup>444</sup> que:

---

<sup>443</sup> SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. *Asociaciones Religiosas, Régimen Fiscal*, Editorial Porrúa, México, 1ª edición, 2007, p. 53.

<sup>444</sup> Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Julio 12 1859. “Artículo 1. Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicación que haya tenido”; “Artículo 4. Los

*Que todos los bienes administrados por el clero entran al dominio de la nación sea cual fuere la clase de derechos. Los Ministros de Culto podrán recibir ofrendas e indemnizaciones por la administración de sacramentos pero no en bienes raíces. Los libros, manuscritos y antigüedades se aplicaran a los museos. Será nula cualquier enajenación realizada por el clero que no tenga autorización. Los conventos religiosos que estaban sujetos a la jurisdicción espiritual de los regulares suprimidos quedarán bajo la orden de sus obispos diocesanos.*

Como puede observarse, el texto íntegro de la ley está compuesto por 8 considerandos y 25 artículos, y además contiene medidas enérgicas y radicales para poner fin al predominio económico del clero, señalando especificidades sobre el uso y destino de sus bienes. Se observa que el dominio de algunos bienes entran a formar parte del dominio del Estado para cumplir funciones de políticas públicas y sociales como la educativa, cultural y la misma religiosa entre otras. Se ordena con precisión la enajenación de fincas rústicas y acciones a precios sumamente bajos. Se modera el costo de los servicios religiosos dejándose al acuerdo de las partes.

Debemos dejar claro también que con el transcurso del tiempo estas disposiciones se fueron diluyendo, incluso por el abandono del mismo Estado.

---

ministros del culto, por la administración de los Sacramentos y demás funciones de su ministerio, podrán recibir las ofrendas que se les ministren, y acordar libremente con las personas que los ocupen, la indemnización que deban darles por el servicio que les pidan. Ni las ofrendas ni las indemnizaciones podrán hacerse en bienes raíces”; “Artículo 12. Los libros impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas, se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros establecimientos públicos”; “Artículo 14. Los conventos de religiosas que actualmente existen, continuarán existiendo y observando el reglamento económico de sus claustros. Los conventos de estas religiosas que estaban sujetos a la jurisdicción espiritual de algunos de los regulares suprimidos, quedan bajo la de sus obispos diocesanos”; “Artículo 22. Es nula y de ningún valor toda enajenación que se haga de los bienes que se mencionan en esta ley, ya sea que se verifique por algún individuo del clero, o por cualquier persona que no haya recibido expresa autorización del gobierno constitucional. El comprador, sea nacional o extranjero, queda obligado a reingresar la cosa comprada o su valor, y satisfará además una multa de cinco por ciento, regulada sobre el valor de aquélla. El escribano que autorice el contrato, será depuesto e inhabilitado perpetuamente en su ejercicio público, y los testigos, tanto de asistencia como instrumentales, sufrirán la pena de uno a cuatro años de presidio”. (SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. *Asociaciones Religiosas...*, op. cit., p.57)

#### 5.4 PATRIMONIO ECLESIAÍSTICO CONFORME AL MARCO JURÍDICO VIGENTE

*“¿A qué derecho te atienes para defender las propiedades de la Iglesia, al divino o al humano?”*

SAN AGUSTÍN

Javier Saldaña señala que el régimen propiamente económico de las Asociaciones Religiosas suele recibir diferentes nombres, entre ellos, se mencionan *Derecho Patrimonial, Patrimonio Eclesiástico, Sistema de Relaciones Patrimoniales*. Con todos ellos se intenta establecer el sistema de relaciones jurídicas existentes entre una Iglesia o confesión religiosa y los bienes que le son propios, por ello, la doctrina ha dado en llamar a esta parte de su sistema jurídico *Derecho Eclesiástico Patrimonial*, entendida ésta como *aquel sector del Derecho Eclesiástico que se ocupa del régimen jurídico—obviamente de los bienes o cosas temporales de las asociaciones y confesiones religiosas, tanto desde un punto de vista estático como dinámico—, las relaciones jurídicas patrimoniales, ya sean reales, personales u obligacionales (...)*.

Cuando hablamos del régimen jurídico del patrimonio eclesiástico tenemos que hacer referencia a la Constitución General de la República. El artículo 27, Fracción II, a partir de la reforma de 1992, así como la Ley Reglamentaria denominada como Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento, regulan su régimen legal. Así, una vez que se constituyen en los términos del Artículo 130 de la Carta Magna adquieren personalidad jurídica y capacidad para adquirir, poseer o administrar los bienes que sean indispensables para su objeto, desde luego, con los requisitos y limitaciones que las propias normas establecen.

La ley en el Capítulo III regula el régimen patrimonial de las Asociaciones Religiosas al establecer que<sup>445</sup> *podrán tener un patrimonio propio que les permita cumplir su objeto. Constituido por todos los bienes que bajo cualquier título adquieran, posean o administren, será exclusivamente el indispensable para cumplir el fin o los fines propuestos en su objeto.* La misma ley señala las limitaciones, al prescribir que no podrán poseer o administrar, por sí o por *interpósita persona*, concesiones para la explotación de la radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicaciones, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva. Se excluyen las publicaciones impresas de carácter religioso. La misma restricción les impone también a los ministros de culto.

Cuando se trate de la liquidación de la asociación, los bienes podrán ser transmitidos por cualquier título a otras asociaciones religiosas. En caso de que la liquidación se realice como consecuencia de las sanciones previstas por la misma ley,<sup>446</sup> los bienes pasarán a la asistencia pública. Los bienes nacionales que estuvieran en su posesión regresarían al pleno dominio público de la nación.<sup>447</sup>

## Patrimonio Cultural

Por otro lado, no podemos dejar de señalar que las investigaciones arqueológicas han descubierto que las religiones han creado a través del tiempo representaciones materiales, espacios arquitectónicos, lugares sagrados, imágenes, utensilios y demás objetos que sirven como un medio auxiliar para celebraciones religiosas, tales como las catedrales, mezquitas, pirámides, etcétera, que se encuentran expuestas y que forman parte del patrimonio religioso. Templos que se edificaron en los primeros años de la

---

<sup>445</sup> Artículo 16 Párrafo I y II de la Ley

<sup>446</sup> Artículo 32 de la Ley.

<sup>447</sup> Artículo 16 Párrafo III, *Ibidem*.

colonia siguen registrando gran afluencia de feligreses y continúan llevando a cabo celebraciones religiosas, valiéndose en ellas de utensilios de similar antigüedad.<sup>448</sup>

En este sentido, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prevé la forma de la conservación de dichos bienes.<sup>449</sup>

De igual forma, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas señala lo que constituye el patrimonio religioso de nuestro país, concretamente en su artículo 36, el cual enumera los bienes religiosos que son considerados como monumentos.<sup>450</sup>

De esta forma, todas las construcciones religiosas que daten del siglo XVI al año 1900, así como los muebles que se hayan encontrado en los mismos, serán consideradas como monumentos históricos, lo cual representa un universo interminable de bienes de muy distinta naturaleza.

Para terminar, solo basta decir que, por ser reciente la legislación en materia de las instituciones religiosas, se tiene la oportunidad de constituirse en el primer intento de la urgente revisión que requiere nuestra legislación en materia de preservación del

---

<sup>448</sup> BECERRIL MIRÓ, José Ernesto. *La legislación protectora del patrimonio histórico-artístico de las Iglesias*, pp. 95-97

<sup>449</sup> “Artículo 20. Las Asociaciones Religiosas nombrarán y registrarán ante la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o históricos propiedad de la nación. Las mismas estarán obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar de su salvaguarda y restauración, en los términos previstos por las leyes. Los bienes propiedad de la nación que posean las Asociaciones Religiosas, así como el uso al que los destinen, estarán sujetos a esta Ley, a la Ley General de Bienes Nacionales y en su caso, a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, así como a las demás leyes y reglamentación aplicables”.

<sup>450</sup> “Artículo 36. Por determinación de esta Ley son monumentos históricos: I. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos: arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las casas curiales”.

patrimonio monumental, a fin de evitar los innumerables deterioros que sufre dicho acervo en beneficio del desarrollo cultural de nuestro país.<sup>451</sup>

## **5.5 LAS REFORMAS Y SU IMPACTO EN EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS**

Los cambios más importantes que surgieron como producto de las reformas constitucionales de 1992 en materia religiosa fueron:

1° Éste crea la figura jurídica de las Asociaciones Religiosas y por lo tanto reconoce la personalidad jurídica a todas las Iglesias y agrupaciones religiosas que se constituyan como tales a través del correspondiente registro ante la Secretaría de Gobernación.<sup>452</sup>

2° Indica que las Asociaciones Religiosas tengan la capacidad para constituir un patrimonio propio al adquirir, poseer o administrar los bienes indispensables para su objeto.<sup>453</sup>

3° Permite a los particulares impartir educación en todos sus tipos y modalidades.<sup>454</sup> Por lo tanto, permite que se imparta educación religiosa al acotar que la que imparte el Estado será laica y por lo tanto se mantendrá ajena por completo a cualquier doctrina religiosa.<sup>455</sup>

---

<sup>451</sup> BECERRIL MIRÓ, José Ernesto. *La legislación protectora del... op. cit.* p. 102

<sup>452</sup> Artículo 130 Constitucional inciso a).

<sup>453</sup> Artículo 27 Fracción II, Constitucional

<sup>454</sup> Artículo 3° Fracción VI, *Ibidem*.

<sup>455</sup> Artículo 3° Fracción I, *Ibidem*.

4° Elimina el párrafo V que prohibía la profesión de votos religiosos y suprime además la negativa constitucional de permitir el establecimiento de órdenes monásticas o cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse.<sup>456</sup>

Por otro lado, la Ley Reglamentaria en materia religiosa<sup>457</sup> regula en su Capítulo III el Régimen Patrimonial de las Asociaciones Religiosas y los Ministros de Culto en los artículos 16 al 20; el Reglamento<sup>458</sup> hace lo propio en el Título II, Capítulo III, denominado también *Del Régimen Patrimonial*, en los artículos 20 al 26.

Con estas reformas *se derogan las disposiciones de la Ley de Nacionalización de Bienes de 31 de diciembre de 1940, así como las contenidas en otros ordenamientos, cuando aquéllas y éstas se opongan a la presente ley.*<sup>459</sup> Como consecuencia de ello se crea una nueva forma de constituir el patrimonio de las Asociaciones Religiosas.<sup>460</sup>

Con lo anterior se retomó el espíritu de las Leyes de Reforma que permitían a la Iglesia poseer exclusivamente los bienes destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución. Esta nueva actitud del Estado mexicano resulta coherente con el derecho de libertad de religión y creencia tutelado por el ordenamiento jurídico y con el proceso de modernización del sistema de relaciones con las Iglesias.<sup>461</sup>

Con la reforma, las Asociaciones Religiosas obtienen la personalidad jurídica que les otorga capacidad de propiedad y patrimonio propio. La Ley Reglamentaria

---

<sup>456</sup> Artículo 5°, *Ibidem*.

<sup>457</sup> Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 15 de julio de 1992.

<sup>458</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2003.

<sup>459</sup> Artículos 3° y 4° transitorios de la Ley de Asociaciones y Culto Público, “Anexo documental”. Continúan en vigor aquellas disposiciones de la Ley de Nacionalización de Bienes para solventar los juicios y procedimientos de nacionalización pendientes al tiempo de la entrada en vigor de la Ley de referencia.

<sup>460</sup> Artículo 7° Transitorio de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: “Con la solicitud de registro, las iglesias y las agrupaciones religiosas presentarán una declaración de los bienes inmuebles que pretendan aportar para integrar su patrimonio como Asociaciones Religiosas”.

<sup>461</sup> Artículo 27 Fracción II Constitucional reformado.

establece las restricciones para evitar acciones de acaparamiento o la distracción de sus objetivos. Esta limitación sería acorde con la finalidad de las iglesias, las cuales no tienen un objetivo económico o lucrativo.

En materia de templos propiedad de la nación, la normativa ha marcado una sutil diferencia entre los que son considerados *bienes artísticos o históricos* y los que no lo son. Respecto a los primeros, la Ley de Asociaciones impone a las Asociaciones Religiosas designar a los representantes responsables de los templos y de los bienes ante la Secretaría de Desarrollo Social y Vivienda y ante el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para la debida conservación y preservación de aquéllos.<sup>462</sup>

Sin duda, las autoridades encargadas del extraordinario patrimonio histórico, artístico y monumental de México, tienen que afrontar un reto considerable si tenemos en cuenta, por una parte, las dificultades que se derivan de una práctica administrativa secular, lenta y centralizada y, por otra, la falta de recursos y operatividad de muchas de las Asociaciones Religiosas que ejercen el derecho a uso de los templos. Baste a modo de ejemplo la situación de la Arquidiócesis Primada de México, que cuenta en la actualidad con más de 1000 templos propiedad de la nación y no tiene elementos materiales suficientes para recabar la información solicitada por la Dirección General de Asuntos Religiosos. La experiencia de España, tal y como mencionamos en el capítulo anterior, quizá pueda contribuir en la búsqueda de soluciones.<sup>463</sup>

En resumen, la libertad que se les confiere a las Asociaciones Religiosas no sería real sin un poder patrimonial a su servicio. Los bienes que pueden adquirir se encuentran perfectamente delimitados en el Artículo 27, fracción II, de la Constitución

---

<sup>462</sup> Las últimas reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública General, han transferido toda la materia relativa al patrimonio federal de la Secretaría citada, a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y su operatividad se realiza a través de un órgano desconcentrado que es la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin).

<sup>463</sup> MARTÍNEZ DE CODES, Rosa María. *Los Bienes Nacionales de Origen Religioso en México, "1833-2004"*. Estudio Histórico-Jurídico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 106, UNAM, 1ª edición, México, 2007, p. 37-49.



General de la República, así como en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en el artículo 16 que establece *que las Asociaciones Religiosas podrán tener un patrimonio propio que les permita cumplir con su objeto. Dicho patrimonio, constituido por todos los bienes que bajo cualquier título adquieran, posean o administren, será exclusivamente el indispensable para cumplir el fin o los fines propuestos en su objeto.*

Uno de los mecanismos que limitan a las Asociaciones Religiosas es el de sancionar hasta con la cancelación del registro de asociación religiosa a la que adquiera, posea o administre, por sí o por *interpósita persona*, más bienes de los indispensables y que su patrimonio pase a la asistencia pública.<sup>464</sup>

Otro mecanismo consiste en que para adquirir bienes inmuebles por actos *inter vivos* o *mortis causa*, la Asociación Religiosa deberá obtener de la Secretaría de Gobernación la Declaratoria de Procedencia.<sup>465</sup> Así las cosas, se hace entonces indispensable para que una Asociación Religiosa pueda adquirir bienes inmuebles, en principio obtener su registro constitutivo y además la declaratoria de procedencia por parte de la autoridad para la adquisición del bien, así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus tesis jurisprudencial XXI, el 5 de mayo de 1997.<sup>466</sup>

---

<sup>464</sup> Artículos 16, 29, fracción III y 32 de la Ley.

<sup>465</sup> Artículo 17 de la Ley, que incluye también el caso de la adquisición de derechos de fideicomisaria, salvo cuando la propia asociación religiosa sea la fideicomitente.

<sup>466</sup> ASOCIACIONES RELIGIOSAS. INTERÉS JURÍDICO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES NMUEBLES. ES NECESARIA LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establecen las hipótesis en que las asociaciones religiosas pueden adquirir bienes inmuebles indispensables para su objeto, ya sea a través de la lista que deben adjuntar a la solicitud de su registro constitutivo, o posteriormente, en los casos enumerados en el artículo 17 de la ley señalada, y es requisito la declaratoria de procedencia por parte de la Secretaría de Gobernación. De manera que, para acreditar el interés jurídico en asuntos en que las asociaciones religiosas, en su calidad de terceras extrañas, reclamen la propiedad de un bien embargado en un juicio ejecutivo mercantil, es indispensable la citada declaratoria. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 116/97. Confía, S.A., Institución de Banca Múltiple, Ábaco Grupo Financiero. 15 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Raúl Juárez Herrera. Secretaria: María T. Ortega Zamora. Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 601, Materia Civil.

## **5.6 EL USO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DESTINADOS AL CULTO PÚBLICO PROPIEDAD DE LA NACIÓN**

El derecho de usar y administrar bienes de la Nación es cosa completamente distinta de la propiedad de los templos que a partir de las reformas pueden tener las asociaciones religiosas.

Desde finales de la colonia hasta mediados del siglo XIX, las corporaciones religiosas tuvieron en propiedad la totalidad de los bienes inmuebles destinados al culto público y aquellos destinados a hospitales, colegios, asilos y servicios similares. Aún después de la guerra de independencia continuaron poseyendo el dominio pleno. Pero en 1859 por la aplicación de las leyes de reforma los inmuebles pasaron a ser de dominio de la nación. Se expide la *Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos* pasando la totalidad de los bienes de la Iglesias a propiedad del Estado. Quedándose sólo con el uso de los templos y encargándose de su conservación y mejora.

En 1901 se reforma la Constitución reconociendo a las Asociaciones Religiosas la capacidad para poseer en propiedad o administrar edificios dedicados directamente al culto. Sin embargo, la Constitución de 1917 elimina de tajo esa capacidad jurídica.<sup>467</sup>

En los últimos cien años han existido múltiples organismos centralizados a los que se encomendó la administración de los bienes nacionalizados y usados por las Iglesias. La primera fue el Ministerio de Hacienda a través del Departamento de Bienes Nacionales.<sup>468</sup> Después el Departamento de Contraloría (1918).<sup>469</sup> En 1933 la

---

<sup>467</sup> GÓMEZ MORÍN RIVERA, Jun Pablo, “Los bienes inmuebles nacionales en uso de las Asociaciones Religiosas” en: *Una puerta abierta a la Libertad Religiosa* (México a XV años de las reformas constitucionales en materia religiosa 1992-2007) MEDINA GONZÁLEZ, María Concepción (Coordinadora). Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y asuntos religiosos. Dirección General de Asociaciones Religiosas, México 2007, pp. 313-316

<sup>468</sup> Conforme a la Ley Orgánica de las Secretarías de Estado (Artículo 4º). Véase Diario Oficial de la Federación 25 de diciembre de 1917.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público recuperó la competencia.<sup>470</sup> En 1941 la Ley General de Bienes Nacionales clasificó en cuatro rubros las atribuciones de la Secretaría de Hacienda en lo relativo a los inmuebles de origen religioso: administración, registro, inspección y verificación de la legalidad en las operaciones de los bienes nacionalizados.<sup>471</sup> En 1946 aparece la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Pública.

En 1982 se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología con competencia para conocer de los bienes nacionales. Entra en vigor la nueva Ley General de Bienes Nacionales y se levanta el inventario de inmuebles declarados como dedicados al culto público en todo México.

Con motivo de las reformas constitucionales de 1992 la Secretaría de Gobernación pasó a ser la autoridad competente para llevar a cabo un tercer registro en la materia. Los bienes nacionales se clasificaron en: arqueológicos (los relacionados con obras, inmuebles y construcciones edificados con anterioridad a 1521); históricos (los construidos entre 1521 y 1900); artísticos (los construidos de 1900 a la fecha, siempre y cuando estén catalogados así por el Instituto Nacional de Bellas Artes).

Un derecho especial que la ley otorga a las Asociaciones Religiosas es usar para fines religiosos bienes propiedad de la Nación.<sup>472</sup> En este sentido, las asociaciones deberán solicitar a la autoridad responsable la expedición del correspondiente certificado de derechos de uso respecto de los inmuebles propiedad de la nación

---

<sup>469</sup> LANZ CÁRDENAS, J. T., “Antecedentes históricos y legislativos” en: *La contraloría y el control interno en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 168 y ss.

<sup>470</sup> Por Decreto del 22 de diciembre de 1932 se suprimió el Departamento de Contraloría. Más tarde, la Ley de Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y demás Dependencias del Poder Ejecutivo Federal del 22 de marzo de 1934, confirmó la hegemonía de Hacienda en la gestión y administración de bienes nacionales.

<sup>471</sup> *Ley General de Bienes Nacionales*. Publicada en el Diario Oficial, Tomo CXXXIII, Núm. 3, viernes 3 de julio de 1942.

<sup>472</sup> “Artículo 9o., fracción VI de la Ley: Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la nación, en los términos que dicte el reglamento respectivo”.

destinados a fines religiosos.<sup>473</sup> Siempre y cuando obtengan el registro correspondiente como lo expresa el artículo 6° de la ley.<sup>474</sup>

El Reglamento<sup>475</sup> es el que más explicita el uso y la administración de los bienes destinados al culto público propiedad de la nación. Establece que el patrimonio de las asociaciones se constituye por los bienes que bajo cualquier título adquieran, posean o administren. Para beneficiarse del aludido derecho de uso de algún inmueble es necesario que la Asociación Religiosa lo haya declarado ante la citada Secretaría, ya que la sola ocupación o utilización de los inmuebles por parte de los ministros del culto, asociados o cualquier otra persona no crea derechos a favor de los mismos.<sup>476</sup>

En el año 2004, se publicó la nueva Ley General de Bienes Nacionales creando un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública llamado *Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)*, encargado del control y administración de los inmuebles nacionalizados, con atribuciones de fortalecer registralmente la nacionalización de los bienes, verificar el uso y aprobar reconstrucción y reparación de inmuebles. Teniendo a su cargo el sistema de información inmobiliaria federal, expidiendo los certificados de derechos de uso y disfrute de inmuebles. A partir de 2005 inició operaciones de emisión y entrega de certificados de derechos de uso.<sup>477</sup>

---

<sup>473</sup> Artículo 22 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

<sup>474</sup> “Los bienes inmuebles propiedad de la Nación que actualmente son usados para fines religiosos por las iglesias y demás agrupaciones religiosas continuarán destinados a dichos fines, siempre y cuando las mencionadas iglesias y agrupaciones soliciten y obtengan en un plazo no mayor de un año, a partir de la entrada en vigor de esta ley su correspondiente registro como Asociaciones Religiosas”.

<sup>475</sup> “Las Asociaciones Religiosas deberán solicitar a la autoridad responsable de la administración del patrimonio inmobiliario federal la expedición del correspondiente Certificado de Derechos de Uso, respecto de los inmuebles propiedad de la Nación, cuyo uso se les haya otorgado en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables. Para la tramitación del Certificado, se requerirá la manifestación de la Dirección General de que el inmueble del que se certificará su uso fue declarado ante dicha autoridad por la asociación religiosa interesada”. (Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de la Ley).

<sup>476</sup> Artículo 21, Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

<sup>477</sup> GÓMEZ MORÍN RIVERA, Jun Pablo, “Los bienes inmuebles nacionales en uso de las Asociaciones Religiosas”, en: *Una puerta abierta... Op. Cit.* p. 223

El inventario actual es de 65 mil 958 registros. Constituyen el mayor acervo inmobiliario de la federación, su inventario se actualiza constantemente, se distribuye de la siguiente forma: 41.773 de la religión católica, 24.185 de otras corrientes religiosas. El uso dado a los inmuebles es: 55 catedrales, 64.569 iglesias, parroquias y capillas; 394 obispados, conventos, seminarios y casas domiciliarías. 484 otros usos relacionados con la religión y 456 diversos, terrenos, colegios, hospitales y asilos.<sup>478</sup>

El resultado hoy día es la existencia de un sistema triangular de control creado por la Ley General de Bienes Nacionales. Tres son las Secretarías a las que se les asignó competencias sobre los bienes nacionales de origen religioso: la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación. Son distintas las leyes que regulan el fenómeno religioso.<sup>479</sup>

Del hecho de que las Asociaciones Religiosas usen bienes propiedad de la nación encontrándose obligadas a su conservación y mantenimiento, no tengo duda que es un sistema claro de cooperación entre el Estado mexicano y las Asociaciones Religiosas.

La administración federal tiene en la actualidad múltiples problemas para controlar y conservar los bienes nacionales de origen religioso, problemas que al parecer no nacen exclusivamente de la estructura orgánica vigente, sino que son consecuencia del desarrollo de políticas implementadas a lo largo del proceso legislativo nacionalizador, formuladas *ex profeso* por el poder civil para dirimir los conflictos que mantenía con el poder eclesiástico en distintas coyunturas.

El uso y administración de los bienes destinados al culto público propiedad de la nación, es regulado tanto por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público como

---

<sup>478</sup> *Ibidem*, p. 320

<sup>479</sup> Todas estas leyes pueden verse en la página electrónica de la Dirección General de Asociaciones Religiosas: [www.asociacionesreligiosas.gob.mx](http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx), y el Reglamento Interior de Secretaría de Contraloría en el Diario Oficial de la Federación, 12 de abril de 1995.

por su reglamento. Es sin duda, el reglamento el que más explicita el uso y la administración de los bienes destinados al culto público propiedad de la nación, pues establece que el patrimonio de las asociaciones se constituye por los bienes que bajo cualquier título adquieran, posean o administren.

Corresponde sólo a las Asociaciones Religiosas el derecho a usar en forma exclusiva bienes propiedad de la Nación que se hayan destinado para fines religiosos antes del 29 de enero de 1992. Salvo por una acreditación por parte de terceros de un mejor derecho. Para beneficiarse del aludido derecho de uso de algún inmueble es necesario que la asociación religiosa lo haya declarado ante la citada Secretaría, ya que la sola ocupación o utilización de los inmuebles por parte de los ministros del culto, asociados o cualquier otra persona no crea derechos a favor de los mismos.<sup>480</sup>

El hecho de que las Asociaciones Religiosas usen bienes muebles e inmuebles propiedad de la nación, no es más que un sistema de financiación en forma de cooperación. No obstante, el principio histórico de la separación Estado-Iglesias.

- **Administración de Inmuebles propiedad de la nación destinados al culto público por las Asociaciones Religiosas.**

En relación a la administración de los inmuebles destinados al culto público por las Asociaciones Religiosas, debo decir que la ley y el reglamento reconocen explícitamente el derecho de las Asociaciones Religiosas para administrar las iglesias, templos o locales destinados al cumplimiento de sus objetivos, a través de las figuras del uso o posesión que se les ha otorgado a través del certificado correspondiente.

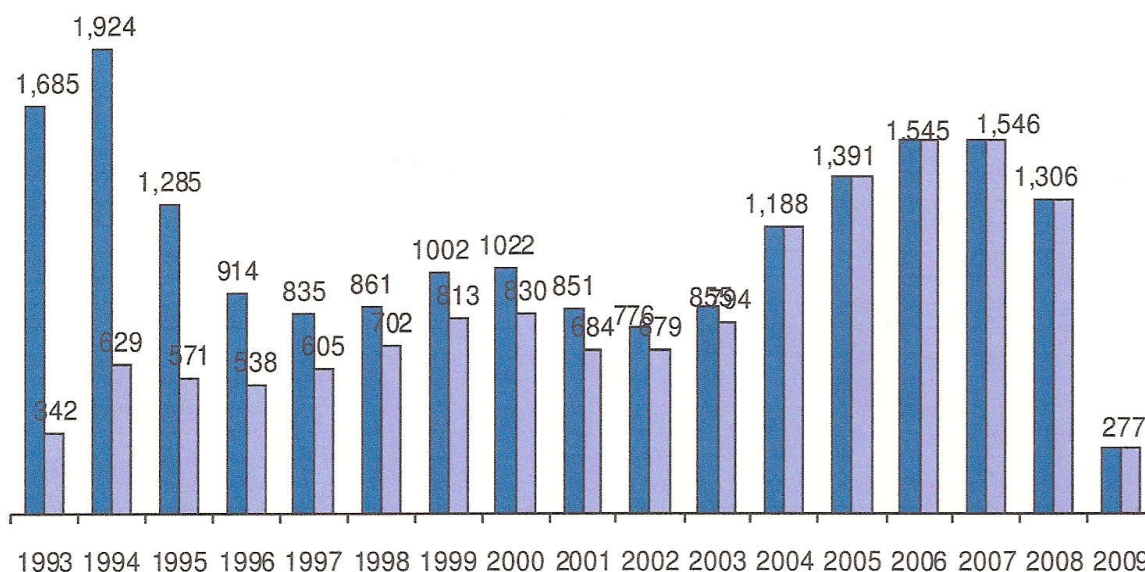
---

<sup>480</sup> Artículo 21, *Ibidem*.

El uso, administración, conservación y vigilancia de los inmuebles federales que se utilizan para fines religiosos se rige por la Ley General de Bienes Nacionales. Los inmuebles considerados monumentos históricos o artísticos son regulados por la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

El hecho de que el Estado otorgue en administración de bienes inmuebles propiedad de la nación a las asociaciones religiosas, no es otra cosa sino una forma de cooperación entre el Estado y las mismas, lo que finalmente se convierte en una forma de financiación.

#### INMUEBLES DICTAMINADOS COMO SUSECEPTIBLES DE INCORPORARSE AL PATRIMONIO DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS<sup>481</sup>



<sup>481</sup> Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Dirección General de Asociaciones Religiosas. Subdirección de la Unidad de Informática. Total: 19,263 Actualizado al 13 de Marzo de 2009.

## 5.7 FORMAS RECAUDATORIAS DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS

*“No sólo lucharemos contra el clero y sus aberraciones, sino tendremos que convencer al pueblo de que no estamos en contra de la religión, sino en contra de los abusos de la Iglesia como institución”.*

MELCHOR OCAMPO

Desde la antigüedad, la Iglesia Católica ha gozado de privilegios y favores oficiales al contar con un sistema tributario exclusivo, establecido en algunos casos de manera arbitraria e injusta apoyándose en la fe religiosa, exención de impuestos, justicia interna propia, influencia en la justicia extraeclesiástica y en la administración pública, el derecho de otorgar asilo y la ejecución de varias de sus decisiones mediante la fuerza estatal.<sup>482</sup>

Sin embargo, en todo el occidente reina ahora el principio constitucional de la tolerancia religiosa; la libertad de enseñar ha disminuido el poder de la Iglesia sobre las almas (ya no tiene aquel tradicional monopolio de formar la mente de los futuros ciudadanos); además, en el transcurso del siglo XIX un Estado tras otro ha negado a la Iglesia su apoyo para el cobro de los diezmos y otros impuestos eclesiásticos; y, finalmente, las sanciones estatales ya no están a la disposición de la Iglesia para hacer respetar los votos religiosos.

*Es raro el país donde un sacerdote todavía goza de privilegios en materia penal. El derecho de **asilo en sagrado** que antes podía hacer valer la Iglesia ya no existe. Muchos países todavía conceden a la Iglesia ciertos favores fiscales, y en unos pocos, la Iglesia recibe incluso una subvención del erario. En muchos otros, el dogma liberal*

---

<sup>482</sup> MARGADANT, Guillermo F. *La Iglesia ante el Derecho Mexicano*, Esbozo histórico-Jurídico, Miguel Ángel Porrúa, México, 1991, pp. 35-36.



*de la libre circulación de los bienes ha llevado hacia la desamortización de la riqueza eclesiástica inmobiliaria. Así, en todos los países de la cultura occidental la iglesia ha perdido su posición central en la celebración del matrimonio y, además, en la administración general del registro civil y sus cementerios (...).*<sup>483</sup>

### a) *Leyes de Indias*

La recopilación de las Leyes de Indias, mandada imprimir y publicar por su Majestad Católica, el Rey Don Carlos II en el año de 1681, en Madrid, España, en su tomo primero nos deja ver la importancia institucional que adquirieron las contribuciones eclesiásticas denominadas como: diezmo,<sup>484</sup> primicias,<sup>485</sup> mesadas<sup>486</sup> y derechos de sepultura,<sup>487</sup> entre otros ejemplos que nos revela la historia respectiva.

El tema de los diezmos y primicias de tradición eclesiástica ha quedado superado en la mayor parte de las Asociaciones Religiosas, sobretudo en la católica que fue su principal protagonista. Lo anterior, como consecuencia de la evolución social, económica y política mundial. El actual sistema tributario de las Iglesias tiene

---

<sup>483</sup> *Ibidem*, pp. 59-60.

<sup>484</sup> **Los diezmos** eran lo equivalente a la décima parte de las cosechas o ganancias de especies de frutas, semillas, legumbre o animales cultivados o producidos, que deberían pagarse como contribución a las Iglesias.

<sup>485</sup> **La primicia** fue un contribución eclesiástica que en cierta forma se complementaba con el diezmo, consistía en la entrega de los primeros frutos o productos de especies de animales, legumbres, venta de bienes muebles o inmuebles, artículos o bienes industrializados u otros de uso o consumo popular, como aportación personal, familiar o de un grupo de personas, para el sostenimiento de la Iglesia y de la diócesis u obispados.

<sup>486</sup> **La mesada** fue otro ingreso tributario que cobraba mensualmente las Iglesias por diversos oficios religiosos, lo cual se podía equiparar a un derecho, ya que se trató de una contraprestación por servicios religiosos. “(...) *que se cobre mesada por las prebendas (renta o venta por servicios religiosos, oficios o beneficios eclesiásticos, que el rey instituyó en las indias a favor de las Iglesias; (...) que todo dinero que llegare de las Indias a la corona española (...) de la mesada eclesiástica, (...) para ser destinado a las necesidades de las Iglesias(...)*”.

<sup>487</sup> “Que los vecinos y naturales de las Indias se puedan enterrar en monasterios, conventos o Iglesias que quieran, previo pago de los derechos que procedan; ordenándose a los prelados, que cada uno en sus diócesis provea como los herederos de los difuntos que se entierren no reciban agravio en los derechos, no consienta que los clérigos se excedan de lo que justamente debe pagarse”. “Se estableció una ley para que los obispos guarden el derecho y costumbre sobre la distribución de la carta funeral, en donde debería quedar asentado que la cuarta parte, de los bienes del difunto corresponde a las parroquias, lo cual claramente tenía que anotarse en los testamentos y en caso de intestado, ello sería determinado por el obispo(...)”. “Que los ministerios de doctrina tengan libros de bautismos, entierros y otras ceremonias religiosas, debiendo enviar cada año certificaciones y padrones de registros de su contabilidad y actos religiosos a los virreyes y gobernadores, para constancia y respaldo oficial”.

procedimientos más moderados y, en algunos opuestos, se sostiene con las aportaciones de los Estados o voluntarios de sus miembros.<sup>488</sup>

### ***b) Los tributos durante la colonia***

El *tributo* fue un factor determinante para construir las instituciones durante la colonia, dando su fisonomía a la sociedad de aquella época. En lo religioso, el *tributo* fue un factor determinante para arraigar en los naturales la fe cristiana y el culto respectivo, además, fue el soporte elemental para alcanzar un gran predominio económico, acaparando grandes extensiones de tierras, levantando obras monumentales, tales como iglesias, catedrales, monasterios y conventos, y llegando a tener más poderío financiero que la propia Corona Española. Ello se logró gracias al apoyo de los propios monarcas. La corona tuvo la tendencia de usar a fines del siglo XVIII el gigante patrimonio eclesiástico para apoyar el financiamiento de las necesidades del Estado.<sup>489</sup>

### ***c) La independencia***

Al finalizar el régimen colonial en México y con el comienzo de la guerra de independencia, el abuso excesivo de las cargas tributarias fue duramente cuestionable, tanto de los fincados por la corona como por las Asociaciones Religiosas, provocando rebeliones y malestares entre la población, lo que con el tiempo desembocaría en importantes reformas jurídicas, sobretudo con el sistema patrimonial de las Iglesias.<sup>490</sup>

Sin duda, fue notable el malestar de la población en contra de las fuertes cargas tributarias, tanto de índole religioso como para la corona española, como lo señala el

---

<sup>488</sup> SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. *Asociaciones Religiosas... op. cit.*, p. 19.

<sup>489</sup> *Ibidem*, pp. 215-225.

<sup>490</sup> SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. *Asociaciones Religiosas... op. cit.*, p. 226.

bando de Don Miguel Hidalgo promulgado en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810, que en su programa político social contiene como punto esencial la liberación del pago de *tributos* a todas las castas que los soportaban, así como toda exacción a los indios que la sufrían.

Don José María Morelos en *Los Sentimiento de la Nación*, en el punto 22 señala:<sup>491</sup>  
*Que se quite la infinidad de tributos, pechos (...) e imposiciones que nos agobian y se señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y demás efectos u otra carga igual, ligera, que no oprima tanto, como la alcabala, el estanco, el tributo y otros; pues con esta ligera contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados.*

#### **d) La Reforma**

Las leyes referidas contienen medidas enérgicas y radicales para terminar con el predominio económico de las Asociaciones Religiosas, incluyendo modalidades específicas sobre el uso y destino de sus bienes, de los cuales una parte entra al dominio del Estado para cumplir ciertas funciones públicas: educativas, culturales, religiosas, entre otras, ordenando la enajenación de fincas rústicas y acciones a precios ridículos; a su vez, se moderó el costo de los servicios religiosos de común acuerdo de entre las partes y se señalaron disposiciones que con el tiempo no se respetaron del todo, por abandono del propio gobierno.<sup>492</sup>

El abuso y excesivo poder económico de las asociaciones religiosas católicas dio lugar a una intervención enérgica del poder estatal, lo cual propició que se dictaran diversos ordenamientos legales, primero para suprimir múltiples e injustos tributos eclesiásticos y después para desamortizar y nacionalizar los bienes de la Iglesia y,

---

<sup>491</sup> Documento: *Sentimientos de la Nación*, 14 de septiembre de 1813, José María Morelos I. Pavón.

<sup>492</sup> SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. *Asociaciones Religiosas... op. cit.*, p.57

finalmente, para poner limitaciones a su poder económico, dejando en claro que sólo debería adquirir los bienes indispensables para cumplir su objeto social y que no debería perseguir fines lucrativos.<sup>493</sup>

La Ley Lerdo instituye la desamortización de fincas rústicas y urbanas que administren como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la república.<sup>494</sup>

## **5.8 OBLIGACIONES FISCALES DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS EN LA ACTUALIDAD.**

Las obligaciones fiscales de las Asociaciones Religiosas son un tema que, por su propia naturaleza, resulta polémico y contradictorio con sus lagunas e imprecisiones legales.<sup>495</sup> El fundamento legal de la obligación tributaria de las Asociaciones Religiosas se encuentra en el artículo 31 de la Constitución,<sup>496</sup> en los artículos 17 y 19<sup>497</sup> de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; el Código Fiscal de la Federación;<sup>498</sup> así como en la Ley del Impuesto sobre la Renta<sup>499</sup> y su Reglamento.<sup>500</sup>

---

<sup>493</sup> *Ibidem*. p. 55.

<sup>494</sup> Ley Lerdo. Ley de Desamortización de Bienes de la Iglesia y de Corporaciones. , (Decreto de gobierno, junio 25 de 1856). “Artículo 1. Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual”; “Artículo 4. Las fincas urbanas arrendadas directamente por las corporaciones a varios inquilinos, se adjudicarán, capitalizando la suma de arrendamientos, a aquél de los actuales inquilinos que pague mayor renta, y en caso de igualdad, al más antiguo. Respecto de las rústicas que se hallan en el mismo caso, se adjudicará a cada arrendatario la parte que tenga arrendada”.

<sup>495</sup> SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. *Asociaciones Religiosas, Régimen Fiscal*, Editorial Porrúa, México, 1ª edición 2007, Prologo.

<sup>496</sup> “Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: Fr. IV Contribuir para los gastos públicos (...) de manera (...) que dispongan las leyes”.

<sup>497</sup> “Artículo 17. (...) las Asociaciones Religiosas deberán de registrar ante la Secretaría de Gobernación todos los inmuebles sin perjuicio de cumplir con las demás obligaciones en la materia, contenidas en otras leyes. A las personas físicas y morales, aspa como a los bienes que esta Ley regula, les será aplicables las disposiciones fiscales en los términos de las leyes en la materia”.

<sup>498</sup> “Artículo 1º. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas”.

En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del servicio de Administración Tributaria (SAT), da a conocer los criterios fiscales cada año a las Asociaciones Religiosas informándoles, entre otras cosas, su régimen fiscal, los ingresos exentos, los ingresos que pagan impuesto, las declaraciones que deben presentarse, los comprobantes que deben expedirse y las facilidades administrativas de que disponen.<sup>501</sup>

En principio, debe señalarse que las Asociaciones Religiosas tributan dentro del régimen de las personas morales con fines no lucrativos y que podrán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto en los términos del Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente por los ingresos derivados de las cuotas anuales ordinarias o extraordinarias pagadas por sus integrantes. Por los demás ingresos deberán pagar el impuesto en los términos del Título II de la Ley.<sup>502</sup>

La primera obligación fiscal es la de inscribirse o darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Generalmente no están obligadas a declarar el impuesto sobre la renta y<sup>503</sup> no pagan por los ingresos que obtengan de sus actividades normales.<sup>504</sup>

Deben pagar impuesto por los ingresos provenientes de venta de bienes, intereses y premios, cuando vendan bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas

---

<sup>499</sup> “Artículo 95. Para los efectos de esta Ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 las siguientes: Fr. XVI Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos, deportivos o religiosos”.

<sup>500</sup> “Artículo 107. Las Asociaciones Religiosas y culto público podrán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto en los términos del artículo 3° de la Ley”.

<sup>501</sup> Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio de Administración Tributaria, (SAT). Régimen fiscal de las Asociaciones Religiosas, en qué casos pagan impuestos y que obligaciones fiscales tienen, Gobierno Federal, 2008. p. 7

<sup>502</sup> Artículo 107 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

<sup>503</sup> El objeto de este impuesto es gravar los ingresos en efectivo, en especie o crédito, que modifique el patrimonio del contribuyente proveniente de los rendimientos del capital de trabajo.

<sup>504</sup> Ofrendas, diezmos, primicias y donativos recibidos de sus miembros, congregantes, visitantes y simpatizantes por cualquier concepto relacionado con sus actividades, siempre que tales ingresos se apliquen a los fines religiosos.

distintas de sus miembros, y siempre que estos ingresos excedan de 5% de sus ingresos totales. Están exentos de impuesto empresarial a tasa única y del impuesto a los depósitos en efectivo, dado que no tienen fines lucrativos.

En lo relativo al Impuesto al Valor Agregado (IVA) están exentos, pues los servicios que proporcionan no pueden ser gravables con este impuesto, como por ejemplo, el otorgar los sacramentos o cualquier prestación que tenga que ver con la asistencia espiritual.

Tiene además la obligación de llevar contabilidad. Esta obligación se cumple con el sólo registro sus ingresos y erogaciones en un cuaderno empastado y numerado. Deben expedir comprobantes simplificados que demuestren la obtención de sus ingresos.

También están obligados a presentar una declaración informativa con respecto a los ingresos obtenidos y los gastos efectuados en el ejercicio que se informa. Deberán, también, presentar avisos por cambios en su situación fiscal, tales como la suspensión de actividades, reanudación de actividades, aumento de obligaciones fiscales, disminución de obligaciones fiscales, apertura de establecimiento, cierre de establecimiento, cambio de denominación y cambio de domicilio fiscal.

### **Facilidades administrativas**

- a)** No están obligadas a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado.
- b)** Podrán hacer deducibles los gastos menores que no excedan de \$3,001.00

- c) En el Distrito Federal no pagarán Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles durante los seis meses siguientes a la fecha de haber obtenido su registro.<sup>505</sup>

De los comentarios que se han expresado se puede advertir de que en este sentido el Estado mexicano, al hacer exenciones a las Asociaciones Religiosas es, de alguna forma, una manifestación de cooperación o de excepción con las mismas, obteniéndose privilegios en esta materia, no obstante que la propia Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece de manera enfática *las Asociaciones Religiosas son iguales ante la Ley en derechos y obligaciones*.<sup>506</sup>

Así las cosas, queda claro que la obligación tributaria otorga muchos privilegios indebidos o excesivos como las exenciones, subsidios, condonaciones y estímulos fiscales, los cuales deben suprimirse en su mayoría porque impactan en la recaudación tributaria.

No solamente la federación ha realizado la exención de impuesto a favor de las Asociaciones Religiosas sino también los estados (provincias), afectando con ello no sólo el derecho de los municipios y de los estados a percibir los ingresos provenientes de las contribuciones, sino también el régimen de libre administración hacendaria, restándoles autonomía y autosuficiencia económica. Dichas exenciones vulneran la prohibición constitucional en el sentido de que las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna. Transgrede el artículo 115, fracción IV, inciso a), y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el hecho de que, como en el Estado de Chihuahua en el año de 2001, se hayan exentado a las Asociaciones Religiosas el pago, no sólo del impuesto predial causado por los bienes inmuebles que se encuentran dentro de su patrimonio, sino también el impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles

---

<sup>505</sup> ADAME GODDARD, Jorge. *Estudios sobre Política y Religión*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 120, México, 2008, pp. 249-250.

<sup>506</sup> Artículo 6 de la Ley

que se genera por los bienes inmuebles de las mismas características, tal como lo señala la tesis jurisprudencial P./J.100/2001.<sup>507</sup>

Es claro que las formas tributarias que la ley prevé para las Asociaciones Religiosas, es un régimen de exención y de privilegios, cosa que no debería ser, pues la propia ley señala que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país, como tampoco pueden alegarse motivos religiosos para evadir las responsabilidades y las obligaciones prescritas en las leyes. En consecuencia deben sujetarse al régimen general y no a leyes especiales. De lo anterior se advierte que estamos ante un sistema de cooperación entre ambas, no obstante el principio de separación Iglesias-Estado.

---

<sup>507</sup> “**ASOCIACIONES RELIGIOSAS.** LA EXENCIÓN EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIAL Y SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE INMUEBLES EN SU FAVOR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDÍ EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO A) Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL UNO). Al establecer el citado artículo cuarto transitorio que las avocaciones religiosas estarán exentas d pagar el impuesto predial causado por los bienes inmuebles que se encuentren dentro de su patrimonio y que se destinen a sus fines, así como el impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles que se genere por los bienes inmuebles de las mismas características, que adquieran en el periodo comprendido entre el veinte de enero de dos mil uno y el treinta y uno de diciembre del mismo año, transgredí el artículo 115, fracción IV, inciso a), y segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque al referirse la mencionada exención a fuentes primarias de ingresos propias e intocables de la hacienda municipal, no solamente afecta el derecho de los Municipios del Estado de Chihuahua a percibir los ingresos provenientes de las mencionadas contribuciones, sino también el régimen de libre administración hacendaria, en virtud de que al no tener libre disposición y aplicación de esos recursos para satisfacer las necesidades fijadas en las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, les resta autonomía y autosuficiencia económica. Además, dicha exención también vulnera la prohibición constitucional de que “las leyes estatales no establecen exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna”, respecto de las contribuciones previstas a favor de los Municipios, entre ellas, las relativas a la propiedad inmobiliaria, a su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora”. *Acción de inconstitucionalidad 14/2001. Procurador General de la República. 7 de agosto de 2001, Unanimidad de diez votos, Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mario Azuela Güitrón. Secretario: Rolando Javier García Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de agosto en curso, aprobó, con el número 100/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil uno.*



## **5.9 INANCIACIÓN DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS**

El tema de la financiación no es un tema sencillo, pues existen opiniones encontradas no obstante el arraigo de una confesión religiosa en la sociedad. En nuestro país, dadas las condiciones jurídicas, no se han realizado debates libres de prejuicios sobre la financiación a las Asociaciones Religiosas.

En México debido al modelo de separación entre el Estado y las Iglesias, aunado al principio de laicidad, no existe fundamento constitucional para que se de financiamiento estatal a las doctrinas religiosas. Tampoco su Ley reglamentaria prevé nada al respecto. En este sentido, el Estado no tiene partida presupuestaria para tal hecho. Sin embargo, el reglamento de la ley en su artículo 6 y 34<sup>508</sup> prevén formas de financiación de las confesiones religiosas bajo la modalidad de asistencia religiosa en los centros de salud e instituciones de asistencia social, centros de readaptación social y estancias o estaciones migratorias al igual que al permitir que la secretaría de gobernación celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las Asociaciones Religiosas, de tal suerte que el principio histórico de separación del Estado- Iglesias, no es obstáculo para que se de la misma a través de las formas directa e indirectas que advertimos en esta investigación.

Las confesiones religiosas pueden obtener financiamiento de distintas formas: limosnas, donativos, cobro o agradecimiento de servicios, actividades profesionales (caso de la docencia), intereses, regalías, premios, rifas, administración de criptas,

---

<sup>508</sup> “Artículo 6°. Los responsables de los centros de salud e instituciones de asistencia social, del sector público o privado, así como las autoridades de los centros de readaptación social y de estancias o estaciones migratorias, de conformidad con sus atribuciones, proveerán las medidas conducentes para que sus internos o usuarios, a petición expresa de los mismos, reciban asistencia espiritual de las asociaciones religiosas y los Ministros de Culto (...); “Artículo 36. La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación o colaboración en las materias de la Ley y el presente Reglamento con las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal. Igualmente podrán formalizarse convenios de concertación con las Asociaciones Religiosas”.

recuperación de fondos invertidos, subsidios del Estado y además ingresos permitidos por la ley.<sup>509</sup>

Existen también las formas indirectas de financiación de las confesiones religiosas, a través de los beneficios fiscales –no sujeción tributaria, exención tributaria, deducciones por donativos a las confesiones religiosas– previstos para distintos actos o negocios jurídicos. Son formas indirectas que coexisten o pueden coexistir con la dotación presupuestaria, la asignación tributaria o el impuesto religioso.

Indica Joan Capseta Castella<sup>510</sup> que *los entes religiosos, pueden obtener financiamiento a través de distintas vías, las cuales no se excluyen entre sí, básicamente hablamos de los donativos de los feligreses; beneficios por actividades llevadas a cabo por la Iglesia; e ingresos provenientes del Estado, tanto de manera directa como indirecta. También debemos distinguir la financiación de los fines estrictamente religiosos (el pago de derechos por servicios sacramentales y otros), de aquellos conocidos como secundarios (beneficencia...) en los cuales la Iglesia concurre en igualdad de condiciones, con las demás asociaciones civiles no confesionales.*

**a) La financiación directa.** Es aquélla en que el Estado aporta dinero líquido a la Iglesia correspondiente, ya sea cubriendo la totalidad de los gastos o parte de los mismos. Es un dinero que el Estado asigna a las Iglesias a través de sus presupuestos generales. Puede ser íntegra cuando el Estado asume todos sus gastos y se da en el supuesto que se reconoce a una Iglesia como la oficial del Estado, o bien, puede ser por cooperación, cuando el Estado sólo colabora ofreciendo su infraestructura para recaudar el impuesto religioso pero no aporta dinero.

---

<sup>509</sup> SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. *Asociaciones Religiosas... op. cit.*, Prologo, p. XIV

<sup>510</sup> CAPSETA CASTELLA, Joan. *Personalidad jurídica y régimen patrimonial de las Asociaciones Religiosas en México*, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, México, D.F. 1977, p. 61 y 62.

**b) Financiación indirecta.** Es aquélla en que el Estado no aporta dinero en metálico, sino que su aportación es a través de la reducción de los impuestos que la misma genera y debe pagar al erario público. Son los llamados supuestos de no sujeción, exenciones, desgravaciones (...). Esto se justifica por la apreciación positiva que del factor religioso tiene el Estado.

En general, puede decirse que si el Estado no lleva a cabo ningún tipo de colaboración económica, se estaría ante un sistema de pura autofinanciación. Si, por el contrario, asume totalmente las necesidades económicas de las confesiones, el sistema podría ser calificado de exclusivamente estatal. Si el Estado colabora en alguna medida en la atención de las necesidades económicas de las confesiones se estaría ante un sistema de cooperación.

En el caso de México, por regla general, se realiza a través de limosnas, colectas, donativos, regalías y cobro de los servicios espirituales proporcionados a cargo de sus fieles. Pero como lo he expresado, la norma secundaria en México permite la financiación de las confesiones, pues el hecho de que permita celebrar convenios de cualquier índole que tenga que ver con el cumplimiento de sus objetivos lo demuestra. Por ejemplo, el hecho de que las Iglesias usen, gocen y disfruten bienes propiedad de la nación, es una forma de financiación, como también lo es, el hecho de que exista un régimen fiscal de exención en relación con su régimen tributario al igual que las facilidades y apoyos que otorga para que las confesiones religiosas puedan otorgar a sus fieles asistencia espiritual.

El hecho de que la Secretaría de Gobernación en el período 2000-2006 haya entregado recursos económicos a través de donativos por 20.5 millones a asociaciones y escuelas religiosas demuestra que existe un sistema de financiación aún por encima de la norma. En un listado que incluye 49 asociaciones y escuelas religiosas, sobresalen entre los beneficiarios la Arquidiócesis de México, según Gobernación los

recursos corresponden a donativos en especie no reclamados, provenientes de juegos y sorteos.

Entre las organizaciones beneficiadas en el periodo mencionado destacan Cáritas de Tampico, Cáritas Diocesanas de Torreón, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, IAP, asilo Obispo Nicolás Corona, y la asociación Teodoro Gildred.<sup>511</sup>

No obstante, aunque se argumente lo contrario en México existe una financiación directa e indirecta a las Asociaciones Religiosas que se encuadra dentro de un sistema de cooperación entre ambas, así lo demuestra los hechos cuando por conducto de la Secretaría de Gobernación se otorga certificados de uso de bienes propiedad de la nación a las mismas, también cuando a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se otorgan estímulos fiscales y se sujetan a un régimen especial entre otros.

## **5.10 LIQUIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS**

Cuando una Asociación Religiosa, por alguna causa,<sup>512</sup> se disuelva teniendo que liquidarse, podrá transmitir sus bienes por cualquier título a otras Asociaciones Religiosas.<sup>513</sup> Pero si se encuentra dentro de las infracciones y sanciones que se imponen, los bienes que se liquiden de las mismas pasarán a la asistencia pública. Los bienes nacionales que estuvieran en su posesión regresarán al pleno dominio de la nación. El destino de los bienes que se liquiden será distinto si se trata de una disolución voluntaria o por el contrario de una disolución forzosa.

---

<sup>511</sup> Periódico *La Jornada*, “Gobernación entregó donativos por \$20.5 millones a asociaciones y escuelas religiosas”, Miércoles 3 de junio de 2009.

<sup>512</sup> Que no se encuentre prevista dentro de la hipótesis del Artículo 32 de la Ley

<sup>513</sup> Artículo 16, último párrafo de la Ley

En cualquiera de las dos hipótesis la ley determina que los bienes nacionales que tuvieran en posesión regresarán al dominio público de la nación<sup>514</sup>. Esta prevención de la Ley es necesaria porque, si bien los templos y otros bienes de la nación no son propiedad de las Asociaciones Religiosas, no obstante los derechos de uso o posesión, sí forman parte del patrimonio de éstas y cabría pensar que en ausencia de una disposición específica al disolverse, podría también transmitir esos derechos dentro de la administración de los bienes.<sup>515</sup>

La ley prevé que las Asociaciones Religiosas puedan disolverse y por consecuencia liquidar su patrimonio. Contempla dos casos: la disolución y liquidación por decisión de la propia asociación, y la disolución y liquidación por orden de la autoridad.

Como las Asociaciones Religiosas no tienen fines de lucro no se puede admitir que los bienes de la asociación en liquidación se repartan o distribuyan entre sus directores, representantes, ministros de culto o asociados. Por eso debe entenderse que el dinero resultante de la liquidación debe aplicarse al pago de las deudas que tuviese y que si hubiera algún remanente éste debería de destinarse a otra asociación como donativo o a la asistencia privada o pública. Cuando la liquidación se hace por orden de la autoridad los bienes de la asociación en liquidación pasarán a la asistencia pública.<sup>516</sup>

## **5.11 LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS**

No hay duda de que las reformas en materia religiosa son un gran avance al reconocimiento de la libertad religiosa, pero también de que existen problemas no resueltos como lo observamos en el desarrollo de la investigación; entre otros, las limitaciones a este derecho fundamental; las relativas a las imprecisiones y las posturas

---

<sup>514</sup> Artículo 16, párrafo III de la Ley.

<sup>515</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico Mexicano...*, op. cit., p. 273-274.

<sup>516</sup> ADAME GODDARD, Jorge. *Estudios sobre Política y Religión...* op. cit., p. 251.

jurídicas complacientes y de facto con respecto al régimen fiscal de las asociaciones religiosas, como los subsidios y las exenciones; la existencia de bienes propiedad de la nación que se encuentran irregulares al no tener la declaratoria de nacionalización y, en consecuencia, que no se pueden dar en uso a las asociaciones religiosas, pues el gobierno no ejecutó en su momento la nacionalización de los bienes que ordenó su incorporación y que, por lo tanto, miles de bienes se encuentran intitulado como se aprecia en el Registro Público de la Propiedad Federal y en el Inventario General de la Nación; la escasa reglamentación relativa a la asistencia religiosa; las controvertidas y complacientes normas relativas al régimen jurídico de los ministros del culto y el, no menos discutido, derecho a la enseñanza religiosa en México.

En resumen, es claro que existen problemas no resueltos relativos a lo que se ha expresado. Son varios los expertos que han cuestionado que las normas en materia religiosa no son suficientes y que, por lo tanto, no conceden los instrumentos legales para subsanar las omisiones, carencias o facultades sobre estos rubros que permita un desarrollo más completo del Derecho Fundamental de Libertad Religiosa.

## **CAPÍTULO VI**

---

---

# **LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN MÉXICO**

## CAPÍTULO VI

### LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN MÉXICO

#### 6.1. PLANTEAMIENTO

Las reformas que en la última década del siglo XX se hicieron a las normas constitucionales en materia religiosa y la expedición de la consecuente Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,<sup>517</sup> tuvieron como objetivo la reconciliación del poder político con el religioso. Recordemos que hasta antes de la aparición de las reformas las relaciones entre ambos eran consideradas como tensas y muchas veces contradictorias.

En este sentido, se da una nueva forma de regular las relaciones entre el Estado y las Iglesias o agrupaciones religiosas y Asociaciones Religiosas, apareciendo en los textos legales la *Asistencia Religiosa*.

Al tratar el tema de la asistencia religiosa en el ámbito del Derecho Eclesiástico, no nos referimos a la actividad que realizan las confesiones religiosas a fin de satisfacer las necesidades espirituales de sus fieles, sino al papel que juega el Estado como actor pasivo de no impedir y tutelar el ejercicio del derecho de libertad religiosa.<sup>518</sup>

La asistencia religiosa es una manifestación del derecho de libertad religiosa que constituye, por tanto, su fundamento.<sup>519</sup> Esto no quiere decir que la asistencia religiosa sea un servicio público. Pues el principio de no confesionalidad del

---

<sup>517</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992.

<sup>518</sup> IBÁN, Iván C., PRIETO SANCHÍS, Luis. y MONTILLA, Agustín. *Manual de Derecho Eclesiástico*, Editorial Trotta, S.A., 2004, p. 261

<sup>519</sup> ÁLVAREZ CORTINA, Andres-Corsino y RODRÍGUEZ BLANCO, Miguel.(coordinadores), *La Libertad Religiosa en España, 25 años de vigencia de la Ley Orgánica 7/1980*, de 5 de julio (comentarios a su articulado), Biblioteca Comares de Ciencia Jurídica, Editorial Comares, S.L., Granada, 2006, p. 62



Estado establece una nítida distinción entre funciones de la Iglesia y funciones del Estado.<sup>520</sup> La asistencia religiosa es llevada a cabo por las propias confesiones. No puede ser prestada por los poderes públicos, pues estos carecen de competencia para asumir funciones religiosas. Los poderes públicos se limitan a cooperar con las confesiones para garantizar la efectividad del derecho de libertad religiosa.<sup>521</sup>

La norma constitucional no es precisa en relación a la Asistencia Religiosa y tampoco la Ley Reglamentaria, por lo que ante esta ambigüedad se hacía justo y necesario un poco de más precisión en este sentido, por lo que aparecería el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.<sup>522</sup>

Se dice que la Asistencia Religiosa nos permite calibrar la función de un Estado social de derecho porque a través de ella puede comprobarse si la Libertad Religiosa es una mera libertad formal o puede ser ejercida de forma real y efectiva<sup>523</sup> como lo exige la ley.

## 6.2. CONCEPTO DE ASISTENCIA RELIGIOSA

El término *Asistencia Religiosa* puede ser definido desde puntos de vista diferentes.<sup>524</sup>

---

<sup>520</sup> *Ibidem*, p. 63

<sup>521</sup> *Idem*

<sup>522</sup> Diario Oficial de la Federación 6 de Noviembre de 2003. Debe observarse que fue publicado 11 años después de la entrada en vigencia de la Ley (15 de julio de 1992).

<sup>523</sup> MORENO ANTÓN, María. “La asistencia religiosa” en: *La Libertad Religiosa en España y Argentina*, MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORIA, Juan G. (coordinadores), Fundación Universitaria Española, Monografías-103 Madrid, 2006, p. 99

<sup>524</sup> MORENO ANTÓN, María. “Tutela y promoción de la Libertad Religiosa”, en: *Curso de Derecho eclesiástico del Estado*, MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro. (coordinador), Tirant Lo Blanch, Valencia, 1997, p. 134.

- **Desde una óptica intrarreligiosa** equivale a asistencia espiritual, conjunto de actividades y servicios que las confesiones prestan a sus fieles para la satisfacción de sus fines religiosos.
- **Desde el marco Jurídico-Estatal** consiste en la medición del Estado en aquellos supuestos en los que resulta difícil el normal ejercicio del derecho de libertad religiosa por la *especial sujeción*. Se traduce en la obligación del Estado de garantizar de forma efectiva el derecho a recibir asistencia espiritual de su propia confesión.

Las notas definitorias de la asistencia religiosa son:<sup>525</sup>

- a) Se trata de una actividad en la que interviene el Estado.<sup>526</sup>
- b) El factor que determina la intervención del Estado es la situación de *sujeción especial*<sup>527</sup> en la que se haya la persona.

De lo anterior se desprende que los ciudadanos tienen derecho a recibir asistencia religiosa de acuerdo a su confesión, y que no la pueden ejercer dado que existe un impedimento para ello, establecido por las circunstancias o el propio Estado en donde el ciudadano se encuentra ante una situación especial con respecto al Estado, como es el caso de los centros de readaptación social o penitenciarios, hospitalarios, asistenciales y centros militares. Otros señalan que la asistencia religiosa se ha abierto hoy día a otros campos de la actividad administrativa como centros de ancianos, de reeducación de drogopendientes, orfanatos, centros educativos y actividades profesionales que reducen la libertad

---

<sup>525</sup> MORENO ANTÓN, María. “La asistencia religiosa” en: *La Libertad Religiosa en España ... op. cit.* p.100

<sup>526</sup> Su intervención consiste en facilitar el acceso a los Ministros de Culto para otorgar a los ciudadanos servicios religiosos propios de su confesión.

<sup>527</sup> Situación que dificulta o impide al ciudadano el ejercicio de su derecho de Libertad Religiosa.

de movimiento de los trabajadores, tales como bomberos, policías y misiones diplomáticas.<sup>528</sup>

En un sentido más amplio suele afirmarse que el Estado presta asistencia religiosa<sup>529</sup> cuando ayuda, participa, fomenta o tutela la satisfacción del interés religioso de los ciudadanos y de las comunidades confesionales a las que pertenecen, cualquiera que fuere la posición adoptada por el Estado respecto del hecho religioso, y sin tener en cuenta razones determinadas ni situaciones especiales de los ciudadanos asistidos.

Es posible afirmar que la asistencia religiosa<sup>530</sup> se refiere a todos aquellos instrumentos que el Estado asumirá al hacer efectivo el goce del derecho de libertad religiosa de aquellas personas que se encuentran en régimen de *sujeción*, bien sea en los centros penitenciarios, estaciones migratorias, hospitales públicos, centros pertenecientes a las fuerzas armadas, etcétera. La asistencia es obligación del Estado para cumplir realmente con los preceptos establecidos en los diferentes documentos internacionales protectores de derechos humanos.

La asistencia religiosa se explica de un modo muy simple: es la presencia de ministros de culto que llevan a cabo su labor pastoral y evangélica en determinados lugares especiales. Esta es la razón por la que al Estado le corresponde facilitar y apoyar a las confesiones religiosas, Iglesias o Asociaciones Religiosas como las llama legislación nacional, instrumentalizando todos los medios requeridos y que se encuentren a su alcance para llevar a efecto dicha asistencia.

---

<sup>528</sup> MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORIA, Juan G. *La Libertad Religiosa en España y Argentina...* op. cit. p. 100

<sup>529</sup> LÓPEZ ALARCÓN, M. “Asistencia Religiosa”, en *Derecho eclesiástico del Estado español*, 3a. Edición, Pamplona, Euns, 1993, p. 369.

<sup>530</sup> VIVEROS, Carolina. *La Asistencia Religiosa en el Reglamento...* op. cit., pp. 178-179

Algunos autores hablan de *asistencia espiritual* en lugar de *asistencia religiosa*,<sup>531</sup> otros prefieren emplear la primera expresión para designar el conjunto de prestaciones que ofrece a sus miembros cada confesión, reservando el nombre de *asistencia religiosa*<sup>532</sup> para indicar las iniciativas estatales que hacen viable el ejercicio de la libertad religiosa.<sup>533</sup> De todos modos esta distinción no tiene para nosotros otra utilidad que la de contribuir a delimitar las responsabilidades del Estado y de cada confesión de cara a la satisfacción del interés religioso.<sup>534</sup>

### • *Asistencia espiritual*

En la asistencia espiritual la comunicación se da de manera individualizada y se establece entre el guía espiritual que puede ser un ministro de su religión y el creyente. Una nota característica de esta asistencia espiritual es que el creyente o fiel debe solicitar dicha asistencia a título personal. De modo que en tanto no exista tal petición no se puede otorgar dicha asistencia. Como se puede observar, la diferencia con la asistencia religiosa es clara. Mientras ésta última es obligación del Estado, poniendo los medios a su alcance o facilitando los mismos, la asistencia espiritual es facultad de la confesión religiosa respectiva. Ambas se constituyen como derecho de la persona. En la primera, como derecho del ciudadano; en la segunda, como derecho del fiel.<sup>535</sup>

<sup>531</sup> Es la expresión habitualmente usada por los eclesiasticistas italianos.

<sup>532</sup> Expresión más común, entre los eclesiasticistas españoles: cfr. por ejemplo GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., *Derecho eclesiástico español*, Madrid, 1991, 2ª Edición, pp. 235 y ss.; Calvo, J., *La Asistencia Religiosa como servicio público: la colaboración del Estado*, en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 1988, núm. 4, pp. 1 35 y ss.

<sup>533</sup> Vid. LÓPEZ ALARCÓN, M. *La Asistencia Religiosa*, op. cit., pp. 116-117.

<sup>534</sup> ARRIETA, Juan Ignacio. "La Asistencia Religiosa, particular referencia a los centros de espacial sujeción: Fuerzas armadas, centros de detención y centros sanitarios" en: *La Libertad Religiosa*, Memoria del IX congreso internacional del derecho canónico. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie E: Varios, Núm. 71, UNAM, 1996, México, pp. 360-362

<sup>534</sup> *Ibidem*, pp. 219-121

<sup>535</sup> VIVEROS, Carolina. *La Asistencia Religiosa en el Reglamento...* op. cit. p. 179

## ***Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas***<sup>536</sup>

### **Artículo X. Libertad Espiritual y religiosa.**

1. Los Estados tomarán las medidas necesarias para prohibir los intentos de convertir forzosamente a los pueblos indígenas o imponerles creencias contra su voluntad.
2. En colaboración con los pueblos indígenas interesados los Estados deberán adoptar medidas efectivas para asegurar que sus sitios sagrados, inclusive sitios de sepultura, sean preservados, respetados y protegidos. Cuando sepulturas sagradas y reliquias hayan sido apropiadas por instituciones estatales, ellas deberán ser devueltas.
3. Los Estados garantizarán el respeto del conjunto de la sociedad a la integridad de los símbolos, prácticas, ceremonias sagradas, expresiones y protocolos espirituales indígenas.

### **6.3 LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN MÉXICO.**

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se encuentra disposición concreta alguna que regule la asistencia religiosa en México, tampoco en su Ley Reglamentaria en materia religiosa o Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Sin embargo, las bases jurídicas se pueden encontrar en el artículo 24 constitucional que expresa *todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones*

---

<sup>536</sup> Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero de 1997, también hacen referencia los artículos 14 y 15 del documento.

*o actos del culto respectivo...*, así como en el artículo 2° de la Ley Reglamentaria, inciso a), que establece que el Estado mexicano garantiza a favor del individuo tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar informe individual o colectiva los actos de culto o ritos de su preferencia.

El Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público<sup>537</sup> establece de forma expresa la Asistencia Religiosa en el país, concretamente en el artículo 6°, que señala:

*Los responsables de los centros de salud e instituciones de asistencia social, del sector público o privado, así como las autoridades de los centros de readaptación social y de estancias o estaciones migratorias, de conformidad con sus atribuciones, proveerán las medidas conducentes para que sus internos o usuarios, a petición expresa de los mismos, reciban Asistencia Espiritual de las Asociaciones Religiosas y los Ministros de Culto.*

Para los efectos de lo anterior, se deberán observar las normas y medidas de seguridad aplicables a dichos centros de salud o readaptación social, instituciones de asistencia social y estancias o estaciones migratorias.

De la lectura del artículo anterior se puede advertir que las autoridades de los centros e instituciones tienen la obligación de facilitar que las asociaciones religiosas puedan asistir a sus fieles cuando estos se encuentren internos (sujeción especial). Se observa que la ley reconoce no sólo la asistencia espiritual sino también la religiosa, por lo tanto, manda que se instrumenten las medidas necesarias en los centros e instituciones, tanto públicas como privadas, para que se otorgue la asistencia espiritual. Reconoce el texto que ambas deben ser *a petición expresa de los mismos*. Sin duda, esto permite que cualquier asociación

---

<sup>537</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2003

religiosa pueda prestar sus servicios asistenciales a sus fieles (Por su puesto, si hay petición expresa).

En la mayor parte de los documentos internacionales protectores de derechos humanos firmados por México, existe una referencia a la libertad religiosa. Sobre todo con respecto a la manera en la que debe ser protegida esta libertad. Una de estas formas de protección del derecho es el de la asistencia religiosa, de la cual han de gozar todas aquellas personas que se encuentren en una situación especial de sujeción, sea en los centros de readaptación, las estaciones migratorias, etcétera.<sup>538</sup>

#### **6.4 MODELOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA**

El problema en la realidad de la prestación de la asistencia religiosa se presenta en las fórmulas concretas que el Estado puede seguir a la hora de facilitar el cumplimiento de las obligaciones religiosas de los ciudadanos internados en centros públicos, porque ahí se entrecruzan mecanismos del pasado confesional con la aconfesionalidad del Estado.<sup>539</sup>

La problemática de la asistencia religiosa se centra en el modo y manera de hacer efectivo el derecho de la persona a través del adecuado entendimiento del Estado y las confesiones y en el marco de los principios imperantes en el ordenamiento jurídico.<sup>540</sup>

La doctrina española reconoce cuatro modelos de asistencia religiosa.<sup>541</sup>

---

<sup>538</sup> VIVEROS, Carolina. *La Asistencia Religiosa en el Reglamento...* op. cit., pp. 177-178

<sup>539</sup> IBÁN, Iván C., PRIETO SANCHÍS y MONTILLA, Agustín. *Manual de Derecho Eclesiástico...* op. cit. p. 264

<sup>540</sup> MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORIA, Juan G. *La Libertad Religiosa en España y Argentina...* op. cit. p. 101

<sup>541</sup> IBÁN, Iván C., PRIETO SANCHÍS y MONTILLA, Agustín. *Manual de Derecho Eclesiástico...* op. cit., pp. 264-265

**1. El de integración orgánica:** se concibe como un servicio público donde los ministros de culto son funcionarios del Estado integrados en un cuerpo especial de la administración;<sup>542</sup>

**2. Modelo de concertación:** es un acuerdo entre la confesión y el Estado donde éste se compromete a financiar la Asistencia Religiosa, tanto en los medio materiales como en los personales;<sup>543</sup>

**3. Libertad de acceso:** aquí el Estado se limita a facilitar la entrada de los ministros de culto a los centros públicos para que otorguen ayuda espiritual a los internos.<sup>544</sup>

**4. Libertad de salida:** consiste en autorizar la salida a los internados de centros públicos para asistir a los actos religiosos de su confesión en los lugares donde se celebra el culto.<sup>545</sup>

Como se verá el modelo adecuado dependerá de las características y finalidades de los centros de sujeción en los que se encuentra el interno.

#### ***a) Asistencia religiosa a las fuerzas armadas***

Las fuerzas armadas son unos de los lugares donde los servicios espirituales se han desarrollado con mayor amplitud. Los soldados, al enfrentarse cotidianamente a la muerte y a situaciones extremas, pueden necesitar más que

---

<sup>542</sup> Este modelo no favorece la separación entre la Iglesia y el Estado, ni la Libertad Religiosa al estar sometidos los actos de los ministros a la oficialidad de su cargo administrativo. Por lo tanto debe desaparecer.

<sup>543</sup> En este caso los Ministros de Culto no son funcionarios, la confesión puede designar o remover libremente a sus ministros. En consecuencia no tienen relación con el Estado.

<sup>544</sup> No existe ninguna relación jurídica de los ministros con la administración, ni se financia la actividad que se desarrolla.

<sup>545</sup> Aquí el Estado libera al interno de la obligación de permanencia por necesidades religiosas, sin embargo, este modelo es incompatible con la finalidad y esencia sobre todo de los centros penitenciarios dado que se trata justamente del cumplimiento de penas privativas de la libertad.



las demás personas auxilios espirituales; pero aún cuando no siempre se presenten tales extremos, la vida militar posee características peculiares que han requerido la configuración de un servicio pastoral especial,<sup>546</sup> sobre todo cuando se está en guerra externa e interna. México, afortunadamente, no ha formado parte de guerras externas en lo particular ni en coaliciones en contra o a favor de país alguno, sin embargo, en estos últimos meses, en la guerra contra el narcotráfico se han perdido no pocas vidas de las fuerzas armadas.

Una manifestación especial de lo religioso en la vida de las personas la tenemos en aquellos centros que se caracterizan por poseer un régimen especial de sujeción. Nos estamos refiriendo a los miembros de las fuerzas armadas, los internos de las instituciones penitenciarias, los pacientes de los centros hospitalarios y aquellas otras personas acogidas en centros de asistencia social o similares.

A nosotros nos interesa algo más particular, algo que tiene que ver con la actividad del Estado encaminada a establecer las condiciones para que las personas que se encuentran sujetas al régimen especial de sujeción, puedan recibir la asistencia espiritual por parte de los ministros de su culto.

Con lo que se ha apuntado con anterioridad se puede observar que, para el caso de las fuerzas armadas en México ni la Constitución ni la ley o el reglamento en materia de libertad religiosa, señalan la asistencia religiosa, pues de la lectura del Artículo 6° del Reglamento se observa que las mismas son excluidas, no obstante que se encuentran también en un régimen de sujeción especial. Entendiendo que las fuerzas armadas en México son el ejército y la marina. Quizá la exclusión se deba justamente a lo señalado en la norma constitucional y a su Ley Reglamentaria en materia religiosa, en donde se que establece de manera contundente de que el Estado mexicano es *laico*. Es decir,

---

<sup>546</sup> MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORIA, Juan G. *La Libertad Religiosa en España y Argentina...* op. cit. p. 123

que garantiza a favor del individuo el no profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa. Desde luego, lo anterior está fundado en el principio histórico de la separación del Estado y la Iglesia.<sup>547</sup>

En el ordenamiento jurídico mexicano no se encuentra regulada la asistencia religiosa a las fuerzas armadas, toda vez que el Estado mexicano se funda en el principio histórico del Estado y la Iglesia. El Estado mexicano garantiza a favor de los particulares no profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a alguna asociación religiosa. El Estado mexicano es laico. Esto no obsta para que él mismo ejerza su autoridad sobre toda manifestación religiosa individual o colectiva. Sin embargo, las fuerzas armadas son una institución del Estado mexicano, y como tal no prevé asistencia religiosa a ninguno de los miembros de sus instituciones, como es el caso de las fuerzas armadas.

No obstante lo señalado, considero que en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prevé el supuesto de asistencia religiosa a las fuerzas armadas. Veamos:

***Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (México)***<sup>548</sup>

Artículo 9.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria (...) **XVII.** Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas en instituciones de salud o asistencia.

---

<sup>547</sup> Artículos 1º, 2º y 3º de la *Ley*

<sup>548</sup> Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, también hacen referencia en este sentido el artículo 4 del documento.

## **b) Centros de readaptación social**

La intervención estatal en los centros de readaptación social obedece al principio de compensación: el Estado priva al ciudadano de su derecho de libre circulación, pero considera que no debe privarle por ello de su derecho de libertad religiosa.<sup>549</sup> En muchos países se ha organizado una asistencia religiosa en los establecimientos carcelarios para atender las necesidades de quienes se encuentran en una situación de privación de libertad. En bastantes ocasiones este servicio espiritual se ha establecido por acuerdos con la Santa Sede y con otras confesiones.<sup>550</sup>

En el caso de México, como ya lo hemos dejado asentado, es el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público quien de forma más concreta y explícita hace referencia a la asistencia religiosa. Veamos:

*Artículo 6o.- Los responsables de (...) centros de readaptación social (...) de conformidad con sus atribuciones, proveerán las medidas conducentes para que sus internos o usuarios, a petición expresa de los mismos, reciban Asistencia Espiritual de las Asociaciones Religiosas y los ministros de culto.*

Como se observará, la asistencia religiosa en este caso, o lo que la ley la prescribe como asistencia espiritual, instruye a las autoridades responsables de los centros e instituciones a que prevean las medidas necesarias para que sus internos reciban dicha asistencia, no sólo de los ministros de culto, sino también de las asociaciones religiosas. Sin embargo, debe acotarse que el mismo numeral expresa *a petición expresa de los mismos*, cosa que dificulta, de entrada, la participación de las asociaciones religiosas, pues se está, entonces, en el supuesto

---

<sup>549</sup> IBÁN, Iván C. *Asistencia Religiosa*, Curso de Derecho Eclesiástico, Madrid 1991, pp. 474-475

<sup>550</sup> MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORIA, Juan G. *La Libertad Religiosa en España y Argentina...* op. cit., p. 131

de que si alguna asociación religiosa quisiera asistir espiritualmente a alguno de sus feligreses, se encontraría con el impedimento de que no podrá hacerlo si es que no hay petición previa del mismo.

En este caso, no hay duda de que, efectivamente, el interno en los centros de readaptación social cumple la pena privativa de la libertad y, por lo tanto, se justifica la asistencia religiosa y, consecuencia de ello, la espiritual.

### ***c) Centros de salud***

Las dificultades en el ejercicio de las obligaciones religiosas derivadas del Estado hacia la postración del enfermo, justifican plenamente que el Estado preste la ayuda necesaria y cree los mecanismos adecuados para que esas necesidades puedan ser satisfechas. Es la enfermedad la que constriñe la posibilidad de los individuos de satisfacer sus necesidades religiosas, lo que justifica la ayuda estatal, la cual consiste en facilitar la asistencia espiritual de los ministros de culto en el interior de los recintos hospitalarios. El Estado remueve los obstáculos –la incapacidad física– para que la libertad religiosa del individuo sea real y efectiva.<sup>551</sup>

En este sentido, el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala:

*Los responsables de los centros de salud (...) de conformidad con sus atribuciones, proveerán las medidas conducentes para que sus internos o usuarios, a petición expresa de los mismos, reciban Asistencia Espiritual de las Asociaciones Religiosas y los Ministros de Culto.*

---

<sup>551</sup> IBÁN, Iván C., PRIETO SANCHÍS y PRIETO MOLILLA. *Manual de Derecho Eclesiástico...op. cit.*, p. 284

Para aplicar la asistencia religiosa en los centros de salud e instituciones hospitalarias, tanto del sector público como del privado, se deben de observar las normas y medidas de seguridad aplicables a dichos centros de salud como lo señala el segundo párrafo del artículo a que se hace referencia.

## 6.5 ASISTENCIA RELIGIOSA EN LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

Como ya lo hemos señalado, no sólo las fuerzas armadas, los centros de readaptación social o los centros hospitalarios son lugares o espacios donde se encuentra el individuo a una *sujeción especial*, sino que la asistencia religiosa se ha abierto hoy a otros campos de la actividad administrativa, tales como<sup>552</sup> centros de ancianos, de reeducación de drogopendientes, orfanatos, centros educativos y de actividades profesionales que reducen la libertad de movimiento de los trabajadores, tales como los bomberos, las policías y misiones diplomáticas.

En el caso de México, el multicitado Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público expresa *los responsables (...) de instituciones de asistencia social, del sector público o privado, (...) proveerán las medidas conducentes para que sus internos o usuarios, a petición expresa de los mismos, reciban asistencia espiritual de las asociaciones religiosas y los ministros de culto*. En esta hipótesis estarían entonces los asilos de ancianos, la reeducación de drogopendientes y orfanatos, en los que el gobierno tendría que facilitar y/o garantizar a los usuarios el acceso a ellos de las Asociaciones Religiosas y los ministros de culto, para otorgar la asistencia espiritual que requieran y, en consecuencia, se respete el derecho de asistencia religiosa.

---

<sup>552</sup> MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORIA, Juan G. *La Libertad Religiosa en España y Argentina... op. cit.*, p. 100

## **6.6 ASISTENCIA RELIGIOSA EN ESTANCIAS O ESTACIONES MIGRATORIAS**

También es el Artículo 6° el que prevé la asistencia religiosa y, por lo tanto, espiritual a los individuos que se encuentran, aunque sea de forma preventiva, en las estancias o estaciones migratorias, pues el mismo señala que las autoridades responsables de estancias o estaciones migratorias, de conformidad con sus atribuciones, proveerán las medidas conducentes para que sus internos o usuarios reciban asistencia espiritual de los ministros de culto, observándose, desde luego, las normas y medidas de seguridad de dichos centros.

No obstante que el reglamento en materia religiosa prevé la asistencia religiosa en las estancias o estaciones migratorias y que no se observan en algunas otras legislaciones, las mismas son reducidas y carecen de explícites y, por lo tanto, se vuelve algo de gran dificultad el tratar de que sea efectiva la libertad religiosa.

## **6.7 CONTENIDO DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA**

Una de las cosas importantes que deben de cuestionarse es ¿cuál es el contenido de la asistencia religiosa que debe prestar el Estado? Se trata de la determinación de los contenidos, es decir, de cuáles deban ser las prestaciones espirituales que hayan de considerarse incluidas en la asistencia religiosa que presta el Estado, en relación con las diferentes exigencias de cada credo y confesión religiosa, pero en relación también con el principio de igualdad sancionado por las constituciones de los Estados pluralistas y no confesionales.<sup>553</sup>

---

<sup>553</sup> Un punto de partida para señalar esos contenidos viene dado por el artículo 6 de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones, adoptada por la resolución 36/55 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981.

La modalidad asistencial adoptada por las confesiones contiene elementos objetivables para que el propio Estado pueda tratar a cada grupo religioso como necesita ser tratado. Es necesario considerar que cada modalidad se organiza para cubrir sus propios deberes espirituales en función principalmente de dos elementos objetivos:

**Uno:** en función de sus propias posibilidades organizativas –materiales, económicas y humanas–, lo que suministra un dato objetivo del arraigo en ese lugar de un determinado credo religioso.

En segundo lugar debe tenerse presente también que las confesiones se organizan sobre todo en función de su distinto credo religioso y de lo que cada una de ellas –y presumiblemente también sus fieles que son ciudadanos de la sociedad civil– entiende como prácticas que deban dar contenido al ejercicio de la libertad religiosa. Existe, en efecto, una correspondencia entre lo que cada confesión religiosa entiende que debe ser el contenido de su respectiva práctica religiosa y la organización que dicha confesión adopta para proveer a sus fieles de los bienes espirituales.<sup>554</sup>

**Dos:** debe atender a los datos objetivos respecto del arraigo en el lugar y respecto de la propia identidad que proporciona cada confesión religiosa.<sup>555</sup> Sería lesivo para la libertad religiosa que el Estado se negase a valorar la relevancia de datos objetivos, y que estableciese por propia iniciativa el mismo trato para todas las confesiones.

---

<sup>554</sup> ARRIETA, Juan Ignacio. *La Asistencia Religiosa, particular referencia... op. cit.*, pp. 236-237

<sup>555</sup> Como forma de objetivar el distinto tratamiento estatal de las diversas confesiones, ha sido también apreciado recientemente en el artículo 7, II de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a la hora de admitir la inscripción constitutiva de Asociaciones Religiosas; en cambio, según el artículo 7. 1 de la ley orgánica de Libertad Religiosa española del 5 de junio de 1980, el “notorio arraigo” es relevante a efectos de personalidad jurídica de las confesiones. Sobre la materia, vid. Villa, M. J., “Reflexiones en torno al concepto de “notorio arraigo” en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”, en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 1 985, núm. 1, pp. 143 y ss.

Por lo tanto, el contenido de la asistencia estatal<sup>556</sup> en materia religiosa, debe variar tomando en cuenta los diversos factores objetivos y, desde luego, los recursos de que disponga el propio Estado.

## 6.8 ASISTENCIA RELIGIOSA CATÓLICA

La Iglesia Católica es una más de las asociaciones religiosas registrada en la Secretaría de Gobernación que se ha preocupado de tiempo atrás, incluso antes de que apareciera el Reglamento de la Ley, por la *asistencia espiritual* en los centros de sujeción especial como los Centros Readaptación Social conocidos como *CERESOs*, centros de salud, instituciones de asistencia social, tanto del sector público como privado, y la que se presta a los migrantes a través del ejercicio pastoral que realizan sus ministros de culto que forma parte de la pastoral social de la Iglesia Católica .

La pastoral penitenciaria católica es la acción evangelizadora de la Iglesia que se dirige a toda persona que se encuentre bajo la custodia de la autoridad, en cualquiera de las etapas del proceso, desde la detención hasta la reintegración a la sociedad. El apostolado con presos es una ayuda al ser humano en esas condiciones.

La presencia de la Iglesia en las cárceles es una exigencia desde el punto de vista evangélico y misionero, y una necesidad urgente de atender a sus creyentes. Con la aparición del reglamento y la inclusión en éste del artículo 6º, se han facilitado las cosas en algunos casos. Sin embargo, en otros no ha sido así. Ni siquiera cuando los agentes pastorales han argumentado dicha disposición. En particular, se considera que el Reglamento, no obstante y que señala la obligación de las autoridades para proveer de las medidas conducentes para que

---

<sup>556</sup> ARRIETA, Juan Ignacio., *La Asistencia Religiosa, particular referencia a los... op. cit.*, pp. 238-239



sus internos o usuarios reciban asistencia espiritual de las asociaciones religiosas y ministros de culto, no es suficiente, pues se requiere de una legislación que sea más explícita con mayor precisión y sin ambigüedades.

A una década de la conformación del cuerpo normativo para regular la materia religiosa, aún falta mucho camino por andar. La expedición del reglamento del que mucho se esperó que llenara las expectativas en los espacios y lagunas que se encuentran en la Ley Reglamentaria de Asociaciones Religiosas, no fue del todo suficiente.<sup>557</sup> Sin embargo, pudiéramos decir que se han sentado las bases para la asistencia religiosa, pero que sin duda, resulta un asunto inconcluso.

La Iglesia católica incorporó en la regulación codicial de 1983, una normativa relativa a los capellanes en la que se hace mención expresa de los que son comúnmente considerados sectores típicos de la asistencia estatal en materia religiosa, así como las capellanías. De igual forma, ella dispone de estructuras para la atención de sus fieles que se encuentran en especiales situaciones pastorales, como por ejemplo, para la atención de los militares ha creado los *Ordinariatos castrenses*.

La Santa Sede estableció en 1985 un organismo central interesado en el sector sanitario y de los hospitales, normalmente organizado sobre la base del sistema de capellanías. Finalmente, para ocuparse de un amplio abanico de situaciones de asistencia pastoral especialmente compleja —refugiados, emigrantes, nómadas, gente del mar o de la aviación civil, etcétera—, dentro de la Santa Sede existe igualmente un organismo específico, con funciones de coordinación e impulso. El propio ordenamiento canónico dispone de figuras organizativas adecuadas a subvenir tales necesidades, configurando el sistema de capellanías en torno a

---

<sup>557</sup> VIVEROS, Carolina. *La Asistencia Religiosa en el Reglamento...* op. cit. pp. 182-183

oficios, como el de vicario episcopal o a circunscripciones episcopales de carácter personal.<sup>558</sup>

El 17 de noviembre de 2006 ante Consejo Episcopal Mexicano (CEM), el entonces presidente electo (Felipe Calderón) asumió el compromiso de “luchar” para que en el artículo 24 de la Constitución se cambie la frase *libertad de culto y de creencias por Libertad Religiosa*.<sup>559</sup> Cabe precisar que la *libertad* que busca la CEM incluye el acceso de la Iglesia Católica a los medios de comunicación, educación religiosa en escuelas públicas, asistencia religiosa en centros penitenciarios, de salud y asistenciales, entre otros.<sup>560</sup> Éste es el verdadero compromiso de Calderón: no con el Estado laico y la sana pluralidad religiosa sino con los intereses de la jerarquía católica, a quien sirve sin condiciones – como católico practicante– desde el Poder Ejecutivo. Queda claro, en conclusión, que el discurso presidencial del pasado 14 de enero es la declaración formal de guerra en contra del Estado laico y sus valores libertarios. Es el pliegue de la derecha en el poder hacia la Iglesia Católica institucional para gestionar la agenda política de la segunda. Ante esto, de manera resolutoria, millones de mexicanos decimos *No pasarán*.

---

<sup>558</sup> ARRIETA, Juan Ignacio. *La Asistencia Religiosa, particular referencia a los...* op. cit., pp. 238-239

<sup>559</sup> Periódico *La Jornada* 18 de noviembre de 2006.

<sup>560</sup> *Idem*

## **6.9 INTOLERANCIA A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO**

*“Se necesita no tener madre, para ser protestante”.*

**JUAN SANDOVAL IÑIGUEZ**  
*Cardenal de Guadalajara, México (1998)*<sup>561</sup>

Para entender el tortuoso camino de México hacia la libertad de culto y la dificultad que tuvo y tiene para ser respetada, se tiene que ir a la raíz del problema. Dicha raíz se encuentra en el modo y en la forma de su inserción en la modernidad. Esto ocurrió con la conquista violenta y la incorporación forzada a la modernidad europea por conducto de España. El año de 1492 marcó el fin del respeto a las minorías étnicas y religiosas y el principio de la identidad religiosa católica. Ahí inicia la historia de la persecución de las minorías religiosas por la Iglesia Católica.<sup>562</sup> Por lo tanto, una visión intolerante del adversario religioso y político.

En la época colonial el Estado español en Indias era un estado misional, reinaba el estado confesional y, consecuentemente, la intolerancia religiosa era absoluta hacia todo aquello que no fuera católico. No debemos olvidar los dos hechos importantes y de trascendencia a que hemos hecho referencia en la historia religiosa de la Nueva España, y que son la implementación del Santo Oficio de la Inquisición y la expulsión de los padres jesuitas, lo que representa a todas luces la intolerancia religiosa durante la colonia.

En la independencia de México, no obstante, el rompimiento de la Iglesia local con la Santa Sede trajo consigo el establecimiento de un estado liberal, lo

---

<sup>561</sup> MONSIVÁIS, Carlos. La intolerancia religiosa: “*si no compartes mi fe, te rompo la madre*”. <http://ghrendhel.tripod.com/textos/monsivais.htm>, 14 de septiembre de 2008.

<sup>562</sup> BASTLAN, Jean-Pierre. “Tolerancia religiosa y libertad de culto en México, una perspectiva histórica” en *Cuadernos: Derecho de Libertad Religiosa*, Derecho Fundamental de Libertad Religiosa, UNAM, Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1994, p. 17 y 18

que implicó un mayor grado de tolerancia religiosa sobretudo en la época juarista.

En el México posrevolucionario la libertad religiosa ha tenido diversas etapas. La Constitución Política de 1917 adoptaba una postura no sólo antirreligiosa sino violatoria de derechos humanos, entre cuyos preceptos estaban las prohibiciones para fundar órdenes monásticas, así como el desconocimiento de la personalidad jurídica de todas las agrupaciones religiosas, y no fue sino hasta 1920 y hasta la persecución conocida como la *guerra cristera*, que esa postura terminó mediante acuerdos entre la jerarquía católica y el gobierno, los cuales no derogaron las disposiciones constitucionales sobre la materia, pero dejaron de aplicarse. Dicha situación llegó a su término con las reformas a la Constitución en 1992.<sup>563</sup>

No obstante, las reformas que permiten la libertad de culto y la posibilidad de que las Iglesias y agrupaciones religiosas se puedan ahora convertir en asociaciones religiosas que les permitan tener personalidad jurídica y patrimonio propio sin distingo de credo, el fenómeno de intolerancia religiosa en el país crece y cobra víctimas, sobre todo en las áreas rurales e indígenas de México, aunque las grandes ciudades tampoco escapan a sus efectos.

Hay 32 casos contabilizados oficialmente por la Secretaría de Gobernación en lo que va de este sexenio, 87 documentados por distintas instancias evangélicas en las que se argumentan expulsiones, quema y destrucción de casas y templos, extorsiones, corte de servicios de agua potable y electricidad, marginación de los programas sociales y de apoyo contra la pobreza, amenazas, encarcelamientos, secuestros, homicidios, impedimento para usar los panteones municipales y la negación del servicio escolar a menores, todo ello forma una larga lista de violaciones que la mayoría de las veces quedan impunes.

---

<sup>563</sup> *Idem*

También la organización internacional *La Voz de los Mártires*, con sede en Washington, E.U.A., registró 87 casos de intolerancia religiosa. La pasividad de las autoridades federales ha obligado a diversas Iglesias e instancias evangélicas a denunciar estos hechos a escala internacional. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en su diagnóstico a México, en apartado especial, da cuenta sobre intolerancia, discriminación y libertad de conciencia en el sureste mexicano<sup>564</sup> que adquiere dimensiones preocupantes.

La Barra Nacional de Abogados Cristianos documentó 48 casos de intolerancia religiosa, 70 por ciento de los cuales ocurrieron en Chiapas. De las 48 agresiones, 34 fueron de grupos identificados como católicos tradicionalistas contra cristianos. La mayor violencia y persecución contra los evangélicos que se niegan a participar en ritos católicos.

En 1985 el Nuncio Papal, Girolano Prigione, declaró *las sectas son como las moscas, hay que acabarlas ha periodicazos*. En 1989, el líder empresarial Jorge Ocejo exigía la desaparición *de sectas, de los narcosatánicos y otros grupos evangélicos*. En la homilía episcopal se sigue señalando que el protestantismo es un invento yanqui, una táctica para despojarnos de nuestra identidad nacional, una trampa para incautos. En 1998 un grupo de católicos incendiaron dos templos protestantes en Chiapas, asesinando a pastores y feligreses. A los disidentes religiosos los persiguen, torturan y matan. Todo esto mientras la jerarquía católica niega la existencia de una *guerra santa*.<sup>565</sup> En el 2001, el pastor pentecostés, Gilberto Tomás Piza, fue asesinado cuando se dirigía al templo a su cargo.<sup>566</sup>

---

<sup>564</sup> Chiapas, Oaxaca y Guerrero. También Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato y el Estado de México.

<sup>565</sup> Monsiváis, Carlos. *La intolerancia religiosa: "si no compartes mi fe... op. cit."*.

<sup>566</sup> Noticiero *Milamex* (Misión Latinoamericana en México) El líder en información cristiana, 31 de mayo de 2001

En el año 2001 en el estado de Hidalgo, las familias de la comunidad de San Nicolás, denunciaron al delegado comunal por hostigamiento y amenazas de muerte por no profesar la fe católica, pues les prohibió a los evangélicos el uso del panteón local, les suspendió el suministro de agua potable, los despojó de sus parcelas y les dio un plazo para que abandonaran sus viviendas, además de amenazarlos con agredirlos, e incluso matarlos, si no se retiraban del poblado, pues según él, San Nicolás debe ser “exclusivamente” de la grey católica, circunstancia que se repitió en el año 2008.

Ante todo esto es bueno preguntarse ¿cuáles pueden ser las causas de intolerancia religiosa en México?

Sin duda, no se debe olvidar que México es un país preponderantemente católico por lo que considera una amenaza a todas las nuevas ofertas religiosas.

Es claro que las religiones minoritarias cada día tienen más dificultad en establecer misiones rurales y que las prácticas disidentes en pequeñas ciudades y ciudades medias son muy riesgosas. *¡Vamos a apedrear a los aleluyas!*, es un grito frecuente entre niños y adolescentes cuando se refieren a los pentecostales. Los protestantes son rodeados de incompreensión y de señalamientos, como *es buena persona, pero... / Sí, hijo, puedes ir a su casa pero que no traten de quitarte tu fe / los letreros expulsan de ante mano con la leyenda: en esta casa somos católicos y no aceptamos propaganda protestante.*<sup>567</sup>

No hay duda de que los problemas de intolerancia existen. En la actualidad más de 35 mil indígenas de los altos de Chiapas han sido expulsados de sus comunidades por cuestiones religiosas. Según el Obispo auxiliar de Guadalajara, Ramón Godines Flores, en 1989 había más de 5 millones de mexicanos en sectas debido a los vacíos de atención de la Iglesia Católica, así como a la escasa

---

<sup>567</sup> Monsiváis, Carlos. *La intolerancia religiosa: “si no compartes mi fe, ...op. cit.*

preparación evangelizadora de sus sacerdotes, quienes salen formados al vapor en seminarios y colegios religiosos.<sup>568</sup> Las comunidades evangélicas padecen la violencia por parte de paramilitares de los grupos de poder; los protestantes son ciudadanos de tercera; ha habido homicidios y asesinatos por motivos religiosos y la prensa ha dado cuenta de ello.<sup>569</sup>

Otro caso de intolerancia religiosa palpable es la destrucción de 36 templos (altares) dedicados al culto a la *Santa Muerte* en el norte del país.<sup>570</sup> David Romo Guillén, monseñor de la Iglesia Católica, apostólica, tradicional, México-Estados Unidos de América, denunció el hecho. Responsabilizó a la Iglesia Católica, Romana<sup>571</sup> de ser la artífice de todo esto.<sup>572</sup> Cuadrillas de trabajadores equipados con escavadoras y acompañados por soldados derribaron más de 30 templos a lo largo de un camino en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Las autoridades municipales indicaron que los santuarios fueron contruidos sin permiso, argumentando que dichas edificaciones dan *mala imagen* a la ciudad. Debe señalarse que muchos de los templos eran construcciones elaboradas cubiertas de mármol e iluminadas con luz eléctrica.

Sea como fuere, y como se señaló al tocarse el tema de las sectas, en ningún momento se pueden ni se deben satanizar éstas, tal es el caso de considerar a los devotos de la *Santa Muerte* como miembros de una. Lo cierto es que esto se considera un acto de discriminación religiosa y, en consecuencia, un acto de intolerancia religiosa acompañado de un acto de prepotencia gubernamental y, más grave aún, que en la destrucción de los templos participe el Ejército Nacional al igual que el bando que emitieron las autoridades en el estado de Oaxaca para suprimir la devoción y el culto a la *Santa Muerte*. Esto no es extraño, pues la propia Secretaría de Gobernación por conducto de Comisión

<sup>568</sup> Periódico *El Universal* suplemento en "Política", 21 de septiembre de 1989

<sup>569</sup> Monsiváis, Carlos. *La intolerancia religiosa: "si no compartes mi fe, ...op. cit.*

<sup>570</sup> En el Estado de Tamaulipas y Baja California, concretamente en Nuevo Laredo y Tijuana

<sup>571</sup> La Iglesia Católica Romana no reconoce a la *Santa Muerte*

<sup>572</sup> Periódico *La Jornada*, Artículo "Fieles de la Santa Muerte exigen alto a la represión". 06 de Abril de 2009

Sancionadora canceló el registro constitutivo como Asociación Religiosa a la Iglesia Católica Tradicional Méx-USA, Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús por desviar los fines establecidos en sus estatutos promoviendo entre los feligreses el culto o la devoción a la denominada *Santa Muerte*.<sup>573</sup>

Considero lamentable que el Estado no intervenga en la aplicación de la ley cuando una confesión religiosa no permite que otra distinta pueda sepultar en un panteón público a cargo de la autoridad civil a uno de los suyos. Sin duda se trata de un acto de intolerancia religiosa en pleno siglo XXI. Desde mi punto de vista, la Iglesia Católica debe intervenir para evitar estos abusos de sus feligreses y reconocer los mandatos del sumo pontífice Juan Pablo II cuando señala *sólo la mutua aceptación del otro, en el consiguiente respeto mutuo, hecho más profundo por el amor, reside el secreto de una humanidad finalmente reconciliada*. Queda claro que los gobiernos en todos sus niveles deben intervenir para hacer cumplir los derechos de las minorías religiosas instauradas en el país y así evitar la discriminación religiosa.

En la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Población, la de Migración y la de Asuntos Religiosos, según la Dirección de Normatividad, se turnaron para su estudio 19 asuntos sobre intolerancia religiosa, mismos que se encuentran en trámite.<sup>574</sup>

México enfrenta el reto de radicar la intolerancia religiosa sobretodo en el sureste mexicano. Por lo tanto, es un acierto que el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público reconozca los conflictos originados en materia religiosa tal como lo establece el artículo 37.<sup>575</sup> Se crea también un órgano sancionador con atribuciones de aplicar las sanciones previstas en la ley.

---

<sup>573</sup> Boletín 87/05, 29/04/05

<sup>574</sup> Actualizado al 13 de Marzo de 2009. "En trámite" significa que ninguno de ellos hasta el momento ha sido recibido para realizar el estudio y la resolución pertinente.

<sup>575</sup> "Artículo 37.- La intervención de las autoridades competentes cuando se trate de conductas de intolerancia religiosa(...) se basará en los principios de no discriminación e igualdad ante la ley, y en el



Comparto la opinión de aquellos que señalan que “jugar con el fervor religioso de una sociedad es igual de grave que manifestar intolerancia hacia sus creencias o mejor dicho, son las trampas de la fe”.

---

derecho de todo individuo a ejercer la libertad de creencias y de culto(...) se privilegiará la vía del diálogo y la conciliación entre las partes(...) en tanto no conculquen derechos humanos fundamentales, particularmente el de la libertad de creencias y de culto(...) se consideradas como formas de intolerancia religiosa, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en motivos de carácter religioso, sancionada por las leyes(...)”.

## **CAPÍTULO VII**

---

---

# **RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MINISTROS DE CULTO EN MÉXICO**

## CAPÍTULO VII

### RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MINISTROS DE CULTO EN MÉXICO

#### 7.1 CONSIDERACIONES GENERALES

A 16 años de la expedición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, es necesario hacer algunos comentarios sobre la situación que desde el punto de vista real y jurídico viven los llamados *Ministros de Culto* en nuestro país. Sin duda, son los protagonistas principales del movimiento de las Iglesias, agrupaciones religiosas y si se encuentran registradas ahora, de las Asociaciones Religiosas y, por lo tanto, sujetos importantes dentro del Derecho Eclesiástico.

Es importante hacer un análisis no sólo del criterio jurídico vertido sobre la ley de la materia, sino también, y no menos importante, conocer la realidad de su actuación a través de la experiencia perceptible de quienes realizamos esta investigación.

Así las cosas, tendríamos que empezar señalando quiénes son los ministros de culto, a qué se dedican, qué hacen y cuál es su función esencial como tales. ¿Es una simple actividad confesional, trabajo o profesión la que realizan? Sin duda alguna que cualquier cosa de las señaladas es una garantía individual, pues *a ninguna persona puede impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofenda los derechos de la sociedad (...).*<sup>576</sup> Debe entenderse que

---

<sup>576</sup> Artículo 5° de la *Constitución*.

la actividad que realizan los ministros de culto es lícita, sea oficio o profesión su actividad.

La Ley Reglamentaria del artículo 130, del 18 de enero de 1927 que se abrogó por la nueva ley,<sup>577</sup> establecía que los ministros de los cultos eran *personas que ejercen una profesión y se considera que una persona ejerce el ministerio de un culto, cuando ejecuta actos que las reglas de cada credo religioso reservan a determinadas personas, investidas de carácter sacerdotal, ya sea este temporal o permanente.*<sup>578</sup>

En este sentido, y desde un particular punto de vista, el término *Ministros de Culto* tenía una acepción más completa y más clara que la que ahora se puede observar en la nueva ley, pues reconocía como ministros a aquéllas personas que ejecutaban actos que las reglas de cada credo religioso reservan *a determinadas personas*, desde luego investidas de *carácter sacerdotal*, lo que quiere decir que sólo éstos y no otros pueden considerarse ministros de culto. En la actualidad el término es más ambiguo, tal y como se verá más adelante.

## 7.2 CONCEPTO DE MINISTRO DE CULTO

Los ministros de culto religioso son conocidos bajo muy distintos nombres.<sup>579</sup> Los romanos les denominaban *pontífices*. La Iglesia Católica llama *sacerdotes*, *párrocos u obispos* a quienes promueven vocaciones e instruyen al pueblo sobre la grandeza del ministerio sagrado.<sup>580</sup> Las religiones protestantes les llaman

<sup>577</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992

<sup>578</sup> Artículo 7 y 8 de la Ley Reglamentaria del artículo 130 del 18 de enero de 1927

<sup>579</sup> SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. "Régimen Jurídico de los ministros de culto religioso" en: *Estudios jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G: Estudios Doctrinales, Núm. 160, Secretaría de Gobernación, UNAM, México, 1994, p. 95

<sup>580</sup> Canon 233, Título III De los ministros sagrados o clérigos, Capítulo I, de la formación de los clérigos, Código de Derecho Canónico.

*pastores*, los judíos les nombran *rabinos*, otras asociaciones *presbíteros*, *ancianos*, *apóstoles*, *etcétera*.

Acerca de la cuestión terminológica, las *Etimologías de San Isidoro de Sevilla*<sup>581</sup> arrojan datos de interés.

Clero y clérigos son llamados así porque Matías fue el primer sacerdote ordenado por los apóstoles y había sido elegido mediante un sorteo, que en griego es *keros*, que significa *suerte* o *heredad*. Los clérigos son pertenencia del señor o participan de él cuando desempeñan un ministerio en la Iglesia de Cristo. Clérigo, en un sentido extenso, es sinónimo de eclesiástico y puede hacer referencia, en el cristianismo, tanto a un miembro del clero regular (monjes y frailes) como del clero secular (sacerdotes).

En el Derecho Canónico es clérigo la persona que ha recibido el grado de diácono.<sup>582</sup> En la edad media era sencillamente un hombre letrado.

El término *Ministro de Culto* en la actualidad es el que la propia legislación ha adoptado, considerando que es el más apropiado para incluir a quienes ejercen esa actividad.<sup>583</sup>

*(...) para los efectos de esta Ley, se consideran ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las Asociaciones Religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter.  
(...) se tendrán como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas*

---

<sup>581</sup> San Isidoro de Sevilla, *Etimologías*, edición bilingüe, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, MCMLXXXII, tomo I, libro VII, núm. 12, p. 679, y núm. 22, p. 681.

<sup>582</sup> Canon 266

<sup>583</sup> LEE GALINDO, Jorge. "Situación jurídica de los Ministros de Culto en México", en: *Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (1992-2002)*, Javier Saldaña (Coordinador), Secretaría de Gobernación, UNAM, Serie Estudios Jurídicos Núm. 40, México 2003, p. 93.

*como principal ocupación, funciones de dirección, representación u organización.*

Como podrá observarse, existe una ambigüedad porque no se precisa exactamente quién es un ministro de culto, basta con que las Asociaciones Religiosas *confieran tal carácter sea quien sea*. Así las cosas, se puede tener como ministro de culto aún a aquellas personas que no ejerzan el ministerio de un culto o que tampoco ejecuten actos que las reglas de cada clero religioso reserven a determinadas personas investidas de carácter sacerdotal. Es decir, puede ser cualquier persona, sólo basta que las Asociaciones Religiosas les concedan tal carácter. Desde un particular punto de vista, era más precisa, en relación con este concepto, la Ley Reglamentaria del Artículo 130 del 18 de enero de 1927, a la que hemos hecho referencia.

La palabra *ministro* —señala José Luís Soberanes— deriva del verbo ministrar o dar y, por lo tanto, ministro de culto religioso será aquella persona que dé o ministre los actos o ceremonias culturales de una religión. Sin embargo, —sigue diciendo dicho autor— esta definición no es exacta, ya que resulta difícil precisar el concepto de ministro de culto, pues no existe un criterio que uniformemente usen todas las confesiones religiosas para determinarlo.<sup>584</sup>

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante tesis jurisprudencial,<sup>585</sup> ha confirmado que son ministros de culto aquellas personas a

---

<sup>584</sup> SOBERANES, José Luís. “La reforma constitucional de 1992 en materia de Libertad Religiosa y los Derechos Humanos”, en *Una Ley para la libertad religiosa*, MÉNDEZ GUTIÉRREZ, Armando (coordinador), cambio 21, Editorial Diana, México, 1992, p. 27

<sup>585</sup> ASOCIACIONES RELIGIOSAS. LA REPRESENTACIÓN PARA COMPARECER EN SU NOMBRE ANTE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES, ESTÁ RESERVADA A LAS PERSONAS QUE DETERMINEN SUS ESTATUTOS. De una recta y sistemática interpretación de los artículos 6 y 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (...) se consideran como Ministros de Culto a todas aquella personas a quienes las asociaciones religiosas confieran ese carácter, debiendo notificar su decisión a ese respecto a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, ante la omisión de dicho aviso se tendrán como tales a quienes ejerzan en ellas, como principal ocupación, funciones de dirección, representación y organización (...). SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL

quienes las asociaciones religiosas confieran ese carácter, debiendo notificar su decisión a la Secretaría de Gobernación, de no ser así se tendrán como ministros aquellos que ejerzan las funciones de dirección, representación y organización.

En resumen, de acuerdo a la ley, tenemos necesariamente que concluir que de conformidad al reconocimiento de la autonomía<sup>586</sup> de las propias Asociaciones Religiosas son éstas, y sólo éstas, las que deben determinar quiénes son sus ministros de culto.

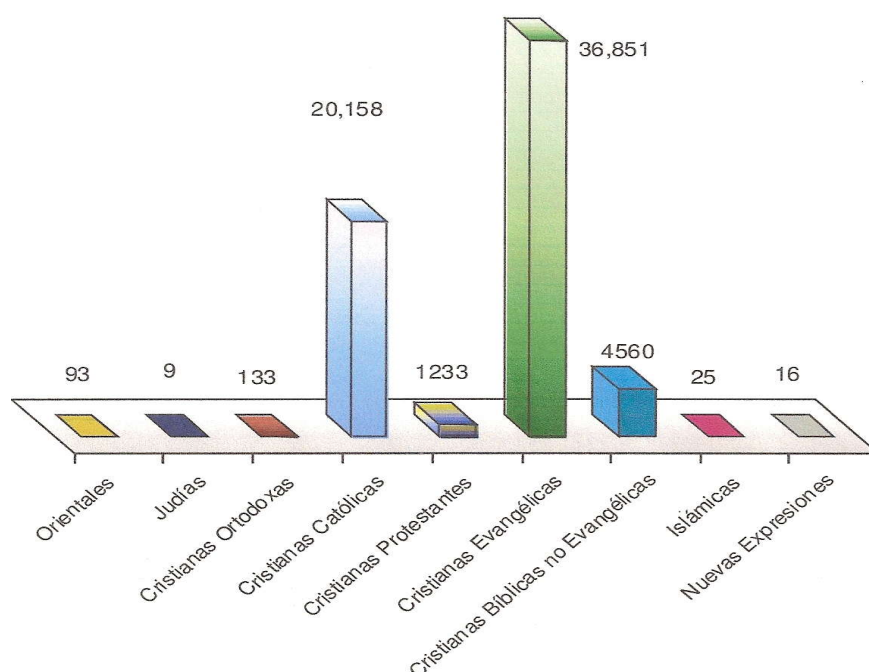
---

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6056/2003. Primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México. 16 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo. Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 19 junio de 2004, página 1411, Tesis: I. 6° C. 308 C, Materia Civil.

<sup>586</sup> Artículo 6°, Párrafo II, de la *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*

### 7.3 REGISTRO O RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER DE MINISTRO DE CULTO

De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Dirección General de Asociaciones Religiosas. Subdirección de la Unidad de Informática, en la actualidad se encuentran registrados un total de: 63, 078 ministros de culto de las distintas Asociaciones Religiosas al 13 de Marzo de 2009 en los términos en que se aprecia en la gráfica que a continuación se muestra:



### 7.4 LOS MINISTROS DEL CULTO EN LA LEY

La regulación jurídica de los ministros de culto se encuentra en el artículo 130 constitucional, en particular en los incisos c), d) y e), y son consideraciones que traslada a su Ley Reglamentaria: Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.



El Capítulo II de la Ley regula la actividad de los ministros de culto, concretamente en los artículos 12 al 15, así como en el 16, párrafo II y el 5º transitorio de la misma, pues se refiere a quiénes son, quiénes pueden ejercer el ministerio, sus derechos políticos, sus impedimentos políticos, sus obligaciones ante la Secretaría de Gobernación en cuanto a la separación o renuncia de su cargo, así como sus impedimentos e incapacidades para heredar por testamento.

Como ya lo señalamos, los ministros de culto son aquellas personas a quienes las Asociaciones Religiosas les confieran tal carácter al notificar a la Secretaría de Gobernación el nombramiento. Podrán ejercer el ministerio de culto no sólo los mexicanos sino también los extranjeros, siempre y cuando comprueben su legal internación en el país.<sup>587</sup>

## 7.5 LOS MINISTROS DEL CULTO ANTE EL DERECHO CIVIL

### *a) Restricción a la capacidad civil*

En principio, el artículo 130 constitucional, en su inciso e) señala *los ministros no podrán (...) en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o a sus instituciones (...).*

En este sentido, se considera que se violentan las garantías individuales contenidas en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, referentes a la libertad de manifestación de las ideas y la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, pues ninguna ley o autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de imprenta, excepto si ataca a la vida

---

<sup>587</sup> Artículos 11 y 12 de la Ley

privada, la moral y la paz pública. Estas garantías individuales deben ser respetadas por el Estado. La Ley Reglamentaria, por su parte, incluye entre las infracciones que pueden cometer los Ministros de Culto la de *oponerse a las leyes del país o sus instituciones en reuniones públicas* (artículo 29, fracción X). Entre las sanciones a que puede dar lugar su inobservancia, establece imposición de *multa de hasta 20 mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.* (Artículo 32, fracción II).<sup>588</sup>

Desde un particular punto de vista los Ministros del Culto no pueden ser considerados individuos distintos a los demás. No debe olvidarse que la misma ley, en materia religiosa, establece con precisión que *las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes*. Por lo tanto, no puede ni debe existir tal prohibición.<sup>589</sup>

#### ***b) Incapacidad para heredar***

Los ministros de culto tampoco podrán heredar por testamento, tampoco sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente.<sup>590</sup>

De igual forma, el precepto constitucional señala:

*Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las Asociaciones Religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las*

---

<sup>588</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico Mexicano*, Editorial Porrúa, México 1997, p. 245

<sup>589</sup> Artículo 1º, *de la Ley*.

<sup>590</sup> Artículo 15, *Ibidem*

*personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado (...).*<sup>591</sup>

Como se ve, éste artículo mantiene y extiende las limitaciones a los ministros de culto en su capacidad para heredar. Es decir, los ministros están impedidos de heredar por testamento en términos absolutos, salvo que se trate de sus parientes consanguíneos. Sin embargo, debe observarse que no están impedidos para heredar de manera legítima.

Como observa Adame Goddard,<sup>592</sup> la expresión *haber dirigido o auxiliado espiritualmente* es muy amplia y puede caber en ella prácticamente cualquier acto que realiza un ministro de culto a favor de otra persona, como cuando le enseña a rezar, le imparte la doctrina religiosa de que se trate, la aconseja, la consuela, etcétera. En realidad, como también lo señala el mismo autor, el motivo de esta restricción es simplemente una sospecha, una suspicacia excesiva, en el sentido de que el ministro de culto pueda haber presionado o ejercido su influencia para inducir al testador a que lo designara heredero, además de que éste tiene amplia libertad para revocar o modificar su testamento en cualquier tiempo y, llegado el caso, los interesados podrían promover la nulidad del testamento o de la cláusula respectiva, por vicios de la voluntad que hubieren afectado la libertad del testador.<sup>593</sup>

También el artículo 15 de la Ley establece la restricción, pero agrega una remisión expresa al artículo 1325 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la república en materia federal, en el cual se dispone que *los ministros de los cultos no pueden ser herederos por testamento de los*

<sup>591</sup> Artículo 130 de la *Constitución*

<sup>592</sup> ADAME GODDARD, Jorge. *Análisis de la Ley de...*, op. cit. p. 42

<sup>593</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico...* op. cit., pp. 249-250

*ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan parentesco dentro del mismo grado. La misma incapacidad tienen los ascendientes, descendientes, cónyuges y hermanos de los ministros, respecto de las personas a quienes hayan prestado cualquiera clase de auxilios espirituales, durante la enfermedad de que hubieren fallecido.*

Como ya lo señalamos, la incapacidad impuesta está sustentada en una presunción de influjo, contraria a la libertad del testador. Esta prohibición pareciera excesiva, toda vez que la expresión *hayan dirigido o auxiliado espiritualmente* es, en primer lugar, difusa y ambigua y, en segundo, no establece el tiempo en que debió de ocurrir dicha acción de dirección o auxilio espiritual ¿Tendría que ocurrir inmediatamente antes de que se otorgara el testamento? o ¿aún cuando la acción se haya dado nada más una vez, por ejemplo, en la niñez del testador?<sup>594</sup>

También es cierto que esta restricción no es sólo para los ministros de culto, se establece también a los médicos<sup>595</sup> y a los notarios públicos,<sup>596</sup> pero con la substancial diferencia con respecto de los ministros de culto, de que solamente afecta a quien haya asistido al testador durante su última enfermedad en el caso de los médicos, y a quien haya intervenido en el testamento en el caso de los notarios.

Se coincide entonces de manera plena con la ponencia del doctor Alberto Pacheco, presentada en 1992 ante el Notariado Mexicano, cuando afirma que las limitantes que el legislador sostuvo para los ministros de culto en nuestra Carta Magna y en la propia LARyCP, no deben considerarse como incapacidades en un

---

<sup>594</sup> *Ibidem*, pp. 278-279

<sup>595</sup> Artículo 1323 del *Código Civil del Distrito Federal*

<sup>596</sup> Artículo 1324, *Ibidem*.

sentido estricto, ni tampoco prohibiciones, sino solamente incompatibilidades. Ahí radica la diferencia.

La incapacidad en *stricto sensu* consiste en la falta de capacidad jurídica para ejercitar los derechos y las facultades que la ley concede, presupone que la persona no posee la edad o las cualidades naturales de la razón y de la voluntad para gobernarse a sí misma. Nunca se provoca por un acto voluntario del individuo en cuestión ni puede terminar por un acto voluntario, como en el caso que nos ocupa, y aunque la ley habla de la incapacidad para los ministros de culto en materia de sucesión, no se refiere sino a que los mismos están imposibilitados por la actividad que desempeñan. La prohibición siempre tiene un sentido de castigo o de sanción ante un acto ilícito que no encontramos en los preceptos citados. Las incompatibilidades, por el contrario, consisten en que una persona jurídicamente capaz no debe desempeñar al mismo tiempo diferentes funciones o actividades que se contraponen, en el sentido de que tienen fines opuestos, de tal manera que el desempeño de una esté en oposición con el de la otra, o bien, derivan de actos libres y voluntarios por los que una persona capaz decide ser ministro de culto y también de la situación que necesariamente adquiere el propio ministro frente a los feligreses.<sup>597</sup>

El Artículo 130 constitucional y las disposiciones de la Ley Reglamentaria no establecen una prohibición para que los ministros de culto adquieran bienes inmuebles mediante donación de algún feligrés, pues es el Artículo 15 de la Ley sólo les impide heredar por testamento, de las personas a quienes haya dirigido o auxiliado espiritualmente y no tenga parentesco dentro del cuarto grado. En este sentido puede ser aplicable la tesis jurisprudencial dictada por el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.<sup>598</sup>

---

<sup>597</sup> LEE GALINDO, Jorge. "Situación jurídica de los Ministros de Culto en México ..., *op. cit.*, pp. 97-99

<sup>598</sup> MINISTROS DE CULTO, DONACIÓN A FAVOR DE LOS, Las disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 130 Constitucional, no establecen una prohibición para que los ministros de

Desde un particular punto de vista esta limitación es correcta, pues a decir verdad, se conocen muchos casos en los que las Iglesias (especialmente la católica) ha adquirido bienes muebles e inmuebles por el hecho de auxiliar espiritualmente a sus fieles en sus últimos días.

## 7.6 LOS MINISTROS DEL CULTO Y SUS DERECHOS POLÍTICOS

En 1856, Ignacio Comonfort expidió el *Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana*,<sup>599</sup> en el que por primera vez se suprimía la religión católica como única de la Nación. También se estableció que se pierden los derechos del ciudadano por pertenecer al estado religioso.<sup>600</sup> De la misma forma señalaba que los eclesiásticos seculares no pueden votar ni ser votados para los cargos de elección popular.<sup>601</sup>

El artículo 130 constitucional,<sup>602</sup> al igual que la Ley Reglamentaria<sup>603</sup> en materia religiosa, prohíben a los ministros de culto desempeñar cargos públicos,

---

culto adquieran bienes inmuebles mediante donación de algún feligrés, pues los artículos 7º, párrafo segundo y 18 de dicha Ley, sólo les impiden heredar por sí o por interpósita persona, o recibir por algún título, un inmueble ocupado por cualquier asociación de propaganda religiosa o de fines religiosos o de beneficencia y también los incapacita legalmente para ser herederos por testamento de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado, por lo que la sentencia que consideró legal la donación efectuada respecto de una casa habitación, no es violatoria de garantías. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, Seminario Judicial de la Federación, Tesis aislada, Materia: Civil, Octava Época, Tesis: XXI. 2º. 16 L. Amparo directo 410/91, Margarita Ramírez Zenteno, 20 de octubre de 1991, Unanimidad de votos, Ponente: Leonel Valdés García, Secretaria: Patricia Mújica López.

<sup>599</sup> Dado en Palacio Nacional el 15 de mayo en 1856 por el Presidente Substituto. Consta de 125 artículos. Estuvo vigente hasta la promulgación de la Constitución de 1857.

<sup>600</sup> Artículo 25 fracción IV del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.

<sup>601</sup> Artículo 29, *Ibidem*.

<sup>602</sup> “Inciso d) (...) los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos (...) tendrán derecho a votar pero no a ser votados (...) e) (...) no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra del candidato, partido o asociación política alguna (...) queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de formación política cuyo título tenga alguna palabra que la relaciones con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político (...) serán incapaces para heredar por testamento”.

<sup>603</sup> *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, “Artículo 14. (...) no podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal y material y definitivamente de su ministerio cuando menos 5 años en el primero de los casos y tres en el segundo (...) tampoco podrán (...) asociarse con fines políticos (...)”.

a ser votados, a asociarse con fines políticos, a formar agrupaciones políticas y a celebrar reuniones de tal carácter en los templos, así como el heredar por testamento.

De igual forma, la Constitución expresa quiénes son ciudadanos y sus prerrogativas.<sup>604</sup> Teniendo tal carácter aquéllos que hayan cumplido 18 años y que tengan un modo honesto de vivir, lo que les permite votar y ser votados.

Bajo esta hipótesis cabría hacerse la pregunta ¿cumplen los requisitos los ministros del culto? ¿Son ciudadanos? De lo señalado en los propios artículos 34 y 35 se desprende que los ministros de culto dan cumplimiento a tales imperativos y, por lo tanto, son ciudadanos y tienen el derecho a votar y ser votados, así como a desempeñar cualquier empleo o comisión para el que fuesen nombrados.

A mayor abundamiento, la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Intolerancia y Discriminación basadas en la Religión,<sup>605</sup> considera como discriminación cualquier menoscabo por razones religiosas; la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 consagra a los derechos políticos *los activos, los pasivos* como Derechos Humanos (artículo 20), y los cuales no podrán menoscabarse por razón de raza, color, sexo, idioma o religión (artículo 2.1), y del mismo modo previene que ningún Estado tendrá derecho a realizar actos tendientes a la supresión de estos derechos (artículo 30); y al igual que la declaración de la ONU, la Convención Americana sobre Derechos

---

<sup>604</sup> Artículos 34 y 35 de la Ley.

<sup>605</sup> Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de enero de 1982. “Artículo 2.2. se entiende por intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la elaboración o menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Y el artículo 4º establece que: todos los estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos de religión o convicciones en el reconocimiento, en ejercicio y el goce de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, social, y cultural”.

Humanos o Pacto de San José (22/XI/1969), suscrita, ratificada y promulgada por México el 7 de mayo de 1981, señala lo mismo.<sup>606</sup>

En las modernas legislaciones sobre libertad religiosa se consagran a plenitud los derechos políticos de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones de nacionalidad, edad y capacidad, sin limitarlos o restringirlos a los ministros de culto. Baste citar a dos de las más avanzadas provenientes de Estados que tuvieron la más distinta orientación ideológica: España, que pasó de un régimen confesional a uno de plena libertad religiosa y Rusia (parte de la antigua URSS), que pasó de un Estado oficialmente ateo a un sistema de libertad religiosa.

La Constitución española de 1978 establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en las elecciones y acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o religión (artículos 23 y 14); y en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 5 de julio de 1980 se dispone que *no podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargo o funciones públicas* (artículo 1.2).

El antiguo profesor de la Universidad de Valencia, Antonio Molina Meliá, comentando las disposiciones citadas, escribe *los clérigos, sean seculares o regulares, gozan de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos (...) en este sentido, se les respeta sus derechos civiles, es decir, puede ejercer cualquier profesión u oficio privado o público. Lo mismo hay que decir de sus derechos*

---

<sup>606</sup> Exige que se reconozca a todos los ciudadanos el goce de los derechos humanos de votar y ser elegidos en elecciones, participar en la dirección de los asuntos públicos y de tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (artículo 23.1, incisos a, b y c), y establece que la ley deberá reglamentar el ejercicio de esos derechos y oportunidades “EXCLUSIVAMENTE” por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por un juez competente en proceso penal (artículo 23.2). En su artículo 29 el referido documento prescribe que ninguna disposición de la convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados Partes “suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o LIMITARLOS en mayor medida que la prevista en ella”.



*políticos: no hay restricción alguna. Pueden crear partidos, dirigirlos, afiliarse a ellos, ocupar cargos públicos, desde jefe de gobierno, hasta concejal de un ayuntamiento, cualquiera que sea la forma de acceder a ellos: concurso o elección. Naturalmente pueden votar y ser votados; es decir, tiene derecho al voto pasivo y activo.*<sup>607</sup>

Por su parte, la Ley sobre Libertad Religiosa de la actual República Rusa de 25 de octubre de 1990,<sup>608</sup> establece que *los ministros de las organizaciones religiosas tienen el derecho de participar en la vida política con el mismo título que todos los demás ciudadanos.*<sup>609</sup>

Algunos juristas justifican esta limitación con el argumento de que se trata sólo de incompatibilidades entre el ejercicio del ministerio religioso y el de la actividad política, como sucede con los integrantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial.

La Iglesia Católica tiene prohibiciones sobre cargos públicos que tengan una participación en el ejercicio de la potestad civil. Tampoco deberán participar activamente en los partidos políticos ni en cuestiones sindicales.<sup>610</sup>

Una cosa es el incuestionable el derecho que tienen las Iglesias, dada su autonomía, de imponer a sus ministros un deber de abstención que los ministros

---

<sup>607</sup> El autor reconoce, que las Iglesias protestantes no habían sufrido grandes perjuicios, pues obviamente “los recientes ataques mexicanos a los cuerpos religiosos organizados y las restricciones corrientes, ambas están dirigidas principalmente hacia el sistema dominante de creencia”, en BATES SEARLE M., *Libertad Religiosa*, Estudio Histórico, crítico filosófico, Buenos Aires, Libertad, pp. 86-87 y 564

<sup>608</sup> BLANCARTE, Roberto. *Historia de la Iglesia Católica en México*, el Colegio Mexiquense, Fondo de Cultura Económica, México 1992, p. 59

<sup>609</sup> Véase Antecedentes y comentarios en: Christileb Ibarrola, Adolfo, “Monopolio Educativo o Unidad Nacional”, México, JUS, 1962.

<sup>610</sup> “Canon 285: Absténganse los clérigos por completo de todo aquello que se desdiga de su Estado (...) § 3. Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil”; “Canon 287. § 2. No han de participar activamente en los partidos políticos ni en las asociaciones sindicales, a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común”.

aceptan en ejercicio de su libertad, renunciando voluntariamente a la actividad política (como renuncian al matrimonio, al comercio, etc.) y otra, muy distinta, es que el orden jurídico despoje de esos derechos a los ciudadanos que sean ministros de culto. Constituye también un menoscabo a los derechos políticos que por ser ministros de culto estén excluidos indebidamente del voto pasivo.<sup>611</sup> Por lo tanto, esa supresión de derechos corresponde a los ministros pero nunca al orden jurídico del Estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado a través de la tesis jurisprudencial<sup>612</sup> en materia electoral que los ministros de culto son inelegibles aún y cuando la asociación religiosa a la que pertenezcan no cuente con el registro que otorga la Secretaría de Gobernación para obtener la personalidad jurídica, pues en la realidad, son ministro de culto y por lo tanto no tienen derecho a ser votados.

Se comparte la opinión de aquéllos que señalan que la actividad política y la actividad ministerial son opuestas por naturaleza, es decir, que existe incompatibilidad entre ambas. Lo que es claro, es que en la actualidad violentando la constitucionalidad,<sup>613</sup> los jerarcas de las Iglesias no sólo realizan

---

<sup>611</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico...op. cit.*, pp. 239-246

<sup>612</sup> MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO. SON INELEGIBLES, AUNQUE LA AGRUPACIÓN O IGLESIA A LA QUE PERTENEZCAN NO ESTÉ REGISTRADA LEGALMENTE.- De una interpretación sistemática del Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6º, 9º y 19 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se arriba a la conclusión (...) aún cuando no tienen la personalidad jurídica, con la que cuentan las asociaciones religiosas. Ante esta situación, es claro que para la demostración de la calidad de ministro de culto religioso de una persona, o es necesario acreditar que la Iglesia o agrupación religiosa a que pertenece, se encuentre constituida legalmente como asociación religiosa, puesto que de acuerdo a lo anterior, alguien puede ser ministro de culto de una agrupación religiosa o Iglesia que no esté registrada en términos de Ley, y por ello evidentemente basta para hacerlo inelegible para contender a un cargo de elección popular. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-114/99.- Coalición formada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México.- 25 de agosto de 1999.- Unanimidad de votos.- Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.- Secretario: Eliseo Puga Cervantes. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 564, Sala Superior, tesis S3EL 104/2002, Tercera Época, Instancia: Sala Superior, Fuente: Apéndice, (actualizada 2002), Tomo VIII, P.R. Electoral, Tesis 175, Página 205.

<sup>613</sup> (Artículo 130 Constitucional.- e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso,

proselitismo político en sus declaraciones, sino que además participan abiertamente en los procesos electorales, a grado tal que la Arquidiócesis de México propuso crear un partido político que defendiera públicamente los preceptos de dios con base en el cristianismo. Afortunadamente, la mayoría de las fuerzas políticas del país rechaza un partido católico, señalando que no debe confundirse la religión con la política.<sup>614</sup>

En el año 2006, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Sancionadora resolvió no iniciar procedimiento en contra del Obispo de Ecatepec, Enésimo Cepeda Silva, acusado de hacer proselitismo político en contra de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia a la república señalando que no se acreditó tal hecho.<sup>615</sup> De igual forma, sancionó a 4 ministros de culto por realizar proselitismo político a favor del Partido Unidos por México, la sanción consistió en apercibimiento para que se abstenga de realizar proselitismo político no aplicando sanción mayor.<sup>616</sup> En el año 2007, emitió una resolución en contra de Norberto Rivera y Hugo Baldemar, ministros de la Arquidiócesis Primada de México en la que señala que no existen elementos de prueba declarando improcedente la denuncia.<sup>617</sup>

El Instituto Federal Electoral (IFE) presentó tres acusaciones ante la Secretaría de Gobernación por conducto de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos en las que denuncia intromisiones de la Iglesia Católica en asuntos de índole política.

---

oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político (...); “Artículo 8 de la Ley.- Las Asociaciones Religiosas, deberán: Fr. I Sujetarse siempre a la constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país (...); “Artículo 14.-(...) tampoco podrán los ministros del culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna (...).”

<sup>614</sup> Periódico *El Universal*, “Iglesia pide partido para Católicos”, 13 de enero de 2009

<sup>615</sup> Boletín N° 14, 20/01/06

<sup>616</sup> Boletín N° 46, 12/02/06

<sup>617</sup> Boletín N° 118, 09/06/2007

El 22 de enero, 6 de febrero y 11 de marzo de 2009 la secretaría ejecutiva del IFE remitió oficios en los que expone las quejas presentadas por el Partido Socialdemócrata. Una se refiere al VI Encuentro Mundial de las Familias en el que participó el presidente Felipe Calderón en la que se hizo un llamado a “exigir a los partidos políticos a exponer programas a favor de la vida y en caso contrario de no hacerlo castigarlos con el voto”; otra se refiere a lo publicado en un semanario arquidiocesano en Guadalajara en el que se incluye un epigrama presuntamente religioso, pero abiertamente de apoyo al Partido Acción Nacional (partido en el poder); una más a una serie de hechos y declaraciones de ministros religiosos en León, Oaxaca, Distrito Federal y Morelia en las que se refieren a cuestiones de carácter electoral. Una de los más graves se relaciona con la publicación de una convocatoria para cursos de concientización desde el púlpito en el que la Arquidiócesis de México literalmente llama a no votar.<sup>618</sup>

Más aún en “El semanario desde la fe”<sup>619</sup> la cúpula de la Iglesia Católica en México se pronunció contra aquellos partidos políticos que abanderan candidatos a puestos de elección popular y que son hijos, sobrinos y demás familiares de actuales políticos; la Arquidiócesis de México en el documento que titula “fatalismo electoral” advierte que es un fracaso total la reforma electoral, señalando que es necesario superar la corrupción que ha dominado nuestra historia, reprobando a los políticos que la han propiciado. También urgió hacer de lado a los partidos políticos que no tiene propuestas.

Ante tal circunstancia, el Gobierno Federal ha hecho caso omiso de las denuncias en contra de la Iglesia católica por su intromisión en la política.

---

<sup>618</sup> Periódico *El Universal*, “Desoyen denuncias de intromisión de Iglesia”, Jorge Octavio Ochoa, 27 de marzo de 2009.

<sup>619</sup> Órgano de difusión impresa de la Iglesia católica en México

En franca violación a nuestras leyes la Iglesia asume postura política, pues sin importarle el impedimento que la obliga a la no intromisión no sólo ha utilizado las conferencias del episcopado mexicano y sus medios impresos sino que desde los pulpitos realizan propaganda política a favor y en contra de los partidos políticos.

## 7.7 OTRAS DISPOSICIONES A CONSIDERAR SOBRE LOS ACTOS DE LOS MINISTROS DE CULTO

### *a) Matrimonio Religioso*

El penúltimo párrafo del artículo 130 constitucional expresa: *Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.*

Con las reformas se suprimió la expresión *el matrimonio es un contrato civil* (...),<sup>620</sup> a las autoridades competentes se les designó como *administrativas*, substituyendo dicho término al de *autoridad del orden civil*.

Sin embargo, este hecho no significa una limitación a la capacidad de obrar de los ministros de culto de cualquier asociación religiosa, toda vez, que pueden celebrar el matrimonio religioso sin ninguna dificultad y teniendo éste los efectos dentro de sus propias asociaciones. Para la libertad religiosa no es imperativo que el matrimonio religioso produzca efectos jurídicos civiles.

---

<sup>620</sup> Artículo 130, tercer párrafo del texto original

Sería deseable que el ordenamiento jurídico mexicano reconociera el matrimonio religioso de aquellas asociaciones que obtengan su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, como en el caso de España,<sup>621</sup> dado que se trata de un acto privado, de un derecho personalísimo que se realiza según las convicciones religiosas de los contrayentes, por lo tanto, el Estado no debe imponer formas de unión, sólo reconocerlas. Es un derecho que le pertenece sólo a la persona y no al Estado.

La competencia sobre la institución matrimonial –nos dice José María González del Valle–<sup>622</sup> se ha resuelto en el siglo XX de acuerdo con la doctrina de los ordenamientos jurídicos primarios que da a lugar a que cada ordenamiento establezca su propio sistema matrimonial.

Dentro de este esquema, un adecuado enfoque sobre el tema de la competencia en la regulación del matrimonio debe partir de reconocer que, antes que nada, el matrimonio es un negocio privado, un asunto entre dos personas y a ellas y no a los poderes civiles o religiosos, corresponde elegir el régimen matrimonial al que desean estar sujetos.

González del Valle<sup>623</sup> señala que *el ius connubii* es un derecho de la persona humana y no un derecho del cuidando nacional, como pudiera serlo el derecho a votar en las elecciones políticas. De donde se sigue que el Estado no puede regular soberanamente el matrimonio, sino que ha de respetar en esa regulación el contenido esencial del *ius connubii*. Iván C. Ibán<sup>624</sup> considera que lo más adecuado es una solución legislativa en la que los contrayentes pudieran optar

---

<sup>621</sup> Artículo 59. “El consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado (...)”.

Artículo 60. “El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de las formas religiosas previstas en el artículo anterior produce efectos civiles (...)”.

<sup>622</sup> GONZÁLEZ DEL VALLE, José María. *Derecho Eclesiástico Español... op. cit.*, pp. 251-ss.

<sup>623</sup> *Ibidem*, p. 253

<sup>624</sup> IBÁN, Iván C. *Lecciones de Derecho Eclesiástico*, ediciones Tecnos, S.A., 2da. reimpresión, 2da. edición, Madrid, 1990, p. 242

por la aplicación a su concreto matrimonio del ordenamiento que prefiriesen, fuese el canónico, el civil o el de otra confesión religiosa, naturalmente respetando los contenidos mínimos del orden público nacional y garantizando la libertad individual en la elección inicial o a posteriores cambios.

Se lesiona el derecho fundamental a contraer matrimonio si el Estado configura arbitrariamente esos derechos y deberes, o bien si suprime el derecho a que entre dos personas puedan surgir un conjunto de derechos y deberes conyugales.<sup>625</sup> La competencia sobre el régimen matrimonial corresponde primariamente a la persona y no al Estado.<sup>626</sup>

La idea más importante de esta legitimación de derechos es la del reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico estatal de las convicciones religiosas. Con este reconocimiento, el derecho de libertad religiosa queda protegido por la legislación estatal. Las convicciones de las personas no deben ser óbice para impedir que la legislación reconozca efectos jurídicos a su lazos conyugales, lo mismo para la religión católica que para otras distintas.<sup>627</sup>

No obstante lo señalado, en México el matrimonio religioso no produce ningún efecto jurídico.

## ***b) Símbolos Patrios***

El artículo 130 constitucional, inciso e), primer párrafo, expresa *los Ministros de Culto no podrán agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios*. La

---

<sup>625</sup> GONZÁLEZ DEL VALLE, José María. *Derecho Eclesiástico Español... op. cit.*, p. 243

<sup>626</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico...op. cit.*, pp. 249-250

<sup>627</sup> SALDAÑA SERRANO, Javier y ORREGO SÁNCHEZ Cristóbal. *Poder Estatal y Libertad Religiosa, Fundamentos de su relación*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 21, México, 2001, pp. 138-139

particular referencia a los ministros de culto parece, a todas luces, discriminatoria, toda vez que no sólo ellos pueden agraviar los símbolos patrios, sino que lo puede hacer cualquier persona. Por lo tanto, no debería hacer especial mención a los Ministros de Culto en el texto constitucional.

También la Ley Reglamentaria establece que constituye infracción *agraviar a los símbolos patrios o de cualquier modo inducir a su rechazo*.<sup>628</sup> Las disposiciones señaladas son incorrectas e innecesarias, porque los delitos sobre ese orden se encuentran tipificados y sancionados en el Código Penal Federal y la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

A partir de las reformas escolares, individuos pertenecientes a la religión Testigos de Jehová han sido objeto de sanciones en centros educativos por haberse negado a honrar a los símbolos patrios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos procedió al estudio de 118 quejas presentadas, en el que se analizó si existía fundamento jurídico para separar o expulsar a niños de las escuelas en virtud de haberse negado a saludar y honrar la bandera nacional y a cantar el himno nacional. No obstante que se reconoce que la negativa de los niños estuvo motivada por su conciencia religiosa y que no hubo actitud irrespetuosa a nuestros símbolos patrios. *El criterio sustentado por la CNDH es en el sentido de que no hubo violación de los Derechos Humanos porque indudablemente existe base constitucional y legal para las expulsiones, pero como la expulsión es excesiva y lesiva al derecho a la educación que tiene los niños, procede a alguna otra medida disciplinaria*.<sup>629</sup> En este sentido, habría que ver si se está ante la objeción de conciencia, que es la base misma del derecho a la libertad religiosa. *Que a nadie se le obligue a obrar contra su conciencia*.

---

<sup>628</sup> Artículo 29 fracción II de la Ley.

<sup>629</sup> Citado por GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico... op. cit.*, p. 247



Sin embargo, no hay que olvidar lo que las propias leyes en materia religiosa señalan: *las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades prescritas en las leyes.*<sup>630</sup> *Las Asociaciones Religiosas son iguales ante la Ley en derechos y obligaciones.*<sup>631</sup>

## 7.8 MINISTROS DEL CULTO ANTE EL DERECHO PENAL

En el Código Penal Federal vigente en México no se contiene norma que proteja en forma específica a los ministros de culto, en cambio, la condición de ministro de culto si funciona como agravante cuando es el autor de determinados delitos.

En el año 2006, el Senado de la República aprobó que los ministros del culto sean castigados por abuso sexual. Aprobó una modificación al Código Penal para incluir a los ministros de culto religiosos o a quien se ostente como tal para que sean castigados cuando cometan abuso sexual o violación.

En el segundo período ordinario la XL Legislatura, en sesión del 29 de marzo de 2007, propuso modificaciones al Código Penal para que el ministro de culto que cometa explotación sexual infantil sea inhabilitado por la Asociación Religiosa a la que pertenezca. Si la asociación religiosa no suspende, separa o retira al que haya sido sentenciado por delito de explotación sexual infantil, la Secretaría de Gobernación le cancelará el registro que le fue otorgado.

El senador González Alcocer señaló *Es necesario establecer hasta dónde el Estado puede imponer a los ministros de culto la “destitución e inhabilitación” para desempeñar el cargo, es aquí donde se requiere comentar sobre la potestad*

---

<sup>630</sup> Artículo 1º, segundo párrafo de la Ley

<sup>631</sup> Artículo 6º, último párrafo de la Ley

*del Estado para imponer a los ministros la inhabilitación, retiro o cese para desempeñar su oficio al considerarlos penalmente responsables de la consumación de los delitos de corrupción, pornografía, turismo sexual, lenocinio y trata de personas. En virtud de que no se puede inhabilitar a un ministro de culto, pues no se trata de un cargo público, sino de un nombramiento otorgado por la propia asociación, entonces será ésta la que en cumplimiento de sus estatutos o normas internas suspenda, separe o retire al ministro en el ejercicio del ministerio que le haya otorgado.*

Sostuvo el senador que se requiere fortalecer el cumplimiento de la sanción respecto de los Ministros de Culto, ya que no basta con cambiarlos de parroquia, de diócesis, de país o con mandarlos a un psicólogo.

El Código Penal Federal expresa:<sup>632</sup>

*Las sanciones señaladas en los artículos 200, 201, 202, 203 y 204 se aumentarán al doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones:*

*h) Al ministro de un culto religioso;*

En los casos de los incisos e), f) y h), además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

---

<sup>632</sup> En el Capítulo V relativo a: “Trata de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo”. Artículo 205 bis.

En todos los casos el juez acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima.

En el caso de la Iglesia Católica la pérdida del estado clerical se pierde por sentencia judicial o acto administrativo.<sup>633</sup>

Por otro lado, el Título vigesimocuarto referente a los “Delitos Electorales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos,” señala las multas que se impondrán a los ministros de culto que induzcan al electorado a votar en contra o a favor de candidato alguno.<sup>634</sup>

De este modo, el principio de igualdad queda confirmado ante la tutela estatal no sólo de las distintas religiones, sino de todos los ciudadanos y, por lo tanto, no existe preferencia alguna a los ministros del culto con respecto al resto de los ciudadanos.

## **7.9 SITUACIÓN LABORAL DE LOS MINISTROS DE CULTO**

Si se habla de la situación laboral de los ministros del culto, aún y cuando no lo quisiéramos, tendríamos que plantear dos hipótesis: una referente al trabajo desempeñado por el ministro de culto en la Asociación Religiosa, y otra referente a lo que realizan los trabajadores que no son ministros de culto con las Asociaciones Religiosas.

---

<sup>633</sup> “Canon 290. Una vez recibida validamente la ordenación sagrada, nunca se anula. Sin embargo, un clérigo pierde el estado clerical § 1 Por sentencia judicial o decreto administrativo en el que se declare la invalidez de la sagrada ordenación. §2 Por la pena de dimisión legítimamente impuesta; §3 por rescripto de la Sede Apostólica, que solamente se concede, por la Sede Apostólica, a los diáconos, cuando existen causas graves; a los presbíteros, por causas gravísimas”.

<sup>634</sup> “Artículo 404 prescribe: Se impondrán hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho al voto”.

En este sentido, ni la Constitución ni la Ley Federal del Trabajo hacen referencia alguna a las relaciones laborales o a las prestaciones de servicios de los ministros del culto en las Iglesias, agrupaciones religiosas o Asociaciones Religiosas. Es decir, no contiene previsiones específicas en este sentido.

En el primer caso, deben distinguirse también dos circunstancias:

La primera es la prestación de servicios pastorales por parte de los ministros del culto que están reguladas por los propios ordenamientos confesionales.<sup>635</sup>

La segunda es que en el caso de que la Asociación Religiosa adopte estructuras “empresariales”, y que para ello emplee como trabajadores a los ministros del culto.

Desde luego que éstos, se quiera o no, establecen un contrato laboral y, por lo tanto, deben ser considerados como trabajadores.<sup>636</sup> Tendrían que sujetarse las relaciones laborales de éstos y de las Asociaciones Religiosas en los términos del Artículo 123 de la Constitución y su Ley reglamentaria: la Ley Federal del Trabajo, independientemente de la normativa interna.

Los servicios pastorales prestados por el ministro quedan fuera del ámbito laboral y se someten al ordenamiento canónico. La relación de los ministros de

---

<sup>635</sup> En el caso de la religión católica el Canon 281 establece: “§ 1. Los clérigos dedicados al ministerio eclesiástico merecen una retribución conveniente a su condición, teniendo en cuenta tanto la naturaleza del oficio que desempeñan como las circunstancias del lugar y tiempo, de manera que puedan proveer a sus propias necesidades y a la justa remuneración de aquellas personas cuyo servicio necesitan. § 2. Se ha de cuidar igualmente de que gocen de asistencia social, mediante la que se provea adecuadamente a sus necesidades en caso de enfermedad, invalidez o vejez. § 3. Los diáconos casados plenamente dedicados al ministerio eclesiástico merecen una retribución tal que puedan sostenerse a sí mismos y a su familia; pero quienes por ejercer o haber ejercido una profesión civil ya reciben una remuneración, deben proveer a sus propias necesidades y a las de su familia con lo que cobren por ese título”.

<sup>636</sup> Por ejemplo, en las escuelas que pertenecen a las Asociaciones Religiosas se otorgan cargas laborales en cuanto a las asignaturas que se imparten y por lo tanto, en este sentido ya no es el Ministro de Culto solamente la persona o el individuo que presta servicios pastorales sino que imparte ahora conocimientos diversos como pueden ser filosofía, historia, geografía, etc.

culto con la Asociación Religiosa nace por medio de la profesión religiosa, en virtud de la cual, la particular situación de dependencia derivada del voto de obediencia, la renuncia a toda expectativa de lucro impuesta por el voto de pobreza y el régimen comunitario en que se inserta, son aspectos que influyen para excluir la posibilidad de establecer una relación de trabajo subordinado entre la comunidad de sus miembros.<sup>637</sup>

Circunstancia distinta se da en el sentido de aquellos individuos que, no siendo ministro de culto, tengan una relación de trabajo con las Asociaciones Religiosas, en donde sin lugar a dudas haya una relación laboral que deba sujetarse a la legislación aplicable,<sup>638</sup> es decir, al artículo 123, apartado a) constitucional, y a la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos respectivos. Es decir, las relaciones de trabajo entre las Asociaciones Religiosas y sus trabajadores se sujetarán a lo dispuesto por la legislación laboral.<sup>639</sup>

Por otro lado, el hecho de que una Iglesia o corporación religiosa, no adquieran el registro constitutivo, eso no impide que la relación de trabajo pueda generarse cuando se adopten estructuras empresariales y en las que intervengan individuos que sean ministros de culto y aquellos que no lo sean, así se puede apreciar en el criterio determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis jurisprudencial en materia laboral de enero de 1994.<sup>640</sup>

---

<sup>637</sup> MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORIA, Juan G. *La Libertad Religiosa en España y Argentina...*, op. cit., p. 148.

<sup>638</sup> Artículo 10 segundo párrafo de la Ley

<sup>639</sup> GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico...* op. cit., p. 274

<sup>640</sup> RELACIÓN DE TRABAJO. PUEDE GENERARSE EN EL CENO DE UNA IGLESIA, AÚN CUANDO CAREZCA DEL REGISTRO CONSTITUTIVO CORRESPONDIENTE (ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO). A la luz del artículo 10° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de 1992, no es obstáculo la falta de registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación de una Iglesia determinada, para que en su seno puedan generarse relaciones laborales, pues en ese caso, por disposición expresa del citado precepto legal, los actos constitutivos, de una relación laboral, así como los derechos y obligaciones de ella derivados, deben atribuirse a las personas físicas o morales, según corresponda, encargadas o responsables de aquella Iglesia o templo religioso que hubiere constituido. Es decir, que los sujetos a las disposiciones de la Ley laboral, son aquellas personas encargadas o responsables del lugar donde el trabajador haya prestado su trabajo personal subordinado. Segundo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió el 14 de julio de 1994 una tesis jurisprudencial<sup>641</sup> que señala que todo convenio donde se obligue al individuo a prestar servicios personales o a contribuir con dinero o especie al sostenimiento de una Iglesia carece de validez y por lo tanto cualquier acto de autoridad tendiente a exigir el cumplimiento de un convenio de esa naturaleza, viola la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.

## 7.10 OBLIGACIONES MILITARES Y CÍVICAS DE LOS MINISTROS DE CULTO

En nuestro país muy pocos se han decidido incursionar en la rama del derecho militar.

En México el servicio militar está regulado por la Ley del Servicio Militar que fue creada, principalmente, debido al estado de guerra en el que se encontraba el país con motivo de su entrada a la segunda guerra mundial.

Conviene ahora transcribir el contenido del artículo 1º de la Ley del Servicio Militar:

---

Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, *Seminario Judicial de la Federación*, Tesis aislada, Materia: Laboral, Octava Época, Tesis: XXI. 2o. 16 L. Amparo directo 250/93, Dimas Valladares Salgado, 11 de noviembre de 1993, unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinoza, Secretario: Javier Cardoso Chávez.

<sup>641</sup> CULTO PÚBLICO. LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE QUINCE DE JULIO DE 1992. NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LOS CONVENIOS QUE LA CONTRAVIENEN. De conformidad con el Artículo 2º, inciso d), de dicha Ley, todo individuo tiene derecho a “no ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, Iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar ni a contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso”; y por su parte el artículo 5º de la propia Ley estatuye: “Los actos jurídicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, serán nulos de pleno derecho”. En consecuencia, todo convenio que contravenga lo dispuesto por el citado artículo 2º, inciso d), carece de validez y por lo tanto cualquier acto de autoridad tendiente a exigir el cumplimiento de un convenio de esa naturaleza, viola la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 83/94. Eliseo González Martínez y otros. 13 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Esteban Santos Velásquez. Secretario: Fermín Salas Álvarez. Tesis Aislada en materia Administrativa, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Página 524.

*De acuerdo con lo dispuesto en el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como Soldados, Clases u Oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.*

La ley obliga a todos los funcionarios y empleados de la Federación a verificar que todos los mexicanos que comparezcan para tramitar cualesquier tipo de asunto, hayan cumplido con las obligaciones militares y, en caso contrario, consignarlos<sup>642</sup> a la autoridad competente.

En principio, dentro de las garantías individuales encontramos el relacionado directamente con los servicios públicos obligatorios.<sup>643</sup> También la norma constitucional señala como obligaciones de los mexicanos el asistir al lugar designado por el ayuntamiento para recibir instrucción cívica y militar,<sup>644</sup> la cual se relaciona con el artículo 35 de la misma norma, en el que establece como una prerrogativa del ciudadano tomar las armas para la defensa de la república y de sus instituciones.<sup>645</sup>

La Ley del Servicio Militar contempla algunos casos de excepciones.

---

<sup>642</sup> Cosa que nunca sucede. Lo que más puede pasar es que no se realice el trámite del asunto planteado a la autoridad.

<sup>643</sup> Párrafo cuarto del artículo 5º de la Constitución: “En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta (...)”

<sup>644</sup> “Artículo 31, fracción II: Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar”.

<sup>645</sup> “Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: Fracción IV.- Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes”.

La Ley del Servicio Militar Nacional fue publicada el 19 de agosto de 1940 y el Reglamento de la Ley dos años más tarde, el 10 de noviembre de 1942. Durante estos dos años fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que dictó las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la ley con el reglamento, se aclaró la pauta para reconocer *las excepciones* al servicio militar.

Concretamente, la Ley del Servicio Militar Nacional en su artículo 10 expresa:

*El Reglamento de esta Ley fijará las causas de excepción total o parcial para el servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y social y la manera de comprobarlos. La Secretaría de la Defensa Nacional, por virtud de esta Ley queda investida de la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes no llenen las necesidades de la Defensa Nacional.*

De la misma forma, el Reglamento de la Ley de servicio militar nacional, señala:

*Artículo 38.- Los mexicanos de edad militar quedarán exceptuados del servicio militar mientras se encuentren en las circunstancias señaladas a continuación:*

*III.- Que ejerzan el culto religioso como ministros cuando estén legalmente autorizados para tal profesión;*

Es decir, la ley prevé las excepciones para el incumplimiento del servicio militar nacional que no son solamente la incapacidad física o mental, ser mayor de 40



años, ser extranjeros, ser menonita,<sup>646</sup> sino también ser ministro de un culto religioso.<sup>647</sup>

En este último caso, deberá acompañarse la solicitud del interesado por escrito al solicitar ante la junta de reclutamiento la cartilla de identidad militar, un documento legal que lo acredite como ministro de culto, expedido por la Asociación Religiosa a la que pertenezca, un oficio de autorización de culto expedido por la Secretaría de Gobernación y una fotocopia oficial con fotografía de identificación. La autoridad, en un plazo no mayor de 96 horas, dictará la resolución correspondiente.

No obstante que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala con precisión *que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes.*<sup>648</sup> Lo que quiere decir es que todos los ciudadanos mexicanos, sin excepción, deben dar cumplimiento a la ley. La Constitución General de la República es clara y contundente al señalar *las Iglesias y las demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la Ley.*<sup>649</sup> No obstante lo señalado, nos encontramos que en lo referente a la prestación de servicio militar por parte de los ministros de culto se tienen o existen en su favor prerrogativas que las leyes mexicanas les otorgan, como es la exención del servicio militar nacional.

---

<sup>646</sup> Son descendientes directos del movimiento anabaptista del siglo XVI, contemporáneo de la Reforma Protestante. adquirieron dicho nombre como referencia a Menno Simonz (1496-1561), un reformador religioso holandés fundador de la secta protestante de los menonitas. Fue contemporáneo de Martín Lutero, pero no compartió todos sus planteamientos. Los menonitas como todos los protestantes surgieron y reaccionaron contra lo que consideraban un abuso de poder por parte de la Iglesia Católica y una desviación del cristianismo original.

<sup>647</sup> Instructivo para el Servicio Militar.

<sup>648</sup> Artículo 1, segundo párrafo de la Ley.

<sup>649</sup> Artículo 130 primer párrafo de la constitución.

La Iglesia Católica prevé la incongruencia del servicio militar con el estado clerical y ordena a sus clérigos a no presentarse al servicio militar si no es con licencia superior.<sup>650</sup>

## **7.11 SECRETO RELIGIOSO**

El secreto religioso es la obligación que tiene el ministro de culto de guardar silencio de aquellas confesiones que le son reveladas por los fieles cuando realizan su actividad ministerial o pastoral pues son “confesiones secretas” (no se hacen de forma pública sino en forma particular en el confesionario).

El secreto religioso se encuentra regulado tanto en el orden federal como en el orden estatal (provincias). Es decir, en el Código Federal de Procedimientos Penales y en algunos Códigos Estatales de Procedimientos Penales.

El Código Federal de Procedimientos Penales<sup>651</sup> prevé que los ministros de cualquier culto, con motivo de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio del ministerio que presten, no estarán obligados a declarar sobre la información

---

<sup>650</sup> “Canon 289 § 1. Dado que el servicio militar es menos congruente con el estado clerical, los clérigos y asimismo los candidatos a las órdenes sagradas, no se presenten voluntarios al servicio militar, si no es con licencia de su Ordinario. § 2. Los clérigos han de valerse igualmente de las exenciones que, para no ejercer cargos y oficios civiles públicos extraños al estado clerical, les conceden las leyes y convenciones o costumbres, a no ser que el Ordinario propio determine otra cosa en casos particulares”.

<sup>651</sup> “Artículo 243 Bis.- No estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder: II. Los ministros de cualquier culto, con motivo de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio del ministerio que presten (...). En caso de que alguna o algunas de las personas comprendidas en las fracciones anteriores manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el consentimiento expreso de quien les confió el secreto, información o confesión, se hará constar dicha circunstancia y se recibirá su declaración o testimonio. La reserva de información que por disposición de la propia ley deben guardar los servidores públicos, se hará del conocimiento de la autoridad que requiera la declaración o testimonio y, en todo caso, se estará a lo dispuesto en la ley que rija las facultades del servidor público correspondiente. Al servidor público que viole lo dispuesto en este artículo, se le aplicarán las penas a que se refiere el artículo 215 del Código Penal Federal, pero si el delito es cometido contra la administración de justicia, se le aplicarán las penas a que se refiere el artículo 225 del mismo ordenamiento”. (Periódico Oficial de la Federación de 6 de junio de 2006, decreto por el que se adiciona y se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal).

que reciban, conozcan o tengan en su poder, a menos de que cuenten con el consentimiento expreso de quien hizo la confesión.

En algunos Códigos Estatales se encuentra también garantizado el secreto profesional con motivo del ministerio religioso como en el Estado de Coahuila,<sup>652</sup> donde se establecen sanciones para quienes, teniendo conocimiento de un delito, omitan dar noticia a la autoridad pudiendo hacerlo a menos de que estén obligados a guardar el secreto profesional con motivo del ministerio religioso.

De igual forma, el Código de Procedimientos Penales señala en su artículo 349 a quienes no tienen la obligación de declarar, señalando aquéllos que tienen excusa, y entre ellos los que deben guardar secreto profesional, como es el caso de los ministros de culto con motivo del ministerio religioso. Al reconocer y garantizar el secreto profesional, sin duda que también se protege la libertad de expresión.

En el caso de España, el artículo 1247,5 del Código Civil establece que son inhábiles como testigos los que están obligados a guardar secreto por su estado o profesión en los asuntos relativos a su estado o profesión.<sup>653</sup>

---

<sup>652</sup> Código Penal de Coahuila, Capítulo IX denominado “obstrucción a la justicia y encubrimiento”, “Artículo 256. Sanciones y figura típica de obstrucción a la justicia por omisión de denuncia. Se aplicará prisión de tres días a seis meses y multa; salvo que esté obligado a guardar el secreto profesional con motivo de ministerio religioso: A quien teniendo conocimiento (...) de un delito (...) omita dar noticia a la autoridad pudiendo hacerlo(...)”.

<sup>653</sup> MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORÍA, Juan G. (coordinadores), *La Libertad Religiosa en España y Argentina... op. cit.* p. 146-147 Cfr. Artículos 163 y 417,1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, “excluye denunciar delitos y testificar, respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio”.

## **CAPÍTULO VIII**

---

---

# **EL DERECHO A LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN MÉXICO**

## CAPÍTULO VIII

### EL DERECHO A LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN MÉXICO

#### 8.1 INTRODUCCIÓN

La educación religiosa debidamente impartida y recibida es un factor decisivo para la conformación de las convicciones y del comportamiento de las personas, cuya respuesta determina su identidad y equilibrio emocional.<sup>654</sup> Por ello es necesaria una breve explicación acerca de cuál ha sido la posición del Estado en relación con la enseñanza religiosa, para posteriormente abordar la situación actual a la luz del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

El Estado liberal presidido por Juárez<sup>655</sup> se constituía como eminentemente laico. No mantenía relaciones jurídicas con la Iglesia Católica en México ni relaciones diplomáticas con la Santa Sede en Roma y ni le interesaba mantenerlas. El motivo de esa laicidad no era como lo fue en otros países, el ser un árbitro imparcial que acabara con las guerras ocasionadas por diferencias religiosas, se declaraba laico por otro motivo, principalmente, para asegurar su independencia con respecto del poder o influencia de los clérigos. Más que laico, el Estado liberal mexicano fue anticlerical.

Podemos distinguir al menos dos temas que plantean la problemática de la enseñanza religiosa dentro de las escuelas públicas. El primero de ellos es el derecho que tienen los padres de elegir el centro educativo en donde han de formarse sus hijos y que esté de acuerdo con su convicciones religiosas; el segundo tiene que ver con el tipo de educación religiosa que ha de impartirse en

---

<sup>654</sup> ADAME GODDARD, Jorge. “El derecho a la educación religiosa en México”, en: *Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (1992-2002)... op. cit.* pp. 23-25

<sup>655</sup> Benito Juárez García, Presidente de México. 21 de enero de 1858 – 10 de abril de 1864

estos centros y, particularmente, con el tratamiento que el Estado debe dar respecto de la enseñanza religiosa en dichos centros educativos.<sup>656</sup>

## 8.2 ANTECEDENTES

El México independiente en sus diversas Constituciones establecía la religión católica como religión oficial, lo que significaba que implícitamente admitían que la educación impartida por el Estado en el sistema educativo incluiría la enseñanza religiosa. La primera Constitución Federal de 1824 señalaba que *la religión de la Nación mexicana es y será perpetuamente Católica*.<sup>657</sup> Las Leyes Constitucionales de 1836 iniciaba: *en nombre de Dios todo poderoso...* y su artículo tercero<sup>658</sup> establecía como una obligación de los mexicanos profesar la religión de su patria: la católica. La Constitución denominada *Bases Orgánicas o Constitución Centralista*, determinaba que la nación profesaba y protegía la religión católica.<sup>659</sup> Con la Constitución de 1857 se produjo un cambio fundamental en la posición del Estado mexicano hacia la educación religiosa. La Constitución dejó de considerar la religión católica como religión oficial y estableció el principio de la enseñanza libre en su artículo tercero.<sup>660</sup> Conforme a este principio, la educación religiosa podía impartirse en las escuelas públicas o privadas. El sistema de enseñanza libre duró poco tiempo, pues con la restauración de la república y el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1873, se reformó la Constitución de 1857 y en el artículo 1º se dio la separación de la

<sup>656</sup> SALDAÑA SERRANO, Javier y ORREGO SÁNCHEZ, Cristóbal. *Poder Estatal y Libertad Religiosa, Fundamentos de su relación*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 21, México, 2001, p. 103

<sup>657</sup> “Artículo 3. La religión de la Nación mexicana es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”.

<sup>658</sup> Son obligaciones del mexicano: “I. Profesar la religión de su patria, observar la Constitución y las leyes, obedecer las autoridades”.

<sup>659</sup> Constitución Centralista de 1843 “Artículo 6º. La Nación profesa y protege la religión Católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquier otra”.

<sup>660</sup> “La enseñanza es libre. La Ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir”.

Iglesia y el Estado.<sup>661</sup> También establecía en su artículo 4° que la enseñanza sería laica en todas las escuelas públicas del país, sin ninguna excepción.

El Constituyente de Querétaro de 1917 en su artículo tercero<sup>662</sup> restringía aún más el derecho de educación religiosa, al impedir que se impartiera no sólo en las escuelas públicas, sino también en las escuelas primarias particulares. En este contexto constitucional, se publicó posteriormente la reforma al Código Penal para el Distrito Federal de 1926, la cual castigaba a quien impartiera educación religiosa en planteles donde no podía impartirse, es decir, en escuelas públicas o en primarias particulares.<sup>663</sup>

La evolución de la reglamentación jurídica sobre la educación religiosa en México en el período analizado podría sintetizarse de esta manera:<sup>664</sup> **1)** de 1857 a 1873: con apoyo en el derecho de libertad de enseñanza la educación religiosa puede impartirse en todas las escuelas del país, públicas o privadas; **2)** de 1874 a 1916: la educación es laica en todas las escuelas públicas pero se puede impartir educación religiosa en escuelas privadas; **3)** de 1917 a 1933: la educación es laica en escuelas públicas y en primarias privadas pero se puede impartir educación religiosa en escuelas secundarias y superiores privadas; **4)** de 1934 a 1945: la educación es antirreligiosa en todas las escuelas públicas y también debe serlo en las escuelas privadas, primarias, secundarias, normales y especiales para obreros y campesinos; **5)** de 1946 a 1991: toda la educación que imparta el Estado es obligatoriamente laica, y lo mismo la que impartan particulares en escuelas primarias, secundarias, o normales.

---

<sup>661</sup> “El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna”.

<sup>662</sup> El texto íntegro del primer párrafo del artículo 3o. original decía: “La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares”.

<sup>663</sup> ADAME GODDARD, Jorge. “El derecho a la educación religiosa en México”, en: *Diez años de vigencia... op. cit.* p. 26-27

<sup>664</sup> *Ibidem*, p. 28

Así las cosas, las reformas de 1992 tienen el efecto principal de reconocer la enseñanza religiosa como una actividad lícita, objeto, por lo tanto, de un derecho específico: el derecho de impartir y recibir educación religiosa.

### 8.3 FUENTES JURÍDICAS REFERENTES AL DERECHO A LA EDUCACIÓN RELIGIOSA

En la actualidad, la fuente jurídica de la educación o enseñanza religiosa en el país se encuentra en el Artículo 3º Constitucional que prescribe que *todo individuo tiene derecho a recibir educación*. No obstante esto, la fracción primera del mismo numeral acota la forma de cómo el Estado debe impartir dicha educación, señalando con precisión *la educación que imparta el Estado será laica* y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

Sin embargo, otorga la posibilidad a los particulares de impartir educación en todos sus tipos y modalidades.<sup>665</sup> De lo que se desprende que, así las cosas, se apertura la posibilidad de que se pueda impartir enseñanza o educación religiosa pero sólo en lo referente a los centros de educación privada. Esta posibilidad tiene relación con el artículo 24 de la Carta Magna, en el que se posibilita que el hombre pueda profesar la creencia religiosa que más le agrade.<sup>666</sup>

---

<sup>665</sup> “Artículo 3º fracción VI.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la Ley”.

<sup>666</sup> “Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la Ley”.



La reforma constitucional de 1992, así como la consiguiente Ley Reglamentaria, afectó el régimen jurídico de la educación religiosa sin ser ello su principal objetivo, sino uno colateral. La reforma Constitucional afectó el artículo 3° en dos sentidos:

**Uno:** quitar la obligación de las escuelas particulares de impartir enseñanza laica;<sup>667</sup> **dos:** eliminar la prohibición de que las corporaciones religiosas y los Ministros de Culto participaran de cualquier manera en las instituciones educativas.<sup>668</sup>

Por lo tanto, las fuentes jurídicas del derecho a la educación religiosa en el país se encuentran en las reformas Constitucionales de 1992, en la Ley Reglamentaria denominada, Ley General de Educación,<sup>669</sup> la reforma Constitucional del artículo 3° aprobada en 1993,<sup>670</sup> en la que se suprimió la fracción IV, y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,<sup>671</sup> que en su artículo 9° expresa *las Asociaciones Religiosas tendrán derecho en los términos de esta Ley y su Reglamento, a: fracción V. participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud, siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además de la presente, a las leyes que regulan esas materias.*

Además de estos cambios legislativos se debe tener en cuenta una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto del nivel jerárquico de los tratados internacionales en el orden jurídico mexicano. Esta tesis repercute en el

---

<sup>667</sup> Para lo cual se reformó la fracción III de dicho artículo, la cual señalaba que los particulares podrían impartir enseñanza sujetándose a lo dispuestos en las fracciones I (que establecía la enseñanza laica ajena a cualquier credo religioso) y II, y ahora solo dice que deben sujetarse a lo dispuesto en la fracción II.

<sup>668</sup> ADAME GODDARD, Jorge. "El derecho a la educación religiosa en México", en: *Diez años de vigencia... op. cit.* pp. 28-29. Para lo cual se derogó la antigua fracción IV del artículo tercero.

<sup>669</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993.

<sup>670</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993.

<sup>671</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992.

derecho de impartir y recibir educación religiosa, el cual refieren los tratados de derechos humanos suscritos por México, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,<sup>672</sup> la Convención Americana sobre Derechos Humanos<sup>673</sup> y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.<sup>674</sup> De acuerdo con esta tesis, las disposiciones de los tratados, en tanto no contravengan la Constitución, prevalecen respecto a los demás ordenamientos jurídicos.<sup>675</sup>

En consecuencia, debe acatarse lo estipulado en los instrumentos internacionales en lo relativo al derecho a educación o enseñanza religiosa.

#### **8.4 LIBERTAD DE CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA RELIGIOSA**

Como ha quedado claro, el Estado mexicano es laico. Por lo tanto, garantiza a favor de los individuos el no profesar creencias religiosas; abstenerse de practicar actos y ritos de culto y no pertenecer a una Asociación Religiosa.<sup>676</sup> Sin embargo, como ya lo señalamos, la propia Constitución General de la República en su Artículo 3º, fracción VI, en relación con el Artículo 24 de la misma norma Constitucional, permite la libertad de creación de centros docentes de enseñanza religiosa. Con mayor precisión la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala:

---

<sup>672</sup> Promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981, después de haber sido ratificado por el Senado y depositado el instrumento de ratificación ante la Secretaría General de la ONU el 24 de marzo de 1981.

<sup>673</sup> Promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, después de haber sido ratificada por el Senado y depositado el instrumento de ratificación ante la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981.

<sup>674</sup> Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976

<sup>675</sup> ADAME GODDARD, Jorge. “El derecho a la educación religiosa en México”, en *Diez años de vigencia... op. cit.* p. 28-31

<sup>676</sup> Artículo 2 de la Ley.

*Las Asociaciones Religiosas tendrán derecho (...) propagar su doctrina (...) Participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de (...) planteles educativos (...) siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además de a la presente, a las leyes que regulan esas materias.*<sup>677</sup>

Esto significa que los particulares no sólo tienen derecho a crear centros educativos, sino también a dotarlos de un *ideario propio*, ya que pueden *propagar su doctrina*. Al *ideario* se le ha definido como *un sistema coherente de ideas o principios generales destinados a engendrar y dirigir un proyecto de enseñanza*<sup>678</sup> o, también, como *el conjunto de principios básicos y fundamentales que sintetizan la orientación última que define un centro educativo ante los padres, los alumnos, los profesores y ante la sociedad en general.*<sup>679</sup> A primera vista podría pensarse que el derecho al ideario educativo es un derecho ilimitado, pero no es así, tiene, naturalmente, sus propios límites, mismos que el propio derecho impone.

En los centros públicos del Estado se impone una enseñanza *neutral*.<sup>680</sup> En los centros privados con ideario se impone al menos *un respeto a ese ideario*, lo cual no deja de ser una imposición.<sup>681</sup>

<sup>677</sup> Artículo 9, fracción III y IV, *Ibidem*.

<sup>678</sup> MORENO, J.M. "Ideario y proyecto educativo en los centros de enseñanza", *Razón y fe*, núms. 944 y 945, septiembre-octubre de 1976, p. 176.

<sup>679</sup> ORTÍZ DÍAZ, J. *La libertad de enseñanza*, Málaga, Universidad de Málaga del 13 de febrero de 1981. Voto particular del ponente magistrado Tomás y Valiente, núm. 8. STC 5/1981, de 13 de febrero, Fundamento jurídico núm. 8.

<sup>680</sup> Esta idea se observa plenamente en el fundamento jurídico núm. 9 de la sentencia que comentamos al señalar que: "en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy espacialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales".

<sup>681</sup> *Idem*.

El derecho que poseen las confesiones religiosas para poder formar sus propios agregados o ministros, es sin duda, el derecho de libertad de creación de centros docentes de enseñanza religiosa. Quizá el ejemplo más representativo de este derecho de las confesiones sea el de la Iglesia Católica, a la que se le reconoce el derecho de establecer con plena autonomía seminarios diocesanos y religiosos, centros de cualquier grado e incluso universidades, facultades, institutos superiores y otros centros de ciencias eclesiásticas para la formación de sacerdotes, religiosos y seglares.<sup>682</sup>

## **8.5 LIBERTAD DE CÁTEDRA**

En el sistema educativo mexicano la educación tiene como finalidad el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, así como fomentar el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional con un espíritu de independencia y de justicia. Para ello se basará en el progreso científico y luchará contra la ignorancia, los fanatismos y los prejuicios. Del mismo modo será democrática, racional y contribuirá a la mejor convivencia humana.

Sin embargo, en este sentido y atendiendo a la laicidad del Estado no existe, cuando menos de manera explícita en el ordenamiento jurídico, la libertad de cátedra en la educación básica, puesto que el Artículo 3º constitucional faculta a el Poder Ejecutivo Federal para que determine los planes y programas de estudios en los niveles educativos básicos en toda la república.<sup>683</sup> Por lo tanto, no

---

<sup>682</sup> SALDAÑA SERRANO, Javier y ORREGO SÁNCHEZ, Cristóbal. *Poder Estatal y Libertad Religiosa,...* op. cit. pp. 123-126

<sup>683</sup> “Artículo 3º constitucional Párrafo III.- (...) El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale”.

existe libertad de cátedra y ésta tendrá que sujetarse a planes y programas previamente establecidos.

En México sólo se reconoce la libertad de cátedra a las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía. Por lo tanto, tendrán la facultad de determinar sus planes y programas de estudio.<sup>684</sup>

No obstante lo señalado en los párrafos que anteceden, el mencionado artículo al instituir y definir la autonomía para las universidades y demás instituciones de educación superior, reconoce la libertad de cátedra pero exclusivamente a las universidades e instituciones de educación superior.

En España el Tribunal Constitucional<sup>685</sup> entiende la libertad de cátedra como la libertad que se tiene frente al Estado o poder público ante la eventual intervención de éste en la actividad docente del profesor. En un sentido amplio se define como la búsqueda de la verdad del conocimiento excluida cualquier imposición estatal. Esta libertad se incluye dentro de la libertad de enseñanza y, como toda libertad, mantiene ciertos límites que han de ser respetados para su justo ejercicio.

En los casos de los centros educativos privados el ejercicio de la libertad de cátedra para el profesor se ve más restringido por los propios límites que le impone el centro educativo, si tal centro profesa un ideario.<sup>686</sup>

---

<sup>684</sup> Tercer reforma al artículo 3° constitucional publicada en el Diario Oficial del 9-VI de 1980 Presidente de México José López Portillo, 1-12-76/30-11-82

<sup>685</sup> STC 5/1981, del 13 de febrero. Fundamento jurídico núm. 9.

<sup>686</sup> SALDAÑA SERRANO, Javier y Orrego Sánchez, Cristóbal. *Poder Estatal y Libertad Religiosa,...* op. cit., pp. 120-121

## 8.6 EL DERECHO DE LOS PADRES A ELEGIR LA FORMACIÓN RELIGIOSA DE SUS HIJOS.

En la doctrina del Derecho Eclesiástico del Estado se acepta casi en forma unánime que a los padres les asiste el derecho de elegir el centro educativo donde sus hijos han de recibir la enseñanza religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Lo anterior se desprende de los más importantes textos internacionales protectores de los derechos humanos firmados y ratificados por la mayoría de los Estados democráticos del mundo.<sup>687</sup>

Como la educación la reciben principalmente los niños y jóvenes menores de edad, el ejercicio de este derecho se confía a los padres o tutores, quienes decidirán respecto de los menores de edad si reciben o no educación religiosa y qué tipo de educación religiosa. Los instrumentos internacionales reconocen expresamente el derecho de los padres de familia, o en su caso de los tutores, para elegir el tipo de educación religiosa y moral que vayan a recibir sus hijos o pupilos. Las expresiones no dejan lugar a ninguna duda de que se trata de un derecho de los padres de familia que el Estado debe respetar.<sup>688</sup>

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 26.3 faculta a los padres para elegir la educación que han de recibir sus hijos;<sup>689</sup> al igual que el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de los padres o tutores del menor para escoger centros educativos donde se dé una educación moral y religiosa que sea

---

<sup>687</sup> *Ibidem*, p. 103

<sup>688</sup> ADAME GODDARD, Jorge. “El derecho a la educación religiosa en México”, en *Diez años de vigencia... op. cit.*, pp. 35-36

<sup>689</sup> “Artículo 26.3. los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Hervada, J. y Zumaquero, J. M., *Textos internacionales de derechos humanos*, 2a. edición, Pamplona, Eunsa, 1992, p. 155.

coincidente con sus propias convicciones;<sup>690</sup> del mismo modo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 18.4 en forma textual copia la idea del pacto anterior<sup>691</sup> y que se repite en otra serie de documentos internacionales.<sup>692</sup>

Las consecuencias que se deducen son principalmente dos: a) el reconocimiento del derecho de los padres a elegir para sus hijos o pupilos el tipo de educación religiosa o moral que esté de acuerdo con las convicciones personales que profesen los padres; y b) reconocer el derecho que tienen los centros de educación privada para establecer, en el propio centro, un ideario educativo propio.

En América, para poner sólo un ejemplo acorde con la mayoría de los países, Guatemala recoge en su texto constitucional el derecho de los padres a que sus

---

<sup>690</sup> “Artículo 13.3. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

<sup>691</sup> “Artículo 18.4. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

<sup>692</sup> Entre los otros muchos documentos internacionales de Derechos Humanos que consignan tal derecho podemos mencionar los siguientes: el Pacto de San José que en su artículo 12. 4 establece: “los padres y en su caso los tutores, tiene derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Otro texto es la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960, la que en su artículo 5.1, b señala: “los Estados partes de la presente Convención convienen en que debe respetar la libertad de los padres o en su caso de los tutores legales: primero, de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas mínimas que puedan fijar o aprobar las autoridades competentes y segundo, de dar a sus hijos según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; en que, además no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones”. Por su parte, el Protocolo adicional núm. 1 de la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales en su artículo 2o. señala: “a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetara el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. Finalmente, la resolución del Parlamento europeo del 14 de marzo de 1984 sobre la libertad de enseñanza solicita expresamente a España y a Portugal, ante su entrada en la Comunidad Europea, que sean reconocidos varios principios en materia de enseñanza, entre los que destaca el derecho reconocido a los padres para decidir el tipo de escuela que han de frecuentar sus hijos hasta que ellos puedan decidir por sí mismos. A este fin, el Estado tiene la obligación de prever las necesidades de centros públicos o privados. Cfr. CRUZ MUSOLES, M., “El derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos en la legislación española”, Estudio en homenaje al profesor LÓPEZ ALARCÓN, Murcia, Secretaría de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1987, p. 385.

hijos puedan recibir educación religiosa. En su artículo 73 se lee *la familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores (...)*. Más adelante expresamente establece *la enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios sin discriminación alguna. El Estado contribuirá al sostenimiento de la enseñanza religiosa sin discriminación alguna.*<sup>693</sup>

En México, la reforma Constitucional de 1992 reconoció el derecho a la educación religiosa sólo en las escuelas privadas o particulares,<sup>694</sup> lo que constituye un avance respecto de la situación anterior —se excluía la religión de toda forma de educación—, aunque sigue siendo contrario a los instrumentos internacionales protectores de los derechos humanos que México ha ratificado.

El derecho de los padres no está afirmado ni negado en el artículo tercero constitucional ni está reconocido en la Ley General de Educación donde el artículo 65 enumera los derechos de los padres de familia y tutores; tampoco está reconocido como un derecho de las asociaciones de padres de familia en el artículo 67 de la Ley, más bien aparece implícitamente negado en el penúltimo párrafo del mismo artículo que afirma que tales asociaciones *se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos (...) de los establecimientos educativos*, lo cual significa que los padres no puede intervenir en lo relativo al contenido de los programas y los métodos de enseñanza.<sup>695</sup>

No obstante lo anterior, el reconocimiento jurídico del derecho que tienen los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo

---

<sup>693</sup> Saldaña Serrano, Javier y Orrego Sánchez, Cristóbal. *Poder Estatal y Libertad Religiosa, ... op. cit.* pp. 103-106

<sup>694</sup> Artículo 3º, párrafo VI de la *Constitución*.

<sup>695</sup> ADAME GODDARD, Jorge. “El derecho a la educación religiosa en México”, en: *Diez años de vigencia... op. cit.*, p. 37



con sus propias convicciones, no presenta ningún problema,<sup>696</sup> pues tal derecho es, finalmente, un derecho que tiene en México toda persona que pueden ejercer por los padres o tutores mientras sea menor de edad.<sup>697</sup>

## **8.7 LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN LAICA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Desde que se inició el sistema de educación pública en México se ha mantenido como principio inmovible el de la educación laica, salvo los años de enseñanza abiertamente antirreligiosa. Desde 1874 a la fecha, la enseñanza en las escuelas públicas ha sido y tiene que ser laica. ¿Cuáles son las razones que justificaron esta decisión?

Los defensores de la educación laica solían dar dos argumentos a favor:

**Uno:** el *clero* es enemigo del Estado mexicano, de modo que quitándole influencia en la educación ejercida a los niños y jóvenes se consolida el Estado Nacional y Soberano.

Este es el argumento predominante en el siglo XIX, en el que la cuestión de la educación religiosa se plantea desde la perspectiva del conflicto entre la Iglesia y el Estado.

**Dos:** la enseñanza religiosa es de por sí nociva para los niños y jóvenes y, en consecuencia, contraria al bien del país. Éste es el punto de vista predominante de los diputados radicales del constituyente de 1916, mismos que aprobaron la

---

<sup>696</sup> SALDAÑA SERRANO, Jorge y Orrego Sánchez, Cristóbal. *Poder Estatal y Libertad Religiosa*,... *op. cit.*, pp. 103-106

<sup>697</sup> ADAME GODDARD, Jorge. "El derecho a la educación religiosa en México", en: *Diez años de vigencia...* *op. cit.*, p. 38

reforma de 1934. Lo anterior se combina con la idea de que el Estado es el educador nato, de modo que le corresponde a las autoridades educativas definir los contenidos educativos y lo qué es bueno o malo para los jóvenes y niños.<sup>698</sup>

Independientemente de la posición personal que cada quien pueda tener respecto de esa argumentación, la reforma del artículo 130 implica la aceptación de que la enseñanza religiosa no es en sí un delito ni una actividad ilícita que el Estado deba combatir, y que la Iglesia Católica, lo mismo que cualquier otra asociación religiosa registrada, no es en sí un enemigo del Estado.<sup>699</sup>

La enseñanza de la educación laica en los centros de educación pública tiene su fundamento jurídico de forma contundente en el artículo 3º constitucional donde se expresa que *garantizada por el artículo 24 la libertad de creencia la educación será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.*

Sin embargo, veamos algunas consideraciones que se encuentran en el orden jurídico mexicano.

Al derecho que tienen todas las personas de recibir educación religiosa corresponde el deber que tienen algunos de impartirla y procurarla. El orden jurídico mexicano no señala expresamente quiénes tienen ese deber pero precisa quiénes tienen la facultad o derecho de hacerlo.

El artículo 31 fracción primera de la Constitución señala que es obligación de los mexicanos *hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas o privadas para recibir la educación primaria y secundaria*; a su vez, el espíritu del artículo

---

<sup>698</sup> ADAME GODDARD, Jorge. *Estudios sobre política y religión*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 120, México 2008, pp. 316-317

<sup>699</sup> *Ibidem*, p. 318

tercero es una educación integral que tienda a desarrollar armónicamente *todas las facultades del ser humano*. Entonces conforme a este precepto constitucional, el Estado mexicano tiene obligación de promover y atender todo tipo de educación, inclusive la educación religiosa, con la limitación prevista de no impartirla él mismo. A la misma conclusión se llega si se considera la obligación del Estado prevista en la misma fracción V, en la cual se alienta el fortalecimiento de la cultura nacional, pues en ésta se encuentra, de manera muy destacada el elemento principal de la cultura religiosa.

El derecho a recibir educación integral supone, por lo tanto, el deber de todas las instancias educativas de la nación de proporcionar los servicios educativos necesarios para que todas las personas tengan la posibilidad efectiva de una educación integral.

A la misma conclusión se llega analizando el contenido de los tratados de derechos humanos que están vigentes en México. Las obligaciones que asumen los Estados al ratificar estos tratados no son solamente una forma pasiva de reconocer y respetar esos derechos, sino también la obligación activa de tomar medidas para promoverlos y facilitar su ejercicio y vigencia.

La nueva Ley General de Educación precisa en su artículo 1º que la educación es impartida por el Estado mediante la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, pero también pueden impartirla los organismos descentralizados del Estado, como algunas universidades o institutos, así como los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Consecuentemente, el artículo 10 señala que la educación que impartan cualquiera de estos agentes *es un servicio público* y que el *sistema educativo nacional* se constituye, entre otros elementos, con las instituciones educativas del Estado, las de sus organismos descentralizados (fracción IV) y con las

instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios (fracción V).

En consecuencia, el derecho de las Asociaciones Religiosas a impartir educación religiosa se especifica como el derecho a impartirla en las instituciones educativas que forman parte del sistema nacional de educación. Actualmente lo pueden hacer en las instituciones educativas particulares, pero no hay ninguna objeción jurídica para que lo hicieran también en instituciones educativas de organismos descentralizados, o incluso, en las instituciones educativas sostenidas directamente por el Estado.<sup>700</sup>

Pareciera que el derecho a impartir educación religiosa en ámbitos públicos se reconoce en el orden jurídico mexicano sólo de manera plena a las Asociaciones Religiosas registradas y, de forma limitada, a las agrupaciones religiosas no registradas. Es una limitación que no contraviene los tratados de derechos humanos pues esta justificada por razones de moral y orden público.

La prohibición de que el Estado imparta educación religiosa pareciera impedir que el Estado la imparta por medio de profesores asalariados que forman parte de su planta de maestros, así como que el Estado defina los contenidos de la educación religiosa. El Estado no puede definir los programas de educación religiosa. Los contenidos de la educación religiosa tendrán, por lo tanto, que ser definidos por las instituciones que tienen derecho a impartir educación religiosa en las instituciones educativas, es decir, las Asociaciones Religiosas registradas. Cada Asociación Religiosa podrá definir el contenido de la enseñanza religiosa que ella imparta, pero lógicamente no el de la que impartan otras asociaciones,

---

<sup>700</sup> ADAME GODDARD, Jorge. “El derecho a la educación religiosa en México”, en: *Diez años de vigencia... op. cit.*, pp. 32-33

aunque nada impediría que las diversas asociaciones que tienen credos afines definieran cursos comunes.<sup>701</sup>

En resumen, resulta urgente que el Congreso de la Unión promueva la reforma correspondiente al artículo 3° constitucional para suprimir la prohibición de la enseñanza religiosa en todas las escuelas y reconocer el derecho fundamental que se establece en los tratados internacionales suscritos por México, pues no hay que olvidar de que los propios tratados disponen que los Estados parte se comprometan a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en los instrumentos.

La gran mayoría en nuestro país, consideran a la educación pública laica, como un valor que se debe mantener, sobretodo ahora que se permite a las asociaciones religiosas, participar en actividades educativas y señalan que en los templos o la familia, son el espacio natural en que se debe impartir la educación religiosa.

Adicionalmente, reconocidos especialistas sostiene que la norma constitucional y legal impide, efectivamente, al Estado impartir educación religiosa por medio de profesores asalariados que formen parte de la planta de maestros, pero no encuentran objeción jurídica alguna para que las asociaciones religiosas impartan educación religiosa en las instalaciones de instituciones educativas públicas.<sup>702</sup>

---

<sup>701</sup> *Ibidem*, pp. 34-35

<sup>702</sup> CASTRO ESTRADA, Álvaro. "Educación religiosa en las escuelas públicas", en: *Una puerta a la Libertad Religiosa...*, op. cit. pp. 223-224

En el Congreso mundial de familias en enero de 2009 efectuado en la ciudad de México, Carlos Aguilar Retes, obispo de Tlanepantla y presidente de la conferencia del episcopado mexicano, exigió educación religiosa en las escuelas públicas ante el Presidente de la República Felipe Calderón.

## 8.8 LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN LAS ESCUELAS PARTICULARES.

El Pacto de Derechos Civiles expresa que<sup>703</sup> toda persona tiene derecho a manifestar su religión individual o colectivamente, en público o en privado, mediante la enseñanza. Conforme a esto, cualquier persona tendría derecho, en forma individual o asociada, a enseñar su propia religión en público o en privado. Pero luego, el párrafo III del mismo artículo señala *que tal derecho está limitado por las prescripciones de las leyes de cada país, siempre que sean limitaciones necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública*.

La convención tiene una disposición similar<sup>704</sup> donde se reconoce el derecho de toda persona a *divulgar su religión* sin hacer referencia expresa a la enseñanza, aunque cabe entender que ésta queda comprendida en la acción de divulgar y que admite la posibilidad de que las leyes restrinjan ese derecho por las mismas causas ya anotadas.<sup>705</sup>

Con la reforma del 28 de enero de 1992 se suprime la negativa a las corporaciones religiosas y a los ministros de cultos para intervenir en planteles en los que se imparta educación elemental. Por lo tanto, los particulares pueden

---

<sup>703</sup> Artículo 18, primer párrafo. 0

<sup>704</sup> Artículo 12.1

<sup>705</sup> ADAME GODDARD, Jorge. “El derecho a la educación religiosa en México”, en: *Diez años de vigencia... op. cit.*, pp. 31-32

otorgar educación en todos sus tipos y modalidades<sup>706</sup> y, en consecuencia, educación religiosa.

El derecho de las Asociaciones Religiosas a participar por sí mismas o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de planteles educativos y a propagar su doctrina,<sup>707</sup> Aunque se diga en la ley, pareciera que puede sostenerse con apego a ella. Esto significa que dentro de sus planteles pueden sin dificultad impartir la asignatura de religión, y no sólo ellas, sino cualquier particular que esté autorizada a impartir educación y se oferte a todos aquéllos que deseen hacer uso de esos planteles educativos.

La situación es diferente con respecto a las agrupaciones religiosas no registradas. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público les reconoce el derecho de propagar su doctrina pero no el de participar en instituciones educativas.<sup>708</sup> Sin embargo, me parece que las agrupaciones religiosas no registradas tienen derecho a impartir educación religiosa en ámbitos públicos, incluso en instituciones educativas, pero no en instituciones educativas de financiamiento público o privado que formen parte del sistema educativo nacional. Ésta no es una limitación injustificada, pues si una agrupación religiosa quisiera impartir educación religiosa en instituciones educativas nacionales bastaría con que se registrase y manifestase cuál es su doctrina.<sup>709</sup>

---

<sup>706</sup> Artículo 3° constitucional fracción VI.

<sup>707</sup> Artículo 9, fracciones III y V de la Ley.

<sup>708</sup> El artículo 9 define los derechos de las Asociaciones Religiosas registradas, el artículo 10, la situación de las agrupaciones religiosas no registradas, dice que no tendrán los derechos a que se refieren las fracciones V a VII del artículo 9, lo que implica, la afirmación de que sí tienen los derechos a que se refieren las primeras cuatro fracciones de dicho artículo, entre los cuales están (fracción III) el de “propagar su doctrina”. Sin embargo, no podrán constituir, administrar o sostener planteles educativos.

<sup>709</sup> ADAME GODDARD, Jorge. “El derecho a la educación religiosa en México”, en: *Diez años de vigencia... op. cit.*, pp. 33-34

Finalmente, señalaremos que el Episcopado Mexicano presentó, en relación con este tema, una propuesta en materia educativa en la que establecía que se reconociera la libertad de enseñanza.<sup>710</sup>

---

<sup>710</sup> En la propuesta que presentó el Episcopado Mexicano el 5 de julio de 1989, al presidente de la república para modificar los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución, proponía que se consagrara expresamente la Libertad Religiosa en materia educativa en estos términos: “Fracción II: se reconoce la libertad de enseñanza” las propuestas completas pueden verse en “La presencia en México de Juan Pablo II” Anexo 2, pp. XI/XIV



---

---

## **REFLEXIONES Y CONCLUSIONES**

## REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

Trataremos de expresar las ideas y reflexiones más sobresalientes de este trabajo en dos bloques: uno, donde se refleja la institución religiosa que tiene que ver con sus orígenes, sus características y el Estado actual; el otro, en el que se reconocen las bondades y lo encomiable de las reformas constitucionales en materia de libertad religiosa, pero también sus deficiencias y limitaciones, así como los problemas que plantea.

**PRIMERA.** En México, desde la colonia, el proceso de independencia y en sus primeras constituciones se han establecido prerrogativas jurídicas hacia la religión católica (única en su género), estableciéndose un estado confesional. Consecuencia de ello: la intolerancia religiosa en el país, con visos de libertad de creencias sólo en tiempos del Presidente Juárez a través de las Leyes de Reforma. No es sino hasta la Constitución social de 1917 donde se plasma con precisión que *todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos del culto.*

**SEGUNDA.** América Latina, a partir de los últimos 25 años del siglo pasado y de la casi primera década del siglo que corre, ha tenido una gran transformación: de una sociedad eminentemente católica hacia una de diversidad religiosa. México no es la excepción. Así lo señalan el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y las últimas estadísticas realizadas en años recientes por el propio Vaticano. El catolicismo en América Latina está en crisis. Las causas son diversas, entre ellas: la participación de los clérigos en asuntos políticos, el lujo y ostentación de que hacen gala, su participación en negocios mercantiles y delitos escandalosos como la pederastia, en la que incluso los han

hecho comparecer ante los tribunales, lo que ha provocado el flujo de católicos hacia otras religiones, sobre todo evangélicas. Los católicos se han reducido en América y Europa y son el 17.3% de la población mundial que equivale a 1, 147 millones de católicos, el segundo grupo más grande después de los musulmanes.

**TERCERA.** En México siempre se han dictado normas, reglas, medidas y criterios sobre la cuestión religiosa dada la importancia que reviste el fenómeno religioso en el país. El quehacer de la Iglesia siempre ha sido importante en la sociedad pues así lo determina la historia. Sin embargo, y de acuerdo a como hemos conceptualizado, el Derecho Eclesiástico Mexicano, es decir, el conjunto de normas que regulan el factor religioso desde la perspectiva de la libertad religiosa y como un hecho de creencias diversas que debe ser atendidas y reguladas por el Estado, se podría decir que nace a partir de las reformas constitucionales en materia religiosa de 1992. Aquí se comparte el punto de vista de quienes sostienen que la libertad religiosa es el núcleo del Derecho Eclesiástico y que no se puede hablar de ella donde las normas limiten, impidan y violenten tal derecho fundamental.

**CUARTA.** Las reformas constitucionales de 1992 en los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 en materia de libertad religiosa, terminaron con la diferencia histórica entre el Estado y las Iglesias, actualizaron el régimen jurídico interno e intentaron su consonancia con el derecho internacional. De igual modo, constituyen también un hecho de dimensión histórica en materia de libertad religiosa, rescatando el espíritu liberal juarista y, además, crean una nueva figura jurídica denominada *Asociación Religiosa*.

**QUINTA.** No hay duda de que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público es un gran avance para explicitar las nuevas relaciones jurídicas entre el Estado y las Asociaciones Religiosas, partiendo del principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias. Dicha Ley garantiza que el Estado no profese religión alguna y que el individuo adopte y practique la que más le agrade en forma individual o colectiva, además de plasmar la no discriminación por causas de creencias religiosas y establecer con precisión el Estado laico. Sin embargo, no es suficiente.

**SEXTA.** Si bien es cierto que toda persona tiene derecho a recibir educación religiosa y los padres a elegirla para sus hijos, según los tratados internacionales suscritos y ratificados por México, también lo es que el Artículo 3° *no prohíbe la educación religiosa* en las escuelas públicas ni privadas. Lo único que establece es que *la educación que imparta el Estado, (...) se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa*, es decir, sin credo religioso, conforme con el Artículo 24 constitucional que garantiza la libertad de creencias. Esta circunstancia, en ningún momento es contraria al derecho de los individuos y de los padres, ya que no prohíbe que se pueda hacer u obtener que las Asociaciones Religiosas, así como ellos mismos, impartan la educación religiosa. Por lo tanto y, atendiendo al principio histórico, no se considera necesario reformar la Constitución por tal motivo.

**SÉPTIMA.** Es comprobable que desde siempre, el régimen fiscal y tributario de las Asociaciones Religiosas ha gozado de privilegios y favores oficiales valiéndose de la *fe religiosa*, pues no se pueden dejar de señalar las exenciones y subsidios que le son otorgados a las Iglesias, sobretudo a la católica. La Ley señala con toda precisión que *las Asociaciones Religiosas son iguales ante la Ley*

*en derechos y obligaciones y tienen el deber constitucional de contribuir al gasto público.*

Las leyes reglamentarias están llenas de contradicciones, desaciertos y omisiones que benefician a las Asociaciones Religiosas para no cumplir con el gasto público. Lo anterior se traduce simple y sencillamente en la violación de la Ley, pues *las convicciones religiosas no eximen del cumplimiento de la misma. Tampoco puede alegarse motivo religioso para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes.* De ser así, se configura ni más ni menos el *delito de evasión fiscal*. Por lo tanto, es necesario un marco jurídico tributario claro y preciso para las Asociaciones Religiosas, acorde a las exigencias legales que den cumplimiento a las premisas jurídicas. Desde luego mediante una propuesta legislativa.

**OCTAVA.** El Estado Mexicano debe promover la reforma constitucional al artículo 3° para reconocer explícitamente en la Carta Magna la libertad de la enseñanza religiosa, y que no se vulneren los derechos fundamentales reconocidos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México: tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 26.3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 18.4) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos *Pacto de San José* (12.1), entre otros. Deberá adecuar el texto constitucional a los tratados internacionales.

**NOVENA.** En México la asistencia religiosa no se encuentra explícita en el ordenamiento jurídico, salvo lo establecido en el Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 6 de noviembre de 2003 y que hace especial referencia no a

la asistencia religiosa sino a la *asistencia espiritual*, y que en el capítulo correspondiente se ha señalado su diferenciación. Por lo tanto, existe la necesidad de regularla en sus términos dentro de los límites establecidos por el Estado y por cada confesión religiosa en cuanto a los factores reales de su propio quehacer. El Estado deberá otorgar las facilidades que le son propias para no violentar este Derecho Fundamental.

**DÉCIMA.** Queda claro que no obstante el principio histórico de separación del Estado y las Iglesias y principio de laicidad, en México existen formas directas e indirectas de financiación a las confesiones religiosas como se ha quedado demostrado en el transcurso de la investigación. Pues baste señalar el uso de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la nación que se encuentran en manos de las asociaciones.

Además así lo demuestran los recursos económicos que en donativos por 20.5 millones de pesos entregó la Secretaría de Gobernación a asociaciones y escuelas religiosas de diciembre del 2000 a 2006. Así como el traspaso de bienes muebles e inmuebles (*directa*). De igual forma, el Estado ha reducido los impuestos a las Iglesias, a través de exenciones, desgravaciones y diversos privilegios (*indirecta*). La más beneficiada fue la Arquidiócesis de México (se ha negado a informar la presidencia de la república de los bienes donados a las Iglesias durante el sexenio del Presidente Vicente Fox y de los otorgados en este gobierno).

Por lo tanto sostengo que no obstante la separación Estado-Iglesias, existe en México la financiación de las asociaciones religiosas, que se encuadra en un sistema de colaboración entre el Estado y las asociaciones y así lo confirma el

propio reglamento de la ley al permitir la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación entre ambos.

**DÉCIMA PRIMERA.** Se reitera que las reformas constitucionales en materia de libertad religiosa son un paso importante para establecer las nuevas relaciones entre el Estado Mexicano y las confesiones religiosas y, desde luego, terminar con la simulación. No obstante lo anterior, durante la investigación ha quedado claro de que en México existe intolerancia religiosa, sobretodo en el sureste mexicano, donde se llega a los extremos que han quedado asentados. Mientras no se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la incipiente normatividad en esta materia y mientras no se configuren sin vacilaciones tales derechos, no se podrá avanzar hacia el respeto a la libertad religiosa como derecho fundamental, es decir, hacer factible con medidas prácticas todo aquello que tenga que ver con el desarrollo del principio de libertad de creencias religiosas.

Por todo lo anterior, considero que la libertad religiosa en México, sigue siendo un gran reto, un desafío, una obra inconclusa.





## BIBLIOGRAFÍA

ADAME GODDARD, Jorge. “El derecho a la educación religiosa en México”, en: *Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (1992-2002)*, Javier Saldaña (Coordinador), Secretaría de Gobernación, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Estudios Jurídicos Núm. 40, México 2003.

ADAME GODDARD, Jorge. *Estudios sobre política y religión*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 120, México 2008

ÁLVAREZ CORTINA, Andres-Corsino. *El Derecho Eclesiástico español en la Jurisprudencia Postconstitucional, 1978-1990*, Editorial Tecnos, S.A, Madrid, 1991.

ALVEAR ACEVEDO, Carlos. *Historia de México*, México, JUS, 1967.

ARRIETA, Juan Ignacio. La Asistencia Religiosa, particular referencia a los centros de espacial sujeción: Fuerzas armadas, centros de detención y centros sanitarios en: *La Libertad Religiosa, Memoria del IX congreso internacional del derecho canónico*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie E: Varios, Núm. 71, UNAM, 1996, México.

AZNAR GIL, Federico R. *La Administración de los Bienes Temporales de la Iglesia*, Universidad Pontificia de Salamanca, España. 1984.

BASTLAN, Jean-Pierre. “Tolerancia religiosa y libertad de culto en México, una perspectiva histórica” en *Cuadernos: Derecho de Libertad Religiosa*, Derecho

Fundamental de Libertad Religiosa, UNAM, Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1994.

BECERRIL MIRÓ, José Ernesto. “La legislación protectora del patrimonio histórico-artístico de las Iglesias”. *Jurídica. Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana*, No. 25, 1995, México.

BIDART CAMPOS, Germán J. *Teoría General de los Derechos Humanos*, UNAM, México, 1989.

BLANCARTE, Roberto. *Historia de la Iglesia Católica en México*, Colegio Mexiquense, Fondo de Cultura Económica, México 1992.

BURGOA, Ignacio. *Las Garantía Individuales*, XIV edición, Editorial Porrúa, México 1985.

CAPSETA CASTELLA, Joan. *Personalidad jurídica y régimen patrimonial de las Asociaciones Religiosas en México*, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana , México, D.F. 1977.

CARRILLO FLORES, Antonio. *La Constitución, la Suprema Corte y los Derechos Humanos*, ed. Porrúa, S.A., 1ª edición, México, 1981.

CHÁVEZ, E. *La Iglesia de México entre Dictaduras, Revoluciones y Persecuciones*, Editorial Porrúa, México, 1998.

CLAVIJERO, Elías y CLAVIJERO Trabulse. *Historiador de la ilustración mexicana, ensayo incluido en el libro Francisco Javier Clavijero en la ilustración mexicana, 1731-1787*, comp. Alfonso Martínez Rosales, Colegio de México, México, 1987.

*CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO*, Edición bilingüe (reimpresión), Biblioteca de autorices cristianos, Madrid, 2003.

*CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*, Secretaría de Gobernación, decimacuarta edición, Febrero, 2006.

CUEVAS, Mariano. *Historia de la Iglesia en México*, Tomos: I, II, III, IV y V, 7ma. edición, preparada por José Gutiérrez Casillas, Porrúa, México, 2003.

CUEVAS, Mariano. “La Iglesia y la Independencia Nacional, 1800-1821”, *Historia de la Iglesia en México*, Tomo V, Libro I, 7ma. edición, preparada por José Gutiérrez Casillas, ed. Porrúa, México, 2003.

DE LA HERA, Alberto. *Iglesia y Corona en la América Española*, Madrid, ed. Mafret, 1992.

DE LA MADRID HURTADO, Miguel. “El Congreso constituyente de 1916-1917”, en *Derechos del pueblo mexicano*, México, Cámara de Diputados, 1967.

*DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA*. Editorial Océano, edición Mexicana, 1990.

*DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, UNAM, décima edición, México, 1997.

ESCALANTE, F. *Ciudadanos imaginarios*, México, El colegio de México, 1992.

FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. *La Dogmática de los Derechos Humanos*, Ediciones Jurídicas, Lima, 1994.

FORNÉS, Juan. “Régimen Jurídico-Patrimonial y Financiación de la Iglesia desde la Perspectiva de la Libertad Religiosa”, en: *La Libertad Religiosa, Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1996.

GALLARDO, Juan María, *Curso de Derecho Canónico*. Bienes Temporales y misión de la Iglesia. El Patrimonio de la Iglesia.

GONZÁLEZ DEL VALLE, José María. *Derecho Eclesiástico Español*, Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria, Madrid, 1989.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José Antonio. “Génesis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”, en *Estudios Jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G: Estudios Doctrinales, Núm. 160, UNAM, Secretaría de Gobernación, 1ª Ed. México 1994.

GONZÁLEZ MORFIN, Efraín. *Algunas consecuencias prácticas de las reformas a los artículos constitucionales 3, 5, 24, 27 y 130 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en la Iglesia Católica en el nuevo marco jurídico de México*, Ediciones de la C.E.M; México, 1992.

GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. *Derecho Eclesiástico Mexicano*, Editorial Porrúa, México, 1997.

GONZÁLEZ, M.R. *Relaciones entre el Estado y la Iglesia en México*, en Quórum, No. 1, 1992.

GUERRA GÓMEZ, Manuel. *Historia de las religiones*, Sapientia Fidei, Serie de Manuales de Teología, Biblioteca de autores cristianos, 2da. reimpresión, Madrid, 2002.

GUTIÉRREZ CASILLAS, José. *La Organización de la Iglesia en la Nueva España, Historia General de la Iglesia en América Latina*, Tomo V, México, CEHILA, ediciones Paulinas, S.A., México.

HERRERÓN PEREDO, Carlos. *Hidalgo, razones de la insurgencia y biografía documental*, SEP, Colección 100 de México, 1987.

HERVADA, J. “La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico”, en *Vetera et Nova*, Pamplona, 1991, t. I.

IBÁN, C. Iván. *Lecciones de Derecho Eclesiástico*, Editorial Tecnos, S.A., 2da. Reimpresión, 2da. edición, Madrid, 1990.

IBÁN, C. Iván, PRIETO SANCHÍS Luís, y MONTILLA Agustín. *Manual de Derecho Eclesiástico*, Editorial Trotta, S.A., 2004.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI). *La diversidad religiosa en México, en XII Censo General de Población y Vivienda 2000*.

KRAUZE, Enrique. *Biografía del poder, /7 Reformar desde el origen, Plutarco Elías Calles*, 3ª. reimpresión, Fondo de Cultura Económica, 1992, México.

KRAUZE, Enrique. *Biografía del Poder, Caudillos de la Revolución Mexicana (1910-1940)*, Fábula TUSQUETS editores, 6ta. reimpresión, julio 2006, México.

KRAUZE, Enrique. *Biografía del poder, El vértigo de la victoria, Álvaro Obregón*, Fondo de Cultura Económica, Quinta reimpresión, 1997, México.

KRAUZE, Enrique. *Siglo de Caudillos, Biografía política de México, 1810, 1910*, Tusquetss editores, México, 1994.

*LA CONSTITUCIÓN DEL PUEBLO MEXICANO*, Miguel Ángel Porrúa, 3ª. edición, 2006, Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura.

LAMADRID SAUZA, José Luís. *La larga marcha a la modernidad en materia religiosa*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

LANZ CÁRDENAS, J.T. *La contraloría y el control interno en México. Antecedentes históricos y legislativos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

LEE GALINDO, Jorge. “Situación jurídica de los Ministros de Culto en México”, en: *Diez años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (1992-2002)*, Javier Saldaña (Coordinador), Secretaría de Gobernación, UNAM, Serie Estudios Jurídicos Núm. 40, México 2003.

LERNER NATAN. “La declaración de las Naciones Unidas sobre tolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones”, *Jurídica. Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana*, No. 20, 1990-1991, México.

*LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.*

LOMBARDÍA, Pedro y FORNÉS, Juan. “La libertad religiosa como derecho humano”, en *Derecho Eclesiástico del Estado Español*, Rafael Navarro-Valls (coord.), ediciones Universidad de Navarra, S.A., 3ª. edición, Pamplona, 1993.

LÓPEZ ALARCÓN, M. “Asistencia Religiosa”, en *Derecho eclesiástico del Estado español*, 3a. edición, Pamplona, Eunsa, 1993.

LÓPEZ ALARCÓN, Mariano. “Entidades religiosas”, en: *Derecho Eclesiástico del Estado Español*. 3a. edición, Pamplona, Eunsa, 1993

LÓPEZ ALARCÓN, M. “Régimen Patrimonial de las Confesiones Religiosas”, en *Tratado de Derecho Eclesiástico*, Pamplona, 1994, Edición Instituto Martín de Azpilcueta (Coordinador de la edición J. de Otaduy).

MARGADANT, Guillermo F. *La Iglesia ante el Derecho mexicano, esbozo histórico-jurídico*, 1991, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 1991.

MARGADANT, Guillermo F. *La Iglesia ante el Derecho Mexicano*, Esbozo histórico-Jurídico, Miguel Ángel Porrúa, México, 1991.

MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORIA, Juan G. (coordinadores), *La Libertad Religiosa en España y Argentina*, Fundación Universitaria Española, Monografías-103 Madrid, 2006.

MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro. (coordinador), *Curso de Derecho eclesiástico del Estado*, Tirant Lo Blanch, Valencia.

MARTÍNEZ DE CODES, Rosa María. *Los Bienes Nacionales de Origen Religioso en México, “1833-2004”*. Estudio Histórico-Jurídico, Instituto de

Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 106, UNAM, 1ª edición, México, 2007.

MEDINA GONZÁLEZ, María Concepción (Coordinadora), *Una puerta abierta a la Libertad Religiosa (México a XV años de las reformas constitucionales en materia religiosa 1992-2007)*, Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Población, Migración y asuntos religiosos. Dirección General de Asociaciones Religiosas, México 2007

MEYER, Jean. *Historia de la revolución mexicana*, “Historia y sociedad con Calles”, 1924-1928, el Colegio de México, Volumen 11, México, 1973, “La cristiada”, 3 Tomos, Siglo XXI editores, 1973-1974.

MEYER, Jean. *Historia de los Cristianos en América Latina, Siglos IX y XX*, México, Vuelta 1989.

MONSIVÁIS, Carlos. La intolerancia religiosa: “*si no compartes mi fe, te rompo la madre*”. <http://ghrendhel.tripod.com/textos/monsivais.htm>, 14 de septiembre de 2008.

MORENO, J.M. “Ideario y proyecto educativo en los centros de enseñanza”, en: *Razón y fe*, núms. 944 y 945, septiembre-octubre de 1976.

PACHECO ESCOBEDO, Alberto. “Régimen Jurídico de las Asociaciones Religiosas en el Derecho Mexicano”, en: *Estudios Jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G, Estudios Doctrinales, Núm. 160, UNAM, SEGOB, 1ª edición, México, 1994.



PACHECO, Alberto E. *Temas de Derecho Eclesiástico Mexicano*, ediciones Centenario, México, 1993.

PATÍÑO REYES, D. Alberto. *Libertad Religiosa y Principio de Cooperación en Hispanoamérica*, tesis, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, junio de 2007.

PÉREZ LUÑO, Antonio E. *Los derechos fundamentales, Temas claves de la Constitución española*, 8va. edición, Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), reimpresión 2005, Madrid.

PÉREZNIETO CASTRO, Leonel. (compilador), *Reformas constitucionales y modernidad Nacional*, Editorial Porrúa, S.A. CAMBIO XXI-Fundación mexicana, 1ª edición de 1992.

PRIETO SANCHÍS, Luís. “El Derecho Fundamental de Libertad Religiosa”, en: *Lecciones de Derecho Eclesiástico*, 2da. edición, Editorial Tecnos, S.A., 1990.

QUIRARTE, Martín. *El problema religioso en México*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1967.

RABASA, Emilio. *La Constitución y la dictadura*, México, TIP. D. “Revista de Revistas”, 1912.

REVISTA “JURÍDICA”, *La Personalidad Jurídica de la Iglesia*, anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana, 1995-I Num. 25.

RIVA PALACIO, Vicente. *Historia de la administración de Don Sebastián Lerdo de Tejada*, edición facsimilar de la de 1875; biblioteca mexicana de la fundación Miguel Alemán, A.C., México, 1992.

ROVIRA VIÑAS, Antonio. *El Abuso de los Derechos Fundamentales*, Península, Madrid, 1983.

RUIZ MASSIEU, José Francisco. “Hacia un Nuevo Derecho Eclesiástico Mexicano”, en *Derecho Eclesiástico Mexicano*, Editorial Porrúa, S.A. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

RUIZ MASSIEU, José Francisco. *Presentación reformas constitucionales y modernidad Nacional*, Editorial Porrúa S.A., México, 1992.

RUIZ MASSIEU, José Francisco. *Una Ley para la libertad religiosa*, Diana, México, 1992.

SALDAÑA SERRANO, Javier y ORREGO SÁNCHEZ Cristóbal. *Poder Estatal y Libertad Religiosa, Fundamentos de su relación*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 21, México, 2001.

SALDAÑA SERRANO, Javier. “Derecho Eclesiástico Mexicano”, *Enciclopedia jurídica mexicana, anuario 2005*, Editorial Porrúa y UNAM, México 2005.

SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. *Asociaciones Religiosas, Régimen Fiscal*, Editorial Porrúa, México, 1ª edición, 2007.

SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. “Régimen Jurídico de los Ministros de Culto religioso”, en: *Estudios jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y*

*Culto Público*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G: Estudios Doctrinales, Núm. 160, Secretaría de Gobernación, UNAM, México, 1994.

SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. *La nueva legislación sobre libertad religiosa*, Editorial Porrúa, México, 1993.

SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. “Régimen Jurídico de los ministros de culto religioso” en: *Estudios jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G: Estudios Doctrinales, Núm. 160, Secretaría de Gobernación, UNAM, México, 1994.

SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís. “La Nueva Ley Reglamentaria”, en: *Derecho Eclesiástico Mexicano*, Editorial Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2da. Edición, 1992

SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís. *El Derecho de Libertad Religiosa en México (un ensayo)*, Editorial Porrúa, CNDH, México 2001.

SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís. *Presentación del manual Compendio del Regio Patronato Indiano*, edición facsimilar, Editorial Porrúa, México, 1993.

SOBERANES, José Luís. “La reforma constitucional de 1992 en materia de Libertad Religiosa y los Derechos Humanos”, en: *Una Ley para la libertad religiosa*, Méndez Gutiérrez, Armando (coordinador), cambio XXI, Editorial Diana, México, 1992.

SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Juan José. *Los Límites de los Derechos y el Sistema Normativo*, Derecho Privado y Constitución, Núm. 17. Enero-Diciembre, 2003.

TARAZENA, Alfonso. *La verdadera revolución mexicana, Segunda etapa, 1913-1914*, México, JUS, 1960.

TENA RAMÍREZ, Felipe. *Leyes Fundamentales de México, 1808-2005*, vigésima cuarta edición actualizada, Editorial Porrúa, México, 2005.

#### TESIS JURISPRUDENCIAL

- Tesis Aislada, Materia Constitucional, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 25 de febrero de 2007, Tesis: 1ª LXI/2007, Página 654.
- Tesis Aislada, Materia Civil, Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 19 de junio de 2004, Tesis: I. 6º C, 308 C, Página: 1411
- Tesis Aislada, Materia Electoral, Tercera Época, Instancia: Sala Superior, Fuente Apéndice (actualización 2002), Tomo VIII, P.R. Electoral, Tesis: 175, Página: 205, Genealogía: Compilación Oficial de jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 564, Sala Superior, tesis S3EL 104/2002.
- Tesis Aislada, Acción de inconstitucionalidad 14/2001, 7 de agosto de 2001, el Tribunal Pleno en sesión privada aprobó con el número 100/2001 la tesis jurisprudencial.
- Tesis Aislada, Materia Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiado de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 5 de mayo de 1997, Tesis: XXI, 2º 15 C, Página 601.
- Tesis aislada, Materia Laboral, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 13 de enero de 1994, Tesis: XXI, 2º, 16 L, Página 301.

- Tesis Aislada, Materia Administrativa, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 14 de julio de 1994, Tesis 336, Página 524.
- Tesis Aislada, Materia Civil, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 9 de febrero de 1992, Página 220.
- Tesis aislada, Materia Civil, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 20 de octubre de 1991, Tesis: XXI. 2º. 16 L.
- Tesis Aislada, Materia Administrativa, Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, LXVIII, Página 1825.
- Tesis Aislada, Materia Administrativa, Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, LV, Página: 3919.

VELA, Luís. “Análisis Filosófico en Vaticano II, La Libertad Religiosa”, en: *Razón y Fe*, Madrid, 1966.

VILLEGAS MORENO, G. “Estado e Iglesia en los tiempos revolucionarios” en *Relaciones Iglesia-Estado durante el segundo Imperio*, Editorial Galeana, UNAM, México, 1991.

VIVEROS, Carolina. “La Asistencia Religiosa en el reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”, en: *El reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público*, Saldaña, Javier. (coordinador), Secretaría de Gobernación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 82, México, 2005.